

Las relaciones interamericanas

continuidades
y cambios

Luis Suárez Salazar
Tania García Lorenzo

COLECCIÓN CAMPUS VIRTUAL



CLACSO
LIBROS

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS: CONTINUIDADES Y CAMBIOS

Luis Suárez Salazar
Tania García Lorenzo

La Colección Campus Virtual es el resultado de una iniciativa dirigida a la formación a distancia y la promoción y difusión de los programas y proyectos académicos regionales e internacionales que CLACSO impulsa a través de su plataforma virtual.

Este libro presenta una versión reformulada de las clases del curso de formación a distancia *Las relaciones interamericanas: continuidad y cambios (1804-2004)*, que se desarrolló gracias al patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi).

Suárez Salazar, Luis

Las relaciones interamericanas : continuidades y cambios / Luis Suárez Salazar y Tania García Lorenzo. - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2008.

288 p. ; 23x16 cm. - (Campus virtual de CLACSO)

ISBN 978-987-1543-01-4

1. Relaciones Internacionales. I. García Lorenzo, Tania II. Título
CDD 327.1

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Relaciones Interamericanas / Historia / Política Internacional / Integración Regional / Guerra / Revolución / América Latina / Caribe / Estados Unidos / Canadá

Colección Campus Virtual

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS: CONTINUIDADES Y CAMBIOS

Luis Suárez Salazar
Tania García Lorenzo

Silvana Montaruli
Tiago Coelho Fernandes
Daniela Kunz
Santiago Kosiner
[colaboraciones]



Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor Responsable Emir Sader - Secretario Ejecutivo de CLACSO

Coordinador Académico Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO

Colección Campus Virtual

Directora de la Colección Gabriela Amenta - Coordinadora del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales

Asistentes María Inés Gómez - Alejandro Gambina - Martín Fernández Nandín

Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO

Coordinador Jorge Fraga

Edición

Ivana Brighenti - Mariana Enghel

Diseño editorial

Miguel A. Santángelo - Marcelo Giardino - Mariano Valerio

Divulgación editorial

Sebastián Amenta - Daniel Aranda - Carlos Ludueña

Arte de tapa Marcelo Giardino

Revisión de pruebas Virginia Feinmann

Impresión Gráficas y Servicios SRL

Primera edición

Las relaciones interamericanas: continuidades y cambios

(Buenos Aires: CLACSO, octubre de 2008)

ISBN 978-987-1543-01-4

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | piso 5° J | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | e-mail <clacso@clacso.edu.ar> | web <www.clacso.org>

Campus Virtual de CLACSO



Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Prólogo	
Carlos Alzugaray Treto	9
Introducción	15
Lecciones	
Lección Uno	
Las relaciones interamericanas: un enfoque integral	21
Lección Dos	
Las relaciones interamericanas desde la Revolución Haitiana hasta la Guerra de Secesión en EE.UU.	31
Lección Tres	
Las relaciones interamericanas desde el fin de la Guerra de Secesión hasta la Guerra Hispano-cubana-filipina-estadounidense	47
Lección Cuatro	
Las relaciones interamericanas desde el Tratado de París de 1898 hasta la Gran Depresión	59

Lección Cinco

Las relaciones interamericanas durante la “época del buen vecino”		73
---	--	----

Lección Seis

Las relaciones interamericanas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el triunfo de la Revolución Cubana		89
---	--	----

Lección Siete

Revolución y contrarrevolución en Nuestra América: implicaciones para las relaciones interamericanas		107
--	--	-----

Lección Ocho

Las relaciones interamericanas durante la posguerra fría		127
--	--	-----

Lección Nueve

Las relaciones interamericanas durante la primera etapa de la “guerra terrorista contra el terrorismo”		141
--	--	-----

Lección Diez

Las relaciones interamericanas: una mirada desde la prospectiva crítica		155
---	--	-----

Anexos		167
---------------	--	-----

Bibliografía		171
---------------------	--	-----

Colaboraciones

Silvana Montaruli

El concepto de integración en el discurso de Simón Bolívar. Perspectivas para el presente		189
---	--	-----

Tiago Coelho Fernandes

Entre Bolívar e Monroe: o Brasil nas relações interamericanas		213
---	--	-----

Daniela Kunz

Concepciones democráticas en pugna en el ámbito de la OEA		241
---	--	-----

Santiago Kosiner

El MERCOSUR en prospectiva		269
----------------------------	--	-----

Carlos Alzugaray Treto*

PRÓLOGO

LOS PUEBLOS de América Latina y el Caribe transitan una de las etapas más significativas de su devenir como naciones. Desde fines de la última década del siglo pasado, varios países de la región se han enrumado por un nuevo y duro camino, el de la azarosa búsqueda de su verdadera liberación e independencia, siguiendo así, por sus propios métodos, el itinerario recorrido por Cuba desde 1959. Otros, sin alcanzar tales situaciones, han hecho manifiesta su voluntad de poner fin al estado de cosas prevaleciente en el hemisferio y han elegido gobiernos que, más allá de su verdadera vocación, se comprometieron a adoptar políticas socialmente justas y gubernamentalmente autónomas. Se ha puesto fin así a la etapa que algunos especialistas calificaron como la del “diluvio neoliberal”.

No puede ser una casualidad histórica que venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses, brasileños, argentinos y uruguayos (por mencionar sólo algunos) hayan expresado al mismo tiempo su firme decisión de romper con las cadenas que ataban sus sociedades a regímenes injustos, ineficaces, dependientes y sometidos a la domina-

* Doctor en Ciencias Históricas. Profesor Titular del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de la Habana. Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

ción del gran centro de poder mundial. Ello tiene que ser resultado de procesos comunes con profundas raíces en sus respectivas trayectorias nacionales (Elías, 2006).

Los orígenes de esta nueva etapa son múltiples. Sin embargo, en cualquier análisis que se haga de los mismos, debe figurar como uno de los factores más importantes la necesidad de terminar con un esquema de relaciones hemisféricas que en los últimos 130 años sólo ha servido para mantener a toda la región al sur del Río Grande bajo el dominio hegemónico del imperialismo de los Estados Unidos de América.

El libro que tiene en sus manos el lector constituye un significativo aporte para explicar en qué medida el sistema de relaciones interamericanas ha sido el contexto regional en el que la elite del poder estadounidense intentó y logró subordinar a toda la región a su poder imperial para beneficio de las grandes empresas transnacionales y en detrimento de los verdaderos intereses de nuestros países.

El doctor en Ciencias Luis Suárez Salazar y la doctora Tania García Lorenzo, reconocidos especialistas cubanos que llevan años trabajando las diferentes temáticas que componen este libro, han puesto a disposición de especialistas, estudiantes y lectores interesados un sintético pero enjundioso volumen en el que se resumen más de 200 años de historia de los vínculos entre Canadá, EE.UU. y América Latina y el Caribe, analizando sus repercusiones en lo económico, lo político, lo social, lo ideológico y lo cultural.

Lo primero que habría que destacar sobre este libro es el riguroso trabajo de selección de fuentes que contribuyen a profundizar en el examen y apropiación de los conocimientos disponibles. Ambos autores dominan la amplia bibliografía que tributa al estudio de las relaciones interamericanas. No obstante –por tratarse de un texto cuyo objetivo central es poner a disposición de los estudiantes del curso a distancia de la Cátedra Florestan Fernandes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) los elementos fundamentales para seguir investigando la disciplina– ambos han debido hacer una cuidadosa discriminación y señalarles a los estudiantes aquellas obras y fuentes documentales que recogen la quintaesencia del objeto de estudio.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la capacidad de síntesis de ambos autores. Resumir en pocas páginas los hechos sustanciales que marcan la historia de las relaciones entre EE.UU., los 34 países independientes y los 16 territorios coloniales que aún quedan en la región es una tarea que requiere de un conocimiento exhaustivo y un sentido adecuado de qué es lo más importante. Es decir, aquello que demuestra la esencia de los fenómenos estudiados. Esta necesidad de síntesis es mucho más importante si se tiene en cuenta el objetivo pedagógico del presente volumen.

Precisamente en este último punto reside la tercera fortaleza del libro: su redacción eminentemente didáctica. Ambos autores presentan los hechos de una manera que permite al lector comprender y aprehender muy fácilmente los elementos centrales, ilustrados además con mapas y cuadros demostrativos. Es natural que sea así, porque el objetivo inicial de los textos que integran este volumen fue servir como material para un curso del Campus Virtual de CLACSO.

Un elemento importante que posee este libro y que lo diferencia de algunos esfuerzos anteriores es que introduce dos actores no usuales en recuentos similares. Por un lado, se le da la importancia que tiene al Caribe no hispanoparlante. Aunque la significación de esta subregión ha sido recogida en obras dedicadas a la historia del Caribe o de las relaciones del Caribe con EE.UU., no es lo usual en otras obras vinculadas a las relaciones interamericanas. El segundo actor es Canadá. Esta potencia norteamericana de nivel medio se ha convertido en un activo participante en las relaciones interamericanas, y los autores lo reconocen con varias referencias a las posiciones de su gobierno y actores sociales, incluyendo las clases dominantes.

El volumen se ve enriquecido por cuatro ensayos escritos como trabajos finales por alumnos de la primera edición del curso *Las relaciones interamericanas: continuidad y cambios (1804-2004)*, ofrecido por los profesores Suárez Salazar y García Lorenzo en el Campus Virtual de CLACSO en el año 2007. Se trata de “El concepto de integración en el discurso de Simón Bolívar. Perspectivas para el presente” de Silvana Montaruli; “Entre Bolívar e Monroe: o Brasil nas relações interamericanas” de Tiago Coelho Fernandes; “Concepciones democráticas en pugna en el ámbito de la OEA” de Daniela Kunz; y “El MERCOSUR en prospectiva” de Santiago Kosiner. Todos estos trabajos demuestran una rigurosidad investigativa y capacidad de estudio independiente que evidencian la importancia de este curso y sus excelentes resultados.

En una obra anterior, el profesor Suárez Salazar recordaba un principio elemental de la investigación científica, debido a la pluma del Canciller de la Dignidad de Cuba, el profesor Raúl Roa García, quien dirigió la diplomacia cubana entre 1959 y 1976, pero que había ejercido la docencia en la Universidad de la Habana durante varios lustros en los años cuarenta y cincuenta:

En ningún terreno como el de [las] ciencias sociales son tan múltiples y variados los criterios, las perspectivas y las soluciones propuestas [...] El espíritu científico y la intolerancia son incompatibles. El espíritu científico se nutre y enraíza en la libertad de investigación y de crítica. La intolerancia –esa

extensión hacia afuera del dominio exclusivo ejercido dentro de nosotros por la fe dogmática– intoxica la inteligencia, deforma la sensibilidad y frustra la actividad científica, que es un impulso libérrimo hacia la conquista y la posesión de la verdad (Roa García, 1949).

Los profesores Suárez Salazar y García Lorenzo han sido fieles a este apotegma del doctor Roa García. Ello no quiere decir, sin embargo, que el libro que CLACSO pone a disposición del público no tome partido y no se inscriba en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño de tendencia francamente emancipadora. Este es un libro de historia, mas la historia vista desde un enfoque histórico materialista elaborado –vale la pena destacarlo– en la verdadera tradición iniciada por Marx en el siglo XIX.

Por ello, conviene felicitar al Campus Virtual de CLACSO por haber tenido la iniciativa de publicar este libro, que se inscribe en lo planteado en un enjundioso ensayo de Atilio Boron en el que defendió la necesidad de repensar toda la teoría social crítica a partir del materialismo histórico.

Por otra parte, es cierto que la insistencia de Ilya Prigogine en el carácter abierto y no predeterminado de la historia es un útil recordatorio para los dogmáticos de distinto signo, tanto los supuestamente marxistas que creen en la inexorabilidad de la revolución y el advenimiento del socialismo, como los neoliberales que con el mismo empecinamiento celebran “el fin de la historia” y el triunfo de los mercados y la democracia liberal. La historia presenta coyunturas en donde se abren oportunidades a la vez que se clausuran otras. En los años finales de su vida, conmovido por la caída del Imperio Alemán y el triunfo de la revolución en Rusia, Weber acuñó una fórmula que conviene recordar en una época como la nuestra, tan saturada por el triunfalismo neoliberal: “sólo la historia decide”. Pero sería un acto de flagrante injusticia olvidar que fue el propio fundador del materialismo histórico quien una y otra vez puntualizó el carácter abierto del proceso histórico, más allá de las distorsiones que su pensamiento habría de sufrir a manos de sus simpatizantes y codificadores. Para Marx lo concreto era lo concreto precisamente por ser la síntesis de múltiples determinaciones y no el escenario privilegiado en el cual se desplegaba la potencia creadora de los factores económicos. Fue por eso que Marx –un autor sin cuya recuperación intelectual será imposible reconstruir la ciencia social que necesitamos– sintetizó su visión no determinística del pro-

ceso histórico cuando pronosticó que en algún momento de su devenir las sociedades capitalistas deberían enfrentarse a un dilema de hierro: “socialismo o barbarie”. No había lugar en su esquema teórico para “fatalidades históricas” o “necesidades ineluctables” portadoras del socialismo con independencia de la voluntad de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad. Las observaciones de Prigogine deben ser bienvenidas porque no hacen sino ratificar, desde una perspectiva completamente distinta y desde una reflexión originada en las “ciencias duras”, las importantes anticipaciones teóricas de Marx (Boron, 2000: 226).

Los autores de este libro se inscriben claramente en esta tradición a la que hace referencia Boron. Este es un volumen de historia, pero de una historia que combina la política, la economía y la sociología para entregar un resultado científico de primer nivel. No debe extrañar, por tanto, que CLACSO lo haya incluido en su ya voluminosa colección.

Para concluir, deseo recordar algo que afirmé cuando presenté al público cubano la primera edición del libro *Madre América: un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, escrito por el doctor Luis Suárez Salazar, y que es perfectamente válido para este volumen:

Sólo quiero agregar una idea propia. Fuera de Cuba se han editado numerosas obras sobre la historia de las relaciones entre EE.UU. y América Latina y el Caribe. Autores norteamericanos han hecho similares esfuerzos. Una de las más meritorias obras en este sentido es la que apareciera con el sugestivo título de *Beneath the United States (Bajo los Estados Unidos)* de Lars Schultz, Profesor de la Universidad de Carolina del Norte, quien se mueve en la misma línea de Luis y demuestra fehacientemente, con profusas citas de documentos originales de archivos norteamericanos, la profunda arrogancia y desprecio con que el gobierno, y no el pueblo, de los Estados Unidos ha conducido sus relaciones con la región.

Algunos autores norteamericanos menos críticos, pero conocedores de esta historia de violencia y dolor, han pretendido justificar los desmanes de Washington con la frase de *benign neglect* o *negligencia benigna*. He sostenido que ese concepto es falso y avieso. Lo que debiera decirse es que la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe se define mejor como *malign interest* o *interés maligno*. Pues no ha habido negligencia y mucho menos benigna. Lo que ha existido es un interés maligno en subordinar,

dominar y avasallar a nuestros pueblos, que ha contado en más ocasiones de la cuenta con el entusiasta apoyo de las oligarquías nacionales.

Pero hoy podemos decir, con el Che, que desde Santa Cruz de la Sierra hasta Caracas, desde Buenos Aires hasta Chiapas: “Esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a andar y su marcha de gigantes no se detendrá hasta alcanzar su verdadera independencia”.

BIBLIOGRAFÍA

- Boron, Atilio A. 2000 “Epílogo ¿Una teoría social para el siglo XXI?” en *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Elías, Antonio (coord.) 2006 *Los gobiernos progresistas en debate: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay* (Buenos Aires/ Montevideo: CLACSO/PIT-CNT/Instituto Cuesta Duarte).
- Roa García, Raúl 1949 *Historia de las doctrinas sociales* (La Habana: Imprenta de la Universidad de La Habana).

INTRODUCCIÓN

A PESAR DE SU IMPORTANCIA para comprender la inserción periférica y dependiente en el sistema capitalista mundial de América Latina y el Caribe, así como algunas de las más importantes causas de su subdesarrollo económico, social y político y su galopante deterioro ambiental, el estudio de la historia y la situación actual de las relaciones interamericanas ha perdido peso en la mayor parte de las universidades y los centros de enseñanza superior de ese continente.

En los casos que se estudian prevalecen enfoques sesgados y, muchas veces, apologéticos de sus interacciones con Estados Unidos. Ello dificulta construir una visión crítica e integral de las protuberantes “asimetrías” políticas, diplomáticas, económicas, militares, de seguridad e ideológico-culturales que han tipificado y tipifican las interacciones de esa potencia imperialista con Canadá, con los 33 estados nacionales independientes o “semi-independientes”¹, así como con los

1 El término “estados semi-independientes” fue acuñado por Vladimir Ilich Lenin en su famosa obra *El imperialismo: fase superior del capitalismo* para referirse a aquellos estados que, aunque gozan de independencia política, han caído atrapados en las redes de lo que él llamó “la oligarquía financiera” internacional.

16 territorios coloniales o semicoloniales actualmente existentes en el llamado hemisferio occidental².

También complica el conocimiento del creciente papel que está desempeñando Canadá en las relaciones interamericanas, y de las múltiples interacciones (a veces bélicas) que han existido y existen entre los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, así como la comprensión del papel que siempre han desempeñado en esas interacciones los diferentes “actores” sociales y políticos no estatales que han actuado y actúan en los países actualmente situados al sur del Río Bravo y la península de Florida, al igual que en Canadá y EE.UU.

Con vistas a contribuir a resolver esas y otras carencias cognitivas, docentes y educativas, el prestigioso jurado internacional –integrado por los doctores Osvaldo Martínez y John Saxe-Fernández y la doctora Magdalena Valdivieso– que valoró los diferentes proyectos presentados al Sexto Concurso de la Cátedra Florestan Fernandes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) eligió, a fines de 2005, el curso “Las relaciones interamericanas: continuidad y cambios (1804-2004)”. Este se impartió en los últimos meses del año 2006.

En razón de los buenos resultados obtenidos en dicho curso, de los excelentes trabajos finales presentados por los y las estudiantes que lograron concluirlo (Tiago Coelho Fernandes, Alejandro Jiménez Schroeder, Silvia Jiménez, Santiago Kosiner, Daniela Kunz, Vicente Manjavacas Méndez y Silvana Montaruli), así como de la carencia (al menos en español y en portugués) de bibliografía actualizada sobre el tema, dos años más tarde la colección Campus Virtual de CLACSO decidió publicar esta obra.

Como puede observarse en el índice, en ella se sintetizan las versiones editadas y actualizadas de las diez lecciones ofrecidas por los profesores signatarios de esta introducción. A ellas se unen cuatro colaboraciones elaboradas por algunos de los mencionados alumnos. En consonancia con los criterios de CLACSO, y sin sacrificar la calidad del texto, en la selección de esas colaboraciones se ha respetado el equilibrio de género. Lamentablemente, no se pudo lograr un mayor equilibrio entre las diferentes regiones y países del continente, en razón de la procedencia geográfica de los y las estudiantes que concluyeron el curso.

No obstante esa y otras carencias de esta obra –que, en más de un sentido, sólo puede ser considerada *como una introducción al estudio integral, contemporáneo y actualizado de las relaciones interamericanas*–,

2 Aunque en geografía el hemisferio occidental abarca áreas y territorios del Océano Pacífico y el Atlántico (incluidas importantes zonas de África Occidental), usualmente el término sólo se emplea como sinónimo del continente americano. Es con ese sentido que, en letras minúsculas, se utilizará a lo largo de este texto. Sólo aparecerá en mayúsculas cuando se corresponda con una cita textual de otros autores o documentos oficiales.

todos sus autores y autoras confiamos en haber logrado plasmar los principales elementos teórico-metodológicos y la información básica que permitan a sus lectores y lectoras profundizar en el conocimiento de cada uno de los temas abordados y, desde allí, elaborar una interpretación crítica de la evolución de las cada vez más complejas y conflictivas interacciones entre EE.UU., Canadá, América Latina y el Caribe.

Asimismo, que posibiliten la comprensión de los enormes desafíos (amenazas externas y debilidades internas) y posibilidades (fortalezas endógenas y oportunidades exógenas) de los diversos procesos de concertación política, cooperación e “integración económica” –neoliberales-dependientes, neodesarrollistas-autonomistas y neosocialistas-independientistas– que en la actualidad se están desarrollando en y entre “las dos Américas”.

De más está decir que –como previó José Martí en la última década del siglo XIX– la primera (aunque no la única) de esas amenazas sigue siendo la política “global” y hemisférica de la que él llamó “República Imperial”. Entonces, como hoy, bajo los rancios enunciados de su “Doctrina Monroe” y su “destino manifiesto”, así como de sus cantos de sirenas “panamericanos”, esa república continúa tratando de subordinar a sus siempre expansivas necesidades geopolíticas y geoeconómicas tanto a Canadá como a las naciones y pueblos que cohabitan en el espacio geográfico, humano y cultural que en 1953 el joven Ernesto Guevara de la Serna, siguiendo el legado de José Martí y de otros luchadores y pensadores de su genuina independencia, denominó “nuestra Mayúscula América” (Guevara, 2004: 26).

Sin negar las contradicciones que han existido (y existen) entre todos ellos, en esos empeños los grupos dominantes, los poderes fácticos y los diferentes gobiernos temporales de EE.UU. han contado y siguen contando con la complicidad de sus contrapartes –aliadas o subordinadas, según el caso– canadienses, latinoamericanas y caribeñas. También de las potencias europeas con mayor presencia en el hemisferio occidental: España, Francia, Holanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Lo antes dicho no desconoce la pervivencia de las que en 1917 Vladimir Ilich Lenin llamó “contradicciones interimperialistas” (Lenin, 1976). Sin embargo, queremos recalcar que, desde fines del siglo XIX, poco a poco y partiendo de sus propios intereses, todas esas potencias europeas fueron aceptando (a veces a regañadientes) que todo el continente americano era parte sustantiva de las pretensas “esferas de influencias” de EE.UU. De una u otra forma, esa aceptación facilitó las sucesivas y disímiles estrategias expansionistas, contrarreformistas y contrarrevolucionarias desplegadas por la potencia hegemónica en el hemisferio occidental.

Aunque no es su objeto principal (de hecho, resulta necesario profundizar en el conocimiento de la historia y la actualidad de las interacciones entre los estados y gobiernos del denominado “triángulo Atlántico”), algunos de esos procesos también se reflejarán en las lecciones que siguen. En nuestro criterio, resulta imposible desligar el estudio integral de las relaciones interamericanas de la evolución de las interacciones de Europa Occidental con América Latina y el Caribe.

Tampoco es posible abordarlas sin analizar las implicaciones que esas interacciones han tenido y tienen en las superpuestas crisis (económica, social, política, ideológico-cultural y ecológico-ambiental) que están afectando ese continente, al igual que en los diversos procesos de cambios –reformistas, reformadores o revolucionarios, según el caso– favorables a los intereses nacionales y populares que se han desplegado o se están desplegando en la actualidad.

De ahí, y de las persistentes acciones plutocráticas e imperialistas para sofocarlos, la validez de una de las tantas advertencias de José Martí: “Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada [...] las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra” (Martí, 1974c: 21). Y la vigencia de su poético llamado a los pueblos nuestroamericanos:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes (Martí, 1974c: 21-22).

LECCIONES

Lección Uno

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS: UN ENFOQUE INTEGRAL

EN SUS CONOCIDOS *Cuadernos de la cárcel*, Antonio Gramsci dejó indicado lo siguiente:

Si el político es un historiador (no sólo en el sentido de que hace historia sino en el sentido de que operando en el presente interpreta el pasado), el historiador es un político y en ese sentido [...] la historia es siempre historia contemporánea, es decir la política (Gramsci en Schulman, 2005: 11).

Esa perenne lectura contemporánea, y por tanto necesariamente crítica del pasado (incluido el pasado reciente y el pasado-presente), de “la historia” o “las historias” que hasta ahora se han publicado, así como esa ineludible función política de la historiografía, guiarán todas las lecciones que siguen. Por ello, la aproximación que se realizará al pasado, el presente y el porvenir de las bicentenarias relaciones interamericanas no se emprenderá desde un enfoque social y políticamente neutro.

Por ende, los autores de estas lecciones se acercarán al objeto de estudio desde el legado teórico-práctico de todos y todas quienes desde diversos ámbitos de la política, la sociedad, el periódico, la cátedra, las ciencias o las artes han luchado y continúan luchando por lograr lo que en 1889 José Martí denominó “la segunda independencia” de Nuestra América frente a la Roma Americana. El 2 de noviembre de

ese año, luego de observar los preparativos e intrínquilos de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos (madre putativa del “panamericanismo”) que se efectuaba en Washington, él indicó con palabras aún vigentes:

Jamás hubo en América, de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder [...] De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia (Martí, 1974c: 250).

Como se verá en las lecciones correspondientes, esas ideas del Apóstol de la Independencia de Cuba continuaron y a la vez actualizaron el camino trazado por quienes, en julio de 1889, él había denominado los “Tres héroes” (Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y José de San Martín) de las luchas por las primeras independencias de la ahora llamada América Latina frente a las potencias ibéricas y, en particular, frente a la corrompida y decadente monarquía española (Martí, 1974c: 184-188).

En los decenios posteriores a su caída en combate (19 de mayo de 1895), ese legado fue retomado, de una u otra forma, por los diferentes destacamentos, líderes, luchadores y pensadores latinoamericanos y caribeños que –desde distintas perspectivas político-ideológicas– asumieron el antiimperialismo como uno de los ejes centrales de sus multiformes luchas por lograr la liberación nacional y social de las naciones y los pueblos actualmente ubicados al sur del Río Bravo y la península de Florida.

Esto ocurrió especialmente luego del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, que –encabezada por Fidel Castro– asumió la obra teórico-práctica de José Martí (al igual que la de sus antecesores y sucesores latinoamericanos y caribeños) como una de las fuentes nutricias de la transición socialista cubana y, por tanto, de su proyección externa hacia todo el mundo, pero en particular hacia EE.UU., América Latina y el Caribe (Castro, 1993; Fernández Retamar, 2006; Suárez Salazar, 1986).

Por otra parte, y a diferencia de algunos de los cultores de la llamada “micro-historia”, las lecciones que siguen no persiguen recrear todos los detalles del pasado. Las inevitables referencias a algunos de esos detalles sólo buscan alumbrarlos, con el propósito de encontrar

en ellos y en las denominadas “regularidades de la historia” aquellos saberes que permitan realizar una actualizada aproximación político-académica, científica, teórico-práctica y crítico-transformadora a las realidades y disyuntivas que en el futuro previsible deberán enfrentar las multifacéticas relaciones interamericanas.

Con tal fin, dichas aproximaciones se realizarán desde el enfoque de lo que algunos autores han venido llamando “la prospectiva crítica y participativa”. Es decir, desde aquellos conceptos de la también llamada “futurología” que –a diferencia del determinismo y el voluntarismo que han caracterizado a la mayor parte de los cultores de esa disciplina– insisten en indicar que “las tendencias (sociales, económicas, etc.) existen porque han sido el fruto de estrategias desplegadas por actores sociales. Y si las rupturas a esas tendencias no han logrado hacerlas cambiar su rumbo, ha sido porque el poder de estos actores sociales no ha sido suficientemente fuerte para aniquilarlas” (Mojica, 2000: 111-125).

En esa perspectiva, el futuro “es más construible que previsible”. A consecuencia, el porvenir se parece más a un juego de ajedrez o un campeonato de fútbol (donde todos los contendientes pugnan por triunfar), que a un guión de cine o una pieza de teatro en los que el guionista y el director de la obra conocen el final de la trama. Por tanto –como bien ha señalado el director del Subnodo colombiano del Millennium Project del Consejo Americano de la Universidad de las Naciones Unidas, Francisco José Mojica–, “el futuro” no es único, ni lineal. Al contrario, pueden vislumbrarse varios futuros y escenarios alternos¹.

Ninguno de ellos está predeterminado por las tendencias del pasado o del presente, ya que, sin ignorar la importancia de su conocimiento científico, en última instancia, la consolidación, modificación gradual o ruptura radical de esas tendencias dependen de las acciones humanas. En particular, de “las acciones proactivas” del “hombre colectivo” (Mojica: 2000)². Este, en ciertas corrientes del pensamiento

1 En algunas aproximaciones teórico-metodológicas a la Planeación Estratégica, los escenarios se clasifican en “escenarios probables”, “escenarios alternos” y “escenarios deseados”. Los primeros identifican y califican las tendencias de los procesos que se estudian. Los segundos refieren otras alternativas que podría deparar el porvenir, con independencia del grado de probabilidad que indiquen las tendencias dominantes en un momento determinado. En tanto, los terceros definen las mejores opciones para el cumplimiento de los objetivos de los “actores sociales” o de los “sujetos de pensamiento” y “sujetos de acción” implicados en ese proceso.

2 Francisco José Mojica (2000) recuerda que, comúnmente, las actitudes humanas frente a los cambios en su entorno se definen como reactivas, preactivas y proactivas. Las primeras se reducen a encarar las situaciones críticas o conflictivas en el momento en que se presentan. Las segundas se limitan a prepararse para los cambios, bajo el supuesto de que estos no dependen de su voluntad. Y las terceras son las que vinculan la acción humana a una actividad conscientemente dirigida a la construcción del futuro.

sociológico, aparece identificado con las clases y las luchas de clases (Guevara, 1970: 319-331). Y en otras, con los intereses y comportamientos de los “actores sociales” (Touraine, 1984).

Por consiguiente, “la construcción del futuro no es un proceso neutral sino un campo de batalla [...] donde el sujeto de esta actividad que son los actores sociales pugnan por imponer su poder para defender sus intereses” (Mojica, 2000). A consecuencia, como ha indicado Eleonora Masini Barbieri, “la futurología supone un compromiso con el cambio y la acción que implica una voluntad de construir el futuro más que de aceptarlo simplemente” (2000: 41-42).

Lo dicho conlleva –tal como planteó Max Weber– comprender “la política” como el arte de luchar por lo imposible para obtener lo que sea posible en cada etapa. También implica potenciar aquello que el desaparecido sacerdote jesuita Xabier Gorostiaga denominó “prospectiva participativa”; o sea, la construcción de futuros que reflejen la voluntad de las mayorías de los sujetos sociales (no sólo de “las elites” o “las vanguardias”) de “organizar la esperanza” de que es “necesaria y posible la edificación de una sociedad y un mundo mejor, fundado en una opción ética y en un compromiso por crear un futuro de ciudadanía digna para los excluidos y para los ‘otros’ desde la pasión y la compasión solidaria” (Gorostiaga, 2000: 35-50).

A esta interpretación teórico-práctica de la “futurología” se volverá en la última lección, en tanto uno de los propósitos de sus autores es impulsar los que, a fines del siglo XX, la UNESCO definió como “estudios de alta calidad orientados al futuro” (Mayor Zaragoza, 2000). Sin embargo, antes de llegar a esa lección, resulta imprescindible insistir en la necesidad de que cualquier abordaje histórico, actual o prospectivo, de las relaciones interamericanas se emprenda desde *un enfoque integral*.

Tal enfoque debe realizarse –como tempranamente expresó el conocido filósofo marxista húngaro György Lukács (en Schulman, 2005: 15)– desde la “descripción de la historia como un proceso unitario”. Es decir, comprendiendo que “las historias” de los 35 estados nacionales o multinacionales independientes o semi-independientes que en la actualidad existen en el hemisferio occidental, así como de los 16 territorios de ese hemisferio (incluidas las Islas Malvinas) sometidos a diferentes formas de dominación colonial, son intrínsecas a la Historia de América y esta, a su vez, es una parte –y sólo una parte– de la Historia Universal.

De modo que nunca se podrá comprender en todas sus contradicciones y en toda su profundidad la “historia especial” de las relaciones interamericanas sin aprehender, a la par, sus intervenciones con las diversas historias nacionales, con la historia del hemisferio occidental,

así como con el devenir de los llamados “ciclos largos” que usualmente se utilizan para delimitar las denominadas historia moderna y contemporánea. En particular, la zigzagueante pero continua transición “global” del feudalismo al capitalismo iniciada por la Revolución Inglesa de 1640, y teóricamente concluida en la segunda mitad del siglo XIX, pasando por la independencia de las Trece Colonias Unidas del Norte de América (1776-1783), la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Haitiana de 1791 a 1804 y las luchas por las primeras independencias de la ahora llamada América Latina, iniciadas –como se verá en la próxima lección– con el desembarco en Tierra Firme, el 3 de agosto de 1806, de la expedición revolucionaria organizada por Francisco de Miranda, y concluidas con la histórica Batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824.

Esa larga transición del feudalismo al capitalismo fue seguida –como *solución de continuidad*– por la relativamente acelerada “metamorfosis” del capitalismo pre-monopolista en capitalismo monopolista (o imperialismo); etapa de esa formación económico-social que –a decir de Vladimir Ilich Lenin– se convirtió “en la antesala de la revolución social del proletariado” o, dicho de otra forma, en condición necesaria (pero no suficiente) de la aún inconclusa transición histórico-universal del capitalismo al socialismo o, si se prefiere, del capitalismo al comunismo (Suárez Salazar, 2006e).

En ese orden, resulta de mucha utilidad la lectura crítica del ensayo de Juan Gabriel Tokatlian “¿Es nueva la ‘nueva’ política exterior latinoamericana?”, en el que analiza los principales paradigmas teóricos que tradicionalmente han guiado los estudios de las relaciones entre EE.UU., América Latina y el Caribe. Según dicho autor, estos son: la escuela tradicional o clásica, la teoría de la dependencia, la teoría de la interdependencia y la teoría del imperialismo (Tokatlian, 1983).

Aunque, en rigor, ninguna de esas “escuelas” es en sí misma una teoría de las relaciones internacionales, no existen dudas de que en todas ellas pueden encontrarse elementos más o menos válidos, según el caso, para comprender algunos desenvolvimientos históricos y actuales de las relaciones interamericanas. Como se verá más adelante, esa afirmación no niega (por el contrario, afirma) la validez de todas aquellas lecturas antidogmáticas y creadoras del marxismo (y en particular del leninismo) para la comprensión de las políticas hemisféricas desplegadas por sus correspondientes gobiernos temporales, en primer lugar por el de EE.UU.³.

3 Curiosamente, la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue realizada por los redactores del documento Santa Fe I. Con los primeros, se referían a lo que, en el lenguaje de dicho texto, se ha llamado “grupos de poder y poderes fácticos”,

En esa tesitura, resultan pertinentes las reflexiones realizadas por el prestigioso científico social brasileño Ruy Mauro Marini en su artículo “La integración imperialista y América Latina” (1994), ya que él aplica a las condiciones de nuestro continente la categoría “cooperación antagónica” que fuera utilizada, luego de la Segunda Guerra Mundial, por el marxista alemán August Talheimer, con vistas a explicar las intrincadas relaciones de integración-cooperación-competencia-conflicto entre las principales potencias imperialistas, aun en los momentos en que una de ellas haya mantenido una posición hegemónica o dominante en sus relaciones mutuas.

El dominio y la utilización creadora de esa categoría –emparentada, pero no idéntica, a lo que Lenin llamó “contradicciones interimperialistas”– son necesarios para comprender la contradictoria incidencia que han tenido (y todavía tienen) en las relaciones interamericanas las interacciones entre Inglaterra, Holanda, Francia, España y EE.UU. Además, con las adecuaciones de rigor, tal vez esa categoría podría aplicarse a las relaciones entre Canadá y EE.UU., así como a las vinculaciones entre esa última potencia imperialista y los países de mayor desarrollo relativo de América Latina (Argentina, Brasil y México) –al menos en aquellas etapas de sus correspondientes historias en que ciertos sectores sociopolíticos de esos países (encabezados por los más avanzados representantes sus burguesías industriales) se plantearon edificar “capitalismos nacionales” con ciertos márgenes de autonomía frente a los grupos dominantes estadounidenses o de otras potencias imperialistas (Prieto Rozos, 2005).

En la actualidad, las categorías mencionadas (imperialismo, contradicciones interimperialistas, cooperación antagónica, capitalismo nacional) están sometidas a fuertes debates políticos, ideológicos, académicos y científicos en todo el mundo. A algunos de aquellos debates se refirió Atilio Boron en su conocido libro *Imperio e imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri*, que fuera publicado por primera vez en 2002. También han sido abordados por otros autores, que antes o después de dicho volumen han discutido la vigencia (total o parcial) de la teoría leninista sobre el imperialismo, al igual que sus implicaciones para las relaciones interamericanas (Petras et al., 2004; Suárez Salazar, 2006e; 2006c).

Sin embargo, conviene insistir en que esas relaciones no pueden reducirse –como usualmente se hace– a las múltiples interacciones entre los gobiernos de EE.UU., América Latina y el Caribe. No obstante su importancia, un enfoque integral de las relaciones hemisféricas tam-

mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales que se producen en el hemisferio occidental y otros continentes.

bién debe incluir las diversas interacciones plurilaterales y multilaterales, según el caso, entre los estados y gobiernos latinoamericanos y caribeños, así como del gobierno de Canadá con el de EE.UU. y con los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Igualmente, debe considerarse la influencia (en algunos casos decisiva) que han tenido y tienen en esas relaciones interestatales o intergubernamentales las plurales fuerzas sociopolíticas, socioeconómicas y socioculturales –“supra estatales”, “sub-estatales” o “no gubernamentales”– que actúan en las que Antonio Gramsci llamó “sociedad política” y “sociedad civil”, vistas estas como “campos de batalla” de “las guerras de movimientos y posiciones” entre diferentes clases sociales dirigidas al control y la defensa de lo que el propio Gramsci y otros marxistas de diferentes orientaciones llaman “el poder político” (Boron, 2006; Acanda González, 2007).

Sin el conocimiento del curso y desenlace de esas superpuestas “guerras”, no podrían comprenderse los cambios que –a lo largo de los últimos dos siglos– se han producido en las socioeconomías y los sistemas políticos de los estados del hemisferio occidental y, por ende, en las relaciones interamericanas. Entre otras cuestiones porque –como, siguiendo a los clásicos del marxismo, recordó Roberto González– la política exterior de cualquier Estado-nacional *en última instancia* está determinada por su política interna, y ambas, a su vez, por el bloque socioclasista que detenta el poder político (González, 1990).

Y –como a lo largo de la historia de Canadá, EE.UU. y de los 33 actuales estados nacionales o multinacionales de América Latina y el Caribe– se han provocado mutaciones más o menos significativas, según el caso, en la hegemonía del bloque histórico que ha controlado la vida económica y social, los aparatos ideológicos-culturales y la maquinaria burocrática-militar de esos estados. Dichos cambios se han reflejado de manera inevitable en el curso de sus correspondientes proyecciones externas y, por tanto, en las multifacéticas relaciones interamericanas.

De lo expresado anteriormente se desprende que un enfoque integral de esas relaciones no puede reducirse –como a veces se hace– a sus dimensiones político-diplomáticas y económico-comerciales. De hecho, estas no podrían comprenderse en toda su contradictoria integridad si no se conocen sus imprescindibles dimensiones socioclasistas, político-jurídicas, institucionales, estratégico-militares y de seguridad, ideológico-culturales, económico-financieras, tecnológicas y ecológico-ambientales; entre otras cosas, en razón de lo que Guillermo Castro denomina “las dos tendencias” que han caracterizado “la relación de los norteamericanos [entiéndase los estadounidenses] con el mundo natural. Por un lado, la expansión hacia el exterior en nombre de la lucha por el control de recursos naturales estratégicos –en particular, energéticos,

minerales y alimentos– en ultramar, y de los mercados asociados a los mismos; por otro, la lucha por la conservación de los recursos naturales de su propio territorio” (Castro, 2004: 29).

La comprensión de esos y otros fenómenos íntimamente vinculados a la que pudiera llamarse *historia ambiental interamericana* implica abordar la economía política del imperialismo norteamericano, del capitalismo desarrollado y relativamente independiente existente en Canadá y del capitalismo *subdesarrollante*, desigual, deformado, periférico y dependiente instaurado en América Latina y el Caribe a lo largo del proceso histórico que va desde las primeras independencias frente a las potencias coloniales ibéricas hasta la actualidad (incluida –como se verá en el Anexo 1– la tardía, asincrónica e inconclusa descolonización del Caribe).

En ese sentido, resulta útil la lectura de los trabajos de Theotonio Dos Santos, Nildo Domingos Ouriques y Jaime Osorio acerca de las fuentes, tendencias y vigencias de la llamada “teoría de la dependencia” (Dos Santos, 1998; Domingos Ouriques, 1994; Osorio, 1994). Aunque, como está dicho, esta no es una teoría de las relaciones internacionales –ni siquiera de las relaciones interamericanas–, sin dudas fue y sigue siendo uno de los más genuinos aportes latinoamericanos al análisis crítico de los conceptos sobre el desarrollo y las relaciones internacionales preponderantes en las décadas del cincuenta y el sesenta. Entre ellos, los propugnados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre las décadas de sesenta y el ochenta. Estos guiaron la denominada “etapa desarrollista” del capitalismo latinoamericano y caribeño, en la que se impulsó la “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI) y la “integración económica” de los países de esa región.

Desde un análisis crítico de esos conceptos –al igual que los enfoques de la llamada “economía neoclásica”–, las referidas aproximaciones a la economía política del capitalismo subdesarrollado y dependiente fueron retomadas por Tania García Lorenzo (2005) con vistas a fundamentar lo que denominó “los encuentros y desencuentros” de los estados y gobiernos actualmente integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), fundada en 1973 y ahora integrada por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat⁴, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

4 A pesar de estar incorporada a la CARICOM, sigue siendo una posesión colonial británica, lo que la diferencia de otros territorios dependientes del “Caribe angloparlante” (Islas Vírgenes británicas e Islas Turks y Caicos) que sólo participan en carácter de miembros asociados.

A los hallazgos de esa autora se regresará en las lecciones correspondientes; pero ahora conviene adelantar que ellos contribuyen a explicar las debilidades intrínsecas de los procesos de concertación política, cooperación e “integración económica de primera y segunda generación” que se desarrollaron y aún se desarrollan en América Latina y el Caribe, particularmente de los institucionalizados durante e inmediatamente después (como es el caso del Mercado Común de Sur) del ciclo revolucionario y reformador abierto por la Revolución Cubana y temporalmente cerrado en febrero de 1990 por la derrota político-electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua.

Como se conoce, esa etapa de la historia latinoamericana y caribeña estuvo caracterizada, entre otras cosas, por sucesivas intervenciones militares, individuales o “colectivas”, directas o indirectas, de EE.UU. (y sus principales aliados) en diferentes países del continente, así como por el ocaso de las dictaduras militares más o menos tradicionales, al igual que por la instauración y el sucesivo desplome de los diversos regímenes civiles o militares de seguridad nacional que –como se verá en el Anexo 2– provocaron la muerte o la desaparición física de cientos de miles de personas de América Latina y el Caribe (Suárez Salazar, 2003b; 2006e).

De lo anterior se desprende que un enfoque integral de las relaciones interamericanas nunca podrá separarse de la dinámica (las más de las veces violenta) entre la reforma, la revolución, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución que ha caracterizado, caracteriza y caracterizará el devenir y el porvenir de la mayor parte de los actuales estados nacionales y territorios coloniales ubicados en el hemisferio occidental.

Por consiguiente, sin el análisis de esa recurrente dinámica –íntimamente vinculada a las resistencias al sistema de dominación (hegemonía acorazada con la fuerza) oligárquico-imperialista instaurado en “las Américas”–, no es posible abordar en toda su profundidad el objeto epistemológico de este volumen. Mucho menos elaborar aproximaciones teórico-prácticas que contribuyan a anticipar, a través de la crítica-transformadora del pasado-presente, los escenarios deseados para “el futuro” de nuestra Mayúscula América. En dicha tarea –junto a los plurales actores sociales y políticos participantes en el Foro Social Mundial, el Foro de São Paulo y otras instituciones populares no gubernamentales hemisféricas (como la Alianza Social Continental)– debemos participar todos aquellos intelectuales y científicos sociales que seguimos pensando que *otro mundo y otro continente son imprescindibles y posibles*.

Lección Dos

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DESDE LA REVOLUCIÓN HAITIANA HASTA LA GUERRA DE SECESIÓN EN EE.UU.

ESTA LECCIÓN ESTARÁ DEDICADA al estudio de las relaciones interamericanas entre el 1 de enero de 1804 (fecha en que, luego de una cruenta guerra de liberación nacional y social, Haití proclamó su independencia del colonialismo francés y la total libertad de los esclavos) y 1865, año en que culminó la Guerra de Secesión de EE.UU. y en el que, a su vez, fue asesinado, el 14 de abril, su afamado presidente Abraham Lincoln (1861-1865). Previamente, él había conducido a los estados industriales del noreste de ese país (donde predominaban las relaciones capitalistas de producción) en su victoriosa guerra contra los once estados esclavistas (Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee) que, a partir del 4 de febrero de 1861, estructuraron la finalmente derrotada Confederación Sudista, oficialmente denominada Estados Confederados de América.

Esa victoria de las fuerzas socioeconómicas y político-militares norteamericanas –los *yankees*, como los llamaban los sureños– impulsó las acciones del gobierno del “demócrata moderado” Andrew Johnson (1865-1869) dirigidas a comprarle al imperio zarista el territorio de Alaska; tratativa que culminó en 1867. También actualizó las añejas intenciones de los grupos dominantes en EE.UU. (puestas de manifiesto en la guerra anglo-estadounidense de 1812 a 1814) de anexionar el actual

territorio de Canadá. Tal pretensión quedó anulada cuando, gracias a la Ley de Reforma (*Reform Act*) aprobada por el Parlamento británico en 1867 y bajo el nombre de Dominio del Canadá (entonces integrado por la federación de Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Quebec y Ontario), ese extenso país formalmente dejó de ser una colonia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Hristoulas, 2005).

No obstante, las clases dominantes canadienses y sus más prominentes representantes políticos admitieron la instauración de un régimen de soberanía limitada; en tanto, hasta bien entrado el siglo XX, dicho territorio se mantuvo política, jurídica, económica y militarmente subordinado a la Corona Británica. Esos y otros factores explican por qué los sucesivos gobiernos conservadores y liberales de Canadá no tuvieron una participación directa en el desarrollo de las relaciones interamericanas a todo lo largo del siglo XIX, ni durante la primera mitad del XX. Como han consignado John Kirk y Peter McKenna (2007), en ese largo período, las acciones canadienses estuvieron limitadas a diversas y no siempre consistentes iniciativas dirigidas a estimular sus relaciones económico-comerciales con Brasil, México y algunos territorios o países “semi-independientes” del Caribe.

A ese tema se volverá en las próximas lecciones. Mientras tanto, es preciso destacar que, luego del fin de la Guerra de Secesión de EE.UU., la administración de Andrew Johnson, así como los mandatarios republicanos que lo sucedieron (Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfield y Chester Arthur) –al tiempo que abordaron la “reconstrucción del Sur”– impulsaron la llamada “conquista del Oeste”; es decir, la culminación del violento despojo de los territorios pertenecientes a las naciones originarias del actual territorio de EE.UU. (Nevins et al., 1996; Zinn, 2004). También –a través de diferentes maniobras financieras y de la violencia– comenzaron a despojar de sus tierras a los llamados *pioneers* (buena parte de ellos, pequeños agricultores o pequeños ganaderos) que, en diferentes oleadas, se habían venido instalando en las sucesivas fronteras occidentales de esa “república [inicialmente] pigmea” (Guerra, 1975).

Todas esas tropelías favorecieron la generalización de las relaciones capitalistas de producción y –a pesar de (o quizás por) la perduración de los problemas del “pueblo negro” (Du Bois, 2001)–, sentaron las bases socioeconómicas (la “revolución industrial”), político-jurídicas (la consolidación del Estado federal) e ideológico-culturales (los *paramount interests* –intereses globales) de EE.UU., que posibilitaron su rápida transición del capitalismo pre-monopolista hacia lo que en 1917 Vladimir Ilich Lenin denominó el “capitalismo monopolista” o “capitalismo monopolista de Estado” (Lenin, 1976).

Ese proceso de consolidación y constante expansión territorial, económica, militar e ideológico-cultural del imperialismo estadounidense tuvo en las últimas décadas del siglo XIX, a lo largo del XX y en

lo transcurrido del XXI múltiples implicaciones negativas para Canadá y nefastas consecuencias para América Latina, el Caribe y, por consiguiente, para las siempre multifacéticas y conflictivas interacciones entre “las dos Américas”. Sin embargo, sería un error suponer que las tendencias expansionistas de los grupos dominantes en EE.UU. únicamente estuvieron asociadas al surgimiento de los monopolios y a la consolidación de la oligarquía financiera, sujeto social dominante en las condiciones del “fenómeno imperialista” (Lenin, 1976).

Por el contrario, prácticamente desde el reconocimiento por parte de Inglaterra de la independencia de las inicialmente llamadas Trece Colonias Unidas del Norte de América (1873), los principales representantes políticos de los sectores de las clases dominantes –incluyendo los esclavistas–, que se “apropiaron” de esa entonces recién fundada república, ya estaban elaborando los argumentos político-ideológicos que posteriormente les permitieron justificar su expansión hacia el norte, el sur y el oeste de sus limitadas fronteras originales (ver Anexo 4).

En efecto, según documentó Gregorio Selser en su *Enciclopedia de las intervenciones extranjeras en América Latina*, en 1786, uno de sus más prominentes Padres Fundadores (*Founding Fathers*), Thomas Jefferson, sentenció:

Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del Norte como la del Sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos [...] de creer que interesa a este gran Continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que estas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente paraárselos arrebatando pedazo a pedazo (Jefferson en Selser, 1992: 31).

Dos años después, otro de los más conocidos *Founding Fathers*, Alexander Hamilton, expresó:

Podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en los árbitros de Europa en América, pudiendo inclinar la balanza de las luchas europeas, en esta parte del mundo, de acuerdo con lo que dicten nuestros intereses [...] Dejad a los trece estados ligados por una firme e indisoluble unión tomar parte en la creación de un Gran Sistema Americano, superior a todas las fuerzas e influencias transatlánticas y capaz de dictar los términos de las relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo (Hamilton en Selser, 1992: 33).

De una u otra forma, teñidas de un falso “aislacionismo” respecto a los conflictos europeos y de una mezquina “neutralidad” totalmente favo-

rable a Francia y España⁵, las pretensiones antes remarcadas tuvieron una de sus primeras expresiones en la adversa actitud asumida por los gobiernos de George Washington (1789-1797), John Adams (1797-1801) y Thomas Jefferson (1801-1809) tanto respecto a las victoriosas luchas contra la esclavitud y por la independencia de Haití, como con relación a las luchas por las primeras independencias de la América española (Guerra Vilaboy, 2003). En ese sentido, se ha demostrado cómo Jefferson, siguiendo la política de sus antecesores, en vez de respaldar a los independentistas haitianos, centró sus preocupaciones en resolver de manera amigable los diversos conflictos fronterizos que tenía EE.UU. con Francia, propósito que inesperadamente logró en 1803 con la compra del extenso territorio de Luisiana (Guerra, 1975).

Esa beneficiosa transacción fue posible gracias a la derrota por parte de las fuerzas liberadoras haitianas del poderoso ejército que había enviado Napoleón Bonaparte para restablecer la esclavitud y la dominación francesa sobre Haití, como pivote para intentar reconstruir el imperio francés en América. Aunque gracias a la heroicidad de las fuerzas independentistas y antiesclavistas haitianas ese objetivo se frustró, bajo la mirada cómplice de los gobiernos de España, EE.UU., Gran Bretaña y Holanda, Francia logró restablecer la esclavitud y mantener su control sobre Martinica y Guadalupe: pequeñas islas del Caribe que –junto al territorio de Guyana Francesa (Cayena) y bajo la denominación jurídico-formal de “Departamentos de Ultramar” (DOM, por sus siglas en francés)– todavía están sometidas a una modernizada y discriminatoria dominación política, económica, militar e ideológico-cultural.

Igualmente, se ha comprobado que en los años sucesivos, Jefferson –además de negarse a reconocer oficialmente a la primera república negra y antiesclavista del mundo (EE.UU. sólo reconoció oficialmente la independencia de Haití en 1862)– rechazó toda posibilidad de concederle cualquier ayuda estatal a la organización de la expedición revolucionaria con la que El Precursor Francisco de Miranda inició, en 1806, las luchas por la independencia de Hispanoamérica, alias Colombia (Bohórquez Morán, 2003). En contraste, ese pionero y ambicioso proyecto independentista encontró ostensibles manifestaciones de simpatías y solidaridad en la población y en las máximas autoridades haitianas, incluido su primer presidente y entonces emperador, Jean Jacques Dessalines (Guerra Vilaboy, 2003).

A la solidaridad oficial haitiana con las luchas por las primeras independencias latinoamericanas se volverá después. Ahora conviene

5 De hecho, la independencia de EE.UU. se logró gracias a la utilización por parte de los principales dirigentes de las fuerzas independentistas (entre ellos, George Washington) de los históricos conflictos existentes en Francia, España y el Reino Unido. Esto acentuó la mezquindad de la “neutralidad” favorable a España asumida por sucesivos gobiernos estadounidenses frente a las luchas por las independencias hispanoamericanas.

acentuar que existen múltiples evidencias históricas acerca de cómo la indecorosa actitud oficial estadounidense contribuyó a prolongar el dominio de las potencias ibéricas sobre el entonces llamado Nuevo Mundo. En efecto, la referida actitud “neutral” adoptada por el gobierno de Jefferson fue sostenida por las sucesivas administraciones de James Madison (1809-1817) y James Monroe (1817-1825). Este último, autor de la tristemente célebre “doctrina”, cuyos diversos corolarios y “afirmaciones positivas y negativas” (ver Recuadro 1), junto al Destino Manifiesto⁶, justificaron las múltiples agresiones perpetradas a lo largo de los siglos XIX y XX por los grupos dominantes y el *establishment* político-militar de ese país contra las naciones y los estados nacionales o plurinacionales ahora ubicados al sur del Río Bravo (o Grande) y la península de Florida.

Recuadro 1

Los contenidos de la Doctrina Monroe

Afirmaciones positivas

- Los Estados Unidos no consienten que naciones europeas adquieran territorios en América; ni que realicen acto alguno del que se pueda derivar esa adquisición.
- Los Estados Unidos tampoco consienten que una nación europea obligue a otra de América a cambiar su forma de gobierno.
- Los Estados Unidos no toleran que una colonia europea sea transferida por su metrópoli a otra potencia europea.

Afirmaciones negativas

- Los Estados Unidos no hacen materia de pacto los principios que envuelven la Doctrina Monroe.
- La Doctrina Monroe no reza con las colonias europeas existentes al ser promulgada; ni se aplica a la lucha de una colonia contra su metrópoli.
- Los Estados Unidos no intervienen en demostraciones puramente punitivas que hagan los gobiernos europeos contra naciones americanas, con tal de que esos actos no se deriven de una ocupación de territorio.
- Los Estados Unidos no intervienen en caso de guerra entre naciones americanas.
- Los Estados Unidos no se oponen a que una nación europea sea árbitro en una cuestión entre naciones americanas.

Fuente: De Cárdenas (1921: 106).

⁶ Aunque ya estaban presentes en la psicología social estadounidense, según diversos autores los postulados del Destino Manifiesto fueron sistematizados por primera vez en 1840 por el publicista estadounidense John L. Sullivan. Según este, la expansión estadounidense hacia el sur de sus fronteras no sólo era algo inevitable, sino que respondía a “un mandato divino”.

En efecto, está documentado que, luego de diversas actitudes hostiles frente a los independentistas hispanoamericanos, el gobierno de Monroe sólo reconoció la *sui generis* independencia de Brasil frente a la monarquía portuguesa, así como de los primeros estados nacionales (Chile, los Estados Unidos Mejicanos, Paraguay, Perú) o multinacionales (la República de Colombia, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la República Federal de Centroamérica) surgidos como fruto de heroicas contiendas, después de que en 1919 logró que España accediera a venderle el ambicionado territorio de la Florida Oriental y reconociera el *dominio de facto* estadounidense sobre la Florida Occidental. Asimismo, cuando ya era totalmente evidente que la monarquía española no estaba en condiciones de retener sus correspondientes “posesiones” en la que, siguiendo a Miranda y a otros próceres independentistas, el Libertador Simón Bolívar había llamado “la América Meridional” (Bolívar, 1947a: 159-175).

Los pormenores de esa definición bolivariana, al igual que de su ideario libertario y unitario-federalista, pueden encontrarse en su famosa “Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla” –más conocida como la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815; pero siempre debe recordarse que, un año después, las acciones político-militares emprendidas por el Libertador contaron con la solidaridad del gobierno republicano instaurado en el sur de Haití (cuyo territorio incluyó hasta 1844 a la actual República Dominicana), presidido hasta su muerte en 1818 por Alexander Sabès Pétion⁷. Lo único que él reclamó a cambio del recurrente apoyo ofrecido a los empeños bolivarianos fue que se concediera la libertad de los esclavos en los territorios hispanoamericanos que fueran liberados del dominio colonial español. Dicha demanda fue aceptada por Bolívar, en tanto coincidía con el proyecto de liberación nacional y social que había venido elaborando luego de analizar críticamente las causas de las derrotas de las llamada “primera y segunda república”. Es decir, las instaladas en la parte venezolana del territorio del Virreinato de Nueva Granada entre 1811-1812 y 1813-1814, respectivamente (Guerra Vilaboy, 2003).

También debe recordarse que –como ha demostrado Norberto Galasso– ese ideario bolivariano coincidía esencialmente con la utopía de la Patria Grande impulsada, entre otros, por José Gervasio Artigas,

7 El primer mandatario de Haití fue el general Jean Jacques Dessalines. Luego de su asesinato en 1806, la parte norte de Haití fue dominada por el emperador Henri Christophe, mientras que Alexandre Sabès Pétion estableció una república en la parte sur de dicha isla. Tras la muerte de Christophe en 1820, Jean Pierre Boyer, sucesor de Pétion, consolidó su poder en todo el territorio. No obstante, en 1844, la parte oriental declaró su independencia y comenzó a denominarse República de Santo Domingo, hoy República Dominicana.

José de San Martín y Bernardo O'Higgins, al igual que –antes de ser martirizados– por los primeros próceres de la independencia del Virreinato de Nueva España (México y Centroamérica) Miguel Hidalgo y José María Morelos. Todos ellos se habían alimentado de las ideas más avanzadas de la Revolución Francesa de 1789, así como de la frustrada revolución liberal iniciada en España en 1808 y temporalmente derrotada en 1813. Es decir, en el mismo momento en que el pueblo español –y las Juntas de Resistencias que lo representaban– también luchaba por su independencia nacional frente a los ejércitos napoleónicos que ocuparon la península ibérica e instauraron la espuria monarquía de José Bonaparte (1808-1813).

Por todo lo dicho puede afirmarse que, en las primeras tres décadas del siglo XIX, ya eran totalmente evidentes las enormes distancias que existían entre los proyectos independentistas, unitarios y libertarios de los próceres y mártires de las “primeras independencias” de la América Meridional, así como de Haití y las estrategias hacia el Nuevo Mundo desplegadas por los grupos dominantes en EE.UU. A esto es preciso agregar que el presidente de ese país John Quincy Adams (1825-1829) y su célebre secretario de Estado, Henry Clay, se opusieron tajantemente a la idea de Simón Bolívar y del primer presidente republicano de México, Guadalupe Victoria (1824-1829), de organizar una expedición armada con vistas a independizar del colonialismo español los archipiélagos de Cuba y Puerto Rico (Prieto Rozos, 2005: 16-18).

Así se puso en evidencia antes y durante el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), en cuyas deliberaciones finalmente no participó ningún funcionario oficial estadounidense como expresión de su rechazo a los persistentes (y, a la postre, frustrados) planes del Libertador de formar en la América antes española “la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria” (Bolívar, 1947a: 169). De ahí que el gobierno estadounidense también rechazara, a pesar de sus profundas debilidades intrínsecas, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua acordado (pero nunca ratificado) en el referido congreso por los delegados de la República de Colombia (posteriormente conocida como “la Gran Colombia”), la República Federal de Centroamérica, la República de los Estados Unidos Mejicanos y la República de Perú (quienes fueron los portadores de las instrucciones de Simón Bolívar) con el propósito de “sostener en común, defensiva y ofensivamente si fuere necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las Potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera” (Díaz Callejas, 1997: 115-119; Díaz Lacayo, 2006: 340-350).

Tal estrategia se planteaba como necesaria frente a los intentos por reconquistar sus antiguas colonias americanas que emprendiera España con el apoyo de las demás monarquías europeas entonces inte-

grantes de la Santa Alianza, al igual que frente a las apetencias expansionistas estadounidenses. En la década de 1820, esas apetencias eran tan evidentes que Bolívar, además de oponerse de manera tajante a la participación del gobierno estadounidense en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en su conocida Carta de Guayaquil del 5 de agosto de 1829 indicó: “los Estados Unidos [...] parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad” (Bolívar, 1947a: 736-737, 1103-1109).

Parafraseando a Manuel Medina Castro, todo lo dicho permite afirmar que “la libertad” de las naciones continentales hispano y lusoamericanas, al igual que de la isla que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de La Española y los franceses como Saint Domingue (ahora cohabitada por Haití y República Dominicana) –tanto respecto al colonialismo francés, como a los colonialismos ibéricos– no le debe nada a los grupos dominantes en EE.UU. Más aún, puede afirmarse que las primeras independencias de la casi totalidad de los actuales estados latinoamericanos se produjeron a pesar de la adversa actitud adoptada por sucesivos gobiernos de EE.UU. frente a esas “incompletas revoluciones burguesas” (Kossok, 1989: 129-154), así como frente a los ya mencionados afanes unitarios-federalistas, latinoamericanistas y libertarios de Miranda, Bolívar, San Martín, Artigas y O’Higgins.

Esa actitud de los grupos dominantes de EE.UU., contraria a la necesaria unidad y la total independencia política, económica y social de las naciones latinoamericanas y caribeñas (Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico), se prolongó a lo largo del siglo XIX. Movidos por los ya mencionados enunciados de la Doctrina Monroe y sus primeros corolarios (como el “corolario Polk”, proclamado en 1848, y el “corolario Hayes” de 1880), así como por el Destino Manifiesto, algunos de sus más conspicuos estadistas y personeros hicieron todo lo que estuvo a su alcance para apoderarse, al menos, de partes del territorio de algunos estados latinoamericanos, así como para anexionar a casi todas las Antillas Mayores: Jamaica, Cuba y Puerto Rico. Según el presidente John Quincy Adams, por su ubicación geográfica, esos dos archipiélagos eran “apéndices naturales” de EE.UU. (Guerra, 1975).

Previamente, Thomas Jefferson había confesado, “con toda sinceridad”, que siempre había considerado “a Cuba como la adición más interesante que pudiera hacerse a nuestro sistema de estados. El control que con la Florida nos daría esa isla sobre el Golfo de México y los países del istmo contiguo [Centroamérica], así como [sobre] las tierras cuyas aguas desembocan en el Golfo, asegurarán completamente nuestra seguridad continental” (Jefferson en Selser, 1992: 128). Aunque esa apetencia por anexionar a Cuba finalmente se vio frustrada, siempre habrá que recordar que esas ideas de Jefferson y sus seguidores respec-

to a “su seguridad continental” se expresaron, entre otros hechos, en la desidia o la descarada injerencia oficial estadounidense en los múltiples conflictos y sucesivas guerras civiles que provocaron la “balcanización” de la ahora llamada América Latina (Guerra Vilaboy, 2006), así como en la “cooperación antagónica” de EE.UU. con las potencias europeas con intereses en el hemisferio occidental. Esa mancuerna contribuyó a la progresiva desintegración de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Argentina, Paraguay, Uruguay y parte del territorio de Bolivia), de la República de Colombia (integrada hasta 1831 por los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), de la fugaz Confederación Peruano-Boliviana y la República Federal de Centroamérica, integrada hasta 1840 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

También deben recordarse las constantes conspiraciones oficiales estadounidenses contra la estabilidad política y la integridad territorial de México, así como la “guerra de rapiña” desatada contra ese país entre 1845-1848, como resultado de la cual y como se verá en el Anexo 4, EE.UU. se apoderó de cerca de la mitad del territorio mexicano. Ese despojo, consagrado en el Tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848, fue seguido por el Tratado Clayton-Bulwer, firmado en 1850 entre los gobiernos de Gran Bretaña y EE.UU. Este, al margen de los gobiernos centroamericanos, reconoció las espurias “posesiones británicas” en esa región y la “legalidad” de que esas dos potencias construyeran de mutuo acuerdo un canal interoceánico a través de Nicaragua.

Como uno de los frutos perversos de esa decisión, en medio de una de las tantas guerras civiles que vivió ese país, entre 1855 y 1860 el filibustero estadounidense William Walker emprendió diversas expediciones dirigidas a “recolonizar” y restablecer la esclavitud en ese y otros países centroamericanos. Aunque en sus orígenes esas expediciones fueron fruto de las agudas contradicciones que existían entre diferentes empresas estadounidenses que participaban en el tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico a través de Nicaragua (Hernández, 1994: 61-67), lo cierto fue que buena parte de las pretensiones de Walker contaron con el reconocimiento oficial estadounidense y, en particular, con el apoyo de las autoridades de algunos estados esclavistas del sur de EE.UU.

Si esas pretensiones no se materializaron fue, entre otras razones, por la tenaz y exitosa resistencia de los gobiernos conservadores y otras fuerzas político-militares centroamericanas, inicialmente encabezadas por el entonces presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora (Fonseca, 2001: 142). Esas fuerzas contaron con el apoyo oficial británico, cuyo gobierno firmó en 1859 un tratado con el gobierno de Honduras, por medio del cual reconoció, por primera vez, la soberanía de ese

país sobre las islas de la Bahía y sobre una parte de la costa misquita. En 1860, dicho tratado fue infructuosamente desafiado por William Walker, quien ya no tenía el apoyo del gobierno estadounidense encabezado por James Buchanan (1857-1861).

Sin embargo, como ha documentado Manuel Medina Castro (1974), ni esto ni la ya referida Guerra de Secesión de EE.UU. eximen de responsabilidad a sus sucesivos gobiernos –los presididos por Abraham Lincoln (1861-1865) y Andrew Johnson (1865-1869)– ante los acontecimientos que condujeron a la violenta ocupación francesa y la instauración de la monarquía de Maximiliano I (1862-1867) en territorio mexicano. En efecto, la primera de esas administraciones estadounidenses adoptó una actitud anuente ante el desembarco en 1861 de fuerzas militares inglesas, españolas y francesas en el territorio de ese país latinoamericano. También le negó ayuda a las fuerzas patrióticas de ese país, encabezadas por el líder del liberalismo popular y entonces presidente constitucional de México, Benito Juárez, quien inmediatamente después de asumir el cargo suspendió los pagos de la deuda contraída por sus antecesores con las potencias europeas antes mencionadas (Medina Castro, 1974: 410-420).

Aunque no es materia central de este volumen, lo dicho también permite calibrar la actitud adversa frente a la unidad y las primeras independencias de la casi totalidad de los actuales estados latinoamericanos y caribeños asumida por sucesivos gobiernos de Francia y el Reino Unido. En este último caso, así se demostró en la vacilante y a la postre negativa conducta asumida por varios primeros ministros británicos (el joven William Pitt, Henry Addington y Lord Castlereagh) frente a los diferentes planes independentistas que les presentó Francisco de Miranda, tanto antes como inmediatamente después de su frustrado desembarco en Vela de Coro (Bohórquez Morán, 2003). Esa animadversión igualmente subyace en la “ayuda” interesada y condicionada al estado de sus relaciones con España y la Santa Alianza que, a partir de 1816, algunas autoridades político-militares y ciertos financistas ingleses comenzaron a brindarle a Simón Bolívar y otros líderes independentistas hispanoamericanos (García Ponce, 2002).

A pesar de su necesidad inmediata, en el mediano y largo plazo esas “deudas por la independencia” favorecieron la creciente dependencia política, militar, ideológica y económica respecto al Reino Unido que padecieron la mayor parte de los estados de América Latina durante casi todo el siglo XIX y las dos primeras décadas del XX (Boersner, 1996). Para lograr esa privilegiada posición, la monarquía constitucional británica –aliada con la “oligarquía porteña” de Buenos Aires– emprendió diversas acciones contra los líderes independentistas más radicales (Mariano Moreno, Artigas, San Martín, O’Higgins) que ac-

tuaron en el otrora denominado Virreinato del Río de la Plata, al igual que en Perú y Chile (Galasso, 2004).

Paralelamente, y pese a sus posteriores contradicciones respecto a la trata de esclavos, a diversos asuntos comerciales y a la libre navegación por el río Amazonas, el gobierno permanente y sucesivos gobiernos temporales británicos apoyaron a la monarquía portuguesa instalada desde 1808 en Brasil, al igual que al reaccionario y expansionista Imperio instaurado en ese país entre 1822 y 1889 (Cervo y Bueno, 2002: 80-83). Sin embargo, tal apoyo no fue obstáculo para que las autoridades británicas se inmiscuyeran en la guerra que en el cuatrienio 1825-1828 enfrentó a dicho imperio y a la oligarquía bonaerense por el control de la Banda Oriental del Río de la Plata. Tal conflicto concluyó con la segregación de ese territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la fundación, en 1830, de la República Oriental del Uruguay. Tres años después –con la complicidad de EE.UU.– la Corona Británica se apoderó ilegalmente de las Islas Malvinas, pertenecientes a Argentina.

Inmediatamente antes y después de ese hecho, sucesivos estadistas y “diplomáticos” británicos conspiraron contra el Congreso Anfictiónico de Panamá y contra la ratificación del mencionado Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua acordado por este. También contribuyeron a la disolución de la Gran Colombia, al igual que a la posterior derrota de los líderes federalistas, más o menos populares (las llamadas “montoneras”), que defendieron los intereses de sus correspondientes regiones frente a la “oligarquía porteña” aliada con los agentes comerciales y financieros ingleses (Galasso, 2004). Estos últimos impulsaron asimétricos acuerdos de “libre comercio” o de “preferencias comerciales” con diversos gobiernos latinoamericanos, se apoderaron de importantes recursos naturales del continente y se sumaron a las diversas acciones punitivas de otras potencias europeas (como Francia), al igual que de EE.UU., dirigidas a lograr la libre navegación de los más importantes ríos sudamericanos y el cobro compulsivo de sus “acreencias”.

Adicionalmente, el Reino Unido se empeñó en la defensa y ampliación de sus “posesiones” coloniales en las mal llamadas *West Indies*; impulsó por todos los medios a su alcance sus espurios intereses geoestratégicos en Centroamérica; y conspiró contra los más consecuentes líderes liberales unionistas de esa región; en particular, contra el prócer de la unidad centroamericana Francisco Morazán (Hernández, 1994). Asimismo, sucesivos representantes y súbditos de la reina Victoria I cohonestaron la ya mencionada “guerra de rapiña” de EE.UU. contra México (1845-1848), aceptaron firmar con el gobierno estadounidense el ya referido Tratado Clayton-Bulwer de 1850, al igual que el Tratado Dallas-Claredon de 1856. Este último le permitió al Reino Unido fundar, en 1868 y a expensas del territorio de Guatemala, la llamada

“Honduras británica” (actualmente Belice). Simultáneamente, a costa de Venezuela, el Reino Unido emprendió la constante expansión territorial de la otrora llamada “Guyana británica” (actualmente, República Cooperativa de Guyana), cuyo territorio se había convertido formalmente en una colonia británica a partir de 1831.

Como consecuencia de todo lo dicho, la monarquía constitucional británica se implicó en las destructivas guerras fratricidas que sacudieron a la ahora llamada América Latina a lo largo del siglo XIX. Entre ellas, la que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia durante la Primera Guerra del Pacífico, que culminó en 1839 con la destrucción de la fugaz Confederación Peruano-Boliviana; las que culminaron con la destrucción de la Federación Centroamericana en 1840; las que en la década de 1850 enfrentaron a Argentina, Uruguay y Brasil por el control de la Cuenca del Río de la Plata, así como la que, entre 1865-1870, desató la llamada Triple Alianza (Brasil, Argentina, Uruguay) contra Paraguay.

A esa y otras guerras interlatinoamericanas se volverá en la próxima lección. Sin embargo, conviene dejar establecido que la mayor parte de ellas se realizaron con la participación o bajo la mirada cómplice de Francia, cuyos sucesivos gobiernos impulsaron diversas estrategias contrarrevolucionarias en América Latina y el Caribe. En líneas anteriores se mencionaron los frustrados intentos de Napoleón Bonaparte por recolonizar Haití, así como sus exitosas acciones para restablecer la dominación colonial y la esclavitud en Martinica y Guadalupe. A partir de 1815 y luego de institucionalizar su dominación colonial sobre la Guyana francesa (Cayena), esos empeños fueron seguidos por los gobiernos surgidos de “la segunda Restauración” y en particular por la monarquía de Luis XVIII. Esta se destacó por diversas iniciativas dirigidas a lograr que la Santa Alianza respaldara las intenciones de la decadente monarquía española de reconquistar sus “posesiones” en el Nuevo Mundo.

Aunque nunca se emprendieron acciones al respecto en razón de la oposición de la “dueña de los mares” (Inglaterra), la “Monarquía de Julio” (encabezada por Luis Felipe I) y sus sucesores perpetraron diversas agresiones contra varios estados latinoamericanos. Entre ellas, el bloqueo de los puertos de Veracruz y Buenos Aires, así como la intervención militar en Uruguay entre 1838 y 1840; la ilegal intervención armada anglo-francesa contra la Confederación Argentina entre 1845 y 1850; las agresiones contra el gobierno republicano ecuatoriano entre 1852 y 1853; y la ya referida ocupación militar de México entre 1862 y 1867, acción con la que Napoleón III –con el apoyo del Vaticano– pretendía iniciar la creación de “un imperio católico-latino” que extendiera sus límites e influencias desde México a Brasil, incluido el istmo centroamericano, las Antillas mayores, Ecuador, Perú y Bolivia. Como ya se

indicó, si tal empeño no prosperó fue por la heroica y exitosa resistencia de las fuerzas patrióticas mexicanas encabezadas por el Benemérito de América, Benito Juárez (Medina Castro, 1974: 402-420).

Sin embargo, hasta 1898, la III República francesa hizo todo lo que estuvo a su alcance por respaldar el dominio colonial español sobre Cuba y Puerto Rico. Hostilizó constantemente a Haití (país al que en 1823 le había impuesto onerosas condiciones financieras para reconocer su independencia) y mantuvo un silencio cómplice respecto a la ya referida política expansionista desplegada por los que Demetrio Boersner denominó “los imperialismos anglosajones” (EE.UU. e Inglaterra), incluidas aquellas acciones que condujeron a la “balcanización” de la América Meridional.

No obstante, sería un despropósito asumir que ese conflictivo y violento proceso sólo estuvo causado por la acción “externa” de las potencias europeas mencionadas y EE.UU. Por el contrario, cualquier análisis riguroso debe partir de la situación existente en Hispanoamérica en el momento en que se produjo la derrota de los colonialismos ibéricos. Mucho más porque –como bien se ha afirmado– todo ese proceso disgregador se inició mucho antes de la batalla de Ayacucho (diciembre de 1824) y tuvo una de sus más dramáticas expresiones durante el propio Congreso Anfictiónico de Panamá, al que sólo asistieron representantes de cuatro de los ocho estados independientes entonces existentes en la América Meridional.

A pesar del culto que en la actualidad se le rinde a ese evento, la mayoría de esos representantes rechazaron la propuesta de Simón Bolívar (expresada por la delegación peruana) de que –en contraste con la ya referida actitud adoptada por EE.UU. y las principales potencias europeas– se reconociera la independencia de Haití y que los límites fronterizos de los estados confederados (o que se confederaran posteriormente) fueran los mismos que existían en 1810. Igualmente, se opusieron a la creación de una institucionalidad político-jurídica supranacional (el a veces llamado “Consejo anfictiónico”) que, en opinión del Libertador, debía gobernar la Federación de Repúblicas de la América antes española. En su lugar, los representantes de las repúblicas de Colombia, Centroamérica, México y Perú aprobaron un precario e inoperante acuerdo intergubernamental (el ya referido Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua) que sólo fue ratificado por el gobierno de la República de Colombia (Díaz Lacayo, 2006).

Como se ha insistido en varios textos históricos, en ese negativo desenlace tuvieron una influencia significativa las guerras civiles que comenzaron a desarrollarse en los Estados Unidos de México y en la Federación Centroamericana. También el movimiento separatista de la República de Colombia, iniciado en Venezuela bajo la dirección del

destacado caudillo independentista José Antonio Páez, y la derrota política, en 1827, de los más radicales, unitarios y democráticos líderes independentistas peruanos, así como un año después del entonces presidente de Bolivia, el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Lo mismo ocurrió con las potentes conspiraciones contra Simón Bolívar que comenzaron a desarrollarse en la República de Colombia bajo la sibilina conducción de Francisco de Paula Santander.

Sin embargo, como bien se ha indicado, todos esos acontecimientos –además de una proverbial falta de voluntad política de los grupos dominantes en esos países– expresaban fenómenos socioeconómicos y político-ideológicos mucho más profundos. Entre ellos, la inexistencia de una burguesía latinoamericana interesada en impulsar la unión del continente y la incapacidad de las “burguesías liberales que dirigieron o apoyaron los movimientos de independencia” para organizar “sistemas de poder capaces de sustituir a la antigua metrópoli”, así como el “localismo político” derivado de la “ausencia de vínculos económicos más significativos” (Furtado, 1972: 21).

A esos factores habría que agregar el ya mencionado “carácter incompleto” de la revolución independentista-burguesa de América Latina y el consiguiente predominio de aquellos sectores de la “burguesía comercial” (por lo general ubicada en las ciudades-puertos y conectada con las principales potencias europeas), de la aristocracia criolla y de los grupos rurales tradicionales sólo interesados en una “emancipación política nacional” carente de las “emancipaciones sociales” y de “las transformaciones político-democráticas” que demandaban todos los recién surgidos estados nacionales o multinacionales latinoamericanos (Galasso, 2004).

En consecuencia, y con la única excepción de la República del Paraguay, el escenario político poscolonial estuvo dominado (al menos, hasta la primera mitad del siglo XIX) por regímenes conservadores que –luego de anular la mayor parte de las conquistas populares de la independencia– sustentaron su poder en una estrecha alianza político-militar con los sectores más reaccionarios de las clases dominantes locales y la iglesia católica, en un brutal régimen de explotación y opresión de amplios sectores populares (en primer lugar, las masas indígenas y campesinas, los “negros y pardos libres” y los inmensos contingentes de esclavos de origen africano o asiático que subsistieron en diversos países hasta bien entrado el siglo XIX), así como en su creciente subordinación política, militar, económica e ideológico-cultural hacia las principales potencias capitalistas, especialmente hacia Gran Bretaña.

Lo anterior se profundizó a causa de las sucesivas derrotas de los proyectos proteccionistas y de *desarrollo hacia adentro* emprendidos en algunos países latinoamericanos (el caso más destacado fue el de Para-

guay), de la contigua consolidación del carácter primario-exportador de sus economías y de las constantes demandas de manufacturas y bienes de capital producidos en el exterior, así como de la inestabilidad de sus correspondientes sistemas monetarios y sus agudos desequilibrios fiscales. Por consiguiente, los gobiernos latinoamericanos constantemente se vieron obligados a contratar onerosos créditos externos dirigidos a cerrar “la brecha” fiscal y los abultados déficits de sus correspondientes balanzas comerciales y de pagos. Se fueron fundiendo así –progresiva, pero inexorablemente– las bases del capitalismo dependiente, *subdesarrollante* y periférico que todavía tipifica a la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe.

Por tanto, a los sectores de las clases dominantes latinoamericanas beneficiarios de tales condiciones socioeconómicas no les interesaba defender los objetivos unitarios o federalistas que habían animado a los más consecuentes próceres de su primera independencia. De ahí el fracaso de todos los intentos de concertación política y cooperación económica que se emprendieron luego de la fundación del ramillete de estados nacionales surgidos de la disgregación de la República de Colombia y la República Federal de Centroamérica. Entre ellos, el Primer Congreso de Lima (1847-1848), el Tratado Continental de 1856 y el Segundo Congreso de Lima efectuado entre el 15 de noviembre de 1864 y el 13 de marzo de 1865 (Guerra Vilaboy y Maldonado Gallardo, 2000: 60-72).

En este último –ante “la oleada recolonizadora que se volcó sobre la América Latina” (intervención francesa en México; restauración colonial española en Santo Domingo; agresión española a los países del Pacífico; intento del francés Aurelie Antoine por establecer una monarquía europea en la Araucanía chilena)–, se aprobó un Tratado de Unión y Alianza Defensiva. Asimismo fueron suscriptos otros acuerdos intergubernamentales vinculados a la conservación de la paz, al comercio, la navegación y el intercambio postal entre los estados contratantes. Sin embargo, al igual que en todos los eventos que lo antecedieron, sus acuerdos nunca fueron ratificados, ni siquiera por los gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Perú, cuyos representantes plenipotenciarios habían participado en sus deliberaciones (Díaz Callejas, 1997: 328-349).

Esas incoherencias político-diplomáticas tampoco pudieron superarse durante el “período de las reformas liberales” que se produjeron en casi todos los países de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX (Guerra Vilaboy, 2006). En esa etapa, y ante su creciente temor frente al ascenso sociopolítico de diversos sectores populares, se reiteró “la incapacidad de la burguesía latinoamericana [para] cumplir en su totalidad su misión histórica” (Kossok, 1989: 159). Mucho más porque,

en la mayor parte de esos países, dichas “reformas” fueron emprendidas por gobiernos oligárquicos, dictatoriales o autoritarios implicados –al igual o más que los regímenes conservadores precedentes– en un *desarrollo hacia fuera* y en la *indiscriminada apertura* de la economía de sus correspondientes países a la penetración de los monopolios ingleses, franceses o estadounidenses.

Como es obvio, estos últimos nunca estuvieron interesados en el desarrollo de potentes “capitalismos nacionales” que pudieran poner en peligro sus afanes expansionistas. Mucho menos en la unidad de América Latina y de los países independientes del Caribe. Por el contrario, como se documentará en la próxima lección, orientaron sus diversas estratagemas al fortalecimiento de su sistema de dominación político, diplomático, militar, económico e ideológico-cultural sobre los estados y naciones situados –a partir del ya referido Tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848– al sur del Río Bravo y la península de Florida.

Lección Tres

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DESDE EL FIN DE LA GUERRA DE SECESIÓN HASTA LA GUERRA HISPANO-CUBANA-FILIPINA-ESTADOUNIDENSE

ESTA LECCIÓN ESTARÁ DEDICADA al estudio de las relaciones interamericanas desde el fin de la Guerra de Secesión de EE.UU. hasta la mal llamada “Guerra Hispano-norteamericana” de 1898. En ese contexto, y entre otros temas, se abordarán los orígenes del panamericanismo y la agenda impulsada por el gobierno estadounidense en la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, efectuada en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, así como en la Conferencia Monetaria Internacional Americana, también efectuada en la capital estadounidense a partir del 23 de marzo de 1891.

El análisis crítico de ambas conferencias, al igual que de las diversas respuestas de los gobiernos entonces formalmente independientes de América Latina y el Caribe (Haití y República Dominicana), resulta necesario porque, salvando las siempre importantes diferencias en el tiempo y el espacio, las agendas de esos eventos tienen más de un punto en común con los contenidos de la estrategia de seguridad, libre comercio y democracia-representativa (y, por tanto, limitada) que, no obstante algunas diferencias, han venido impulsando desde fines de la década del noventa hasta la actualidad sucesivas administraciones estadounidenses, en consuno con los gobiernos liberales o conservadores canadienses, así como con buena parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños (Suárez Salazar, 2007a).

Sin embargo, antes de abordar esos temas, es necesario aclarar por qué en las primeras líneas de esta lección se indica “la mal llamada Guerra Hispano-norteamericana” o “Guerra Hispano-estadounidense”, que es como se refiere a esa “breve y barata contienda” la historia más o menos oficial de EE.UU. (Nevins et al., 1996: 359-365). Para calibrar lo impropia que resulta tal denominación, es muy importante recordar que sus desarrollos y resultados no se pueden comprender sin hacer referencia de manera destacada a las luchas por la liberación frente al dominio colonial español que, desde los años precedentes, venían librando con mayor o menor éxito, según el caso, las fuerzas patrióticas y político-militares cubanas, filipinas y portorriqueñas.

De modo que, sin el previo desgaste del ejército y la economía española, así como sin el decisivo concurso de las fuerzas militares cubanas y filipinas, EE.UU. no habría podido ganar esa guerra en menos de cuatro meses, con tan reducido costo económico y tan pocas bajas en sus fuerzas militares. Así, según el historiador estadounidense Howard Zinn, de los 274 mil oficiales y soldados que prestaban servicios en el ejército estadounidense durante esa guerra y en el período de desmovilización, 5.462 murieron en varios quirófanos y campamentos en territorio norteamericano; pero tan sólo 379 fueron bajas en el campo de batalla. El resto se atribuyó a enfermedades y otras causas; entre ellas, el envenenamiento producido por el estado de descomposición en que se encontraban algunos de los alimentos en conserva que les ofreció a sus tropas la corrupta intendencia del ejército estadounidense (Zinn, 2004: 221).

En el caso filipino, la última etapa de las luchas por su independencia frente al colonialismo español había comenzado desde 1892, mientras que en los casos cubano y portorriqueño estas se habían iniciado desde 1868. En efecto, entre septiembre y octubre de ese año (es decir, poco más de tres años después de terminada la Guerra de Secesión de EE.UU.), los más radicales patriotas de esos archipiélagos iniciaron de manera mancomunada sus correspondientes guerras de liberación nacional. Ambas también tenían un alto contenido de liberación social, en tanto en esos territorios (al igual que en Brasil) todavía estaba pendiente la eliminación de la esclavitud.

Al estallar esos conflictos, y siguiendo los comportamientos de todos sus predecesores, el gobierno de EE.UU. –entonces presidido por el general republicano y héroe de la Guerra de Secesión, Ulysses Grant (1869-1877)– se negó a reconocer la beligerancia de las fuerzas político-militares cubanas y portorriqueñas, así como, en particular, a la República de Cuba en Armas institucionalizada, en medio de las primeras batallas, en 1869. Más aún, luego de un fallido e unilateral intento de comprarle a España “la independencia” de Cuba y de con-

vertir a Puerto Rico en un “protectorado” de EE.UU., Grant adoptó una actitud “neutral” favorable al colonialismo español semejante a las que habían asumido los presidentes estadounidenses Jefferson, Madison y Monroe frente a las primeras independencias de América Latina. Sin dudas, en tal actitud pesaba el mencionado afán de anexar esos archipiélagos a EE.UU.

Sin embargo, a causa de la brutal reacción de los diversos regímenes políticos del “Sexenio Revolucionario” (1868-1874) y del régimen oligárquico de la Restauración española (1875-1923), así como de los errores cometidos por las propias fuerzas independentistas portorriqueñas y cubanas, aquel primer esfuerzo liberador fue derrotado. En el caso de Puerto Rico muy rápidamente y, en el caso de Cuba, en 1878 (Torres Cuevas y Loyola Vega, 2001: 231-292). No obstante, los patriotas cubanos y portorriqueños no cesaron en sus luchas contra el colonialismo español. A tal grado que, ante la dificultad para continuarlas en su propio territorio, estos últimos, encabezados por Ramón Emeterio Batances (1830-1898), tomaron la decisión de volcar todas sus energías en las multiformes contiendas por la independencia de Cuba. Estas tuvieron una nueva eclosión el 24 de febrero de 1895, esta vez bajo el lúcido liderazgo político-militar de José Martí, el mayor general Antonio Maceo y el general dominicano Máximo Gómez. Todos ellos se habían destacado en los años de la llamada “tregua fecunda” por su radicalidad política, su antillanismo, su latinoamericanismo y su antiimperialismo (De Armas, 1993).

En consecuencia, los gobiernos estadounidenses encabezados por el demócrata Grover Cleveland (1893-1897) y el republicano William McKinley (1897-1901) nunca reconocieron la beligerancia de las fuerzas y las autoridades político-militares cubanas, e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir la independencia de la mayor de las Antillas y, con ella, la de Puerto Rico. No obstante, y a pesar de la caída en combate de José Martí (19 de mayo de 1895) y diecinueve meses más tarde de Antonio Maceo (7 de diciembre de 1896), luego de cruentos combates, las fuerzas libertadoras cubanas –bajo la dirección de Máximo Gómez– prácticamente ya tenían derrotado al colonialismo español.

Tanto era así que, en un último esfuerzo por preservar su dominación sobre esos archipiélagos, en 1897, la monarquía ibérica –entonces gobernada por los protegidos de la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902)– se había visto obligada a concederle la autonomía política a Cuba y a Puerto Rico. Y que, a comienzos de 1898, el propio Congreso norteamericano, en una famosa resolución conjunta, se había visto compelido a declarar que Cuba era “por derecho” y “debía ser libre e independiente”. Fue precisamente en ese contexto que, a mediados de abril de 1898, McKinley –sin hacer la más mínima referencia a la independencia de Cuba– decidió declararle la guerra a

España, tomando como pretexto la explosión del buque estadounidense Maine “casualmente enviado a La Habana para proteger el consulado estadounidense” (Zinn, 2004: 215-222).

Acto seguido –y luego de diversos acuerdos con el líder independentista filipino Emilio Aguinaldo (1869-1964) y de algunas comunicaciones con el mayor general Calixto García Iñíguez (1836-1898), jefe del Ejército Libertador cubano en la provincia donde se produjo el desembarco de las tropas estadounidenses–, la Marina de Guerra de ese país comenzó sus combates contra las fuerzas navales y terrestres españolas acantonadas en Filipinas y Cuba. En este último país –con la participación imprescindible de su Ejército Libertador–, logró la capitulación de la monarquía española a comienzos de agosto de ese último año, lo que a su vez facilitó la ocupación militar de Puerto Rico y Filipinas.

Por tanto, como ya se adelantó, resulta una falacia cuidadosamente cultivada por la mayor parte de la historiografía estadounidense excluir a las fuerzas político-militares cubanas y filipinas de la nomenclatura de esa “espléndida” contienda tan trascendente para la consolidación de EE.UU. como “una auténtica potencia mundial”, en tanto después de ella los grupos dominantes en ese país lograron realizar sus añejas aspiraciones de apoderarse de las 7.100 islas filipinas y de Guam (todas ubicadas en el Océano Pacífico), al igual que de los archipiélagos de Puerto Rico y Cuba (Nevins et al., 1996: 363-364). En los tres primeros casos, como “botín de guerra” o “compensación” por los gastos incurridos en esa contienda y, en el último, con el pretexto de crear los mecanismos institucionales que supuestamente permitirían la soberanía y la independencia de la mayor de las Antillas.

Sin dudas, uno de los factores influyentes en ese desenlace fue el escaso apoyo que –en la década de 1890 y a diferencia de la contienda anticolonial de 1868-1878– le ofrecieron la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos de la época a la causa libertaria cubana y portorriqueña. En esa innoble actitud influyeron múltiples factores que no se pueden analizar en el espacio destinado a esta lección. Pero, entre ellos, siempre habrá que incluir la ostensible falta de unidad de los gobiernos latinoamericanos, las profundas secuelas que en ese orden habían dejado las guerras fratricidas de las décadas precedentes, el negativo impacto que tuvieron en Colombia, Ecuador y Venezuela los recurrentes conflictos civiles entre liberales y conservadores, así como la creciente dependencia estructural y funcional de América Latina y el Caribe respecto a las principales potencias imperialistas, en particular Gran Bretaña y EE.UU. (Boersner, 1996; Suárez Salazar, 2003b; Guerra Vilaboy, 2006).

En la lección anterior ya se mencionaron algunos de los factores socioeconómicos y político-militares que, luego de las primeras in-

dependencias de Haití, México, Centroamérica y Sudamérica, fueron sentando las bases de esas dependencias. Sin embargo, ahora es preciso resaltar la creciente subordinación ideológico-cultural hacia las principales potencias europeas y hacia EE.UU. que –como denunció José Martí en su célebre ensayo *Nuestra América*– se fue produciendo en las clases dominantes y otros sectores de la población (en particular, las clases medias –incluidos los medios académicos e intelectuales– y ciertos sectores populares) de la mayor parte de los estados nacionales o multinacionales latinoamericanos, al igual que en Haití y la actualmente llamada República Dominicana.

Una de las expresiones más aberrantes de esa forma de dependencia fue la persistente discriminación racial subsistente en esos últimos países y el falso conflicto “entre la civilización y la barbarie” con el que los gobiernos oligárquicos, racistas y probritánicos de Argentina, encabezados por Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, aliados con los gobiernos liberales y probritánicos de Chile, justificaron el exterminio de los descendientes de los pueblos araucanos y la destrucción de la Confederación Mapuche que –pese a múltiples agresiones de los colonizadores españoles y de sus sustitutos criollos– hasta bien entrada la década de 1870 había logrado sobrevivir en el extremo sur de América Latina, como el único Estado gobernado por sus pueblos originarios (Ribeiro, 1992; Schulman, 2005: 33-44).

En el orden interno, esa actitud genocida, racista, discriminatoria y excluyente hacia los pueblos originarios y sus descendientes, la población de origen africana y asiática, los mestizos y las mujeres, unida a la explotación socioclasista de la entonces naciente clase obrera y los campesinos, acompañó a la mayor parte de los gobiernos liberales que se instauraron en América Latina entre la segunda mitad del siglo XIX y la tercera década del XX. Como se adelantó en la lección anterior, también acompañó a la “conquista del Oeste” (concluida en 1890), al igual que al cruento y vandálico proceso de consolidación, generalización y monopolización de las relaciones capitalistas de producción en EE.UU. (Zinn, 2004: 181-212) y a la construcción de Canadá como un Estado-nación relativamente independiente de la Corona Británica que se desarrolló entre 1867 y 1929 (Le Frank, 2005).

En consecuencia, en mayor o menor medida, según el caso, tales políticas internas condicionaron la proyección externa –o, si prefieren, las políticas hemisféricas– de los sucesivos gobiernos de todos los estados mencionados. En la etapa 1865-1898, una de las manifestaciones de esa proyección fue la Guerra de la Triple Alianza emprendida –con el apoyo británico y el silencio cómplice de EE.UU., Francia, Holanda y la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanos– por Argentina, Brasil

y Uruguay contra Paraguay. Como ha indicado Eduardo Galeano, esa “triple infamia” provocó la muerte de más de 1.100.000 paraguayos y paraguayas, buena parte de ellos descendientes de los pueblos tupí guaraníes (Galeano, 1990: 235-238 y 247-249; Ribeiro, 1992). Estos habían sido encabezados por su aguerrido, presuntamente “enloquecido” y martirizado presidente Francisco Solano López, quien en 1862 había sustituido en ese cargo a su padre, Carlos Antonio López (1844-1862).

Por consiguiente, siempre según Galeano, esa contienda culminó con el derrocamiento del único gobierno sudamericano en el que –desde el mandato de Gaspar Jorge Rodríguez de Francia (1814-1840)– “no mandaban los terratenientes, ni los mercaderes”. Así también se produjo el desmembramiento del único Estado de América Latina en el que, luego de su independencia frente a los colonialismos ibéricos, se había venido desplegando un próspero proyecto de desarrollo político y económico-social *hacia adentro*, alejado de las exigencias de la cada vez más debilitada oligarquía paraguaya y las principales potencias capitalistas, así como reacio a las demandas de estas para que autorizara la libre navegación en sus ríos de las embarcaciones británicas, francesas y estadounidenses, al igual que la libre circulación de sus manufacturas y sus cada vez más copiosos capitales. En 1855, esa actitud del gobierno paraguayo había sido desafiada por EE.UU., cuya administración estuvo a punto de emprender una masiva intervención militar contra ese país sudamericano (Medina Castro, 1974: 359-384).

Todo lo dicho –y la notable influencia de los intereses “librecambistas” británicos sobre los gobiernos “unionistas” de Argentina, las huestes “coloradas” de Uruguay y los grupos “liberales” del Imperio de Brasil– contribuye a explicar la sanguinaria violencia que hasta 1870 se desplegó contra el pueblo paraguayo. Luego, las fuerzas de la Triple Alianza ocuparon Paraguay hasta 1876. En tanto, y mediante acuerdos por separado, sucesivos presidentes paraguayos aceptaron pagar a los tres países victoriosos costosísimas indemnizaciones y admitieron el desmembramiento del territorio original de ese Estado-nación. Esto se consumó cuando en 1872 su entonces presidente, Salvador Jovellanos (1871-1874), firmó la paz definitiva con el emperador brasileño, Pedro II; y, un año después, con el gobierno uruguayo presidido por José Eugenio Ellauri (1873-1875). Sin embargo, no fue hasta el 3 de febrero de 1876 que Paraguay, bajo la presidencia de Juan Bautista Gill (1874-1877), logró alcanzar un acuerdo con el entonces mandatario argentino, Nicolás Avellaneda (1874-1889). Este fue “el verdadero punto y final” de la que en Brasil se denomina “la Guerra con el Paraguay” (Cervo y Bueno, 2002: 119-128).

Independientemente de las diferencias en su origen, un desenlace parecido tuvo la llamada “Segunda Guerra del Pacífico” librada

entre Chile, Perú y Bolivia durante el lustro 1879-1883. Según se ha documentado, el móvil de esta guerra fue la ambición de las clases dominantes chilenas, estrechamente asociadas con los capitales e inversionistas británicos (entre ellos, el posteriormente denominado Rey del Salitre, John Thomas North), por controlar los importantes yacimientos de guano (heces fecales de las aves que pueblan el Pacífico Sur) y salitre (el otro fertilizante natural que se empleaba en la época) que existían en Perú y Bolivia (Medina Castro, 1974: 467-498; Boersner, 1996). Ante la intención del gobierno de Bolivia de incrementar su participación en la explotación de ese último recurso natural, así como de embargar a las empresas “chilenas” que funcionaban en el desierto de Atacama, en febrero de 1879, el gobierno liberal chileno, presidido por Aníbal Pinto (1876-1881), ordenó la entrada de sus tropas en el puerto boliviano de Antofagasta.

A causa de esa acción, dos meses después, Perú –aliado con Bolivia mediante el denominado “Pacto Secreto de 1873”– le declaró la guerra a Chile, país que –como consecuencia de su victoria militar en este conflicto fratricida– conquistó el amplio territorio peruano y boliviano que actualmente pertenece a las regiones chilenas de Antofagasta y Tarapacá. Además, Perú le cedió a Chile la administración de las ciudades de Tacna y Arica, a condición de que se celebrara un plebiscito diez años después para establecer la definitiva soberanía sobre las mismas. Aunque sucesivos gobiernos de ambos países no llegaron a un acuerdo en cuanto a las condiciones de ese plebiscito, sus negociaciones culminaron en febrero de 1929 con el Tratado de Lima, por medio del cual Tacna retornó a la soberanía de Perú, mientras que Arica quedó bajo la jurisdicción chilena. Veinticinco años antes, sobre la base del llamado “Pacto de Tregua del 4 de abril de 1884”, habían quedado bajo dominio chileno la provincia de Atacama y el puerto de Antofagasta, lo que determinó que Bolivia perdiera sus únicas salidas al mar. Esa situación se institucionalizó mediante el Tratado de Paz finalmente suscripto entre los gobiernos de Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904. No obstante, varios gobiernos bolivianos han denunciado el incumplimiento de los términos de ese tratado por parte de sus homólogos chilenos, cuestión que aún continúa siendo una fuente de irritación en las relaciones entre ambos estados y entre diversos sectores sociopolíticos de sus correspondientes poblaciones.

Por consiguiente, la prolongación de ese conflicto convirtió en letra muerta los acuerdos a los que había arribado el Congreso de Juristas argentinos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos y peruanos realizado en Lima, bajo los auspicios del gobierno de Perú, entre 1877 y 1878. Con la presencia de un delegado del Gobierno de Cuba en Armas, estos elaboraron un tratado unionista que fue totalmente desconocido

por todos los gobiernos latinoamericanos. Aun así, en 1883, algunos de estos (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Santo Domingo y Venezuela) enviaron sus representantes a Caracas para realizar “una asamblea oficiosa” con motivo del primer centenario del nacimiento de Simón Bolívar; pero su llamado a la unidad de los estados americanos no tuvo ninguna trascendencia práctica (Guerra Vilaboy y Maldonado Gallardo, 2000: 72).

Mucho menos, porque en los años previos a esa cita la mayor parte de dichos gobiernos había aceptado la invitación que, por primera vez en la historia de sus relaciones interamericanas, les había realizado el fugaz presidente republicano estadounidense James Garfield (marzo-septiembre de 1881) a celebrar, en noviembre de 1882, una conferencia de estados americanos con el supuesto fin de “considerar y discutir los métodos de prevenir la guerra entre las naciones de América” (Díaz Lacayo, 2006: 204). Como bien ha demostrado Gordon Connell-Smith (1977), detrás de esa convocatoria ya estaba presente el afán de importantes monopolios norteamericanos de competir con sus congéneres ingleses, que entonces tenían una significativa influencia en la mayor parte de América Latina y especialmente en América del Sur.

Uno de los principales voceros y representantes de esos monopolios estadounidenses era el entonces líder del Partido Republicano, el corrupto y *monroista* secretario de Estado James Blaine. Entre otras acciones expansionistas, este había intentado despojar a Ecuador de las Islas Galápagos. También, en medio de la Segunda Guerra del Pacífico y en contubernio con algunos sectores de las clases dominantes peruanas, se había implicado en un potente plan político-militar dirigido a convertir a ese país en un protectorado estadounidense. Asimismo, había sido uno de los principales propugnadores de la denuncia del Tratado Clayton-Bulwer de 1850, por medio del cual –como ya se vio– Inglaterra y EE.UU., sin el consentimiento de los gobiernos centroamericanos, se habían comprometido a construir de común acuerdo una “vía interoceánica” a través del territorio de Nicaragua.

Ese cada vez más fortalecido interés estratégico de EE.UU. se había actualizado durante el gobierno de Ulysses Grant, así como a través del llamado “corolario Hayes a la Doctrina Monroe”. En efecto, en 1880, como una nueva inferencia de dicha doctrina, en oposición a las primeras gestiones de una compañía francesa para construir el Canal de Panamá y desconociendo la soberanía del gobierno de Colombia sobre ese territorio, el presidente norteamericano Rutherford Hayes (1877-1881) había proclamado que su país no podía consentir el dominio del susodicho canal por “ningún Estado europeo o ninguna combinación de potencias europeas”, ya que esa vía interoceánica era “parte de la línea costera de EE.UU.” (Díaz Callejas, 1997).

No obstante, a causa, entre otras razones, del asesinato de Garfield, de la casi inmediata sustitución de su secretario de Estado James Blaine y del juicio político a que este fue sometido por el Congreso por su implicación en un escándalo financiero vinculado a la adquisición con fines personales de los yacimientos de salitre existentes en Perú, la exigencia de modificar el Tratado Clayton-Bulwer fue pospuesta hasta fines del siglo XIX. A la vez, el presidente republicano Chester Arthur (1881-1885) archivó la convocatoria a la mencionada Conferencia Internacional de Estados Americanos. Lo mismo hizo, durante la mayor parte de su gobierno, el primer demócrata que ocupó la presidencia de EE.UU. luego de la Guerra de Secesión, Grover Cleveland (1885-1889). Tal posposición demostró las contradicciones que existían entre diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses y sus principales representantes políticos en cuanto a algunos de los métodos a emplear en sus relaciones con América Latina y con los países entonces independientes del Caribe.

Sin embargo, la creciente presión de las fuerzas económicas “librecambistas”, sociopolíticas y político-militares estadounidenses que querían revivir el proyecto de Alexander Hamilton (mencionado en la lección anterior) de crear bajo el control de su país “un Gran Sistema Americano [...] capaz de dictar los términos de las relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo” determinó que, en mayo de 1888, una ley del Congreso conminara a Grover Cleveland a emprender los arreglos necesarios para la celebración de dicha conferencia. Esta se efectuó entre fines de 1889 y comienzos de 1890; es decir, cuando el mencionado mandatario demócrata había sido sustituido por el republicano Benjamin Harrison (1889-1893) y, en razón de las inmoralidades típicas del sistema político de ese país, James Blaine –con la anuencia del Congreso– había sido nuevamente nombrado como secretario de Estado y, por tanto, como presidente de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos.

Por ello, no fue extraño que el gobierno estadounidense procurara lograr a toda costa que los representantes oficiales latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) que acudieron a ese cónclave refrendaran un sistema de arbitraje obligatorio dirigido, según el siempre sibilino lenguaje de la diplomacia estadounidense, “a conservar la paz y fomentar la prosperidad de los diversos estados americanos”. Tampoco sorprendió que los representantes estadounidenses intentaran institucionalizar una Unión Aduanera Americana (a la que curiosamente también había sido invitada la monarquía entonces independiente de Hawái) “que fomente en cuanto sea posible y provechoso el comercio recíproco entre las naciones americanas” (Díaz Lacayo, 2006: 297-298).

A pesar de sus múltiples presiones “diplomáticas”, de otros acuerdos de menor trascendencia y de las divisiones que se presentaron entre los representantes de diferentes gobiernos latinoamericanos, la conferencia terminó rechazando ambas propuestas. Sólo aprobó la formación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, cuya Secretaría Ejecutiva –la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas– se radicó en la capital estadounidense bajo la supervisión de su secretario de Estado, pero con el único objetivo de difundir informaciones económicas entre los gobiernos de los países miembros. Tal acuerdo tenía una vigencia de diez años y quedaba abierto a que el gobierno de Santo Domingo expresara su adhesión, ya que –en razón de los conflictos bilaterales que mantenía con EE.UU.– no había asistido a la mencionada conferencia.

A su vez, como un resultado espurio de esta, en el segundo trimestre de 1891, se efectuó en Washington la Conferencia Monetaria Internacional Americana. Allí el gobierno de EE.UU. intentó imponerles a sus homólogos latinoamericanos la adopción “de una moneda común de plata que [fuera] de curso forzoso en las transacciones comerciales recíprocas de los ciudadanos de todos los estados de América” (Díaz Lacayo, 2006: 298). La aceptación de esa propuesta hubiera implicado la equivalencia del oro y la plata; es decir, del llamado “bimetalismo” que entonces estaban impulsando algunos sectores de las clases dominantes y otros estamentos –como los granjeros– de la sociedad estadounidense. Con esa decisión perseguían, entre otras cosas, revalorizar las enormes reservas de plata que existían en Estados Unidos, incrementar la liquidez interna y enfrentar el “patrón oro” que sustentaba Gran Bretaña. Comoquiera que –según demostró José Martí durante su participación en esa conferencia en representación de Uruguay– lo anterior afectaba los intereses de las naciones del sur del continente, nuevamente fueron derrotadas las pretensiones del gobierno estadounidense (Martí, 1974c: 322-342). Objetivamente, en ello influyó la enorme dependencia del comercio, de los créditos y de las inversiones británicas que todavía tenían la mayor parte de los gobiernos de la región; en especial, los sudamericanos.

Por ende, y a pesar de los magros resultados de las dos conferencias “panamericanas” ya mencionadas, sus acuerdos objetivamente debilitaron aún más las intermitentes e infructuosas gestiones que habían realizado en las décadas precedentes diversos gobiernos latinoamericanos “para unirse frente a las amenazas externas a su independencia”. Así se había demostrado, otra vez, en el fracaso del Congreso Internacional Americano, convocado en agosto de 1896 por el primer gobierno del presidente liberal, popular y nacionalista de Ecuador Eloy Alfaro (1895-1901) y el dictador liberal mexicano Porfirio Díaz (1884-1911), con el propósito, entre otros, de “elaborar un derecho internacional

americano alternativo a la Doctrina Monroe” e impulsar las relaciones económico-comerciales entre los países latinoamericanos. La frustración de esa conferencia evidenció, por un lado, “la enorme brecha que separaba el ideal y la realidad de la unidad latinoamericana” y, por otro, “los mitos del panamericanismo” (Connell-Smith, 1977).

Tales mitos (entre ellos, las difundidas falacias de que EE.UU. contribuyó de manera importante a las primeras independencias de América Latina y de que Simón Bolívar había sido “el padre del panamericanismo”) ya se habían puesto de manifiesto entre 1804 y 1865; pero en la etapa a la que está dedicada esta lección encontraron nuevas evidencias en la farisaica actitud asumida por los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson frente a las ya referidas luchas del pueblo mexicano contra la ocupación francesa (1862-1867). También en la actitud complaciente de este último mandatario, al igual que de Ulysses Grant frente al genocidio del pueblo paraguayo durante “la guerra de la triple infamia” (1865-1870) y en sus frustrados intentos de “comprar” la independencia de Cuba y Puerto Rico, así como de anexarse el territorio de la actualmente denominada República Dominicana.

Esos propósitos expansionistas encontraron continuidad en el referido “corolario Hayes” a la Doctrina Monroe; en los intentos del presidente Garfield y el secretario de Estado James Blaine por apoderarse de nuevos territorios latinoamericanos (las islas Galápagos y Perú); en la oposición de la Casa Blanca a los intentos del general y presidente liberal guatemalteco Justo Rufino Barrios (1873-1885) por restablecer la unidad centroamericana; en los constantes desembarcos de tropas norteamericanas en el territorio de Panamá (entonces pertenecientes a la República de Colombia); en las continuas presiones oficiales estadounidenses sobre diversos gobiernos de Haití y México; al igual que en los preparativos y desarrollo de las ya referidas Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos y Conferencia Monetaria Internacional Americana (Suárez Salazar, 2006e).

Luego de estas, tales “mitos del panamericanismo”, así como su carácter utilitario y absolutamente complementario respecto a otras dimensiones de la estrategia norteamericana contra sus vecinos del Sur, también se pusieron de manifiesto en el desembarco de la Infantería de Marina estadounidense en Buenos Aires con el pretexto de proteger “el consulado y la Embajada estadounidense” durante “la revolución” –encabezada por Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica de la Juventud– que derrocó al presidente liberal Miguel Juárez Celman (1886-1890). También en las amenazas del dúo Harrison-Blaine de declararle la guerra a Chile si el gobierno de ese país no le ofrecía una adecuada compensación por la muerte, en una riña callejera, de dos infantes de marina del buque Baltimore. Asimismo, en el inicio de la “intervención

financiera” emprendida por el segundo gobierno del demócrata Grover Cleveland (1893-1897) en República Dominicana y en la reiterada injerencia estadounidense en los conflictos internos que se produjeron en Brasil inmediatamente después de la institucionalización de la ahora llamada *Velha República* (1891) –particularmente durante la Rebelión de Armada (1894), frente a la cual la Marina de Guerra de EE.UU. respaldó a las fuerzas leales al entonces presidente brasileño Floriano Peixoto (1891-1894). Según los historiadores brasileños Amado Cervo y Clodoaldo Bueno, tal respaldo y el acuerdo aduanero firmado entre ambos países contribuyeron “a la aceptación de la preponderancia norteamericana en nuestros negocios externos” (Cervo y Bueno, 2002: 164).

En cualquier caso, esa estrategia estadounidense antecedió a su ocupación de diferentes puntos del territorio de Nicaragua, con el socorrido pretexto de “defender los intereses americanos” durante las constantes insurrecciones del Partido Conservador contra el prestigioso presidente liberal José Santos Zelaya (1893-1909); a la incautación por parte de las autoridades estadounidenses de las armas y municiones adquiridas por el Partido Revolucionario Cubano (fundado en 1892 por José Martí y Máximo Gómez) para el desarrollo del Plan de la Fernandina, dirigido a lograr la independencia de Cuba y promover la de Puerto Rico frente al vetusto coloniaje español; a la oportunista injerencia del secretario de Estado norteamericano, Richard Olney en los conflictos que, desde 1844, venían presentándose entre Gran Bretaña y Venezuela alrededor de los límites entre este último país y la Guyana británica; y a la intencionada exclusión de los patriotas cubanos, filipinos y portorriqueños de la conferencia de París de diciembre de 1898, en la que –con la anuencia de las principales potencias imperialistas europeas– los gobiernos de EE.UU. y España suscribieron el Tratado de Paz con el que formalmente concluyó la Guerra Hispano-cubano-filipino-estadounidense del mismo año.

Esos y otros hechos excluidos en aras de la síntesis legitimaron la temprana advertencia de José Martí:

El desdén del vecino formidable que no la conoce, es el peligro mayor de nuestra América y urge, porque el día de la vista está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, para que no la desdeñe [...] Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la verdad (Martí, 1974c: 29).

También le confirieron trascendencia histórica a todos los esfuerzos que él emprendió para “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América” (Martí, 1974c: 473).

Lección Cuatro

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DESDE EL TRATADO DE PARÍS DE 1898 HASTA LA GRAN DEPRESIÓN

ESTA LECCIÓN ESTARÁ DEDICADA al estudio de las interacciones hemisféricas desde el ya referido Tratado de París de 1898 hasta marzo de 1933: fecha en que se inauguró en EE.UU. el primero de los tres sucesivos mandatos presidenciales del afamado demócrata Franklin Delano Roosevelt, a quien diversos autores le atribuyen “la paternidad” de la llamada Política del Buen Vecino que presuntamente guió las relaciones entre esa potencia imperialista y América Latina y el Caribe entre ese año y 1945 (Boersner, 1996: 167-182).

Sin embargo, otros autores –entre ellos, el historiador republicano estadounidense Samuel Flagg Bemis (1934)– consideran que la Política del Buen Vecino realmente se inició en 1928. Es decir, desde la elección para la presidencia de EE.UU. de Herbert Hoover (1929-1933): tercer mandatario de la etapa del sistema político estadounidense que la historiografía más o menos oficial de ese país denomina “la restauración republicana”, en razón de los doce años (marzo de 1921-marzo de 1933) de sucesivas administraciones de esa agrupación política que sucedieron a los ocho años (1913-1921) en los que –luego de un largo ciclo de gobiernos republicanos (1897-1913)– ocupó la Casa Blanca el demócrata Woodrow Wilson (Nevins et al., 1996: 399-412).

En contraposición, otros estudiosos de las relaciones interamericanas consideran que la Política del Buen Vecino realmente comenzó en 1936, año en que el gobierno estadounidense presuntamente aceptó

de manera irrestricta el principio de “no intervención” en los asuntos internos de los estados nacionales situados al sur del Río Bravo y de la península de Florida (Halperin Donghi, 1998: 375). Por su parte, Gordon Connell-Smith (1977: 174-215) considera que “la buena vecindad” no se desplegó hasta 1945, sino únicamente hasta 1939. O sea, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

A esa discusión acerca de los contenidos, límites temporales y falacias que han acompañado el análisis de la también llamada “época de la política del buen vecino” se regresará en la próxima lección. Ahora resulta importante indicar que una síntesis lógico-histórica de las relaciones interamericanas entre 1898 y 1933 puede encontrarse en el libro de Luis Suárez Salazar *Madre América: un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, publicado por primera vez en 2003.

Esa obra se complementa con el ensayo de Teresa Gutiérrez-Haces titulado “La política internacional de comercio de Canadá”, en el que se refieren las intensas contradicciones que, en las primeras tres décadas del siglo XX, se produjeron entre los representantes políticos (liberales y conservadores) de diversos sectores de las clases dominantes y la sociedad canadienses respecto a las relaciones político-económicas con EE.UU., al igual que con “su madre patria”, Gran Bretaña. Según se ha documentado, el despliegue y el desenlace de tales contradicciones formó parte del largo proceso de consolidación de Canadá como un Estado-nación cada vez más autónomo del Reino Unido y, a su vez, cada vez más dependiente de su vecino sureño.

Sin embargo, ese proceso –con su consiguiente impacto en las relaciones interamericanas– aún estaba bastante lejos de concluir cuando –en esa perenne lógica de continuidades y cambios que ha caracterizado, caracteriza y caracterizará la proyección externa de EE.UU.–, en los últimos años de la denominada “restauración republicana”, comenzaron a aparecer algunos elementos que apuntaban a una modificación de los brutales métodos que habían caracterizado las bipartidistas estrategias contra América Latina y el Caribe que, desde la última década del siglo XIX, habían desplegado los mandatarios republicanos (William McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft, Warren Harding, Calvin Coolidge), al igual que los demócratas Grover Cleveland y Woodrow Wilson.

Este último es reputado por algunos autores –como, por ejemplo, Flagg Bemis– como el primer presidente que incluyó la ahora llamada “promoción de la democracia” –entiéndase de las instituciones liberales-burguesas y “democráticas” específicamente estadounidenses– entre “los principios” de la política latinoamericana de EE.UU. (Flagg Bemis, 1934). No obstante, según Jorge Rodríguez Beruff, desde comienzos del siglo XIX, ese pretexto ya estaba presente en las “imprescindibles justificaciones internas y externas” de la progresiva expansión geopolítica y geoeconómica del poder global y hemisférico de EE.UU. (Rodríguez Beruff, 1996).

Con independencia de ese contrapunteo, lo cierto fue que la administración de Woodrow Wilson pasó a la historia de las relaciones interamericanas como la que mayor cantidad de intervenciones militares directas perpetró en la llamada Cuenca del Caribe. Por ello se considera que una de las novedades de la “restauración republicana” fue la retirada, en 1925 y luego de instaurar los principales pilares de su sistema de dominación sobre ese país, de las tropas norteamericanas que, desde 1915, habían ocupado de manera permanente el territorio de la actualmente llamada República Dominicana. Otra novedad fue el primer viaje realizado por un presidente estadounidense, Herbert Hoover, a varios países latinoamericanos inmediatamente después de que en noviembre de 1928 ganara las elecciones y, por tanto, antes de la ceremonia de su inauguración en marzo de 1929 como primer mandatario de la que ya había comenzado a ser la potencia hegemónica en el hemisferio occidental.

Por consiguiente, puede afirmarse que los nuevos enfoques respecto a las relaciones con sus vecinos del Sur elaborados durante la década del veinte y comienzos de la del treinta por las clases dominantes, los poderes fácticos y sucesivos gobiernos temporales estadounidenses –íntimamente vinculados con los diversos monopolios que tenían intereses específicos en América Latina y algunos países del Caribe– estuvieron determinados por el desenlace favorable a ese “joven” imperialismo de “las contradicciones interimperialistas” que –según sistematizó Lenin– se habían expresado violentamente durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Así también, por el significativo cambio en la correlación internacional de fuerzas sociales y políticas causado por el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 y la paulatina consolidación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), fundada en diciembre de 1922.

Cualesquiera que sean los juicios de valor que ahora se tengan con relación a la historia posterior de ese Estado multinacional, lo cierto fue que la Revolución de Octubre inició una nueva etapa de la historia de la humanidad: la contradictoria, zigzagueante e inconclusa *transición universal del capitalismo al socialismo*. En consecuencia, se produjo en todo el mundo –incluso en EE.UU.– un auge de las luchas del trabajo contra el capital, así como de las luchas por la liberación nacional y social en algunas zonas del posteriormente llamado Tercer Mundo. La Tercera Internacional (comunista) intentó impulsar esas luchas populares, democráticas y antiimperialistas a través de la concreción de la consigna lanzada por Lenin: ¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!

Paralelamente, continuaron agudizándose las contradicciones interimperialistas que a la postre condujeron a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entre otras razones porque, aunque estaban entre las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Italia y Francia habían quedado enormemente debilitadas, y a su vez EE.UU. había pasado

a ser el principal acreedor de esas y otras potencias imperialistas europeas, incluidas las principales derrotadas: Alemania, Bulgaria, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Este último tenía su centro en Turquía.

En consecuencia, se rediseñó el mapa político de Europa y Asia (zona del mundo en la que Japón adquirió nuevas posesiones) y Alemania quedó obligada a pagar enormes compensaciones económicas a los 28 países que habían integrado la coalición de las “potencias aliadas” encabezadas por el Reino Unido, Francia, EE.UU. y Japón. Entre esas “potencias” se encontraban Canadá, Brasil y Cuba. Estos dos últimos fueron los únicos estados latinoamericanos formalmente independientes que enviaron tropas al teatro de operaciones europeo.

Por tanto, sin que exista una relación directa y “mecánica” entre todos esos procesos, en la última década del período que abarca esta lección esas nuevas realidades internacionales, unidas al terrible impacto socioeconómico y político-ideológico provocado por la crisis económica de la posguerra y más tarde por la Gran Depresión, tuvieron importantes repercusiones en las relaciones interamericanas. Entre ellas, el progresivo incremento de las multiformes resistencias (armadas y desarmadas, gubernamentales y no gubernamentales) al sistema de dominación –hegemonía, acorzada con la fuerza– que, desde comienzos del siglo XX y en una nueva manifestación de su “cooperación antagónica”, habían venido instaurando sobre el hemisferio occidental los “imperialismos anglosajones”, de consuno con los representantes políticos y militares de las clases dominantes latinoamericanas y canadienses. Particularmente, después de la firma del Tratado Hay-Pauncefote de 1901, por medio del cual los gobiernos de EE.UU. e Inglaterra redistribuyeron de manera implícita o explícita sus correspondientes “esferas de influencias” en todo el continente americano (Boersner, 1996: 145-148). En efecto, además de preservar sus intereses en Canadá, esta última potencia imperialista garantizó la perduración de todas sus colonias en la llamada Cuenca del Caribe, así como sus privilegiados vínculos político-comerciales con algunos estados sudamericanos. Por su parte, EE.UU. avanzó en la consolidación de su multifacética penetración en México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. También mantuvo su “protectorado” sobre Cuba, su ocupación militar de Puerto Rico y su “intervención financiera” en República Dominicana. A la vez, logró que el primer ministro británico Robert Gascoyne-Cecil (1885-1902) –conocido como “el tercer marqués de Salisbury”– aceptara la derogación del Tratado Clayton-Bulwer de 1850, lo que finalmente le liberó las manos a la administración del republicano Theodore Roosevelt (1901-1909) para –utilizando el “gran garrote”– emprender de manera unilateral la construcción del añorado canal interoceánico.

Una de las condiciones necesarias para ese empeño fue la neutralización de las fuerzas liberales-populares colombianas que, con el apoyo político-militar de los gobiernos liberales de Ecuador y Venezuela (presididos por Eloy Alfaro y Cipriano Castro, respectivamente), desde 1899 venían enfrentándose con variados éxitos contra los antipopulares y proimperialistas gobiernos conservadores colombianos encabezados por Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín. Asimismo, venían impulsando la refundación de la Gran Colombia como vía para derrotar a las fuerzas conservadoras de sus respectivos países, así como para oponerse a los afanes expansionistas de EE.UU. y las agresiones de otras potencias europeas; tal fue el caso de la emprendida en 1902 por fuerzas navales alemanas, británicas e italianas contra Venezuela so pretexto de la decisión adoptada por el gobierno de Cipriano Castro de suspender el pago de todas las deudas contraídas con esas potencias imperialistas por los gobiernos precedentes (Díaz Callejas, 1997: 385-396).

Según se ha documentado, esa agresión fue inicialmente respaldada por el gobierno de EE.UU. Este –en un nuevo contubernio con el Reino Unido– sólo intervino en el conflicto para obligar al gobierno venezolano a que presentara la disputa ante el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional que, desde la década precedente, venía funcionando en la capital del Reino de los Países Bajos. Como era de esperar, el 22 de febrero de 1904, ese tribunal falló contra Venezuela y obligó al gobierno de dicho país a reiniciar los pagos de su deuda externa, otorgándole prioridad a las potencias imperialistas que habían encabezado las acciones punitivas antes referidas. Lo diferente fue que –desconociendo la Doctrina Calvo (en referencia al jurista argentino Carlos Calvo)⁸ y la propuesta del entonces canciller argentino, Luis María Drago, de proclamar que la deuda pública no podía ser asumida como pretexto para agredir a los países deudores (posteriormente conocida como la Doctrina Drago)– mediante los Protocolos de Washington de 1903, de manera tácita el gobierno estadounidense quedó “comprometido” a ejercer una virtual tutela sobre Venezuela al constituirse en garante del cobro de los créditos de las potencias imperialistas europeas y la oligarquía financiera estadounidense.

⁸ De acuerdo con la Doctrina Calvo, todos los ciudadanos extranjeros debían realizar sus demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales de los países donde radican y sin recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio gobierno. A partir de su enunciación en 1863, tal precepto fue incluido en la mayor parte de las constituciones de América Latina. A pesar del rechazo estadounidense, la doctrina fue aceptada, con algunas modificaciones, como principio de Derecho Internacional Público en la Segunda Conferencia de La Haya (1907). Allí, los países participantes acordaron que el gobierno de un país no debía utilizar la fuerza armada para recuperar deudas contraídas por el gobierno de otro Estado hasta que el caso no fuera sometido a un arbitraje internacional y la nación deudora hubiera dificultado la formulación de un compromiso o se hubiera negado a cumplir una decisión no favorable.

Esa agresión interimperialista contra Venezuela y el apoyo o el silencio cómplice de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, al igual que la previa neutralización de las mencionadas fuerzas liberales grancolombianas –protocolizada en el tratado firmado a bordo del buque estadounidense Wisconsin en noviembre de 1902– y la derrota de las fuerzas liberales del istmo de Panamá (encabezadas por el martirizado líder guerrillero Victoriano Lorenzo), así como la intervención de las fuerzas navales estadounidenses, crearon todas las condiciones que propiciaron el éxito de la cada vez más documentada conspiración mafiosa y oligárquico-imperialista que culminó en noviembre de 1903 con la segregación de Panamá de la República de Colombia (Beluche, 2004).

En consecuencia, ese nuevo Estado-nacional latinoamericano nació virtualmente ocupado por las fuerzas armadas norteamericanas. A la vez, sus cipayos panameños (los llamados “rabiblanco”) aceptaron una Constitución en la que –al igual que ya había ocurrido con la imposición de la Enmienda Platt en la Carta Magna aprobada en Cuba en 1901– quedó institucionalizado un virtual protectorado, en tanto se le concedió al gobiernos de EE.UU. el derecho a establecer bases militares en la llamada Zona del Canal, así como a intervenir (incluso militarmente) en los asuntos internos y externos panameños cada vez que lo considerara conveniente.

Luego de ese logro de la administración de Theodore Roosevelt, y tomando como pretexto las constantes guerras civiles o interestatales entre liberales y conservadores que se producían en Centroamérica, en 1907 ese gobierno estadounidense le impuso a sus contrapartes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua la firma de un Tratado General de Paz y Amistad en el que estos se comprometían, entre otras cosas, a impedir que su territorio sirviera como base a “los movimientos revolucionarios” contra otros estados de la subregión y a restringir las actividades políticas de sus correspondientes refugiados. Así también, se comprometían a que Honduras –dada su posición geográfica– fuera permanentemente neutral, para evitar que el control de su gobierno se convirtiera en objeto principal de “sus vecinos más fuertes”. Asimismo, de manera poco congruente con la realidad, convinieron en denegar su reconocimiento “a cualquier gobierno [de esa región] que llegara al poder mediante un golpe de Estado o de una revolución”. Además, acordaron la formación de un Tribunal de Justicia Centroamericano encargado de dirimir los conflictos que se presentaran entre sus estados miembros (Fonseca, 2001: 202).

Dado que el gobierno estadounidense no se consideraba parte de ese acuerdo (de hecho, a causa de sus presiones, ese tribunal perdió vigencia en 1917), con diferentes pretextos –entre ellos, el fatídico Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, la “diplomacia del dólar” impulsada por William Taft (1909-1913) y la “promoción de la democracia”

emprendida por Woodrow Wilson– las fuerzas armadas norteamericanas intervinieron varias veces en Honduras, Guatemala y Nicaragua, país al que ocuparon de manera permanente entre 1912 y 1933. Paralelamente, ocuparon República Dominicana entre 1915 y 1925, así como Haití entre 1914 y 1934. También intervinieron militarmente (o ejecutaron demostraciones de fuerza), en diferentes ocasiones, en Cuba, Panamá, Venezuela, Paraguay y México (Suárez Salazar, 2006e). En este último caso, durante la cruenta Revolución Mexicana de 1910-1917, considerada por Manfred Kossok (1989: 154) como la “primera [y la última] revolución democrático-burguesa exitosa de América Latina”.

Por ello, no fue extraño que –hasta la década del veinte– sucesivas administraciones estadounidenses se negaran a reconocer a los gobiernos mexicanos formalmente instaurados después de la promulgación de la Constitución de 1917. Tampoco fueron extrañas las diversas acciones emprendidas por la oligarquía financiera y los poderosos monopolios norteamericanos y anglo-holandeses con vistas a desconocer –y en lo posible revertir– los diversos artículos de esa Carta Magna orientados a edificar un capitalismo nacional-popular autónomo frente a las principales potencias imperialistas; en particular, frente a los imperialismos anglosajones.

Pero, como no hay acción sin reacción, esas y otras intervenciones directas, indirectas, militares, diplomáticas y político-económicas paulatinamente fueron incrementando las multiformes resistencias populares al sistema de dominación oligárquico-burgués-imperialista. Entre ellas, las protagonizadas por diferentes destacamentos campesinos (especialmente en México, Nicaragua, Haití y República Dominicana), por la naciente clase obrera y la pequeña burguesía urbana contra la creciente penetración económica de los monopolios británicos y estadounidenses. Estos últimos –como se verá en el Cuadro 1– paulatinamente habían venido desplazando a sus competidores ingleses, franceses y alemanes.

Cuadro 1
Inversiones extranjeras en América Latina y el Caribe (en millones de dólares)

País	1897	1930
Gran Bretaña	2.060	4.500
Francia	628	454
Alemania	-	700
Estados Unidos	308	5.429

Fuente: Boersner (1996: 318).

A consecuencia, también se incrementaron las transacciones comerciales –muchas de ellas vinculadas al “comercio atado”– y las correspondientes deudas contraídas por América Latina y los países “independientes” del Caribe con EE.UU. Así, según cifras seguramente parciales del Departamento del Comercio de EE.UU., entre 1914 y 1927, los préstamos ofrecidos por la banca privada norteamericana a los gobiernos de esa región saltaron de menos de 15 millones a más de 1.400. Por otra parte, el comercio exterior entre EE.UU. y América Latina y el Caribe se incrementó de un promedio anual de 737 millones de dólares entre 1910 y 1914 a más de 1.900 en 1926 (Hughes, 1929).

Tal como se indicó, en ese progresivo desplazamiento de todos sus competidores tuvo una significativa influencia la política agresiva desplegada por las ocho administraciones estadounidenses –republicanas y demócratas– instauradas entre 1898 y 1933, así como también el desarrollo y desenlace de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, habría que agregar los diversos cambios socioeconómicos, político-ideológicos y político-militares que –al calor de ese conflicto bélico y de la aguda crisis económica que se produjo antes de la Gran Depresión– ocurrieron en algunas sociedades latinoamericanas, particularmente en aquellos países de mayor desarrollo relativo: Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia; es decir, los que (al igual que Canadá) ya habían emprendido la primera fase de un proceso de industrialización vinculado al incremento de sus exportaciones de productos primarios semielaborados y a los suministros del mercado interno (Furtado, 1972: 81-86).

Al calor de esas experiencias (que en modo alguno modificaron la dependencia estructural del hemisferio hacia las principales potencias imperialistas que se había sedimentado a lo largo del siglo XIX) surgieron nuevos sectores de las clases dominantes (como la burguesía industrial) y dominadas (la clase media urbana, la naciente clase obrera) que pugnan por sus correspondientes vindicaciones socioeconómicas, así como por lograr una mayor participación en los restringidos ordenamientos políticos de sus correspondientes países. En particular, en aquellos que seguían dominados por gobiernos oligárquicos y proimperialistas, ya fueran militares, cívico-militares, conservadores o liberales.

En consecuencia, se inició en América Latina y en algunos países del Caribe (Cuba y Puerto Rico) un intenso ciclo de luchas reformadoras o revolucionarias, con contenidos democráticos, antiimperialistas, antineocolonialistas y, en unos pocos casos, socialistas. Tales luchas, casi sin excepción, fueron violentamente sofocadas por los representantes político-militares de las clases dominantes y sus aliados externos, incluyendo en esta etapa y en algunos países (como Perú) al gobierno fascista instaurado en Italia desde 1922.

Esa cruenta dinámica entre la reforma, la contrarreforma, el reformismo, la revolución y la contrarrevolución, así como entre la dictadura y la democracia, se expresó en las relaciones interestatales bilaterales o multilaterales entre EE.UU., América Latina y el Caribe. También, por consiguiente, en las cinco Conferencias Internacionales de Estados Americanos que –siguiendo los ambivalentes acuerdos de la primera conferencia de ese carácter efectuada en EE.UU. en 1889-1990– fueron convocadas por diversas administraciones republicanas entre 1902 y 1928. Con la permanente ausencia de Canadá (que siguió orientando sus relaciones externas hacia Gran Bretaña), dichas conferencias se efectuaron en México (1902), Brasil (1906), Argentina (1910), Chile (1924) y Cuba (1928).

En ellas, a pesar de su total desconocimiento de la “agenda económica” y de las cambiantes y crecientes resistencias de algunos gobiernos latinoamericanos (Argentina, Ecuador, Uruguay y, a partir de 1917, México), paulatinamente se fue institucionalizando lo que ahora se puede llamar “el viejo panamericanismo” (1890-1948). A partir de 1910, ese instrumento y complemento de la política estadounidense contra América Latina y el Caribe se estructuró en la llamada Unión Panamericana, en cuyo funcionamiento desempeñó un importante papel la diplomacia de la *Velha República* brasileña, guiada, entre 1902 y 1912, por la proyección esencialmente promonroista y propanamericana de José Maria da Silva Paranhos, más conocido como “el barón de Río Branco” (Cervo y Bueno, 2002: 177-197).

Sin dudas, en la etapa que estamos estudiando, su labor y la de sus seguidores contribuyeron a neutralizar las actitudes antimonroistas y antipanamericanistas de los gobiernos de Argentina y Chile, temporalmente unidos a Brasil en el entonces llamado Grupo ABC. Ese grupo fue impulsado por el barón de Río Branco y sus inmediatos continuadores en la cancillería brasileña con vistas a disminuir las suspicacias de sus vecinos, así como “para actuar de acuerdo con el gobierno de Washington en una especie de condominio oligárquico”, al cual, en sus inicios, también se pretendía sumar al gobierno de México (Cervo y Bueno, 2002: 195-231). De ahí que una de las poco conocidas acciones de ese grupo diplomático latinoamericano haya sido su frustrado intento de mediar entre los gobiernos de México y EE.UU., luego de que en 1814 tropas de ese país ocuparan violentamente la ciudad de Veracruz e intentaran ocupar también el puerto de Tampico (Suárez Salazar, 2003b: 74-75).

Merece recordarse que las referidas posturas antimonroistas y antipanamericanistas adoptadas por algunos de los gobiernos conservadores y probritánicos que controlaron la vida política de Chile durante la denominada República Parlamentaria (1891-1925) hundían sus raíces en la cruenta derrota (dejó un saldo de más de 10 mil muertos) del líder del Partido Liberal y presidente constitucional José Manuel Balmaceda (1886-1891),

quien –previo a su suicidio y en contraposición a los estrechos vínculos que tenían sus opositores con los intereses británicos– había sido apoyado por la administración del presidente estadounidense Benjamín Harrison (1889-1893) y por su inescrupuloso secretario de Estado, James Blaine. En 1891, este había amenazado con declararle la guerra a Chile si el gobierno conservador de ese país no le ofrecía una adecuada compensación por la muerte –ocurrida en una riña callejera– de dos infantes de marina del buque *Baltimore*, provocadoramente encalado en Valparaíso.

A su vez, las sistemáticas actitudes antimonroistas y antipanamericanistas de Argentina habían sido impulsadas por los gobiernos probritánicos presididos por Julio Argentino Roca (1898-1904), Manuel Quintana (1904-1906), José Figueroa (1906-1910) y Roque Sáenz Peña (1910-1914). Este último –representando a Uruguay– se había destacado por su oposición a la agenda impulsada por James Blaine durante la ya referida Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos. Esa oposición a las correspondientes agendas de las sucesivas conferencias panamericanas celebradas en las primeras tres décadas del siglo XX encontró cierta continuidad durante los tres gobiernos de la Unión Cívica Radical presididos por Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), cuyos representantes en la Quinta y la Sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos propugnaron –junto a otros gobiernos latinoamericanos (México, Uruguay y, en algunos momentos, Colombia)– una definición multilateral de la Doctrina Monroe. También rechazaron las mencionadas intervenciones militares perpetradas por sucesivos gobiernos estadounidenses contra América Latina y el Caribe.

En función de ello, los gobiernos argentinos anteriormente identificados vindicaron las ya referidas doctrinas Calvo y Drago, así como algunos de los principios (como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos internacionales) establecidos en los Estatutos de la Sociedad de las Naciones, fundada en 1919. Estos habían sido aprobados o aceptados, según el caso, por varios gobiernos latinoamericanos (ver Cuadro 2). Según Gordon Connell-Smith, tales gobiernos buscaban compensar la apabullante influencia estadounidense en la Unión Panamericana. Merece recordarse que la retirada de EE.UU. de esa sociedad se produjo, entre otras cosas, por el rechazo del Congreso estadounidense a la decisión del presidente Woodrow Wilson de otorgarle posibilidades al Consejo de la también llamada Liga de las Naciones de interpretar la Doctrina Monroe (Connell-Smith, 1977: 172).

Fue tal el rechazo del más connotado representante de la política exterior de “la restauración republicana”, Charles Evans Hughes, a realizar una definición internacional y “panamericana” de la susodicha “doctrina”, así como a asumir el “principio de no intervención” en los asuntos internos y externos de los estados latinoamericanos,

que en la Sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos (efectuada en La Habana, en 1928) se creó una profunda crisis dentro de la Unión Panamericana. Esta sólo pudo resolverse transitoriamente gracias al compromiso de las delegaciones participantes en esa conferencia –incluida la de EE.UU.– de continuar discutiendo esos asuntos en la Séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos pausada para realizarse en Montevideo, Uruguay, en 1933.

Cuadro 2

Países del hemisferio occidental que integraron la Sociedad de las Naciones*

Argentina (se retiró en 1921 pero retornó en 1932)
Bolivia
Brasil (se retiró en 1926)
Canadá
Chile (se retiró en 1938)
Colombia
Costa Rica (1920; se retiró en 1925)
Cuba
Ecuador (1934)
El Salvador (se retiró en 1937)
Estados Unidos (se retiró en 1920)
Guatemala (se retiró en 1936)
Haití (se retiró en 1942)
Honduras (se retiró en 1936)
México (1931)
Nicaragua (se retiró en 1936)
Panamá
Paraguay (se retiró en 1935)
Perú (se retiró en 1939)
República Dominicana (1924)
Uruguay
Venezuela (se retiró en 1938)

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre datos de Enciclopedia Encarta (2006).

* Los países que no van seguidos de ninguna fecha fueron los fundadores de la Sociedad de las Naciones. El año que aparece entre paréntesis indica la fecha de ingreso, salvo en los casos en que se especifica su abandono de esa organización.

Tal solución de compromiso fue posible, entre otras cuestiones, por la “mediación” del gobierno de Brasil y por la reiterada incapacidad demostrada por los gobiernos de América Latina y de los países “independientes” del Caribe para unificar sus posiciones siquiera frente

a los peligros externos que continuaban amenazando su soberanía, su autodeterminación y su integridad territorial. Entre 1898 y 1933, esa integridad territorial se había visto nuevamente vulnerada por la ya referida secesión y virtual ocupación de Panamá. También por las pretensiones de diversos gobiernos estadounidenses de apoderarse definitivamente de dos de las islas (Great y Little Corn) ubicadas en las proximidades de la mal llamada “costa atlántica” de Nicaragua y el litoral pacífico de Panamá.

A lo dicho es preciso agregar los peligros que planteaban a la integridad territorial de otros estados latinoamericanos las constantes guerras fratricidas que –estimuladas por diversos monopolios estadounidenses (entre ellos, la tristemente célebre United Fruit Company)– se produjeron en las primeras tres décadas del siglo XX. Entre ellos, los constantes conflictos civiles que con implicaciones interestatales afectaron a varios estados centroamericanos, a pesar de la ratificación en 1923 y bajo tutela estadounidense del inoperante Tratado de Paz y Amistad de 1907 (Fonseca, 2001). Previamente, en 1923, se había desatado una breve guerra entre Perú y Colombia por el control del territorio de Leticia (Cervo y Bueno, 2002: 240-242). Y, cinco años después, se produjeron las primeras acciones militares que finalmente condujeron al estallido de la sangrienta guerra (murieron 90 mil combatientes de ambos bandos) que hasta 1935 se desarrolló entre Bolivia y Paraguay por el dominio sobre el territorio del Chaco (Cervo y Bueno, 2002: 243-245). Como se ha documentado, detrás de esa guerra fratricida estuvieron los intereses encontrados de la Standard Oil de New Jersey (que impulsó a Bolivia) y de la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell (que respaldó a Paraguay), ya que existía la suposición (hasta ahora no confirmada) de que en el territorio que se disputaban ambos países había importantes yacimientos petroleros (Galeano, 1979: 253).

Lo anterior contribuye a explicar el papel preponderante que en su solución se atribuyó al Consejo de la Liga de las Naciones y las gestiones mediadoras entre los gobiernos de Bolivia y Paraguay emprendidas por varios gobiernos sudamericanos; entre ellos, los de Argentina y Brasil, cuyas relaciones se habían estrechado durante los gobiernos presididos por Agustín P. Justo y Getúlio Vargas, respectivamente. En ese contexto, la cancillería argentina impulsó de manera exitosa un acuerdo de paz, no agresión y conciliación que pasó a la historia de las relaciones interamericanas con el nombre de Tratado Saavedra Lamas. Este fue suscripto el 10 de octubre de 1933 por los cancilleres de Argentina y Brasil, así como por “los jefes de las representaciones diplomáticas de Chile, México, Paraguay y Uruguay” (Cervo y Bueno, 2002: 236). Por tanto, quedó abierta la posibilidad de que otros estados del hemisferio occidental se unieran al mismo; en particular, los interesados en re-

verdecer los olvidados enunciados de la llamada “Convención Gondra” o Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos, que había sido propuesto por el jefe de la delegación paraguaya a la IV Conferencia Internacional de Estados Americanos realizada en Santiago de Chile en 1923, pero que no había sido ratificado por el gobierno de EE.UU.

Sin dudas, la negativa actitud asumida sistemáticamente por la diplomacia estadounidense frente a todos los acuerdos interlatinoamericanos antes referidos, junto a las multiformes luchas del pueblo haitiano y el pueblo nicaragüense contra las fuerzas de ocupación estadounidenses, también estuvieron entre las causas determinantes de la posteriormente llamada Política del Buen Vecino. A tal grado que, en 1928, el entonces gobernador de Nueva York y destacada figura del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, a pesar de su implicación personal en la ocupación militar de Haití (se le atribuye la redacción de la Constitución aprobada por las fuerzas militares estadounidenses), se había visto obligado a reconocer la creciente impopularidad interna e internacional que acompañaba a la política intervencionista de su país contra América Latina y el Caribe (Connell-Smith, 1977: 187).

Tal impopularidad se acrecentó cuando –como respuesta al profundo impacto que tuvo en la economía estadounidense e internacional la Gran Depresión– la administración de Herbert Hoover promulgó en 1929 la Ley Smoot-Hawley, que elevó a límites nunca vistos las tarifas aduaneras estadounidenses y redujo en más de un 75% las importaciones provenientes de América Latina y de sus estados satélites del Caribe. Lo mismo sucedió cuando las fuerzas armadas norteamericanas y sus cipayos nicaragüenses debieron recurrir a brutales métodos contrainsurgentes para intentar derrotar al “pequeño ejército loco” encabezado por el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, quien en 1929, en medio de su tenaz resistencia a la ocupación de su país, infructuosamente había convocado a los gobiernos de todos los estados latinoamericanos a elaborar un plan “para la realización del supremo sueño de [Simón] Bolívar” (Sandino, 1929; Selser, 1960).

Paralelamente, la administración de Herbert Hoover –abandonando la hueca retórica *wilsoniana* de la “promoción de la democracia”– nuevamente respaldó de manera ostensible la cadena de brutales dictaduras militares o cívico-militares instauradas o que se instauraron en las naciones ubicadas al sur del Río Bravo. Entre ellas, la que asumió el poder en Guatemala a partir de 1931; la del general Maximiliano Hernández Martínez, surgida del asesinato de más de 30 mil salvadoreños (el 2% de la población de ese pequeño país) que siguió al fracaso de insurrección popular e indígena-campesina encabezada en 1932 por el martirizado líder del Partido Comunista de El Salvador, Farabundo

Martí; las instauradas en Argentina y Uruguay a partir de 1932; y la que –bajo la férrea conducción de Juan Vicente Gómez– se había instalado en Venezuela luego del derrocamiento del gobierno nacionalista de Cipriano Castro.

Como recordó Manuel Medina Castro en su conocido libro *Estados Unidos y América Latina: siglo XIX*, esas y otras acciones imperialistas omitidas en aras de la síntesis o que se verán en la próxima lección confirmaron el acierto del filósofo nuestroamericano, nacido en Argentina, José Ingenieros, cuando indicó que la Doctrina Monroe “parecía la llave de nuestra pasada independencia y resultó la ganzúa de nuestra futura conquista” (en Medina Castro, 1974: 52).

Lección Cinco

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DURANTE LA “ÉPOCA DEL BUEN VECINO”

ESTA LECCIÓN ESTARÁ DEDICADA al estudio de las relaciones entre Canadá, EE.UU. y América Latina y el Caribe durante el período que Demetrio Boersner (1996: 167-182) denomina “la época de la ‘política del buen vecino’”, presuntamente caracterizada por la aceptación por parte de las tres sucesivas administraciones del presidente demócrata estadounidense Franklin Delano Roosevelt (marzo de 1933-abril de 1945) del principio absoluto de no intervención en los asuntos internos de América Latina y el Caribe. Según el propio autor, tal política sólo habría sido abandonada por el también mandatario demócrata Harry S. Truman (1945-1953), máximo responsable del criminal lanzamiento de las bombas atómicas contra las indefensas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente), así como protagonista de la subsiguiente destrucción de la alianza anglo-soviética-norteamericana contra el nazi-fascismo que se estructuró durante los cuatro últimos años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Sin embargo, como se adelantó en la lección anterior, algunos autores consideran que, a partir del primero de esos años, “la política del Buen Vecino” fue sustituida por “la política de socios en la guerra” (Connell-Smith, 1977: 174-215). La imprecisión de esa denominación puede argumentarse, entre otras cosas, con la manera oportunista en que el gobierno estadounidense utilizó ese conflicto bélico con vistas a lograr

la aceptación tácita o expresa de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños de los principales presupuestos de la Doctrina Monroe, así como para ampliar y profundizar su penetración económica y político-militar en ese continente a grados hasta entonces nunca vistos; además, para obtener nuevos avances en la institucionalización del “panamericanismo”, particularmente a través de las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países pertenecientes a la Unión Panamericana, acordadas en la Octava Conferencia Internacional de Estados Americanos efectuada en Lima, Perú, en 1938.

Siguiendo los avatares de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, la cambiante política estadounidense respecto a ese conflicto, la primera de las reuniones de consulta arriba referidas se efectuó en Panamá (entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 1939), la segunda en La Habana (del 21 al 30 de junio de 1940) y la tercera en Río de Janeiro entre el 15 y el 28 de enero de 1942. En esta última –como infructuosamente venía demandando la Casa Blanca desde la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz efectuada en Buenos Aires en 1936–, se aprobó la constitución de un Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del continente y la institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa (JID), inicialmente integrada por las fuerzas armadas de aquellos países de la región que respaldaron la decisión estadounidense de sumarse a las fuerzas aliadas entonces capitaneadas por EE.UU. e Inglaterra. De ahí que, en lo inmediato, ambos órganos político-militares sirvieron para coaccionar o emprender “intervenciones colectivas” en los asuntos internos y externos de algunos países de la región; en especial, contra aquellos gobiernos (como fueron los casos de Argentina y Chile) que no acataron la decisión “panamericana” de romper sus relaciones diplomáticas y comerciales o declararle la guerra a las potencias integrantes del denominado Eje Berlín-Roma-Tokio.

En consecuencia, a partir de 1942 (año en que, luego del ataque a Pearl Harbor, el gobierno estadounidense finalmente decidió declararle la guerra a la coalición imperialista antes referida) y con la coartada de la justa lucha contra el nazi-fascismo, esas y otras prácticas intervencionistas que se verán después convirtieron en letra muerta la Carta de Deberes y Derechos de los Estados aprobada, a propuesta de varios gobiernos de América Latina y pese a la expresa resistencia de la delegación estadounidense, en la Séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos efectuada en Montevideo en enero de 1933. Y, en especial, el Protocolo Adicional Relativo a la No Intervención que, a propuesta del gobierno de México (entonces presidido por el general Lázaro Cárdenas), había sido personalmente aprobado por el presidente Franklin Delano Roosevelt durante su asistencia a la ya referida Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, efectuada

en Buenos Aires en 1936. En dicho protocolo había quedado indicado: “Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisibile la intervenciónde cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o exteriores de cualquier otra de las Partes” (Boersner, 1996: 174-175).

Como ha señalado Luis Suárez Salazar (2003b: 151), “con esa redacción los gobiernos latinoamericanos y caribeños pretendían cerrar las brechas que [...] había utilizado el ‘buen vecino’, en sus primeros tres años de gobierno, para mantener su injerencia en las demás naciones del continente”. Así se había demostrado en la desfachatada intervención de EE.UU. en el derrocamiento del gobierno presidido por Ramón Grau San Martín, provisionalmente instaurado en Cuba como fruto de la revolución popular y democrática de 1933. También se evidenció en los leoninos tratados de reciprocidad comercial y de ampliación a perpetuidad del territorio de la mal llamada Base Naval de Guantánamo, firmados en 1934 por la Casa Blanca y el gobierno-títere instalado en la mayor de las Antillas. Igualmente, en las férreas disposiciones que ese mismo año Franklin Delano Roosevelt le impuso a su homólogo haitiano Sténio Vincent, como condiciones ineludibles para retirar las fuerzas militares norteamericanas que ocupaban Haití desde hacía dos décadas.

A esas tropelías debe agregarse el alevoso asesinato, con la complicidad del embajador norteamericano en Nicaragua, del General de Hombres Libres Augusto César Sandino y sus principales seguidores. También el descarado apoyo del gobierno estadounidense a la cadena de dictaduras militares o cívico-militares que se instauraron en Argentina (entre 1932 y 1943), Cuba (entre 1934 y 1940), El Salvador (entre 1931 y 1944), Ecuador (entre 1935 y 1937), Guatemala (entre 1931 y 1944), Haití (entre 1934 y 1946), Honduras (entre 1933 y 1948), Nicaragua (a partir de 1936), Perú (entre 1933 y 1939), Uruguay (entre 1932 y 1938) y Venezuela (al menos hasta 1941). También es necesario añadir el silencio cómplice del gobierno de EE.UU. frente a las prácticas represivas que, a partir de 1935, caracterizaron al gobierno nacional-burgués-populista, con ciertas inclinaciones hacia el nazi-fascismo, de Getúlio Vargas en Brasil (1934-1938), al igual que a la administración de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) en Chile.

De ahí que el historiador demócrata estadounidense Arthur Schlesinger Jr. se haya visto obligado a reconocer que “la limitación a los aspectos jurídico-diplomáticos vinculados al principio absoluto de la no intervención” había determinado que la administración de Franklin Delano Roosevelt careciera de “un adecuado estímulo a las ideas democráticas” y de “un claro programa económico” (Schlesinger Jr., 1979: 248). En efecto, a pesar de sus acerbias críticas a la súper proteccionista Ley Smoot-Hawley, promulgada por la administración del republicano

Herbert Hoover, la política económica del mencionado presidente demócrata estuvo reducida, hasta 1941, a la suscripción de asimétricos tratados de reciprocidad comercial con los gobiernos latinoamericanos y caribeños que le permitieran a EE.UU. proteger su mercado interno y ampliar sus exportaciones de manufacturas como parte de la superación de la profunda crisis que continuó afectando a la economía y la sociedad norteamericanas en los años posteriores a la Gran Depresión; así como enfrentar la significativa competencia que las exportaciones alemanas le venían haciendo en diversos mercados latinoamericanos.

A su vez, al incorporarse a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense les impuso a sus “socios” latinoamericanos y caribeños limitaciones en sus compras de maquinarias y equipos en el mercado estadounidense, al igual que topes en los precios para la importación de las materias primas estratégicas y demás productos primarios que necesitaba el posteriormente llamado “complejo militar-industrial” para incrementar sus ventas de armamentos y sostener su propio esfuerzo bélico. Tan alejadas de las leyes de la oferta y la demanda del mercado internacional y tan leoninas fueron esas condiciones de precios que se estima que, sólo por ese concepto, entre 1941 y 1945, los países de América Latina y el Caribe le transfirieron a EE.UU. 4 mil millones de dólares a “cambio de vagas promesas de ayudar al desarrollo industrial latinoamericano una vez terminado [ese] conflicto bélico” (Vázquez García, 2001: 34-70).

Por otra parte, cualquier enfoque integral de las relaciones interamericanas debe reconocer que en los doce años de la administración de Franklin Delano Roosevelt se consolidó la “cooperación antagónica” entre EE.UU., Inglaterra, Francia y Holanda dirigida a mantener el “orden colonial” instaurado por esas potencias en las islas y territorios continentales (Bélice, Guyana francesa, Guyana y Surinam) de la llamada Cuenca del Caribe. Tal cooperación se expresó, entre otros hechos, en la represión a todos los movimientos políticos y sociales que –a partir de comienzos de la década del treinta– desafiaron, de una u otra forma, la dominación colonial instaurada por EE.UU. sobre Puerto Rico, al igual que por el Reino Unido sobre Antigua, Anguila, Bahamas, Barbados, Bélice, Caimán, Dominica, Guyana, Granada, Islas Vírgenes, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, así como Turcos y Caicos.

En el caso de Trinidad y Tobago, las autoridades británicas –con el silencio cómplice de EE.UU., Francia y Holanda– desembarcaron sus fuerzas militares para sofocar la insurrección popular que se extendió por toda la isla en junio de 1937. En el mismo año y el siguiente, las fuerzas británicas también reprimieron violentamente las impresionantes huelgas obreras que se produjeron en Barbados y Jamaica.

Asimismo, todas esas potencias imperialistas cohonestaron la brutal matanza de haitianos perpetrada en 1937 por el megalómano y racista sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Tres años más tarde, como resultado del llamado “acuerdo bases por destructores” firmado entre Franklin Delano Roosevelt y el reaccionario premier británico Arthur Neville Chamberlain (1937-1940), este último país admitió que las fuerzas armadas estadounidenses instalaran un docena de bases militares en sus colonias caribeñas.

Tal acuerdo se ratificó entre Roosevelt y el premier conservador británico Winston Churchill (1940-1946), en la famosa Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941 a bordo de un navío de guerra frente a las costas de la isla canadiense de Terranova. Como consecuencia de esa carta y de la conferencia celebrada en Washington el 1 de enero de 1942, con la participación de los 26 gobiernos que le habían declarado la guerra a las potencias integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio, los gobiernos en el exilio de Francia y Holanda (ya ocupados por las fuerzas militares alemanas) admitieron que, mientras durara la guerra, sus correspondientes colonias caribeñas fueran “custodiadas” por EE.UU.

A lo dicho hay que agregar que, luego del mencionado acuerdo entre Roosevelt y Chamberlain, el premier liberal canadiense William Lyon Mackenzie King (1921-1930 y 1935-1948) y el presidente Roosevelt signaron el llamado Acuerdo Ogdensburg, que propició, por primera vez en la historia, la realización de planes conjuntos de defensa entre ambos países. Según informaciones oficiales estadounidenses recientemente desclasificadas, todo parece indicar que fue a partir de esos acuerdos que las fuerzas armadas estadounidenses finalmente abandonaron el llamado Plan Carmesí. Este preveía la violenta ocupación militar del territorio canadiense en caso de que se desarrollara un conflicto bélico entre EE.UU. e Inglaterra (Rudmin, 2006). Debe destacarse que dicho plan estuvo vigente incluso después de la aprobación por parte del Congreso canadiense del Acuerdo de Libre Comercio signado en 1935 entre Franklin Delano Roosevelt y el premier canadiense Mackenzie King.

Objetivamente, los dos acuerdos mencionados produjeron importantes cambios de calidad en las competitivas (y a veces conflictivas) relaciones triangulares entre Canadá, EE.UU. e Inglaterra. Mucho más porque, en esos años, Canadá adquirió “su estatura política internacional” (Gutiérrez-Haces, 2005). Ello tuvo una connotación especial luego de que, rompiendo su aislamiento internacional de los años precedentes, en 1939 las fuerzas armadas de ese país se incorporaron a la coalición entonces encabezada por el Reino Unido y Francia contra las potencias integrantes del Eje Berlín-Roma-Tokio. Su destacada participación en diversas acciones bélicas, tanto en Europa como en el frente del Pacífico, posibilitó que una representación canadiense pudiera desempeñar un pa-

pel relativamente autónomo en la Conferencia de San Francisco (25 de abril-26 de junio de 1945) que fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En consecuencia, Canadá adquirió atributos de soberanía de los que no disfrutaban otras naciones pertenecientes al entonces denominado British Commonwealth of Nations (Commonwealth), fundado en 1931 como una asociación presuntamente voluntaria entre las diversas entidades políticas, más o menos soberanas, que expresaran su fidelidad a la Corona Británica.

A ello se agregó el auge económico que experimentó Canadá durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en Alberta y nuevas reservas de mineral de hierro en Ungava (norte de Québec) y Labrador, así como la explotación de las reservas de uranio existentes en el norte de Ontario, lo que facilitó la construcción de centrales energéticas a lo largo del país. Todo ello impulsó la llegada de aproximadamente 1.500.000 inmigrantes británicos y de otros países europeos, que proporcionaron mano de obra barata y el incremento del mercado interno que propició el desarrollo de una importante base industrial.

Paralelamente y, en la medida en que sus viejos lazos con el Reino Unido se desintegraban, el gobierno canadiense emprendió diversos pasos dirigidos a establecer sus relaciones diplomáticas y comerciales con algunos países de América Latina, así como a ir pasando, poco a poco, a la órbita política, económica y militar de EE.UU. (Kirk y McKenna, 2007: 28). Esa contradictoria realidad se expresó, entre otras cosas, en el frustrado interés del gobierno canadiense de incorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) de 1947; pero sobre todo en la incorporación del gobierno canadiense (encabezado entre 1948 y 1957 por el premier liberal Louis Stephen Saint-Laurent) a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fundada en 1949 por EE.UU. y sus aliados europeos (Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Portugal) como parte de sus diversos dispositivos político-militares orientados a “contener el comunismo”.

A esos temas se volverá en la próxima lección, pero ahora –criticando ciertas lecturas apologéticas provenientes de la historiografía estadounidense acerca del presunto abandono por parte de Franklin Delano Roosevelt del “imperialismo económico” o el “imperialismo protector” que caracterizaron a sus antecesores (Bailey, 1970)– es necesario insistir en que entre 1933 y 1945 las clases dominantes y el *establishment* de la política exterior, defensa y seguridad de EE.UU. lograron consolidar su control político, diplomático, económico y militar sobre América Latina y el Caribe. A tal grado que, según algunos autores, podría considerarse que al final de la Segunda Guerra Mun-

dial comenzó “una nueva era del panamericanismo” (Vázquez García, 2001: 34-70), en particular luego de los resultados de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz efectuada en Chapultepec (México) entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 1945, en la que no participó el gobierno argentino a causa de su tardía aceptación de las antes referidas resoluciones de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las naciones integrantes de la Unión Panamericana.

A pesar de las resistencias que se expresaron en ese conclave hacia algunas propuestas “librecambistas” propugnadas por los representantes estadounidenses, como fue el llamado Plan Clayton (en referencia al subsecretario de Estado norteamericano William Clayton), mediante el Acta de Chapultepec y la Carta Económica de las Américas los 19 gobiernos latinoamericanos y caribeños participantes en la cita quedaron comprometidos a respaldar los esfuerzos estadounidenses por terminar la guerra, y adoptaron nuevas decisiones dirigidas a institucionalizar el llamado Sistema Interamericano, así como a reorganizar de manera acorde a los intereses de EE.UU. el “orden” y la institucionalidad política y económica internacional que emergería de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque con algunos disensos, esa subordinación se expresó durante la ya referida Conferencia de San Francisco en la que se fundó la ONU. En ella, la administración de Harry Truman, con el apoyo de los demás gobiernos del hemisferio occidental (incluido Canadá), logró que ese organismo internacional reconociera la vigencia *de facto* de la Doctrina Monroe y de “los acuerdos interamericanos” que se adoptarían al amparo de esa doctrina. Como se ha documentado, “lo anterior quedó consignado de manera tácita en aquellos artículos de la Carta de la ONU que refrendaron la existencia de ‘acuerdos y organismos regionales que fueran compatibles con los principios y propósitos del organismo internacional’” (Suárez Salazar, 2003b: 190).

En la base de esa situación estaba la creciente asimetría de poderes existentes entre EE.UU., Canadá y América Latina y el Caribe, tanto en el terreno estratégico como político-militar, tecnológico y económico-financiero. En efecto, a causa de la destrucción de la base productiva de sus aliados y competidores imperialistas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. concentraba el 60% de toda la producción del mundo capitalista (43% antes de la guerra), lo que se reflejó en una mayor subordinación de los estados nacionales ubicados al norte y sur de sus fronteras. Así, según las cifras disponibles, en 1946, los capitales privados estadounidenses ya controlaban el 100% de la extracción de mineral de hierro de América Latina y el Caribe; 9/10 partes de la extracción de cobre; 7/10 de la de plata; 2/3 de la de zinc; cerca de 3/5 de la

de petróleo; casi la mitad de la de manganeso y platino; más de 1/3 de la de plomo; así como 1/10 de la extracción y refinación de estaño, todavía controladas por los capitales británicos asociados con “los barones del estaño” enseñoreados en Bolivia (Avdakov et al., 1961: 427-428).

En tal estado de cosas tuvo una influencia decisiva la reiterada incapacidad de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas –incluida la burguesía industrial– para emprender proyectos *de desarrollo hacia adentro*. Dicha incapacidad (que ya se había puesto de manifiesto en el período que se inicia con la Primera Guerra Mundial y que asume sus características fundamentales durante la Gran Depresión) tuvo repercusiones para el continente que son catalogadas como “catastróficas” por diversos analistas. En particular, porque en esa etapa la demanda internacional de productos primarios perdió dinamismo. En consecuencia, las exportaciones mundiales sufrieron una reducción del 25% en volumen físico y del 30% en los precios.

Como la estructura productiva latinoamericana y caribeña se había ido conformando de acuerdo a las demandas del comercio exterior con las principales potencias imperialistas y con un alto componente de insumos importados, en el contexto de esa crisis no pudo satisfacer las demandas productivas. Entre otras razones, por la profunda contracción que –como se verá en el Cuadro 3– habían sufrido la relación de los términos de intercambio y la capacidad importadora de todo el continente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Como indicó Celso Furtado, “el brusco colapso de la capacidad para importar, la contracción del sector exportador y su baja rentabilidad y la obstrucción de los canales de financiamiento internacional provocados por la crisis modificaron el proceso evolutivo de las economías latinoamericanas” (Furtado, 1972: 90).

Cuadro 3

América Latina. Índice de intercambio externo en los períodos 1930-1934 y 1935-1939, en comparación con el período 1925-1929

Año	Quantum X	Términos de intercambio	Capacidad para importar
1925-1929	100	100	100
1930-1934	-8,8	-24,3	-31,3
1935-1939	-2,4	-10,8	-12,9

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar con base en datos de Furtado (1972: 40).

Obviamente, no todos los países tuvieron la misma capacidad para enfrentar esa situación, en tanto ya desde esa época resultaba evidente que la media latinoamericana de cualquier indicador socioeconómico

mico ocultaba importantes disparidades. Por ejemplo, el ingreso per cápita de Argentina se aproximaba al de algunos países de Europa; mientras que los de Haití y Bolivia estaban cercanos a los ingresos per cápita de buena parte de los países africanos. Por consiguiente, el ingreso per cápita de Haití apenas alcanzaba el 11% del ingreso per cápita de Argentina. Tal diferencia se profundizó durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que el *gap* existente entre el promedio de ingresos per cápita latinoamericano y el de EE.UU. Este último se incrementó de 695 dólares en 1939 a 1.526 en 1945 (Vázquez García, 2001: 25).

Tal diferencia no se modificó en los años posteriores, en razón de la escasa efectividad de las políticas de fortalecimiento de los mercados y las industrias nacionales emprendidas entre 1935 y 1950 por diversos países de América Latina, entre ellos los de mayor desarrollo relativo: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Esto provocó que se consolidara un sistema económico-productivo esencialmente dependiente y que EE.UU. encontrara las condiciones ideales para adquirir una articulación eficiente con su economía. Entre otras razones, porque tanto la primera fase de la industrialización de los países latinoamericanos mencionada en la lección anterior, como la fase de industrialización por sustitución de importaciones que se desarrolló con posterioridad a la Gran Depresión, aunque lograron elevar el coeficiente de industrialización de los principales países de América Latina, los dejaron atados a las importaciones de insumos y tecnología, lo que les impidió gestar un crecimiento económico autónomo. Mucho más porque –como se verá en el Cuadro 4– entre 1929 y 1957 se produjo una progresiva disminución del coeficiente de importaciones de los países de mayor desarrollo relativo del continente.

Cuadro 4
Evolución de los coeficientes de importación. Países seleccionados

Año	Argentina	México	Brasil	Chile	Colombia
1929	17,8	14,2	11,3	31,2	18,0
1937	13,0	8,5	6,9	13,8	12,9
1947	11,7	10,6	8,7	12,6	13,8
1957	5,9	8,2	6,1	10,1	8,9

Fuente: Furtado (1972: 90).

Esa disminución del coeficiente de importaciones fue acompañada por las depreciaciones cambiarias que desataron presiones inflacionarias, fenómeno que constituyó parte importante de la dependencia moneta-

ría que en esos años caracterizó (y todavía caracteriza) a las economías latinoamericanas y caribeñas. En especial, porque durante su participación en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que tuvo lugar entre el 1 y 22 de julio de 1944 en Bretton Woods (New Hampshire, EE.UU.), todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños subordinaron el tipo de cambio de sus correspondientes monedas respecto al dólar estadounidense y, por tanto, a la política monetaria de las autoridades de ese país.

Sin embargo, nada de lo dicho debe interpretarse como la aniquilación total de la capacidad de resistencia de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Por el contrario, el auge relativo que habían experimentado las principales naciones de América Latina y el Caribe a partir de 1939, a causa del mejoramiento coyuntural de los precios de sus principales productos de exportación, contribuyó a que algunos gobiernos de la región emprendieran diversas acciones dirigidas a consolidar el proceso de industrialización –fundado en la sustitución de importaciones– que se había venido desarrollando desde los lustros precedentes. Como parte de esos esfuerzos, y acorde con los complejos cambios ideológicos de la época (en particular el auge de las ideas democráticas provenientes del acelerado declive de los autoritarios postulados del nazi-fascismo), esos gobiernos también adoptaron diversas medidas orientadas a ampliar la participación política y mejorar los niveles de vida de la población. En particular, de los nuevos sectores socioclasistas (como la clase obrera y las extendidas clases medias urbanas) que habían surgido a causa de los cambios económicos, sociológicos y políticos antes referidos.

Entre esas experiencias siempre habrá que mencionar la política nacionalista, antiimperialista, popular y democrática seguida entre 1934 y 1940 en México, bajo la conducción del presidente Lázaro Cárdenas. A pesar de sus inconsecuencias, dicha política tuvo cierta continuidad durante el Gobierno de Unidad Nacional, presidido por Miguel Ávila Camacho (1941-1946). Este –bajo el persistente estímulo de Cárdenas, quien retuvo la cartera de Defensa– continuó impulsando una política exterior antifascista que, en ciertos ángulos, se alejó de los intereses de EE.UU. y otras potencias imperialistas europeas. También habría que incluir las contradictorias acciones nacionalistas emprendidas por el largo gobierno *nacional-burgués-populista* de Getúlio Vargas en Brasil (1930-1945). En particular luego de que, en 1938, abandonó las nefastas influencias nazi-fascistas y radicalmente anticomunistas que habían caracterizado la instauración del *Estado Novo* en 1937 (Cervo y Bueno, 2002: 245-248).

Como han indicado algunos autores –entre ellos Sergio Guerra Vilaboy–, a partir de ese momento, el gobierno de Vargas utilizó las con-

diciones creadas por la Segunda Guerra Mundial para impulsar, desde el Estado, diversos cambios sociales y económicos favorables a la burguesía industrial y a ciertos sectores populares –entre ellos la llamada “nueva clase obrera” surgida de las crecientes migraciones entre el campo y la ciudad que se produjeron en la década del treinta. También para defender los precios de los productos primarios (caucho, café, cacao) que exportaba Brasil, intentar desarrollar su inmenso potencial económico (acero e hidrocarburos) y diversificar sus múltiples dependencias frente a los monopolios de las principales potencias imperialistas, en particular frente a EE.UU. e Inglaterra. Fueron funcionales a esos proyectos las ingentes negociaciones realizadas por el gobierno de Vargas con el de EE.UU., con vistas a desarrollar su industria siderúrgica y ampliar las capacidades militares de Brasil, a cambio de la venta exclusiva de sus minerales estratégicos y su sostenido apoyo político-militar durante la Segunda Guerra Mundial (Cervo y Bueno, 2002: 248-267).

Aunque con éxitos variados, procesos similares se desarrollaron en otros países sudamericanos, centroamericanos y caribeños. Así, mediante vías electorales, llegaron al gobierno de algunos países de la región frentes populares antifascistas en los que adquirieron variada relevancia, según el caso, los partidos comunistas y otras fuerzas progresistas o de izquierda. Así ocurrió en Chile. Allí, luego de la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda (1938-1942), se formó la llamada “Alianza Democrática” (radicales y socialistas) que llevó al gobierno al presidente “socialdemócrata” Juan Antonio Ríos (1942 y 1946). Transitoriamente favorecidos por la alianza anglo-soviético-norteamericana en la lucha contra el nazi-fascismo y el militarismo japonés, ese gobierno –al igual que el de su antecesor– impulsó diversas políticas de corte nacionalista que posibilitaron que los partidos socialista y comunista acumularan importantes fuerzas dentro del movimiento popular y, en particular, en el movimiento obrero organizado. Símbolo de esa realidad fue la elección, en 1945 –como senadores de la República de Chile del entonces secretario general del Partido Socialista–, de Salvador Allende y el renombrado escritor comunista Pablo Neruda.

Algo parecido ocurrió en Costa Rica, donde el Partido Vanguardia Popular (comunista) estructuró importantes alianzas con los sucesivos gobiernos de Ángel Calderón Guardia (1940-1944) y Teodoro Picado (1944-1948). Paralelamente, en 1941, luego de derrotar “electoralmente” al gobierno del general Eleazar López Contreras (1935-1941) –sucesor de la prolongada dictadura del general Juan Vicente Gómez (1908-1935)–, llegó al gobierno de Venezuela el general Isaías Medina Angarita, quien hasta su derrocamiento, el 18 de octubre de 1945, adoptó diversas medidas favorables al movimiento obrero y popular. Asimismo, emprendió otras acciones dirigidas a ampliar el control nacional y estatal sobre la

explotación de las inmensas riquezas petroleras de su país. Entre ellas, una ley de hidrocarburos que elevó los impuestos que debían pagar al Estado venezolano los monopolios norteamericanos y los obligó a refinar en el país no menos del 10% del crudo extraído.

A su vez, en 1942, asumió nuevamente la presidencia de Colombia el liberal progresista Alfonso López Pumarejo. Al igual que en su primer mandato (1934-1938), impulsó importantes reformas sociales, económicas, políticas y jurídicas favorables a los intereses nacionales y populares, a saber: el desarrollo de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, la legalización del Partido Comunista colombiano y el fortalecimiento de la Central de Trabajadores de Colombia. Ellas contribuyeron a la amplia movilización popular que determinó el fracaso –el 10 de julio de 1944– de una asonada militar auspiciada por diversos sectores derechistas, y en particular por el declarado líder profascista del Partido Conservador, Laureano Gómez.

Por su parte, en Argentina, el 4 de junio de 1943, un golpe de Estado organizado por el ideológicamente heterogéneo Grupo de Oficiales Unidos (GOU) lanzó a la palestra política, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, al entonces coronel Juan Domingo Perón. Este, en 1945, luego de la renuncia a la presidencia del general Pedro Ramírez (causada por las violentas presiones norteamericanas ya referidas), pasó a ocupar el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia del gobierno del también general Edelmiro J. Farrell. A pesar de los mencionados acuerdos de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana, y de las presiones internas y externas de diversas fuerzas antifascistas, hasta los primeros meses de 1945, ese gobierno militar mantuvo su neutralidad en el conflicto bélico y comenzó a tomar diversas medidas orientadas a favorecer los intereses populares y nacionales, así como a romper la enorme dependencia de ese país hacia el Reino Unido y EE.UU. Esa política, favorable a los intereses nacionales y populares, se fortaleció a partir de 1946, luego de que Perón ocupó en forma constitucional la presidencia de la República. Ello a pesar de las descaradas injerencias en los asuntos internos argentinos del embajador estadounidense en Buenos Aires, Spruille Braden, y de las coacciones para que el país aceptara todos los acuerdos que habían sido adoptados por todos los gobiernos del hemisferio occidental participantes en la Conferencia de Chapultepec.

De modo paralelo, en Bolivia, en 1943, luego de una ola de huelgas y motines populares, fue derrocado el gobierno proimperialista del general Enrique Peñaranda (1939-1943). Lo sustituyó –con el apoyo de algunas “logias militares”– el mayor Gualberto Villarroel (1943-1946). A pesar de sus inconsecuencias, este emprendió diversas medidas contra la llamada “rosca”: los “barones del estaño” y la reaccionaria oligarquía

terrateniente que, durante más de un siglo, había expoliado y discriminado, de manera brutal, a la amplia población indígena y “chola” del país. También reconoció a la Unión Soviética, adoptó algunas medidas dirigidas a proteger los precios del estaño en el mercado mundial, promovió la organización de la combativa Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB), auspició la Reunión del Primer Congreso Nacional de Mineros y del Primer Congreso Indígena Boliviano.

Un año más tarde, el 4 de julio de 1944, luego de intensas y combativas movilizaciones populares, en Guatemala fue derrocada la larga dictadura del títere de la UFCO: el general Jorge Ubico (1931-1944). Este último fue transitoriamente sustituido por un represivo triunvirato militar y –luego de la llamada “Revolución de octubre de 1944”– por los sucesivos gobiernos progresistas, nacionalistas y antiimperialistas de Juan José Arévalo (1945-1950) y del coronel Jacobo Arbenz (1951-1954). Asimismo, antecedida por grandes represiones contra el movimiento popular y por el asesinato de importantes dirigentes opositores, también fue derrocada en El Salvador la prolongada y criminal satrapía del general Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944). Paralelamente, el 28 de mayo de 1944, en Ecuador, una sublevación popular (conocida como “La Gloriosa”) impuso el retorno al país y proclamó jefe supremo de la Nación al inestable caudillo populista José María Velasco Ibarra, quien cuatro años antes había sido desterrado por el fraudulento y represivo gobierno “constitucional” de Carlos Alberto Arroyo (1940-1944).

Un año después, en Perú, ganó las elecciones presidenciales José Luis Bustamante y Rivero con el respaldo del Frente Democrático Nacional, donde tenía una enorme influencia la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) dirigida –desde su fundación en 1924, hasta su muerte en 1979– por el “socialdemócrata” Víctor Raúl Haya de la Torre. Por su parte, en Venezuela, a fines de 1945, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, encabezados por los coroneles Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez, unidos a la dirección del entonces recién reorganizado Partido Acción Democrática (PAD), derrocaron –mediante un golpe de Estado– al gobierno del general Medina Angarita. Se instauró entonces una Junta de Gobierno presidida por el “socialdemócrata” Rómulo Betancourt, quien hasta las elecciones presidenciales de 1948 desplegó un amplio programa de renovación nacional.

A su vez, en Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago –como consecuencia de los violentos procesos político-sindicales referidos anteriormente, así como del ambiente ideológico generado por las luchas por la liberación nacional en otras colonias británicas (entre ellas, la India)– comenzaron a emerger diversos movimientos sociales y políticos interesados en romper, de forma más o menos radical, el vetusto “orden colonial” instaurado por el Reino Uni-

do en esas islas y territorios bañados por el Mar Caribe. Algo parecido ocurrió en Puerto Rico. En ese archipiélago –a pesar de la poderosa militarización de que fue objeto durante la Segunda Guerra Mundial, las constantes represiones contra el movimiento popular y las fuertes discrepancias entre los partidos políticos “nacionalistas”– los sectores independentistas acumularon crecientes fuerzas contra la dominación colonial impuesta por EE.UU. Pese a su prolongado encarcelamiento, en ese proceso desempeñó un decisivo papel el martirizado líder popular, antiimperialista e independentista Pedro Albizu Campos (1891-1965), quien –retomando las enseñanzas del padre de la lucha por la independencia de esa isla, Ramón Emeterio Betances (1830-1898)– unió las luchas anticoloniales de Puerto Rico con las contiendas populares, democráticas y antiimperialistas que entonces se desarrollaban en otras naciones de América Latina y el Caribe.

Aunque con diversas proyecciones políticas, el desarrollo y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial también estimularon los distintos movimientos autonomistas que actuaban en las posesiones coloniales holandesas (Aruba, Curazao, Saba y Surinam) y francesas (Guadalupe, Guyana Francesa y Martinica). Al calor de las radicales luchas antifascistas que se desarrollaban en Francia, y fruto de las políticas del gobierno popular que se instauró en París inmediatamente después de la derrota del Tercer Reich (mayo de 1945), en estas dos últimas islas las fuerzas de izquierda (en particular, los comunistas y los socialistas) adquirieron una redoblada presencia en la vida política de esa colonia. Todo esto favoreció que en 1946 se les reconociera, por primera vez en su larga historia colonial, el “privilegiado” carácter de Departamentos Franceses de Ultramar (DOM, por sus siglas en francés).

En tal contexto, en 1945, en Haití, animado por los jóvenes comunistas organizados a través del periódico clandestino *La Ruche* (*La Colmena*), se experimentó un ascenso de las luchas de las capas medias, reformistas y democráticas, con amplio apoyo obrero y campesino. Gracias al respaldo de esas fuerzas sociales, el 11 de enero de 1946 fue derrocada, mediante una sublevación popular, la férrea “dictadura civil” de Elie Lescot, apoyada por los sectores oligárquicos mulatos y el gobierno de EE.UU. Luego de un breve interregno bajo el precario control de una Junta Militar, llegó a la presidencia el representante del “ala negra de la oligarquía”, Dumarsais Estimé, quien con el apoyo estadounidense y de la *gendarmérie* procedió a la disolución de las organizaciones democráticas, estudiantiles y obreras. También reprimió a los líderes que habían encabezado el movimiento democrático de 1946 (Pierre-Charles, 1981: 39-41).

Ese proceso regresivo –al igual que otras situaciones antipopulares, dictatoriales y antidemocráticas que se produjeron en América

Latina y el Caribe entre 1945 y 1958– fue favorecido, luego de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, por la administración del demócrata Harry Truman. Bajo los presupuestos abiertamente reaccionarios, antisoviéticos y anticomunistas de la Doctrina Truman, así como de la denominada “política al borde de la guerra”, este inició la etapa de la historia contemporánea conocida con el apelativo de la “Guerra Fría” (1947-1989). A las implicaciones de la primera década de ese conflicto para las relaciones hemisféricas se dedicará la próxima lección.

Lección Seis

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DESDE EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

ESTA LECCIÓN ESTARÁ DEDICADA al estudio de las relaciones interamericanas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (14 de agosto de 1945, fecha en que finalmente se rindió Japón) hasta el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. En el orden global, ese período incluye la primera década de la que algunos autores han denominado “la Guerra Fría clásica”, formalmente iniciada en marzo de 1947 con la proclamación de la Doctrina Truman, mediante la cual los círculos de poder, los poderes fácticos y las sucesivas administraciones de esa fortalecida potencia imperialista (en especial, las encabezadas por Harry Truman y Dwight Eisenhower) convirtieron la llamada “contención del comunismo” y la denominada “estrategia al borde de la guerra” en el elemento articulador de su política interna, internacional y hemisférica, así como de sus diversas estrategias político-militares, político-diplomáticas, económicas e ideológico-culturales en todo el mundo (Trofimenko, 1987; González, 2003).

Paralelamente, y otorgándole continuidad a los acuerdos de la Conferencia de Chapultepec (febrero de 1945), esos fueron los años del apogeo del panamericanismo o, si se prefiere, de la fundación y rápida declinación de lo que, en 1954, el entonces canciller de Guatemala Guillermo Torriello Garrido denominó “nuevo panamericanismo”. En cualquier caso, un elemento central de esos procesos fue la celebración

de la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, entre el 15 de agosto y el 3 de septiembre de 1947, a la cual no fue invitado el gobierno de Canadá. Por consiguiente, como fruto de las deliberaciones de esa conferencia, los gobiernos de EE.UU. y de los veinte estados nacionales entonces formalmente independientes de América Latina y el Caribe (incluido el gobierno peronista de Argentina, que ya había aceptado los acuerdos de Chapultepec) suscribieron el mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Este entró en vigor en diciembre de 1948. Es decir, siete meses después de la realización en la capital colombiana, entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de ese mismo año, de la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos en la que los representantes de esos mismos estados fundaron la Organización de Estados Americanos (OEA), suscribieron el Tratado Americano de Solución Pacífica (también conocido como Pacto de Bogotá) y aprobaron un inoperante Convenio Económico. Este último fue originado por las reiteradas e insatisfechas demandas de algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños, dirigidas a obtener un trato especial por parte de EE.UU. con vistas a resolver las cada vez más acuciantes manifestaciones del subdesarrollo del sur del continente, al igual que como “recompensa” por la importante ayuda política, económica, de defensa y seguridad que le habían ofrecido a la potencia hegemónica en el hemisferio occidental durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de sucesivas e incumplidas promesas al respecto, tal demanda pudo ser fácilmente rechazada por el entonces secretario de Estado norteamericano, el ex general George Marshall, gracias a la perenne desunión de los representantes oficiales latinoamericanos y caribeños. También gracias a la exitosa ofensiva contrarreformista y contrarrevolucionaria que, en los tres años previos, había desplegado el *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU., en consuno con las fuerzas socioeconómicas y político-militares más reaccionarias del continente. A esa ofensiva oligárquico-imperialista contra todos los gobiernos progresistas, nacionalistas (y en algunos casos populares) mencionados en la clase anterior, sólo pudieron sobrevivir temporalmente los encabezados por Juan Domingo Perón (1946-1955) y Juan José Arévalo (1945-1951) en Argentina y Guatemala, respectivamente, así como los timoratos gobiernos encabezados por Miguel Ángel Alemán (1946-1952) en México y Ramón Grau San Martín (1944-1948) en Cuba.

Por ello, no fue extraño que la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos aprobara su poco conocida Resolución XXXII. En contradicción con la propia Carta de la OEA (fundada en el principio de la autodeterminación y la no intervención en los asuntos internos y

externos de sus estados miembros), dicha resolución declaró que, “por su naturaleza y por su tendencia intervencionista, la acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo es incompatible con la concepción de la libertad americana” (Vázquez García, 2001: 141). En consecuencia, y siguiendo la letra del TIAR, en su resolución XXXIV se acordó que la Junta Interamericana de Defensa (JID), fundada en 1942, “continuara actuando como órgano de preparación para la legítima defensa colectiva contra la agresión hasta que los Gobiernos Americanos, por una mayoría de dos terceras partes, resuelvan dar por terminadas sus labores”. Asimismo, que ese órgano militar –al margen de los poderes civiles– “formulara su propio reglamento de organización y de trabajo” para emprender las “labores que le competen” o que eventualmente pudiera “delegarle” el Comité Consultivo de Defensa incorporado en uno de los artículos de la Carta de la OEA (Vázquez García, 2001: 138-139).

De más está decir que –en correspondencia con el llamado Plan Truman de fines de 1945 y con las prácticas *macartistas* que ya se estaban desplegando en la sociedad estadounidense– ambas resoluciones fueron instigadas por el secretario de Estado norteamericano George Marshall y el reaccionario ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y posterior presidente Laureano Gómez. Este último es sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato –el 9 de abril de 1948– del carismático líder popular colombiano Jorge Eliecer Gaitán. También como el máximo responsable de las acusaciones que se formularon contra el Partido Comunista Colombiano y contra algunos de los participantes en un Congreso Estudiantil Latinoamericano que se realizaría en Bogotá (entre ellos, Fidel Castro), señalándolos como los instigadores de la violenta y desorganizada asonada popular que pasó a la historia con el apelativo de “Bogotazo” (Alape, 1983).

Tal como ha indicado Luis Suárez Salazar, la brutal represión desatada en esa ocasión contra el movimiento popular permite afirmar que “la OEA nació manchada con la sangre del pueblo colombiano” (2003b: 198). Se comparta o no esa afirmación, lo cierto fue que, inspirados por sus propias ideas reaccionarias y estimulados por los mencionados acuerdos anticomunistas de la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, bajo la responsabilidad de los gobiernos de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez (1950-1951) y Roberto Urdaneta (1951-1953), entre abril de 1948 y junio de 1953, fueron asesinadas en Colombia entre 200 y 300 mil personas, incluidos ancianos, mujeres y niños. La mayor parte de ellas como fruto de la violencia oficial o de los grupos paramilitares (entonces llamados “pájaros”) amamantados por esos gobiernos del Partido Conservador (Díaz Callejas y González Arana, 1998).

Esa impronta anticomunista se extendió a todo el hemisferio e impregnó el desarrollo de las relaciones interamericanas en los años sucesivos. Así, en 1949, bajo “fuerte presión del gobierno estadounidense” y siguiendo sus propios análisis de la nueva realidad internacional, el premier liberal canadiense Louis Stephen Saint-Laurent decidió sumar a su país a la entonces naciente OTAN, fundada por EE.UU. y sus principales aliados europeos (todos beneficiados por el Plan Marshall iniciado en 1947) como parte de sus múltiples dispositivos político-militares dirigidos a “contener el comunismo” (Rosas, 2005).

En consecuencia, junto a los del gobierno estadounidense, los representantes canadienses se opusieron en el seno del recién surgido Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC, por sus siglas en inglés) a las exitosas gestiones de los gobiernos latinoamericanos que culminaron con la fundación de la CEPAL, el 28 de febrero de 1948, con “la misión de propiciar medidas destinadas a facilitar una acción concertada para enfrentar los urgentes problemas económicos derivados de la guerra y elevar el nivel de actividad económica de la región” (CEPAL, 2005: 32). Esa decisión del gobierno canadiense contribuyó a prolongar por veinte años más “el largo siglo de aislamiento de Canadá” del hemisferio occidental (Stevenson, 2000).

En el propio año 1948, en Venezuela, fue derrocado mediante un golpe de Estado –encabezado por los generales Carlos Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez– el fugaz presidente y prestigioso novelista Rómulo Gallegos, y en Perú se instaló la dictadura militar de Manuel Odría (1948-1956). Un año después, el jefe de la pomposamente llamada Junta Fundadora de la Segunda República de Costa Rica, el socialdemócrata anticomunista José Figueres, aplastó una nueva sublevación de sus opositores políticos y aprobó una reforma constitucional por medio de la cual fue ilegalizado el Partido Vanguardia Popular (comunista) de Costa Rica, partícipe –como se vio en la lección anterior– del gobierno de coalición que en 1948 había sido derrocado mediante una sublevación político-militar apoyada por lo que quedaba de la llamada “Legión del Caribe”. Esta había sido organizada en 1947, con vistas a derrocar al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Por otra parte, en 1950, y mientras esperaba los resultados de una mediación de la OEA en torno a un nuevo conflicto fronterizo provocado por ese gobierno tiránico de República Dominicana, en Haití, fue derrocado mediante un golpe de Estado el ya débil y antipopular gobierno de Dumarsais Estimé. Lo sustituyó el general Paul Magloire, quien luego de dictar una nueva Constitución resultó “electo” para la presidencia de ese empobrecido país caribeño. Acto seguido, se incorporó al “combate contra el comunismo internacional”. Con tal fin, y al igual que su antecesor, bajo tutela del gobierno estadounidense, se

reunió de inmediato con el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo para resolver en forma amigable las disputas fronterizas existentes entre ambos países. Adicionalmente, en 1952, firmó un tratado de libre comercio y navegación con EE.UU.

Sin dudas, todos los acontecimientos antes mencionados y otros excluidos en aras de la síntesis facilitaron el respaldo de la abrumadora mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños a la ya mencionada Doctrina Truman. Tal obsecuencia se hizo ostensible antes y durante la guerra provocada por EE.UU. contra el pueblo de la ya dividida península de Corea (1950-1953). En efecto, en junio y diciembre de 1950, la OEA aprobó unánimemente sendas resoluciones por medio de las cuales se reafirmaban “los compromisos de solidaridad que unen a los Estados Americanos”. Sobre la base de ellas, en marzo de 1951, se efectuó en Washington la Cuarta Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los países integrantes del ya denominado Sistema Interamericano. Según el presidente Harry Truman, la importancia y urgencia de ese cónclave venía dada porque, mediante el conflicto coreano, “el imperialismo comunista estaba amenazando la paz, la seguridad y la libertad de todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos” (Truman en Espinoza García, 1971: 69).

Por consiguiente, ese cónclave aprobó la Resolución sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Interior, de factura *macartista*. Por medio de ella, los gobiernos que la respaldaron quedaron comprometidos a reforzar sus fuerzas armadas de “la mejor manera que convenga a la defensa colectiva”, así como a mantener sus fuerzas militares “en estado de disponibilidad inmediata para la defensa del continente”. Esa cooperación entre sus correspondientes ejércitos también permitiría “desarrollar la potencia colectiva de las Américas para combatir cualquier agresión dirigida contra alguno de los países ubicados en ambas partes del hemisferio occidental” (Espinoza García, 1971: 70). Ello le posibilitó al complejo militar-industrial estadounidense vender a la región el material de guerra que le había quedado como excedente luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, así como realizar un nuevo despliegue de centenares de asesores militares que ejercieron un nefasto papel en la conformación de los represivos ejércitos de la mayoría de los países de la región. De este modo, entre 1952 y 1955, doce gobiernos latinoamericanos (entre ellos, ocho de la Cuenca del Caribe) firmaron convenios de asistencia militar con EE.UU. en el ámbito del Programa de Seguridad Mutua, que desde 1945 venía impulsando la administración de Harry Truman (Pierre-Charles, 1981: 47).

Además, al igual que había ocurrido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y después de la Conferencia de Chapultepec de 1945, los gobiernos latinoamericanos y caribeños también se comprometieron al

aumento de la producción y la transformación de “las materias primas de base y de [los] materiales estratégicos necesarios para la defensa colectiva” del hemisferio occidental. Asimismo, aceptaron venderlos a EE.UU. a “precios razonables”. A cambio, y en correspondencia con los demagógicos planes de “ayuda” a los países del Tercer Mundo que en enero de 1949 había anunciado la administración de Harry Truman (el llamado “Punto IV”), de manera intencionalmente ambigua, la Casa Blanca prometió a sus vecinos del Sur “ayuda técnica y financiera especial cuando esta fuera necesaria y conveniente” (Ayerbe, 2001).

Huelga decir que las resoluciones mencionadas y los diversos acuerdos militares o económicos bilaterales surgidos de estas fortalecieron aún más la dependencia política, económica, tecnológica, financiera y militar de América Latina y el Caribe hacia EE.UU. A tal grado que contingentes militares de Colombia y Brasil participaron junto a las fuerzas armadas norteamericanas en el lejano conflicto coreano y que los monopolios estadounidenses pudieron adquirir y acumular inmensas reservas de materias primas estratégicas que –violando los acuerdos de la Conferencia de Chapultepec y el Convenio Económico de Bogotá– pronto vendieron, directamente y a precios de *dumping*, a las naciones de Europa Occidental beneficiadas por el multimillonario Plan Marshall.

Esa situación profundizó aún más los crónicos desequilibrios de la balanza comercial y de pagos de los países latinoamericanos y caribeños. Como venía ocurriendo desde el siglo XIX y comienzos del XX, esas “brechas”, así como los continuos déficits fiscales, eran “cerrados” con fondos provenientes de los leoninos créditos otorgados por la banca comercial estadounidense y las jugosas inversiones realizadas por otros monopolios norteamericanos. En consecuencia, las inversiones directas, provenientes de EE.UU., saltaron de 2.800 millones de dólares en 1940 a 4.400 en 1950 (Ayerbe, 2001: 83). A ello se unió la progresiva preeminencia del dólar estadounidense en las transacciones internacionales, puesto que servía de unidad de cuenta y de medio de pago y atesoramiento en las reservas internacionales del continente. Esto le permitió (y le sigue permitiendo) a EE.UU. utilizar el tipo de cambio del dólar –que, desde los Acuerdos de Bretton Woods, se ha mantenido como prerrogativa nacional no sujeta a acuerdos internacionales– como mecanismo de control y regulación, desde su propio país, de las reservas mundiales.

Esa dependencia estructural y funcional hacia la potencia hegemónica en el hemisferio occidental –junto al constante empeoramiento de las condiciones de vida de inmensos contingentes de la población– despertó una nueva ola de resistencia al sistema de dominación colonial y neocolonial instaurado en América Latina y el Caribe. En esa última región las resistencias fueron de tal magnitud que tanto EE.UU. como Gran Bretaña y Holanda se vieron obligados a introducir modificaciones

jurídico-políticas en todas sus posesiones coloniales. En el caso de Puerto Rico, el gobierno norteamericano instauró el llamado Estado Libre Asociado (ELA), fórmula con la que todavía enmascara su dominación colonial sobre ese archipiélago. A su vez, Gran Bretaña y Holanda dieron inicio a dilatados procesos de “independencia negociada” con los líderes políticos de sus diversas colonias caribeñas. Como se podrá ver en el Anexo 1, esas negociaciones vinieron a concluir, en el caso de la mayor parte de las colonias británicas y de Surinam, en la década del ochenta.

A ese proceso de descolonización del Caribe se volverá en la próxima lección. Ahora es preciso acentuar que, previo o en paralelo al desarrollo de la Guerra de Corea, se produjeron importantes cambios políticos en diversos países latinoamericanos que en los años posteriores tuvieron contradictorias implicaciones en las relaciones interamericanas. Entre ellos, la victoria en las elecciones presidenciales paraguayas de 1950 del dirigente del Partido Colorado, Federico Chaves. Este, tras dictar una amplia amnistía para los presos políticos, promulgó diversas leyes sociales y, contra el criterio de EE.UU., comenzó a elaborar una alianza con el vecino gobierno nacionalista de Juan Domingo Perón. Este último, por su parte, luego de promulgar la Constitución de 1949 –que por primera vez en la historia argentina entregó derechos políticos y electorales a las mujeres y refrendó las principales vindicaciones gremiales de los trabajadores–, aprovechó las favorables condiciones económicas del país para iniciar una acelerada política de reducción de la deuda externa, pasar al poder del Estado las principales empresas públicas (la mayor parte en propiedad de capitales británicos) y emprender un acelerado plan de industrialización. Igualmente, impulsó una política exterior independiente de los dictados políticos y militares de la Casa Blanca y fortaleció las medidas proteccionistas frente a las pretensiones de los monopolios estadounidenses –en especial, de la Standard Oil of New Jersey– por controlar las reservas de hidrocarburos de ese país.

Paralelamente, en enero de 1951, con una aplastante victoria electoral, asumió nuevamente el gobierno de Brasil el nacional-burgués-populista Getúlio Vargas, que –al igual que había hecho en los últimos años de su primer mandato– emprendió diversas acciones dirigidas a defender las riquezas nacionales del país. Además, diseñó un nuevo “pacto social” con importantes sectores de la burguesía industrial y la clase obrera. En ese mismo año, fue electo presidente de Guatemala el ex coronel Jacobo Arbenz. Con el respaldo de diversas fuerzas políticas y sociales del país –incluido el pequeño Partido Guatemalteco del Trabajo (de orientación comunista)–, inició un amplio programa de transformaciones económicas y sociales profundamente refractarias al ilimitado poder que hasta entonces habían mantenido sobre la economía y la sociedad guatemalteca algunos monopolios norteamericanos

(como la United Fruit Company), en estrecha alianza con los sectores más reaccionarios y racistas de la oligarquía de ese país.

A su vez, en abril de 1952, en Bolivia, luego de un lustro de sangrientas represiones e inestabilidad política –acrecentada por el desconocimiento oficial de la victoria electoral del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la entrega del poder a una Junta Militar–, estalló una potente revolución popular. Fue encabezada por el líder reformista del MNR, Víctor Paz Estenssoro. A pesar de sus inconsistencias políticas, y ante la presión popular, se nacionalizaron las riquezas mineras que estaban en manos de los barones del estaño, se atendieron diversas vindicaciones de los trabajadores mineros y se inició una reforma agraria que entregó importantes, aunque insuficientes, extensiones de tierra a la población campesina e indígena. El radicalismo de dicho proceso también se expresó en la transitoria sustitución del ejército profesional por una milicia popular, en la que tenían una fuerza decisiva los combativos trabajadores mineros.

Por su parte, en Cuba –a pesar de la sangrienta represión contra el movimiento obrero desatada por los corruptos gobiernos democrático-representativos de Ramón Grau San Martín (1944-1948) y Carlos Prío Socarrás (1948-1952)– fue necesario un nuevo golpe de Estado militar (10 de marzo de 1952) para, entre otras cosas, frustrar las inmensas posibilidades de que fuera electo el candidato presidencial del popular Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), fundado en 1948 bajo la consigna “Vergüenza contra dinero” por el malogrado líder popular Eduardo Chibás. Ese golpe de Estado fue comandado, otra vez, por el general Fulgencio Batista, quien inmediatamente contó con el reconocimiento y la ayuda económica y militar de sus tradicionales mentores: los círculos de poder, los poderes fácticos y diversos gobiernos temporales de EE.UU.

Con todas esas situaciones se encontraron el presidente republicano Dwight Eisenhower y su reaccionario vicepresidente Richard Nixon cuando inauguraron su mandato en 1953. Para diferenciar su política latinoamericana y caribeña de la de sus antecesores demócratas, así como para marcar el lugar privilegiado que ocuparían en su diseño las grandes corporaciones estadounidenses, dicha política comenzó a identificarse como “la Política del Buen Socio”. En consecuencia, se disminuyeron de manera sensible los menguados fondos de la ahora llamada Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) que, como parte de la “estrategia de contención al comunismo”, la administración precedente había prometido a los gobiernos latinoamericanos y caribeños. En su lugar, demandó a estos gobiernos la creación de “un clima amigable” para los capitales privados estadounidenses que se colocaran en sus correspondientes naciones.

Con el propósito de crear las condiciones para impulsar esa política, y en correspondencia con la persistente “estrategia de contención al comunismo”, al igual que con el objetivo de desarrollar “la libre empresa”, la diplomacia norteamericana fortaleció sus vínculos con todas las dictaduras militares y con las *democracias represivas* que ya existían en la región. De igual forma, comenzó a presionar, desestabilizar o sustituir –según el caso– a los gobiernos refractarios a su estrategia hemisférica y mundial. Esta última estaba signada por el concepto –tenazmente defendido por el vicepresidente Richard Nixon– de que “la Tercera Guerra Mundial había comenzado antes de que terminara la Segunda” (Nixon, 1980), así como por el despliegue de una política “al borde de la guerra” y la consiguiente amenaza de emprender una “represalia nuclear masiva” contra la URSS y el entonces llamado “campo socialista” (Trofimenko, 1987: 75-85).

En ese contexto, uno de los primeros actos del dúo Eisenhower-Nixon fue respaldar una intervención militar británica contra el fugaz gobierno (duró 133 días) del destacado líder independentista y socialista del pueblo guyanés, Cheddi Jagan, quien luego de haber fundado, en 1950, el Partido Progresista del Pueblo (PPP) obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias de fines de 1952. En consecuencia, a partir de abril de 1953, el PPP fue ilegalizado y reprimido, se suspendió la vigencia de la Constitución colonial de 1948 y se implantó en esa nación bañada por el Mar Caribe una “dictadura del Departamento de Colonias británico” (Pierre-Charles, 1981).

Sin embargo, el caso más emblemático de la Política del Buen Socio hacia América Latina y el Caribe fue la invasión mercenaria organizada y ejecutada por el Pentágono y la CIA, en junio de 1954, contra el gobierno democrático, popular y nacionalista guatemalteco, presidido por Jacobo Arbenz. En respuesta a las ya mencionadas acciones desarrolladas por ese mandatario para defender los intereses nacionales, y en particular frente a la reforma agraria que en 1952 expropió las tierras no cultivadas de la United Fruit Company, el *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU. comenzó a conspirar con las fuerzas reaccionarias (incluidos los sectores más derechistas de las fuerzas armadas y la alta jerarquía de la iglesia católica), así como con los gobiernos dictatoriales centroamericanos (entre ellos, las dictaduras de Anastasio Somoza García y Julio Lozano Díaz, en Honduras), para derrocar violentamente al gobierno popular guatemalteco.

Las vacilaciones de Jacobo Arbenz (quien nunca se decidió a entregar las armas al pueblo), la traición de amplios sectores de las fuerzas armadas (previamente comprometidos con la Embajada estadounidense), junto con los indiscriminados bombardeos efectuados por pilotos y aviones de guerra estadounidenses –que partían desde

las bases militares estadounidenses ubicadas en la zona del Canal de Panamá y eran reabastecidos en los aeropuertos de Nicaragua— contra la población civil y sobre algunas de las principales ciudades guatemaltecas terminaron de forma sangrienta esa experiencia reformista y nacionalista. En consecuencia, fue instituida una Junta Militar encabezada por el jefe de la expedición mercenaria, el agente de la CIA y ex coronel Castillo Armas, quien —con asesoría estadounidense— creó el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo; se emitió la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo y, sobre sus bases, se desató una “ola de terror blanco” en todo el país.

Acorde con los contenidos de esta lección es preciso destacar que, en la preparación de las condiciones políticas y diplomáticas que posibilitaron ese desenlace de la Operación Guatemala —bautizada por la CIA como “Operación Éxito”— desempeñó un importante papel el Sistema Interamericano, y en particular la OEA. En efecto, en la Décima Conferencia Internacional de Estados Americanos efectuada en Caracas (Venezuela) en marzo de 1954, el entonces secretario de Estado estadounidense, John Foster Dulles, propuso una resolución titulada “Acerca de la Injerencia del Comunismo Internacional en los Asuntos de las Repúblicas Americanas”. A pesar de las resistencias del entonces canciller guatemalteco, Guillermo Toriello, de sus denuncias acerca de que esa resolución iba enfocada a propiciar la intervención norteamericana en los asuntos internos de su país, así como de la defensa de la acción de su gobierno acudiendo expresamente a los principios consagrados en la Carta de la OEA (Toriello Garrido, 1954), la conferencia aprobó por dieciocho votos favorables, uno en contra (Guatemala) y dos abstenciones (Argentina y México) la Declaración de Caracas. Según esta, “la dominación o el control de un Estado por el comunismo ponía en peligro la paz y la seguridad de las Américas”, lo que podría justificar una acción coercitiva más o menos “colectiva” por parte de los estados integrantes de la organización hemisférica. Según planteó el diplomático inglés R. Steel —independientemente de su empleo inmediato en el caso de Guatemala—, la Declaración de Caracas “inscribió el anticomunismo en la definición del panamericanismo” (Steel, 1967: 202).

Aunque, como se indicó, el anticomunismo había sido incluido en una resolución de la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos efectuada en Bogotá, así como en la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA efectuada al fragor de la Guerra de Corea, lo cierto fue que los acuerdos de la Conferencia de Caracas establecieron un precedente que, en adelante, sería empleado por sucesivos gobiernos de EE.UU. y sus aliados y satélites del hemisferio occidental contra otros países latinoamericanos y caribeños, ya que de *jure* y de *facto* el Sistema Interamericano se alejó

de la letra y el espíritu de aquellos artículos de la Carta fundacional de la OEA, que reconocían los principios de la soberanía y la autodeterminación de los países de la región. También de los que habían proscripto la intervención en los asuntos internos y externos de las naciones del continente, así como el empleo de la coerción o la fuerza para solucionar las discrepancias que surgieran entre los estados miembros de esa organización hemisférica.

De allí que –siguiendo a Torriello– pueda afirmarse que la Décima (y última) Conferencia Internacional de Estados Americanos acabó con las esperanzas que los postulados de la Carta de Bogotá habían despertado en algunos gobiernos y fuerzas políticas latinoamericanas.

El baldón que cayó sobre los gobiernos que respaldaron la Declaración de Caracas fue mayor porque, tan pronto el Secretario de Estado estadounidense consiguió su aprobación, se marchó de la capital venezolana sin atender los temas económicos que teóricamente también debía resolver esa conferencia (Suárez Salazar, 2003b: 217).

En consecuencia, y como ya había ocurrido durante una Conferencia Económica de la OEA realizada en Río de Janeiro en 1954, la demanda de los gobiernos latinoamericanos y caribeños de que EE.UU. les otorgara un trato económico especial y creara el Fondo para el Desarrollo Interamericano (propuesto por la CEPAL) de hecho quedó pospuesta hasta después del triunfo de la Revolución Cubana (Lechuga, 1991: 5).

En tanto, la Política del Buen Socio se orientó a derrocar los gobiernos de Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón. También a fortalecer su dominación sobre Paraguay. En este último país, el 4 de mayo de 1954, con el apoyo de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado y las fuerzas armadas, un golpe de Estado derrocó al gobierno “properonista” de Federico Chaves. A su vez, el 24 de agosto de 1954, y en respuesta a las medidas nacionalistas que había adoptado en su nuevo mandato (entre ellas, la fundación de la entidad estatal Petróleo Brasileño SA), un nuevo movimiento político-militar provocó el suicidio de Getúlio Vargas. Un año después, el 19 de septiembre de 1955, una violenta sublevación militar derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón.

Como se ha documentado, todos esos brutales “cuartelazos” fueron apoyados por las oligarquías y las altas jerarquías de la iglesia católica de dichos países, así como propiciados por las embajadas norteamericanas en Asunción, Río de Janeiro y Buenos Aires. De ahí que, luego de diferentes maniobras, el gobierno y los monopolios estadounidenses apoyaran a los gobiernos “constitucionales” de Jóao Café Filho (1954-1955) y Juscelino Kubitschek (1956-1960) en Brasil, así como a las dictaduras militares de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) y el

general Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958) en Argentina. Este último disolvió de inmediato el Partido Justicialista (fundado por Perón en 1947), abolió la referida Constitución “peronista” de 1949, reinstauró la Constitución oligárquica de 1853, realizó concesiones al capital privado extranjero y dio consistentes pasos para normalizar las relaciones de Argentina con el Sistema Interamericano.

Todos los procesos mencionados –junto al férreo bloqueo de las ventas de estaño al mercado mundial– contribuyeron a estrechar el potente cerco político, diplomático, económico y militar tendido por EE.UU. y Gran Bretaña contra la Revolución Boliviana de 1952. Ese aislamiento, junto a las grandes inconsecuencias de sus principales líderes –en especial, de los presidentes Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) y Hernán Siles Suazo (1956-1960)–, fue cercenando rápidamente el aliento antioligárquico y antiimperialista de esa insurrección popular. A decir de Raúl Ruiz González (1964), también fue remachando “las cadenas de la dependencia” que desde su advenimiento a la vida republicana habían mantenido atado “al Prometeo de los Andes al mercado capitalista mundial y, específicamente, al mercado norteamericano”.

Una temprana expresión de esa subordinación fue la rápida reestructuración del ejército, la promulgación por parte del llamado “primer gobierno de la revolución nacional” (1952-1956) de un Código de Minería que –con excepción del estaño– nuevamente entregó las inmensas riquezas minero-energéticas del país (en especial, el oro y el petróleo) a los principales monopolios estadounidenses y la simultánea aplicación de un draconiano plan de estabilización económica “regido dictatorialmente por el Fondo Monetario Internacional” (FMI) –organismo financiero que, junto al Banco Mundial y bajo la égida norteamericana y de otras potencias imperialistas europeas, había sido fundado en 1946 supuestamente como parte del sistema de la ONU.

Con el derrocamiento de los gobiernos nacionalistas de Argentina, Brasil, Guatemala y Paraguay, con la progresiva neutralización de los ímpetus iniciales de la Revolución Boliviana y de los mandatarios mexicanos sucesores del “cardenismo”, con el fortalecimiento de la cadena de dictaduras militares o de los gobiernos civiles autoritarios que prevalecían en todo el continente y con el apaciguamiento del radicalismo de los movimientos anticolonialistas en el Caribe –en especial luego de la referida intervención militar inglesa contra la primera victoria electoral del PPP en Guyana y la cruenta represión al movimiento independentista de Puerto Rico– parecía que, finalmente, la administración de Dwight Eisenhower –apoyada por las plutocracias locales, la OEA y sus principales aliados de la OTAN– había logrado instaurar la *Pax Americana*.

En consecuencia, en 1956, por primera vez en la historia, un presidente estadounidense se reunió con casi todos sus homólogos lati-

noamericanos y caribeños con el cínico pretexto de celebrar, en Panamá, el 130 aniversario del Congreso Anfictiónico convocado, entre el 22 de junio y el 5 de julio de 1826, por el Libertador Simón Bolívar para impulsar –como se vio en la segunda lección– una confederación de repúblicas latinoamericanas y contribuir a la independencia de Cuba y Puerto Rico del dominio colonial español. Como indicó Gordon Connell-Smith (1977: 134-135), con la convocatoria de la Cumbre Panamericana de Panamá, los círculos gubernamentales de EE.UU. y en particular el presidente Eisenhower seguían cultivando el fraudulento mito de que “Simón Bolívar [había sido] el padre del panamericanismo”.

Merece la pena consignar que los únicos mandatarios latinoamericanos y caribeños que no concurrieron a esa cita fueron los entonces dictadores de Colombia y Honduras, Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y Julio Lozano Díaz (1954-1956), respectivamente. Los dos vivían serias crisis políticas en sus correspondientes países. Estas eran de tal magnitud que Rojas Pinilla, para mantenerse en el gobierno durante un año más, debió acudir al despliegue de violentas medidas represivas; y Lozano Díaz fue derrocado, el 21 de octubre de 1956, tras una violenta sublevación popular que únicamente pudo ser aplacada por otro de los tantos golpes y contragolpes de Estado que han caracterizado la vida política de esa peyorativamente llamada “república bananera”.

Una suerte parecida a la de Lozano Díaz corrió uno de los asistentes al cónclave “panamericano” de Panamá: el dictador peruano Manuel Odría. Días después de esa cumbre, grandes huelgas populares y una sublevación militar provocaron su derrocamiento. Entonces se instauró una Junta Militar que, luego de convocar a nuevas elecciones, dio paso al segundo gobierno oligárquico y proimperialista de Manuel Prado y Ugarteche (1956-1962). Este contó con el vergonzoso apoyo de la APRA y de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien –renegando del programa original de su partido– respaldó la represión desatada contra la ola de huelgas, manifestaciones antigubernamentales y ocupaciones de tierras que sacudieron a ese país durante 1957 y 1958.

Por consiguiente, como se verá en el Cuadro 5, ninguno de los acontecimientos antes reseñados impidieron que, en lo inmediato, la oligarquía financiera y el gobierno de EE.UU. mantuvieran un férreo control sobre la vida económica y política de la absoluta mayoría de los estados latinoamericanos y caribeños. Por el contrario, en Argentina, luego de haber cumplido su labor represiva, en 1957, el gobierno militar instaurado desde 1955 convocó a nuevas elecciones, en las que resultó electo –con la anuencia de los sectores de derecha del “peronismo”– el dirigente de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi. Este entregó de inmediato (en forma secreta) importantes yacimientos petrolíferos del país a las compañías norteamericanas. También –ase-

sorado por el FMI– comenzó a implementar el llamado Plan de Estabilidad y Desarrollo, cuyo principal propósito fue la eliminación de todos los controles estatales y la progresiva destrucción de la generosa política social heredada del derrocado gobierno de Juan Domingo Perón.

Cuadro 5

Inversiones estadounidenses en América Latina y el Caribe, 1951-1960
(en miles de millones de dólares)

Período	Inversiones de EE.UU. en América Latina* (1)	Remesas de utilidades a EE.UU. (2)	Saldo neto (2-1)
1951-1955	1.751	3.961	2.210
1956-1960	3.332	4.539	1.207
Total	5.083	8.500	3.417

Fuente: Espinoza García (1971: 186).

* Incluye las reinversiones de utilidades.

Paralelamente, en Bolivia, el llamado “segundo gobierno de la revolución nacional”, presidido por Hernán Siles Suazo (1956-1960), admitió que numerosos asesores norteamericanos emprendieran la reestructuración de los organismos y empresas estatales del país. A su vez, con apoyo del Pentágono, continuó fortaleciendo las fuerzas armadas. También entregó importantes concesiones petroleras y auríferas a los monopolios estadounidenses.

Paralelamente, en Colombia, la irreversible crisis de la represiva y sangrienta dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) fue sofocada mediante otro golpe militar, encabezado por los generales Gabriel París y Diogracia Fonseca. Para hacerle frente al auge del movimiento guerrillero rural, así como para neutralizar las crecientes protestas de amplios sectores ciudadanos contra la continuación de la violencia, estos facilitaron el retorno al gobierno de las reaccionarias cúpulas de los partidos Liberal y Conservador, organizados a partir de 1958 en el denominado Frente Nacional. Por medio de ese plutocrático frente, ambos partidos se distribuyeron simétricamente el “botín burocrático” y acordaron alternarse durante dieciséis años el ejercicio de la presidencia de la República. En la elaboración de esa antidemocrática componenda, desempeñaron un papel central los furibundos anticomunistas Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Este último, inmediatamente antes de firmar ese pacto político y de ser “electo” como presidente (1958-1962), había sido el secretario general de la OEA.

Esa cadena de dictaduras militares o de gobiernos civiles obsecuentes con EE.UU. se fortaleció con la “reelección” del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez y del hermano del sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo: Héctor Bienvenido Trujillo (1952-1960). A su vez, en septiembre de 1957, luego de una nueva etapa de inestabilidad política, con el apoyo de la oligarquía negra y de EE.UU., resultó “electo” como presidente de Haití el tristemente célebre dictador François Duvalier. Por su parte, el gobierno proimperialista de Juscelino Kubitschek autorizó la instalación temporal de bases militares norteamericanas en el noroeste de Brasil. También comenzó, poco a poco, a emplear una retórica “desarrollista” en la cual –a su decir– le correspondía un destacado papel a la “cooperación internacional [...] al armonioso intercambio comercial, a la canalización de un mayor flujo de inversiones extranjeras, al incremento de la asistencia técnica [y] al aumento del valor y volumen de la exportaciones” (Kubitschek en Cervo y Bueno, 2002: 289).

Aunque –acorde con la proverbial displicencia de la administración Eisenhower hacia cualquier esfuerzo oficial de cooperación económica con América Latina y el Caribe– ese discurso no tuvo un alto vuelo en los primeros meses del gobierno de Kubitschek, la situación comenzó a cambiar en 1958. En efecto, en Venezuela, el 23 de enero de ese año, una potente sublevación popular derrocó a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Lo sustituyó una Junta de Gobierno presidida por el entonces comandante de la Marina de Guerra, contralmirante Wolfgang Larrazábal, quien para aliviar la crítica situación social existente en su país impulsó un Plan de Emergencia que, entre otras cuestiones, se planteó algunas acciones dirigidas a utilizar con esos fines la “renta petrolera” del país.

Ese y otros acontecimientos –como la creciente crisis de las dictaduras de Fulgencio Batista, de Rafael Leónidas Trujillo y de otros gobiernos latinoamericanos (como el de Chile, Honduras o Panamá)– impulsaron la realización de la visita a algunos países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela) del entonces vicepresidente de EE.UU., Richard Nixon. Fue tal la violenta repulsa popular que encontró en Lima, y en especial en Caracas, que Eisenhower amenazó con intervenir militarmente en ese país (Lechuga, 1991: 3-4), pero la Junta de Gobierno rechazó esas amenazas y derrotó a dos sucesivos golpes militares urdidos en su contra. Acto seguido, los principales partidos del país (Acción Democrática, COPEI y la Unión Revolucionaria Democrática) firmaron el Pacto de Punto Fijo, orientado a respetar el resultado de las elecciones generales que se efectuarían a fines de 1958.

Según algunos historiadores de la política exterior brasileña, esos incidentes crearon la “coyuntura adecuada” para que el presiden-

te Kubitschek comenzara, a partir de mayo de 1958, un intercambio de cartas con su homólogo estadounidense, en las cuales le propuso emprender la llamada Operación Panamericana (OPA), cuyo fin era el “restablecimiento y la revisión del ideal panamericanista”, ya que “la cooperación económica le daría una verdadera fuerza al panamericanismo y, en la medida en que los pueblos del hemisferio salieran de la miseria, se formaría un escudo a la penetración de ideologías extrañas”. Además –según Kubitschek– el panamericanismo debería ser visto como “una fuerza política de progreso económico y social y no apenas como un artificio jurídico, una actitud intelectual o un juego de imágenes nobles y generosas” (Cervo y Bueno, 2002: 290-292).

Esas y otras ideas fueron entregadas por el gobierno brasileño a todos los gobiernos del continente en un memorando remitido el 9 de agosto de 1958. Con la anuencia oficial estadounidense, 45 días después se efectuó en Washington una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema Interamericano. A ella acudió el presidente brasileño. Como resultado de dicho encuentro, el Consejo Económico y Social de la OEA quedó encargado de designar un comité especial de representantes gubernamentales (se dio en llamar el “Comité de los 21”) para que estudiara las medidas de cooperación económica que se les recomendarían a los gobiernos de sus estados miembros.

No obstante, resultaba tan evidente la crisis económica, social y política existente en América Latina y el Caribe que –luego de analizar críticamente y sintetizar las experiencias de las políticas de sustitución de importaciones que se habían emprendido en los lustros precedentes– ya la CEPAL, bajo la dirección desde 1951 de Raúl Prebisch, había concluido que era imprescindible impulsar importantes cambios estructurales internos en los estados situados al sur del Río Bravo y la península de Florida. Asimismo que –dadas las limitaciones de los mercados internos de todos los países de esa región y las asimetrías que caracterizaban las relaciones “centro-periferia”– también era necesario impulsar acuerdos intergubernamentales orientados a la creación de “un mercado común latinoamericano” (CEPAL, 2005: 32).

Se fueron creando así las bases políticas para que la OEA formalmente aprobara la Operación Panamericana en marzo de 1959, para el despliegue del discurso desarrollista de la CEPAL y la consiguiente fundación –a iniciativa de varios gobiernos latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay)– de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (febrero de 1960), para que la administración de Eisenhower creara un Fondo para el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, así como para la posterior fundación del Banco Interamericano de Desarrollo (octubre de 1960). En ese contexto, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni-

caragua aprobaron el Tratado de Managua, que dio origen al Mercado Común Centroamericano (MCCA), cuyo objetivo principal era imponer un arancel externo común ante terceros países y lograr la libre circulación de bienes y personas entre los países miembros.

Sin embargo, como en otras ocasiones históricas que ya se han reseñado, para que cristalizaran esos y otros proyectos (como la Alianza para el Progreso) antitéticos con la tradicional política estadounidense, todavía era imprescindible una gran crisis en el “orden panamericano” forjado –bajo la dominación estadounidense– luego de la Segunda Guerra Mundial y, por ende, en las relaciones interamericanas. Como se verá en la próxima lección, el catalizador de esa crisis fue la resonante victoria, el 1 de enero de 1959, de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, al igual que los diferentes y sucesivos planes contra el pueblo cubano urdidos por los círculos de poder y el *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU., con la complicidad de la mayor parte de los gobiernos de los estados integrantes de la OEA.

Lección Siete

REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN NUESTRA AMÉRICA: IMPLICACIONES PARA LAS RELACIONES INTERAMERICANAS

ESTA LECCIÓN ESTÁ DEDICADA al estudio de las relaciones interamericanas entre los años 1959 y 1989. Es decir, desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta el año en que culminó la Guerra Fría y –a decir de Eric Hobsbawm (1995)– “el corto siglo XX”, entendido por ese prestigioso historiador británico como el período de la Historia Contemporánea iniciado con la Revolución Socialista de octubre de 1917 y concluido con “el derrumbe” de lo que diversos autores han denominado, de manera alternativa o complementaria, “socialismos reales”, “socialismos de Estado”, “socialismos primitivos” o “falsos socialismos” europeos.

Cualquiera sea la denominación que se prefiera utilizar para referir las erróneas transiciones del capitalismo al socialismo que se emprendieron en la URSS y Europa Oriental, lo cierto fue que el 9 de noviembre de 1989 comenzó la abrupta demolición del Muro de Berlín, simbólicamente considerada como la conclusión de la prolongada y compleja dinámica contrarrevolucionaria que condujo en los meses sucesivos a la desaparición de las llamadas “democracias populares” europeas y, en diciembre de 1991, a “la implosión” de la URSS. Asimismo, a la restauración del “capitalismo salvaje” en la mayor parte de las quince repúblicas previamente integrantes de ese Estado multinacional, en la totalidad de los ocho estados inicialmente signatarios del Pacto de Varsovia (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República

Democrática de Alemania, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS), al igual que en la llamada, hasta abril de 1992, República Federal Socialista de Yugoslavia.

Todos esos acontecimientos fueron precedidos –entre otros hechos de trascendencia internacional y hemisférica– por la brutal y unilateral intervención militar estadounidense contra Panamá (diciembre de 1989), por la indecorosa rendición e ilegal traslado para ser juzgado en EE.UU. del controvertido jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, general Manuel Noriega (enero de 1990), así como por la derrota político-electoral del FSLN en febrero de ese mismo año. Este último acontecimiento marcó el cierre temporal del *ciclo reformador y revolucionario* que se abrió en América Latina y el Caribe a partir de la victoria de la Revolución Cubana (Suárez Salazar, 2003b).

Como se sabe, desde los primeros días de enero de 1959 el liderazgo político-militar de esa revolución proyectó una política latinoamericanista y neoantillanista de raigambre popular que vindicó el pensamiento y la obra antiimperialista y antipanamericanista de José Martí y otros próceres y mártires de las luchas por la “segunda independencia” de Nuestra América. Además de diversas medidas de orden interno, las primeras expresiones de esa proyección fueron la solidaridad de la revolución con las luchas antidictatoriales que se desplegaban en República Dominicana, Haití, Nicaragua y otros países del continente, así como el respaldo a las diversas fuerzas sociales y políticas del Caribe insular que impulsaban la descolonización más o menos negociada de sus correspondientes territorios.

Esto último fue precedido por el apoyo crítico ofrecido por Fidel Castro a la Operación Panamericana (OPA) y a la entonces naciente Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), así como por su insistencia en la necesidad de que los gobiernos y pueblos latinoamericanos y caribeños recuperaran el proyecto unitario de los próceres de las luchas por la “primera independencia” de América Latina contra el colonialismo español (Castro, 1959a; 1959b; 1959c). Tal utopía, al igual que la identificación del pueblo de Cuba con los ideales del socialismo, se expresaron de una u otra forma en la Primera y Segunda Declaración de La Habana aprobadas en septiembre de 1960 y febrero de 1962, respectivamente, por la entonces llamaba Asamblea General del Pueblo Cubano, como respuesta a las primeras agresiones de EE.UU. y sus aliados hemisféricos. Especialmente, a las sucesivas resoluciones anticubanas de la Séptima y la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, efectuadas en San José de Costa Rica (agosto de 1960) y en Punta del Este (en enero de 1962).

Esta última acordó la ilegal expulsión de Cuba de esa organización regional y, por tanto, complementó las otras formas de agresión

contra la Revolución Cubana perpetradas por las administraciones de Dwight Eisenhower (1953-1961) y John F. Kennedy (1961-1963). Entre ellas, la derrotada invasión mercenaria de Playa Girón o Bahía de Cochinos (16 al 19 de abril de 1961), el bloqueo económico y el sistemático apoyo oficial estadounidense a las criminales bandas contrarrevolucionarias que –como parte de sus sistemáticas acciones encubiertas– operaron en Cuba a partir de 1960 (Diez Acosta, 2006). También facilitó el apoyo unánime de los gobiernos de América Latina y el Caribe a “la cuarentena” y el bloqueo naval establecido contra Cuba por la administración Kennedy durante la llamada “crisis de los misiles” de octubre de 1962 (Lechuga, 1995).

Dadas las implicaciones que esa crisis tuvo en las relaciones estratégicas soviético-estadounidenses (de hecho, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear entre ambas potencias) y los compromisos que tenía su país con la OTAN, esa agresiva acción también fue apoyada por el entonces primer ministro conservador de Canadá, John Diefenbaker (1957-1963), quien en 1957 había establecido con el gobierno de EE.UU. los acuerdos que posibilitaron el despliegue del llamado Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés). Sin embargo, Diefenbaker mantuvo su rechazo a las constantes presiones ejercidas por las administraciones de Eisenhower y Kennedy con vistas a que Canadá rompiera sus relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba (Kirk y McKenna, 2007: 41-78).

Aunque las fortalecidas capacidades defensivas del pueblo cubano y la correlación de fuerzas político-militares entonces existentes –tanto a nivel internacional como entre los gobiernos y otras fuerzas políticas de América Latina y el Caribe– impidieron que todas las reuniones de consulta de la OEA antes mencionadas legitimaran –como había ocurrido con Guatemala– una “intervención colectiva” en los asuntos internos y externos de la mayor de las Antillas, sin dudas sirvieron como antecedentes a la resolución de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que, en julio de 1964 y bajo la presión del gobierno del reaccionario demócrata estadounidense Lyndon B. Johnson (1963-1969), compulsó a todos sus estados miembros a romper sus relaciones diplomáticas, económicas, culturales y consulares con la mayor de las Antillas. Tal resolución fue progresivamente acatada por todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, con la única excepción del gobierno de México. Este defendió de manera consecuente la llamada “Doctrina Estrada”, que vindicaba el principio absoluto de la no intervención en los asuntos internos y externos de otros estados del mundo.

Como se ha documentado, fueron funcionales a todas esas resoluciones de la OEA, dirigidas a aislar y destruir a la Revolución Cuba-

na, las decisiones oportunistas del presidente estadounidense Dwight Eisenhower de respaldar la llamada Operación Panamericana (OPA) impulsada –como vimos en la lección anterior– por su homólogo brasileño Juscelino Kubitschek. Asimismo, de crear un Fondo para el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (500 millones de dólares), al igual que propiciar que este fuera administrado por el BID (finalmente institucionalizado en octubre de 1960). Tales ofrecimientos fueron anteceditos o seguidos por la celebración de la Quinta y la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, realizadas en agosto de 1959 y de 1960 en Santiago de Chile y San José de Costa Rica, respectivamente, con vistas a evaluar “las tensiones en el Caribe”, así como a “castigar al régimen de Trujillo de la República Dominicana y satisfacer los escrúpulos de algunas cancillerías [para] poder despejar el camino para atacar a Cuba” (Lechuga, 1991: 22).

Luego de dicha resolución, la administración Kennedy impulsó la célebre y a la postre fallida Alianza para el Progreso. Tal como había anticipado el comandante Ernesto “Che” Guevara en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la OEA donde se aprobó esa cacareada alianza, sus filos contrainsurgentes, contrarreformistas y contrarrevolucionarios rápidamente se pusieron de manifiesto en los nuevos planes de la administración Kennedy, dirigidos a organizar una intervención militar directa contra Cuba (la llamada Operación Mangosta). Asimismo, se evidenciaron en el apoyo del *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU. a la cadena de dictaduras militares o *democracias represivas* (como fueron los casos de Colombia, Perú, Panamá y Venezuela) que se generalizaron en todo el continente, particularmente luego del aún no esclarecido asesinato de John F. Kennedy y de que Lyndon B. Johnson ocupara la presidencia de EE.UU.

Con el objetivo explícito de impedir “una nueva Cuba”, así como de derrotar, a sangre y fuego, las multiformes luchas populares, democráticas, anticolonialistas y antiimperialistas que entonces se desarrollaron en diversos países de América Latina y el Caribe, ese mandatario impulsó la instauración de las primeras dictaduras militares y otros regímenes de seguridad nacional que asolaron el continente entre 1964 y 1990. Igualmente, apoyó una nueva intervención de Gran Bretaña contra el gobierno de Cheddi Jagan en la todavía denominada Guyana británica (1964) y fue el artífice, en abril de 1965, de la invasión militar estadounidense contra las fuerzas constitucionalistas de la República Dominicana, encabezadas por el coronel Francisco Caamaño (Ríos Blein y Sáenz Pedrón, 2000). Dicha invasión contó con el tardío y vergonzoso respaldo de la OEA. Por consiguiente, bajo el amparo de las tropas estadounidenses y brasileñas, a partir de 1966,

se instaló en ese país el nefasto y prolongado régimen “neotrujillista” de Joaquín Balaguer.

Un año después, Johnson –siguiendo los pasos de Eisenhower– convocó en Uruguay a la segunda reunión de presidentes “panamericanos”. Según la información disponible, los acuerdos de ese evento tuvieron una escasa trascendencia en las relaciones interamericanas, en razón de la baja prioridad que entonces tenía el continente en comparación con otros temas de la agenda de política exterior y de seguridad de EE.UU., tales como el progresivo deterioro de sus interacciones estratégico-militares con la URSS, los desafíos a la hegemonía estadounidense que se presentaron en Europa Occidental y la brutal guerra de agresión desatada por EE.UU. contra los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya. Como veremos después, todos esos procesos se reflejaron en los importantes y progresivos cambios que, durante sus sucesivos períodos de gobierno, introdujo en la política exterior y hemisférica canadiense el premier liberal Pierre Trudeau.

En todo caso, ninguna de las acciones emprendidas por la administración Johnson, ni por las administraciones de los republicanos Richard Nixon (1969-1974) y Gerald Ford (1974-1977), ni por el vacilante presidente demócrata James Carter (1977-1981) pudieron impedir que continuaran las multiformes luchas populares en América Latina y el Caribe. Mucho menos que, en medio de sus confrontaciones con el sistema de dominación oligárquico-imperialista existente en el hemisferio occidental, paulatinamente se fueran incorporando a esas contiendas nuevos actores sociopolíticos (como los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas) o ideológico-culturales, como fue el caso de los sectores cristianos fundadores y seguidores de la trascendente Teología de la Liberación (Boron, 2006).

Los momentos más significativos de esa nueva dinámica entre la revolución, la reforma, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución que ha caracterizado la historia de América Latina y el Caribe fueron el ascenso y progresiva caída de los gobiernos militares reformadores y nacionalistas instaurados, a partir de octubre de 1968, en Panamá y Perú; la victoria (y cruenta derrota) del gobierno de la Unidad Popular chilena encabezado entre 1970 y 1973 por Salvador Allende; el triunfo y la posterior autodestrucción de una “gran revolución” en la pequeña isla Granada (marzo de 1979-noviembre de 1983); así como la victoria, desarrollo y frustración de la Revolución Sandinista iniciada en julio de ese mismo año y concluida en febrero de 1990 (Suárez Salazar, 2003b; Guerra Vilaboy, 2006). No obstante el variado desenvolvimiento de esos procesos revolucionarios, en opinión del liderazgo de la Revolución Cubana, todos ellos habían demostrado que “Cuba no era una excepción histórica”. También que “la unidad, las masas y las

armas” eran “los tres ingrediente decisivos para alcanzar el triunfo revolucionario” (Suárez Salazar, 1999).

Cualquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que entre 1959 y 1979 se produjo una crisis irreversible del “orden panamericano” instaurado por los grupos dominantes en EE.UU., América Latina y el Caribe luego de la Segunda Guerra Mundial (Suárez Salazar, 2007a). También –como puede verse en el Anexo 1– se resquebrajó el “orden colonial” instaurado en el Caribe insular y continental (especialmente en Guyana y Surinam) por los imperialismos anglosajones desde comienzos del siglo XX. Asimismo, y de manera simultánea, diversas fuerzas políticas y sociales de esa región comenzaron a cuestionarse el “orden poscolonial” edificado por esas potencias imperialistas junto a las clases dominantes y sus representantes políticos de los estados caribeños que, entre 1961 y 1975, habían obtenido su independencia política, pero que seguían atados a multifacéticas formas de dependencia económica, político-militar, ideológico-cultural, institucional y político-jurídica a la Corona Británica y, por ende, al denominado Estatuto de Westminster instaurado desde 1931 en todos los estados y territorios vinculados a la Comunidad Británica de Naciones, más conocida por su acrónimo: *Commonwealth* (Müllerleile, 1995).

Componentes de esos cuestionamientos a dicho “orden poscolonial” fueron, entre otros, la fundación el 23 de febrero de 1970 de la República Cooperativa de Guyana; el primer triunfo electoral (1972-1980) del Partido Nacional del Pueblo (PNP) de Jamaica, encabezado por el socialdemócrata Michael Manley; y la ya referida victoria político-militar, en marzo de 1979, de la “gran Revolución en la pequeña isla de Granada”, encabezada por el líder del Movimiento de la Nueva Joya, Maurice Bishop hasta su asesinato, unos días antes de la ocupación militar estadounidense de esa isla, perpetrada el 25 de octubre de 1983 por la administración de Ronald Reagan (1981-1989). A lo dicho es necesario agregar la transitoria victoria del movimiento cívico-militar surinamés encabezado por el teniente coronel Désiré (Desi) Bouterse que, en febrero de 1980 (cinco años después de haber obtenido su independencia de Holanda), derrocó a la democracia represiva y proimperialista encabezada por el primer ministro Henck Arron (1975-1980). Pese a las presiones oficiales estadounidenses y holandesas, así como a la creciente resistencia de los sectores de las clases dominantes surinamesas desplazados del poder, Bouterse conservó su contradictoria influencia en la vida política de ese país hasta comienzos de la década del noventa.

Interactuando con esos y otros procesos nacionales, así como íntimamente vinculados con la creciente inoperancia del Sistema In-

teramericano estructurado alrededor del TIAR y la OEA (puesta totalmente de manifiesto en las reformas emprendidas en la primera mitad de la década del setenta y más tarde, durante la llamada “Guerra de Malvinas” de 1982), entre 1960 y 1989 comenzaron a aparecer diversos proyectos de integración económica y concertación política (ahora llamados de “primera generación”) en América Latina y el Caribe. Pese a sus vaivenes, a sus limitados resultados y sus reconocidos déficits institucionales, económicos, sociales, políticos, diplomáticos e ideológico-culturales, todos ellos marcaron un momento de inflexión en la proverbial desunión de los gobiernos de América Latina y de los estados semi-independientes del Caribe que habían tipificado –como se ha visto en las lecciones anteriores– las últimas siete décadas del siglo XIX y las primeras seis del XX.

Por orden de aparición, los primeros de esos proyectos fueron el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), ambos fundados en 1960 al calor de los ya referidos conceptos desarrollistas impulsados por la CEPAL. En el primer caso, mediante el Tratado de Managua, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se plantearon fijar un arancel externo común ante terceros países y lograr la libre circulación de bienes y personas entre sus estados miembros. A pesar de que en 1962, y con la anuencia de la Casa Blanca, estos gobiernos fundaron la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y, como parte de ella, el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), tales proyectos de concertación político-militar y de integración económica entraron en crisis luego de la mal llamada “Guerra del Fútbol” que –pese a la mediación de la OEA– enfrentó a Honduras y El Salvador entre el 14 de julio de 1969 y el 4 de junio de 1970.

En esa fecha, los representantes de ambos gobiernos (entonces encabezados por los dictadores militares Osvaldo López Arellano y Fidel Sánchez Hernández, respectivamente) firmaron un acuerdo de paz en San José de Costa Rica, santificado por la administración de Richard Nixon. No obstante, los propósitos originales del MCCA y la ODECA no pudieron retomarse hasta después de la superación, en los primeros años la década del noventa, de la llamada “crisis centroamericana” iniciada a fines de la década del setenta (Hernández, 1994). En ese contexto, es preciso recordar que en julio de 1979 la OEA rechazó una propuesta del entonces mandatario estadounidense, James Carter, respaldada por las dictaduras militares integrantes del CONDECA, dirigida a organizar una “fuerza multinacional de paz” que evitara o “neutralizara” la victoria político-militar del FSLN contra la sanguinaria dinastía de los Somoza.

Por su parte, la ALALC surgió en virtud del Tratado de Montevideo, inicialmente firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En 1961 también lo suscribieron los gobiernos de Colombia y Ecuador. Cinco y seis años más tarde lo ratificaron Venezuela y Bolivia, respectivamente. El objetivo declarado de ese acuerdo intergubernamental era eliminar progresivamente los aranceles entre los estados miembros, con vistas a crear una zona de libre comercio y establecer un mercado común en Latinoamérica. Como se verá más adelante, dada la reiterada frustración de esos propósitos y ante el agotamiento político, económico y social de la llamada “industrialización por sustitución de importaciones” y de los proyectos integracionistas fundados en esas políticas, en 1980, mediante el segundo Tratado de Montevideo, la ALALC fue rebautizada con el nombre de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), básicamente orientada a la creación de un mercado común latinoamericano, mediante la promoción de diversos Acuerdos de Alcance Parcial y de Complementación Económica entre los estados miembros, así como a través de la pretendida revitalización (y eventual convergencia) de los proyectos integracionistas que aún subsistían –entre ellos, el ya mencionado MCCA y el Pacto Andino.

Este último había sido fundado mediante el Acuerdo de Cartagena de 1969 por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, con el propósito de erradicar por completo y de manera progresiva los aranceles entre los estados miembros, crear un arancel externo común frente a terceros, así como un mercado común subregional que superara las limitaciones institucionales y funcionales que ya exhibía la ALALC (Wagner Tizón, 2004). Luego de la suscripción de su Resolución 24 (que establecía limitaciones en la repatriación de las ganancias de los monopolios extranjeros –especialmente estadounidenses– que se habían afincado en esa región), en 1973, Venezuela se adhirió al Pacto Andino. No obstante, tres años después del sangriento golpe de Estado fascista contra el presidente Salvador Allende (11 de septiembre de 1973), se disoció la dictadura militar chilena ya embarcada en la implementación *manu militari* de uno de los primeros proyectos de orientación neoliberal y guiada por las recetas monetaristas de la llamada Escuela de Chicago que se emprendieron en América Latina.

A ello se unió el derrocamiento del gobierno nacionalista militar ecuatoriano encabezado, entre 1972 y 1976, por el general Guillermo Rodríguez Lara; el desplazamiento de los sectores reformadores y nacionalistas de las fuerzas armadas que –bajo la dirección del general Juan Velasco Alvarado– habían gobernado en Perú entre 1968 y 1975; y el subsiguiente incremento de las frecuentes tensiones territoriales que

—desde la década del cuarenta— habían venido enfrentando a Ecuador y Perú a causa de su disputa por el control de la llamada Cordillera del Cóndor, donde se supone que existen ingentes recursos minerales. Para complicar aún más la situación del Pacto Andino, y reiterando la inoperancia del Tratado Americano de Solución Pacífica (también conocido como Pacto de Bogotá) aprobado en 1948, tal conflicto fratricida tuvo un nuevo estallido bélico en 1981.

Paralelamente, y luego de la frustración de la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA, por sus siglas en inglés) y del Mercado Común del Caribe Oriental (ECCM, por sus siglas en inglés), ambos fundados en 1968, mediante el Acuerdo de Chaguaramas de 1973 las antiguas colonias británicas institucionalizaron la Comunidad del Caribe y se trazaron el objetivo de establecer el Mercado Común del Caribe, ambos conocidos con el acrónimo CARICOM. Esos acuerdos intergubernamentales tenían el propósito de avanzar en la integración y la cooperación económica entre los estados entonces independientes de esa región, así como de coordinar las políticas exteriores de sus correspondientes gobiernos. Ocho años más tarde, en 1981, los pequeños estados insulares del Caribe Oriental extendieron su cooperación económica y funcional al terreno de la política exterior y de seguridad, mediante la fundación de la Organización de Estados del Caribe Oriental (Müllerleile, 1995: 29-35). Aunque en sus momentos iniciales la administración de Ronald Reagan, aliada con los gobiernos conservadores de los países integrantes de esa última organización, la utilizó con vistas a ampliar la militarización del Caribe, así como para intentar legitimar su brutal agresión militar contra la pequeña isla de Granada, todos esos acuerdos paulatinamente fueron superando la dispersión con la que surgieron a su vida política independiente los estados insulares y continentales del llamado “Caribe angloparlante”.

Ello creó una nueva situación en esa región que, no obstante sus múltiples contradicciones internas, así como sus asimetrías y su multifacética dependencia estructural hacia las principales potencias imperialistas, fue forjando —como ha indicado Tania García Lorenzo (2005: 93-116)— una institucionalidad regional e incrementando la capacidad de negociación y acción colectiva de los estados integrantes de la CARICOM, tanto en diversos organismos internacionales como en el Sistema Interamericano. Ello fue así especialmente después de que —como se verá en el Cuadro 6— paulatinamente todos los gobiernos integrantes de la CARICOM fueron incorporándose a la OEA, sin suscribir el TIAR.

Cuadro 6

Fecha de incorporación de los estados integrantes de la CARICOM a la Organización de Estados Americanos

País	Fecha de incorporación a la OEA
Barbados	1967
Trinidad y Tobago	1967
Jamaica	1969
Granada	1975
Surinam	1977
Dominica	1979
Santa Lucía	1979
Antigua y Barbuda	1981
San Vicente y Las Granadinas	1982
Bahamas	1984
Saint Kitts y Nevis	1991
Bélice	1991
Guyana	1991

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre datos de Enciclopedia Encarta (2006).

Una expresión de las potencialidades de la concertación política que se iniciaba entre esos países caribeños fue la decisión colectiva de los gobiernos de Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago de restablecer, en diciembre de 1972, sus relaciones diplomáticas con Cuba sin respetar los ya mencionados acuerdos de la OEA de julio de 1964. Esa decisión –sucesora de la adoptada en 1970 por el gobierno de la Unidad Popular chilena y antecesora de las adoptadas por los gobiernos de Argentina, Perú, Panamá, Venezuela y Colombia– propició que, en 1975, con el respaldo oportunista del gobierno de EE.UU., ese organismo regional se viera compulsado a modificar su resolución de 1964 que había “obligado” a los estados miembros a romper sus relaciones diplomáticas, económicas, culturales y consulares con el cada vez más fortalecido gobierno revolucionario de la mayor de las Antillas.

En ese contexto, en 1976, un masivo plebiscito popular aprobó la Constitución Socialista de la República de Cuba, en cuyos preceptos vinculados a la política exterior quedó consignado el propósito de ese país de “integrarse con los países de América y el Caribe liberados de dominaciones externas y de opresiones internas en una gran comunidad de pueblos hermanados por la tradición histórica y la lucha común contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo en un mismo empeño de progreso nacional y social” (DOR, 1976). Esa de-

cisión, junto a un fuerte impulso latinoamericano y caribeño orientado a reformar la Carta de la OEA y el TIAR, facilitó la entrada en vigor del Convenio de Panamá de 1975, mediante el cual se fundó el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), ahora integrado –como se verá en el Cuadro 7– por 26 estados de América Latina y el Caribe (incluida Cuba), con el objetivo de promover la cooperación entre sus miembros, estudiar políticas de desarrollo económico y alcanzar estrategias comunes en sus negociaciones comerciales con terceros países y con los organismos internacionales. Se dio así un paso más en el zigzagante, contradictorio e inconcluso proceso dirigido a institucionalizar organismos intergubernamentales nuestroamericanos alejados de la égida oficial estadounidense.

Lamentablemente, el SELA perdió impulso en los años posteriores a causa de los cambios políticos que, a partir de la segunda mitad de la década del setenta, se produjeron en algunos países del continente. A los ya mencionados habría que agregar el golpe de Estado perpetrado en Argentina en 1976; la llegada al gobierno de Colombia, en 1978, de los sectores más reaccionarios del Partido Liberal encabezados por el presidente Julio César Turbay Ayala; y la derrota del candidato presidencial del Partido Acción Democrática en las elecciones efectuadas en diciembre de ese mismo año en Venezuela. Dos meses después, ocupó la presidencia de ese país el socialcristiano (*copeyano*) Luis Herrera Campins (1979-1984), quien casi de inmediato comenzó a concertar su política externa con los sectores más reaccionarios de la Democracia Cristiana Internacional, tanto de EE.UU. como de América Latina y el Caribe.

A ello se sumó el virtual golpe de Estado perpetrado en 1980 en Jamaica, con el decisivo apoyo del presidente demócrata estadounidense James Carter. En consecuencia, ocupó el gobierno de esa isla el líder del derechista Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés), Edward Seaga (1980-1989), quien rompió las relaciones con Cuba y –junto a los gobiernos más conservadores del Caribe insular– comenzó a torpedear los acuerdos previamente adoptados por la CARICOM. Esa situación se profundizó luego del ya referido asesinato de Maurice Bishop, de la ocupación militar por parte de EE.UU. de Granada (1983-1984) y de la instauración en esa isla del gobierno presidido por el primer ministro Herbert A. Blaize, líder de la coalición derechista organizada en el llamado Nuevo Partido Nacional. Se agregaron a este escenario las vacilaciones políticas que estos hechos provocaron en el gobierno de Surinam, todavía encabezado por Désiré (Desi) Bouterse, quien “suspendió” sus relaciones oficiales con Cuba.

Cuadro 7

Estados signatarios del convenio mediante el cual se fundó el SELA

Estado miembro	Suscripción al Convenio de Panamá
Argentina	10 de enero de 1977
Bahamas	25 de marzo de 1998
Barbados	4 de junio de 1976
Bélice	6 de marzo de 1992
Bolivia	7 de junio de 1976
Brasil	14 de mayo de 1976
Colombia	18 de junio de 1979
Chile	18 de octubre de 1977
Costa Rica	15 de febrero de 1977
Cuba	14 de enero de 1976
Ecuador	2 de abril de 1976
Guatemala	2 de octubre de 1976
Guyana	17 de enero de 1976
Haití	17 de marzo de 1977
Honduras	14 de junio de 1976
Jamaica	4 de abril de 1976
México	14 de enero de 1976
Nicaragua	2 de febrero de 1976
Panamá	4 de diciembre de 1975
Paraguay	19 de septiembre de 1986
Perú	29 de abril de 1976
República Dominicana	4 de junio de 1976
Surinam	27 de julio de 1979
Trinidad y Tobago	7 de junio de 1976
Uruguay	16 de marzo de 1977
Venezuela	14 de enero de 1976

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar, a partir de información oficial del SELA.

Además, a partir de 1981 se agudizó la llamada “crisis centroamericana”, que concentró la atención de buena parte de los gobiernos de América Latina. En particular luego del inicio de la “guerra sucia” desplegada –con el apoyo de la dictadura militar argentina, al igual que de otras dictaduras centroamericanas (en primer lugar, las de Honduras y Guatemala)– por la administración de Ronald Reagan contra la Revolución Sandinista. Ello incrementó el justificado temor de diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños –y, como se verá después, del gobierno liberal de Canadá– con relación a que esa reaccionaria administración

estadounidense pudiera provocar una agresión militar directa contra Nicaragua o El Salvador, entonces sacudido por la potente insurgencia popular encabezada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

A estas últimas situaciones se superpuso la llamada “crisis de la deuda externa” iniciada en 1982 (año en que México decretó la moratoria de sus “obligaciones internacionales”) y generalizada a todo el continente en los años posteriores. Como se ha documentado, las causas más profundas de esa crisis estuvieron vinculadas a las irresolutas deformaciones estructurales internas que caracterizaban (y todavía caracterizan) a las economías latinoamericanas y caribeñas, al nefasto impacto que tuvieron en buena parte de los países de esa región los sucesivos *shocks* petroleros de la segunda mitad de la década del setenta, así como la “crisis de onda larga” que a partir de esos años comenzó a afectar la economía estadounidense e internacional, al igual que los “créditos blandos” que les habían venido entregando a diversos gobiernos de América Latina y el Caribe (incluidas las corruptas dictaduras militares) la banca privada y los organismos financieros internacionales, con vistas a que estos pudieran “cerrar” los déficits crónicos en la cuenta corriente de su balanza de pagos.

En la base de esa persistente “brecha” se encontraban, entre otras causas, la poca efectividad de las medidas y programas con un claro perfil proteccionista que –acorde con las tendencias que caracterizaron a los estados capitalistas más desarrollados y al amparo de la “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI)– habían impulsado diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños entre las décadas del treinta y el sesenta. En consecuencia, a mediados de ese decenio, comenzó a producirse un marcado aperturismo en las políticas económicas de los estados de esa región. En tal giro influyeron diversos factores. Entre ellos, el entorno político y económico mundial, la evolución entonces ascendente de la economía estadounidense, al igual que los cambios que los grupos de poder de esa nación introdujeron en sus estrategias económicas hacia los países situados al sur de Río Bravo. Así, a causa de la Guerra de Vietnam, la Casa Blanca replanteó sus prioridades en el hemisferio occidental y el papel que cada una de sus subregiones (al igual que Canadá) debía cumplir en el proceso de expansión de la economía estadounidense.

En la visión geoeconómica de los grupos dominantes en EE.UU., Centroamérica y los países andinos debían seguir siendo suministradores de materias primas. A la par, aquellos gobiernos que tenían puestas sus miradas en la ampliación del mercado interno debían “abrirse” a las mercancías y las inversiones directas de los monopolios estadounidenses, lo que resultaría efectivo a las exportaciones estadounidenses y evitaría

la generación de “modelos” de desarrollo autónomos, así como la proliferación de políticas nacionales que impusieran restricciones a las inversiones extranjeras. Para lograr ese fin, y en razón de los cambios progresivos ocurridos en el continente, en 1968 el Congreso estadounidense y la Casa Blanca desempolvaron la llamada Enmienda Hickenlooper, dirigida a sancionar a los gobiernos latinoamericanos y caribeños que nacionalizaran empresas estadounidenses sin la debida indemnización.

A ello se agregaron las decisiones unilaterales adoptadas por la administración de Richard Nixon, que concluyeron con el sistema de tipos de cambio fijos respecto al dólar que, hasta 1971, había servido de base al funcionamiento de la economía internacional. Ello profundizó la dependencia de América Latina y el Caribe del curso de los acontecimientos de la economía estadounidense y la capacidad de las autoridades de ese país para emitir de manera unilateral la moneda que servía como patrón para todas las transacciones internacionales y como reserva mundial por excelencia. Ello provocó sucesivas depreciaciones monetarias y facilitó que, a partir de la segunda mitad de la década del ochenta, comenzara a cristalizar uno de los actos de despojo más escandalosos que haya tenido lugar en toda la historia económica del hemisferio occidental.

En efecto, cuando los gobiernos de esa región no pudieron enfrentar la amortización de los voluminosos servicios a su deuda externa –a causa de la elevación de las tasas de interés en que habían sido concertados los préstamos bancarios recibidos en la década anterior, así como los compromisos que habían venido asumiendo en los mercados financieros internacionales–, sus economías quedaron sujetas a la intervención de sus acreedores, tanto privados como oficiales. En consecuencia, con el supuesto objetivo de garantizar el pago de la deuda y controlar los procesos “hiperinflacionarios” que se desataron en la región, a partir de 1985 e impulsados por el FMI y el Departamento del Tesoro de EE.UU. comenzaron a proliferar una cadena de “programas de estabilización económica” que propiciaron una masiva “transferencia inversa” de capitales hacia las principales potencias imperialistas, así como la privatización y desnacionalización de importantes activos del continente.

En consecuencia, y con la coartada de “estabilizar las economías”, se produjo la paulatina pero consistente eliminación de las protecciones al mercado interno y una transformación radical de la estructura de propiedad de los recursos naturales del continente. También ocurrió la llamada “desregulación estatal del mercado de los factores productivos” que tanto influyó en el exponencial incremento de la pobreza crítica y crónica que se extendió en todo el continente durante la que la CEPAL eufemísticamente denominó “década pérdida” para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe (Suárez Salazar, 2000).

Todo ello profundizó la dependencia estructural de las economías latinoamericanas y caribeñas, particularmente respecto a EE.UU., en tanto dicha potencia continuaba fundando su poderío en la superioridad de su desarrollo científico-técnico, sus empresas transnacionales y el terreno monetario, al ser la emisora de la moneda de reserva mundial por excelencia. También basaba su hegemonía en el terreno financiero, por ser el prestamista bancario por excelencia, ya que controlaba el 80% de la suma global de créditos bancarios de la época. A ellos se unía la superioridad de la economía estadounidense en el terreno comercial, al ser la primera exportadora mundial de bienes y servicios (Martínez et al., 1998: 6).

Sin embargo, como se verá en el Cuadro 8, ante los avances de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de Japón, esa situación comenzó a cambiar en las décadas del setenta y ochenta, lo que, junto a múltiples factores “extraeconómicos” internos y externos, provocó una profunda crisis en la hegemonía estadounidense y llevó a sucesivos gobiernos de ese país a emprender “una multifacética contraofensiva dirigida a recomponer su sistema de dominación ‘global’ y hemisférico”. Particularmente, durante las administraciones de James Carter y Ronald Reagan (Suárez Salazar, 2007a).

Cuadro 8

Participación de “la tríada” en la producción industrial (PI) y el comercio exterior (E) en el mundo no socialista (en %)

País	1960		1970		1975		1980		1981		1982	
	PI	E	PI	E	PI	E	PI	E	PI	E	PI	E
EE.UU.	39,6	18,2	35,9	15,3	35,6	13,5	36,1	11,9	36,8	12,8	35,1	12,9
CEE	32,8	26,7	31,5	32,8	37,3	37,5	35,5	36,2	34,7	33,9	35,4	35,7
Japón	6,8	3,5	13,3	6,9	13,2	7,2	15,2	7,1	15,5	8,3	16,3	8,6

Fuente: Martínez et al. (1998: 6).

Cualquiera sean los juicios que merezcan las afirmaciones anteriores, lo cierto fue que ante la incapacidad de los organismos de concertación política, cooperación e integración económica entonces existentes en América Latina y el Caribe, al igual que de la OEA, para abordar las llamadas “crisis centroamericana” y “crisis de la deuda externa” algunos gobiernos latinoamericanos comenzaron a impulsar “concertaciones políticas *ad hoc*” para enfrentar ambos problemas. Surgieron así –en 1983 y 1984, respectivamente– el denominado Grupo de Contadora (en referencia a la isla panameña donde se efectuó

su primera reunión) y el Grupo de Cartagena. El primero de ellos se formó con el propósito de contribuir a una solución política y negociada del mal llamado “conflicto centroamericano”, y el segundo se planteó coordinar las posiciones de los gobiernos que lo integraron respecto a la búsqueda de una solución política con los acreedores de sus correspondientes deudas externas.

Como ha indicado el historiador canadiense Brian Stevenson (2000), de manera significativa la Primera Reunión Ministerial de ese grupo fue antecedida por una Conferencia Especial de la OEA (efectuada en Venezuela en septiembre de 1983) dirigida a discutir el creciente endeudamiento de la mayor parte de los países del hemisferio occidental. Como era de esperar, los representantes del gobierno de EE.UU. se opusieron en esa ocasión y en los años sucesivos a cualquier acuerdo latinoamericano y caribeño que pudiera conducir a la creación de un *cartel de deudores*. En su lugar, comenzaron a impulsar los programas de estabilización de corte neoliberal antes referidos, con todas las consecuencias negativas que ellos tuvieron para las sociedades y las economías latinoamericanas y caribeñas.

Una oposición semejante mantuvo la administración de Ronald Reagan ante el funcionamiento del Grupo de Contadora, inicialmente integrado por los gobiernos de Colombia (presidido desde 1982 por el conservador progresista Belisario Betancur), México, Panamá y Venezuela (presidido desde 1984 por el socialdemócrata Jaime Lusinchi) con el propósito de evitar una escalada militar en Centroamérica, así como de contribuir a la búsqueda de una solución política negociada a los múltiples conflictos político-militares que –a causa de la creciente injerencia estadounidense– afectaban a esa región. Con el mismo fin, a partir de 1985, se formó el llamado Grupo de Apoyo a Contadora, integrado por los entonces recién estrenados gobiernos civiles de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

Un año después, en una reunión efectuada en Río de Janeiro, los gobiernos de esos ocho países acordaron establecer un Mecanismo Permanente de Concertación y Consultas que comenzó a ser denominado Grupo de Río. Sus objetivos inicialmente declarados fueron la adopción de acuerdos colectivos acerca de los más acuciantes problemas económicos y sociales del continente (entre ellos, el terrible impacto socioeconómico de la deuda externa); el fortalecimiento de “la democracia” en América Latina; el impulso de la integración económica; y la búsqueda de una solución político-negociada a la “crisis centroamericana”.

En función del cumplimiento de esos objetivos, acordaron institucionalizar reuniones anuales de los presidentes de los países integrantes de ese Grupo, la primera de las cuales se efectuó en Acapulco (México) en noviembre de 1987. Es decir, tres meses después de que

—sobre la base del llamado Plan Arias (en referencia al entonces presidente de Costa Rica) y pese a la oposición oficial estadounidense— los cinco mandatarios centroamericanos (Óscar Arias, de Costa Rica; José Napoleón Duarte, de El Salvador; Vinicio Cerezo, de Guatemala; José Azcona Hoyo, de Honduras; y Daniel Ortega, de Nicaragua) hubieran suscrito el llamado Acuerdo de Esquipulas (en razón de la localidad guatemalteca donde se efectuó esa reunión) dirigido a lograr “la pacificación de Centroamérica”.

Con tal fin, todos ellos se comprometieron a establecer un alto el fuego, amnistiar a los presos políticos, democratizar sus respectivos países, no conceder apoyo a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales (entre ellos, la llamada “contra” nicaragüense), no utilizar sus territorios para agredir a otros estados de la región, así como lograr la retirada de las fuerzas militares estadounidenses entonces desplegadas en Honduras y los escasos asesores militares cubanos que actuaban en Nicaragua.

De más está decir que esos compromisos fueron rápidamente asumidos por el gobierno cubano y respaldados en la mencionada reunión de los mandatarios de los países integrantes del Grupo de Río, al igual que en su Segunda Cumbre Presidencial, efectuada en octubre de 1988 en Punta del Este. Como resultado de esa reunión se aprobó la Declaración de Uruguay, en la cual sus participantes se comprometieron, entre otras cuestiones, a impulsar la paz y el desarrollo económico, social y político de la región a través de la consolidación de la democracia, la lucha contra la pobreza y la integración económica y cultural de América Latina. Asimismo, a concertar posiciones respecto a la deuda externa y adoptar medidas dirigidas a la protección del medio ambiente —tema que ya había comenzado a entrar en la agenda internacional.

Con todos esos fines, los gobiernos integrantes de ese grupo reiteraron su intención de impulsar el “regreso de Cuba a la OEA”, de estrechar relaciones con los países socialistas y capitalistas europeos, al igual que con Canadá y Japón. También anunciaron su disposición a establecer vínculos con las asociaciones regionales existentes en Europa, sudeste de Asia y África, así como su intención de lograr un mejor entendimiento entre los gobiernos integrantes del Grupo de Río y el gobierno de Estados Unidos, y abordar junto a este los graves problemas que continuaban afectando a la OEA, entonces presidida por el dinámico diplomático brasileño João Clemente Baena Soares. Este —siguiendo las demandas latinoamericanas— ya había logrado implicar a esa organización en la supervisión del referido Acuerdo de Esquipulas.

En correspondencia con el propósito de reactivar la OEA, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños aprovecharon para ello la XVIII Asamblea General de esa organización, efectuada en

San Salvador entre el 14 y el 19 de noviembre de 1988, con vistas a ratificar el llamado Protocolo de Cartagena (orientado a introducir nuevas reformas a la Carta de la OEA) que –pese a la persistente displicencia de la ya saliente administración de Ronald Reagan– había sido impulsado por varios gobiernos latinoamericanos y caribeños en una Conferencia Especial de ese organismo realizada en esa ciudad colombiana a fines de 1985. Dicho protocolo perseguía incrementar el papel del Consejo Permanente en la solución de las disputas existentes entre los gobiernos del hemisferio occidental; fortalecer el papel del secretario general; permitir el ingreso de Guyana y Bélize (país que finalmente había obtenido su independencia de Gran Bretaña en 1981, pero que continuaba inmerso en un conflicto fronterizo con Guatemala); propiciar una mayor participación de la OEA en los problemas económicos (incluida la acuciante cuestión de la deuda externa); y consolidar “las democracias representativas con el debido respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de sus estados miembros” (Stevenson, 2000).

A propuesta del representante de Costa Rica, la mencionada Asamblea General de la OEA también aprobó una resolución dirigida a formar una comisión ministerial encargada de realizar propuestas para revisar el papel de esa organización en las nuevas circunstancias internacionales y hemisféricas. También, a transformarla en un espacio para analizar su papel en temas como los derechos humanos, la problemática de las drogas, de la deuda, el comercio y la integración, al igual que el desarrollo del derecho interamericano. Esa resolución fue respaldada por una declaración paralela del Grupo de Río en la que, entre otras cuestiones, se indicó que la OEA estaba viviendo una “crisis de objetivos e identidad”. Para superarla –según la misma declaración– era imprescindible “una [nueva] concepción de la seguridad, de la solidaridad política y de la cooperación entre los estados americanos” (Stevenson, 2000).

Según el historiador canadiense Brian Stevenson, fue en ese contexto que el líder del Partido Conservador Progresista (PCP) y entonces primer ministro canadiense Brian Mulroney (1984-1993), luego de haber firmado un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. (enero de 1988) y a instancias del entonces recién estrenado mandatario estadounidense George H. Bush (1989-1993), decidió acelerar las gestiones orientadas a lograr el ingreso de Canadá como miembro pleno de la OEA. Con esa decisión culminaban las diversas acciones bilaterales y multilaterales emprendidas desde 1968 –por iniciativa propia o bajo la presión de diversas organizaciones de la sociedad civil canadiense– por el primer ministro liberal canadiense Pierre Trudeau (1968-1979; 1980-1984) con el propósito de superar el centenario aislamiento de su país de los asuntos interamericanos (Stevenson, 2000).

Hitos de ese proceso fueron, entre otros, la publicación del documento oficial “Una política exterior para los canadienses” (1970), en el que se había reconocido la necesidad de contrabalancear la cada vez más profunda dependencia económica, política y militar de ese país respecto a EE.UU.; las diversas decisiones adoptadas en materia de cooperación económica luego de la primera visita exploratoria realizada por varios secretarios de Estado canadienses a nueve países latinoamericanos entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre de 1970; la incorporación de Canadá como observador permanente en la OEA, así como miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); la decisión de recibir a un importante número de refugiados chilenos luego del sangriento golpe de Estado de 1973; el primer viaje realizado por un primer ministro canadiense (Trudeau) a varios países de América Latina y el Caribe (incluida Cuba) en 1976.

A todo ello se unió el rápido reconocimiento del gobierno canadiense del Gobierno Provisional Sandinista formado en julio de 1979; el importante apoyo otorgado al ya mencionado Grupo de Contadora; la participación del primer ministro Brian Mulroney en la reunión de jefes de Estado efectuada en San José de Costa Rica, con vistas a impulsar el Acuerdo de Esquipulas (1988); la presencia de funcionarios canadienses en la supervisión de esos acuerdos; y las interacciones establecidas con los gobiernos integrantes del Grupo de Río. Acorde con otros presupuestos de su política exterior, en tales interacciones el gobierno de Canadá proyectó su disposición a facilitar el diálogo político entre el Norte y el Sur del hemisferio occidental, en tanto ya visualizaba a América Latina y el Caribe como “el cuarto pilar” de su política exterior.

Todo ello, junto al ingreso en 1990 de Canadá como miembro pleno de la OEA, la decisión del gobierno de Brian Mulroney de emprender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su siglas en inglés) –signado entre los gobiernos de Canadá, EE.UU. y México en 1992, y ratificado por el Congreso estadounidense en 1994)–, así como la participación destacada de sucesivos gobiernos liberales y conservadores canadienses en las tres cumbres de las Américas –inicialmente convocadas en 1994 por el presidente demócrata estadounidense William Clinton (1993-2001) y efectuadas durante los años de la llamada “posguerra fría” (1990-2001)– transformó a Canadá en un sujeto activo en la contradictoria institucionalización de “un nuevo orden panamericano”, orientado a fortalecer el sistema de dominación plutocrático-imperialista existente en el hemisferio occidental, así como a integrar de manera subordinada a todos sus estados (incluido Canadá) a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los grupos dominantes en EE.UU. (Suárez Salazar, 2007a). Los elementos que fundamentan esas afirmaciones se abordarán en la siguiente lección.

Lección Ocho

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DURANTE LA POSGUERRA FRÍA

LA PRESENTE LECCIÓN ESTARÁ DEDICADA al estudio de las relaciones interamericanas entre 1990 y 2001. Es decir, durante los años que algunos especialistas de las relaciones internacionales identifican como “la primera década de la globalización”, pero que casi todos los analistas prefieren referir como “la posguerra fría”. Según el politólogo estadounidense Robert J. Lieber (2002), esta etapa es predecesora de la llamada “era posterior a la posguerra fría”, presuntamente iniciada como consecuencia de los profundos cambios estratégicos que se produjeron en el sistema internacional luego de los atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001.

Esos escasamente esclarecidos hechos fueron utilizados (o, según algunos autores, intencionalmente provocados) por la entonces recién estrenada administración del republicano George W. Bush (2001-...) con vistas a tratar de superar su ilegitimidad de origen derivada de los tortuosos medios político-jurídicos con los que había obtenido la presidencia. También, para desplegar la denominada “guerra preventiva contra el terrorismo de alcance global” dirigida –según diversos autores– a concretar las principales ideas elaboradas por un grupo de políticos e intelectuales neoconservadores estadounidenses organizados alrededor del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNCA, por sus

siglas en inglés), fundado con el propósito de suministrar insumos para la plataforma electoral (y eventualmente gubernamental) del candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2000.

Según su Declaración de Principios (publicada el 3 de junio de 1997), el objetivo de los integrantes del PNCA –además de criticar “la incoherente” política interna y externa desarrollada por la administración del demócrata William Clinton (1993-2001)– era elaborar una “visión estratégica confiable y avanzada del papel que deben jugar los Estados Unidos en el mundo” y, desde sus “intereses nacionales”, formular un “conjunto de principios que puedan guiar su política exterior”, así como fundamentar montos superiores para el presupuesto dedicado a esta y a la defensa que garantizaran “la seguridad de los Estados Unidos” y permitieran “el avance de sus intereses en el nuevo siglo”. A decir de los signatarios de esa declaración, todo lo anterior era necesario porque incluso los propios conservadores estadounidenses habían “olvidado los elementos esenciales que posibilitaron el éxito de la administración Reagan: unas fuerzas armadas fuertes y listas para actuar ante desafíos presentes y futuros; una política exterior intencionada y coherente que promueva los principios americanos [entiéndase estadounidenses] en el exterior y un liderazgo nacional que acepte las responsabilidades globales de los Estados Unidos” (en Acosta Matos, 2005: 55-63).

Con independencia de la retórica que usualmente acompaña a las proclamas políticas, lo cierto fue que los integrantes del PNCA clamaron por el restablecimiento de la violenta y unilateral política exterior y de seguridad emprendida por ese mandatario republicano con el propósito –como se refirió en la lección anterior– de recomponer el sistema de dominación de EE.UU. en todo el mundo –en primer lugar, en el hemisferio occidental. Según Luis Fernando Ayerbe (2001), tales objetivos fueron continuados por su sucesor republicano, George H. Bush (1989-1993), quien durante su administración, y aprovechando el ambiente internacional creado por “el derrumbe” de los falsos socialismos europeos y la “implosión” de la URSS, reiteró en varias ocasiones su intención de construir un “nuevo orden mundial” gobernado por su país: “la única potencia multidimensional” que –a su decir– había resultado ganadora en las “tres guerras mundiales” libradas en el siglo XX (Bush, 1992).

En la pretensión de los grupos de poder de ese país, lo anterior implicaba la aceptación del “liderazgo estadounidense” por parte de las demás potencias integrantes de la llamada “tríada del poder mundial” (EE.UU., la Unión Europea y Japón), la anulación de toda posibilidad de que la entonces recién fundada Federación Rusa pudiera resurgir como una potencia hostil a EE.UU., y “la contención” de la República Popu-

lar China, empeñada desde 1980 en una “modernización” (“socialista de mercado”, para algunos autores; “capitalista de Estado”, para otros) orientada a convertirse –según el analista chino Xue Moufang– en una de las potencias integrantes de la “pentarquía del poder mundial” –EE.UU., la Unión Europea, Japón, Rusia y China (Moufang, 1995: 23).

Como en otros momentos de la historia que se han referido en las lecciones precedentes, esos propósitos “globales” del *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU. también conllevaban la derrota (*roll back*) de los viejos (el comunismo, la insurgencia popular) y los “nuevos” enemigos (el “narcotráfico” y otros delitos conexos, el terrorismo, las migraciones incontroladas) de la “seguridad interamericana”, al igual que la subordinación de los gobiernos de América Latina y el Caribe, así como de Canadá, a las necesidades estratégicas, geopolíticas y geoeconómicas de la potencia hegemónica en el hemisferio occidental.

De allí la unilateral invasión militar a Panamá (diciembre de 1989), rechazada por la OEA; la instalación *manu militari* en la presidencia de ese país de Guillermo Endara (juró el cargo en una de las bases militares estadounidenses entonces instaladas en la Zona del Canal de Panamá); la descarada intervención de diversas agencias estadounidenses en las elecciones generales efectuadas en Nicaragua en febrero de 1990; y sus constantes presiones contra el débil gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) para que aniquilara la influencia que conservaba el FSLN en diversas instituciones estatales, el sistema político y la sociedad nicaragüenses (Núñez, 2006).

También el sostenido apoyo político-militar estadounidense a las *democracias contrainsurgentes* instauradas en Honduras, El Salvador y Guatemala, a las *democracias restringidas* que se generalizaron en América del Sur en la segunda mitad de la década del ochenta, así como a las *democracias represivas* que continuaban funcionando en República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Torres Rivas, 1991; González Casanova, 1991; Suárez Salazar, 2003b). Siguiendo el legado de la administración Reagan, y sobre la base de la Estrategia Andina, el apoyo político-militar y económico a estas últimas se justificó con “la guerra contra las drogas” proclamada en 1986 y, en el caso de Colombia y Perú, con la necesidad de enfrentar las mal denominadas “narcoguerrillas” que continuaban operando en esos países, en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a la organización político-militar peruana conocida como “Sendero Luminoso” (Suárez Salazar, 2005).

A ello se agregó el apoyo de la Casa Blanca al sangriento golpe de Estado contra el entonces popular presidente constitucional haitiano Jean-Bertrand Aristide (septiembre de 1991) y a las maniobras que

culminaron con la derrota de los gobiernos surinameses influidos por Désiré (Desi) Bouterse, así como la continuidad de las agresiones estadounidenses contra la Revolución Cubana. A fines de 1992 –gracias al apoyo del entonces candidato presidencial demócrata William Clinton– estas adquirieron un nuevo impulso mediante la aprobación por parte del Congreso y la Casa Blanca de la llamada “Enmienda Torricelli”, orientada a aprovechar el derrumbe de los “socialismos reales europeos” para otorgarle carácter extraterritorial a las mal denominadas “leyes del embargo” contra Cuba aprobadas desde 1961 en EE.UU. Todas ellas estuvieron dirigidas a lograr el “aislamiento internacional” de la isla con vistas a acelerar –según las falaces palabras de un alto funcionario de la administración Clinton– su “transición pacífica hacia una democracia de libre mercado” (Nuccio, 1995).

En la visión de los sectores más reaccionarios de EE.UU. (incluidos los integrantes de lo que en Cuba se llama “la mafia cubana de Miami”), a comienzos de la década del noventa tales propósitos se veían dificultados por las posiciones “procubanas” del Grupo de Río, que seguía propugnando el retorno de Cuba a la OEA. Ese grupo, luego de incorporar a sus filas a los gobiernos de Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay, así como un representante rotativo del Caribe y otro de Centroamérica, en 1990, había formalizado su diálogo político con la CEE (a partir de 1992, Unión Europea). En consecuencia, también había jugado un destacado papel en la convocatoria –sin la presencia del gobierno de EE.UU.– de la Primera Cumbre Iberoamericana, efectuada en 1991 en Guadalajara (México), bajo el estímulo del mandatario mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el presidente socialdemócrata español Felipe González (1982-1996), quien quería convertir a su país en “el puente” de la posteriormente denominada “alianza estratégica entre la Unión Europea y América Latina”.

Para trastorno de la Casa Blanca, en ese evento –y por tanto en la institucionalización de las Cumbres Anuales de Jefes de Estado y Gobiernos Iberoamericanos que todavía continúan desarrollándose– participó con todo derecho el presidente de Cuba, Fidel Castro, quien –a pesar de la difícil situación que atravesaba la transición socialista cubana– reiteró la necesidad de impulsar la “genuina integración política y económica de América Latina y el Caribe” como condición necesaria para contrarrestar el “unipolarismo” estadounidense e insertar al continente de manera virtuosa en el “mundo de la posguerra fría” (Castro, 1991).

Merece destacarse que tal demanda ya había sido expresada por el mandatario cubano en sus reuniones con sus homólogos del llamado Grupo de los Tres (G-3) –fundado en 1990 con el propósito de crear una zona de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela– y también

un año antes, durante la visita oficial que realizó a Brasil en ocasión de la toma de posesión del presidente de ese país, Fernando Collor de Mello (1990-1992). Este, aprovechando el positivo ambiente que se había creado en las relaciones argentino-brasileñas en la segunda mitad de la década del ochenta, el 26 de marzo de 1991 firmó –junto a sus homólogos de Argentina (Carlos Saúl Menem), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle)– el Tratado de Asunción que dio origen al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con el propósito de lograr la progresiva eliminación de barreras arancelarias y constituir un mercado único entre dichos estados (Regueiro, 1994; Cervo y Bueno, 2002: 450-454; Casal Llano, 2003).

Unos meses más tarde, en diciembre de 1991, y mediante el Protocolo de Tegucigalpa, se fundó el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), institucionalidad intergubernamental (con algunas pretensiones supranacionales) que –con el respaldo de los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá– formalmente reemplazó al inoperante MCCC y a la ODECA, fundados en 1960 y 1962, respectivamente. Acorde con los objetivos de los grupos dominantes en esa región y con algunas de las estrategias estadounidenses, entre las metas del SICA se incluyeron “la consolidación de la democracia”, la construcción de una “zona común de defensa contra el narcotráfico”, la institucionalización de “una unión económica” y la promoción “del desarrollo sostenible” (OIT, 2005).

En todos los eventos antes referidos, con diversos tonos, se pronunciaron críticas a los planes de estabilización económica de factura neoliberal impulsados en la segunda mitad de la década del ochenta por los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) y por el Departamento del Tesoro de EE.UU., con vistas a “resolver la crisis de la deuda externa” de América Latina y el Caribe. No obstante, la administración de George H. Bush le otorgó nuevos impulsos a esa *contrarreforma y contrarrevolución neoliberal en lo económico y neoconservadora en lo político e ideológico-cultural*, mediante su decidido apoyo al denominado Consenso de Washington de 1990 y a los Planes de Ajuste Estructural (PAE) finalmente aceptados en los años posteriores por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Entre dichos gobiernos se incluyeron los que, en la segunda mitad de la década precedente, habían emprendido los llamados *ajustes heterodoxos* a los graves problemas económicos y sociales que los estaban afectando (Argentina, Brasil y Perú). Como aparece indicado en la lección anterior, tales PAE propiciaron una masiva *transferencia inversa* de capitales hacia las principales potencias imperialistas, así como la privatización y desnacionalización de importantes activos del continente. En consecuencia, también profundizaron la dependencia estructural

y las superpuestas crisis económica, social y ecológico-ambiental de América Latina y el Caribe (Suárez Salazar, 2000).

Cabe recordar que, con vistas a fortalecer las leoninas tratativas bilaterales que se venían desarrollando entre casi todos los gobiernos de esa región y los organismos financieros internacionales, así como para conjurar las acciones oficiales latinoamericanas y caribeñas que pudieran conducir “a la creación de una OEA sin Estados Unidos”, George H. Bush anunció la Iniciativa para las Américas, dirigida a edificar “una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego” (Stevenson, 2000: 168). Asimismo, pese a sus reticencias iniciales, aceptó algunas de las reformas progresivas a la OEA que venían impulsando diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños desde los últimos años de la década del ochenta.

Sin embargo, los cambios políticos que se produjeron en algunos países de América Latina, junto al ingreso en la OEA del gobierno conservador de Canadá, facilitaron que la Asamblea General de esa organización efectuada en Santiago de Chile en 1991 aprobara el regresivo Compromiso con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano. Congruente con ese compromiso, un año después, en un cónclave similar efectuado en la capital de EE.UU., se aprobó el llamado Protocolo de Washington (entró en vigor en 1997), mediante el cual los 34 gobiernos integrantes de esa organización paulatinamente fueron abandonando los principios del *pluralismo ideológico y político* que habían defendido algunos de sus predecesores y reforzando sus compromisos con “la defensa” de esa restringida y excluyente noción de “la democracia”, incluso a costa de aceptar la violación “colectiva” de los principios de la no intervención que tanto esfuerzo había costado formalizar y defender en el Sistema Interamericano.

Se dieron así los primeros pasos político-jurídicos dirigidos a institucionalizar un *nuevo orden panamericano* que contribuyera a superar la profunda crisis en que había caído el sistema de dominación plutocrático-imperialista en los lustros anteriores. Funcional es a ese propósito fueron los empeños del gobierno de EE.UU. y de varios gobiernos latinoamericanos por “contener” o derrotar a las organizaciones político-militares que habían venido encabezando las luchas populares en Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala. Propósito que parcialmente lograron en Colombia en 1991, en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996, mediante las llamadas “soluciones político-negociadas” de las guerras civiles –con un profundo contenido de liberación nacional y social– que habían venido desplegándose desde los lustros precedentes. Y, en el caso de Perú, con la virtual derrota político-militar de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Otro de los pasos orientados a la construcción del mencionado “orden panamericano” fue la ratificación, en junio de 1993, del NAFTA por el Parlamento canadiense y en noviembre del mismo año por el Congreso de México, así como por la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. En estos últimos casos, la firma se logró luego de una intensa batalla política entre los congresistas republicanos y demócratas que apoyaban el tratado y los que –atendiendo a los “intereses especiales” de los grupos sindicalistas y ecologistas– exigieron la firma por parte de los tres gobiernos implicados de los llamados “tratados complementarios sobre temas medioambientales y laborales” impulsados por la administración de William Clinton. Se avanzó así en el complejo proceso de “integración silenciosa” y subordinada de México a las necesidades de la socioeconomía estadounidense que ya venía desarrollándose, al igual que en dirección a lo que John Saxe-Fernández (1996) ha denominado “la micro y la macro regionalización neomonroista de Mexamérica”. Esta se profundizó durante la aguda crisis financiera que vivió México a partir de fines de 1994.

Sin dudas, la entrada en vigor del NAFTA, la crisis antes mencionada y su extensión a otros países de la región mediante el llamado “efecto tequila” planteó serías preocupaciones a los gobiernos de Colombia y Venezuela, que veían debilitados los compromisos asumidos en el G-3 por parte del gobierno mexicano. Lo mismo ocurrió con los gobiernos centroamericanos y caribeños, a causa de las amenazas que les planteaban las producciones mexicanas al libre acceso de algunas de sus exportaciones al mercado estadounidense, logrado en 1983 debido a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), unilateralmente impulsada por Ronald Reagan como parte de su relativamente exitosa estrategia político-militar contra los gobiernos revolucionarios o reformadores de esa región. Mucho más porque –concluida la Guerra Fría– las administraciones de George H. Bush y William Clinton habían concentrado su atención en la llamada “agenda negativa” de la Cuenca del Caribe: el narcotráfico y otros delitos conexos, así como las migraciones incontroladas; en particular, las originadas en Haití luego del golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, así como las que constantemente se producían (y todavía se producen) a través de la extensa frontera norte de México.

En ese contexto, en julio de 1994 y respondiendo a las recomendaciones formuladas por la West Indian Commission dirigidas a profundizar y ampliar la CARICOM, así como a enfrentar los enormes desafíos que –según ha sistematizado Tania García Lorenzo– les planteaba (y todavía les plantea) a sus estados miembros “la globalización”, los gobiernos integrantes de esa organización, al igual que del SICA y del G-3, decidieron conformar la Asociación de Estados del Caribe

(AEC), como un organismo intergubernamental de concertación política y cooperación en diversas áreas altamente sensibles para los estados que comparten el Mar Caribe. Algunas de estas áreas son el comercio, el turismo, el transporte, los mal llamados “desastres naturales” y la protección de ese mar frente a las amenazas que plantea el voluminoso tráfico marítimo, incluido el de desechos tóxicos que pueden poner en peligro los ecosistemas de sus correspondientes litorales (García Lorenzo, 1996). De ahí que en tal asociación también aceptaran participar como miembros plenos los gobiernos de Cuba, Haití y República Dominicana, así como miembros asociados representantes de Aruba, Francia (en nombre de Guyana Francesa, Guadalupe y Martinica), las Antillas holandesas (Bonaire, Curazao, Saba, la mitad de la isla de Saint Marteen y San Eustaquio) y las Islas Turcos y Caicos, dependientes del Reino Unido.

Por otra parte, en respuesta al NAFTA y movida por sus propios conceptos geopolíticos y geoeconómicos, la diplomacia brasileña comenzó a impulsar un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y el cada vez más debilitado Pacto Andino que condujera, en un plazo de diez años, a la formación del Área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA), proyecto que amplió la Iniciativa Amazónica anunciada por el gobierno brasileño en el año 1992 (Serbin, 2003). En opinión del estudioso de la política exterior brasileña Luiz Alberto Moniz Bandeira (2003), el anuncio del proyecto del ALCSA realizado por el presidente Itamar Franco (1992-1995) en octubre de 1993 puede haber influido en la decisión del presidente demócrata William Clinton de “revitalizar la Iniciativa de las Américas” anunciada por su predecesor republicano.

Válida o no esa hipótesis, lo cierto fue que, a comienzos de 1994, Clinton convocó a la celebración de la Primera Cumbre de las Américas con el propósito de “concertar intereses y políticas entre todos los gobiernos democráticamente electos del continente”, así como “fortalecer la defensa colectiva de la democracia, luchar contra el comercio de las drogas, liberalizar el comercio y la inversión y promover el desarrollo sostenible” (Christopher, 1994). En respuesta, el presidente cubano Fidel Castro pronunció un contundente discurso en la Cuarta Cumbre Iberoamericana efectuada en Cartagena (Colombia) en junio de 1994, en el que –además de referirse críticamente la convocatoria de esa Cumbre– les demandó a los mandatarios latinoamericanos participantes que defendieran los genuinos intereses de los pueblos de la región. De lo contrario –agregó– habría que proclamar, junto a José Martí, la necesidad de continuar luchando por la “segunda independencia de América Latina” (Castro, 1994).

No obstante, en diciembre de 1994, se efectuó en Miami la Primera Cumbre de las Américas. Cualesquiera que sean las justificadas

críticas que merezca ese cónclave, su significado se remarcó porque fue la primera vez en la ya larga historia de las relaciones interamericanas que se congregaron los mandatarios de los 34 estados del hemisferio occidental, con la única excepción del presidente cubano Fidel Castro, excluido –pese a las demandas de algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños– a causa de la fortalecida estrategia contra la Revolución Cubana que seguía desplegando el *establishment* de la política exterior y la seguridad, así como los sectores más reaccionarios de la mal llamada “comunidad cubana” radicada en EE.UU.

En su discurso en esa cita, William Clinton anunció su disposición a iniciar negociaciones hemisféricas conducentes a la suscripción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), asunto que –con la anuencia unánime de los mandatarios participantes– fue incluido en su declaración final y en el voluminoso plan de acción aprobado por esa cumbre. Sin embargo, la derrota del Partido Demócrata en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1994 (perdió su ya tradicional mayoría en la Cámara de Representantes) impidió que el mandatario estadounidense pudiera obtener la aprobación necesaria para utilizar la llamada “vía rápida” (*fast track*) en las negociaciones de libre comercio con otros países del hemisferio; en primer lugar, con Chile, que –en razón de su “fundamentalismo neoliberal”– había sido unilateralmente seleccionado por la Casa Blanca.

Esto impulsó el funcionamiento de los foros de concertación política (Cumbres Iberoamericanas, Cumbres del Grupo de Río, AEC y SELA) y los “acuerdos de integración económica de segunda generación” que venían desplegando, con mayor o menor consistencia, diferentes gobiernos de América Latina y el Caribe, aunque a estos se les introdujeron diversas modificaciones institucionales, normativas y prácticas orientadas –en palabras de Tania García Lorenzo– a lograr su concordancia con los regresivos cambios en el patrón de acumulación que habían ocurrido luego de la crisis de la deuda externa y como consecuencia de los PAE antes mencionados. Con tal fin, en abril de 1996 también se refundó la Comunidad Andina (CAN), integrada por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y, por tanto, heredera del acervo jurídico-institucional del Pacto Andino (Wagner Tizón, 2004). No obstante, esta vez estaba condicionada por “las reformas neoliberales” e inspirada (al igual que el SICA, la CARICOM y el MERCOSUR) en los eclécticos y a la postre ineficaces conceptos de “transformación productiva con equidad” y “regionalismo abierto”, divulgados por la CEPAL en 1993 y 1994, respectivamente (CEPAL, 1993; 1994).

Según uno de sus impulsores, Osvaldo Sunkel, los proyectos nacionales e integracionistas que se estructuran al amparo de esos conceptos debían sustituir el *desarrollo hacia adentro* y las políticas proteccionistas,

que habían caracterizado “la industrialización por sustitución de importaciones” impulsada por la CEPAL en las décadas precedentes, por *el desarrollo desde dentro*; es decir, por proyectos orientados a “la industrialización por sustitución de exportaciones” dirigidas a los cada vez más competitivos y tecnológicamente intensivos mercados internacionales (Sunkel, 1991). En dichos mercados, perdían cada vez más importancia los productos primarios y semielaborados que predominaban en las exportaciones latinoamericanas y caribeñas, con precios crecientemente deprimidos (CEPAL, 2000). Esto –junto al pago de los voluminosos servicios a la deuda externa y a los *royalties* derivados de las crecientes inversiones extranjeras– profundizó los déficits crónicos en la cuenta corriente de la balanza de pagos de los países latinoamericanos y caribeños. Ello provocó lo que Carlos Vilas (1995) denominó “el síndrome del barril sin fondo”: cuantos más recursos se destinaban al pago de la deuda externa, más debían los gobiernos de ese continente contraer nuevas deudas para garantizar los llamados “equilibrios macroeconómicos”, compulsivamente exigidos por los organismos financieros internacionales.

En ese contexto, y probablemente como respuesta a las concertaciones latinoamericanas y caribeñas antes referidas, luego de su reelección en noviembre de 1996, el presidente estadounidense William Clinton emprendió una nueva ofensiva político-diplomática dirigida a reverdecer lo que su entonces secretario de Estado, Warren Christopher, denominó “el espíritu de Miami”. Además de las interacciones bilaterales con diversos jefes de Estado y de gobierno (en primer lugar, con el nuevo Primer Ministro y líder del Partido Liberal de Canadá, Jean Chrétien, y con los presidentes de México y Chile, Ernesto Zedillo y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, respectivamente), esa ofensiva incluyó reuniones colectivas con sus homólogos centroamericanos y caribeños (se efectuaron en mayo de 1997 en Costa Rica y Barbados) y las primeras visitas oficiales de ese mandatario demócrata a Argentina, Brasil y Venezuela.

A pesar de los estrechos límites de sus acuerdos, así como de las contradicciones que se expresaron en esos encuentros, ellos desbrozaron el camino para la realización de la Segunda Cumbre de las Américas, efectuada en Santiago de Chile entre el 18 y 19 de abril de 1998. Esta ratificó los acuerdos de la Cumbre de Miami de 1994 y, luego de vencer las resistencias de algunos gobiernos sudamericanos (en particular de Brasil), acordó comenzar de inmediato y concluir antes de 2005 las negociaciones dirigidas a la suscripción del ALCA. De una u otra forma, tal decisión incrementó la influencia negativa que históricamente habían ejercido sucesivos gobiernos de EE.UU. en los proyectos de “integración económica” que entonces se estaban desarrollando en América Latina y el Caribe (Magariños, 2000).

Mucho más porque esa cumbre también acordó la realización de diversas reuniones de ministros de Comercio y otras áreas vinculadas al diseño de las políticas económicas previas a la Tercera Cumbre de las Américas, pautada para efectuarse en Canadá en 2001. Además, para preparar esa cita se formó una troica integrada por representantes de alto nivel de Canadá, Chile y EE.UU., así como un Grupo de Revisión de la Implementación de los acuerdos de las Cumbres (GRIC) y una Secretaría Técnica integrada por la OPS, la CEPAL y la OEA, que sería la encargada de darle seguimiento a las complejas negociaciones del ALCA. Obviamente, de esa secretaría fueron excluidos el SELA y los demás organismos de concertación política latinoamericanos y caribeños antes mencionados.

Por consiguiente, al amparo de esos acuerdos y como ya había ocurrido entre 1995 y 1997, continuaron celebrándose decenas de reuniones políticas y técnicas en prácticamente todas las esferas de las relaciones interamericanas, incluidas las Cumbres de Ministros de Defensa, con el fin de adoptar acuerdos orientados a enfrentar de manera “cooperativa” los “nuevos enemigos” y las “amenazas no tradicionales” a la “seguridad interamericana” (Ruiz Blanco, 2003; Franko, 2003). Tal como se verá en el Anexo 3, sin negar las contradicciones existentes entre diversos gobiernos del hemisferio (entre ellas, las vinculadas con el tratamiento unilateral que el gobierno estadounidense le otorgaba al narcotráfico y a las relaciones con Cuba), como consecuencia de todas esas reuniones y de la nueva dinámica adquirida por la OEA, entre 1991 y 2001 proliferaron, a espaldas de la opinión pública, nuevos instrumentos político-jurídicos panamericanos que –sobre la base del Derecho de los Tratados– se han venido incorporando a las legislaciones nacionales de los estados miembros. Esto a pesar de que algunos de ellos inciden en esferas nítidamente vinculadas a sus correspondientes ordenamientos políticos internos, como la administración de justicia y los procesos electorales.

En ciertas circunstancias, estos últimos pueden ser “supervisados” y “calificados” por la OEA, organización que –acorde con el Protocolo de Washington (ratificado en 1997) y la Carta Democrática Interamericana (aprobada en septiembre de 2001)– puede prohiar “intervenciones democráticas colectivas” en sus estados miembros, aun cuando algunos de ellos hayan sido separados de la organización a causa de la violación de las llamadas “cláusulas democráticas” que, poco a poco y siguiendo los acuerdos de las Cumbres de las Américas, han venido incorporándose a las normativas de todos los órganos del Sistema Interamericano, así como de buena parte de los acuerdos de concertación política, cooperación e integración económica que se están desarrollando en América Latina y el Caribe.

Merece consignarse que, aun antes de que se adoptaran o ratificaran esos acuerdos, el Departamento de Estado y la Secretaría General de la OEA ya habían emprendido “intervenciones democráticas” en Perú (1992), Guatemala (1993) y Paraguay (1996). En este último caso, con el apoyo de los demás gobiernos integrantes del MERCOSUR. Previamente, y siguiendo un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU, las fuerzas armadas estadounidenses habían ocupado Haití (1994) con el pretexto de restablecer el gobierno constitucional de Jean-Bertrand Aristide, quien, entre otras cosas, fue compulsado por la administración de William Clinton a admitir los ajustes neoliberales a la economía haitiana, la política antidrogas elaborada por EE.UU. y la “supervisión” de la OEA antes, durante y después de las cuestionadas (por la oposición) elecciones generales efectuadas en ese país en 1996.

También vale la pena destacar que todas esas acciones fueron respaldadas, de una u otra forma, por el gobierno de Canadá. Particularmente después de que, en octubre de 1993, ganara las elecciones el ya mencionado líder del Partido Liberal, Jean Chrétien (1993-2003). Este –auxiliado por su secretario de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Lloyd Axworthy– emprendió una profunda revisión de la política internacional y de seguridad desarrollada por su antecesor, Brian Mulroney (Wood, 2005). Como consecuencia de tal revisión, la llamada “seguridad humana” se convirtió –junto al libre comercio y el impulso del ALCA– en el elemento articulador del pretendido “liderazgo intelectual y moral” canadiense en el hemisferio occidental. En dichas definiciones tuvo un papel relevante la percepción oficial de que –en las condiciones de la posguerra fría– las nociones de la “seguridad nacional” (centrada en los estados) ya eran obsoletas y potencialmente peligrosas, en tanto las nuevas amenazas a “la seguridad de los individuos” (la delincuencia transnacional, las guerras civiles y étnicas, las enfermedades, el calentamiento global, etc.) “trascienden fronteras políticas y afectan a regiones enteras o incluso a todo el planeta” (Hristoulas, 2005).

Según Athanasios Hristoulas, en ese enfoque (que él denomina “posnacional”), “los asuntos económicos son considerados asuntos de seguridad y viceversa”; en tanto “los problemas de seguridad global se deben a la inestabilidad económica” y, por tanto, la cooperación –en vez de la competencia– entre los estados es la única forma de enfrentar “las amenazas a la seguridad global”. En la percepción del mencionado gobierno liberal canadiense, lo antes dicho implicaba “una definición más flexible de [la] soberanía para permitir a otros estados y actores no estatales participar en la solución de problemas nacionales e internacionales”. De ahí su defensa al “derecho y la obligación de los estados [a] interferir en otro estado (incluso violar su soberanía) si llega a ser nece-

sario”, siempre que esto se realice “bajo los auspicios de una organización internacional como la OEA y la ONU” (Hristoulas, 2005: 255).

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esos enfoques, lo cierto es que, en la última década del siglo XX, tales criterios encontraron ciertas concordancias con el discurso y la práctica de la administración de William Clinton, quien probablemente pasará a los registros del Congreso estadounidense como el presidente que, en las últimas cinco décadas del siglo XX, más veces empleó las fuerzas militares en operaciones fuera de sus fronteras nacionales (Grimmett, 1999). Por consiguiente, los criterios oficiales canadienses antes referidos también encontraron simpatías en aquellos sectores, tanto conservadores y neoconservadores como liberales, del *establishment* de la política exterior norteamericana que consideraban (y consideran) necesario derribar el incómodo “muro de contención” que el principio de la *no intervención* históricamente le había colocado a lo que han considerado (y consideran) el presuntamente adecuado desenvolvimiento de las relaciones interamericanas.

De más está decir que –a pesar de todos los avances obtenidos en ese sentido por las administraciones de George H. Bush y William Clinton– la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños continuaron vindicando la vigencia del principio de la *no intervención*, tanto en sus interacciones recíprocas, como en sus relaciones con Canadá, EE.UU. y otras potencias imperialistas. En el período que abarca esta lección, ello se puso de manifiesto en la falta de disposición de la mayoría de los gobiernos integrantes de la OEA para legitimar *ex ante* la ya mencionada intervención militar estadounidense en Haití. También en el rechazo por parte de la Corte Interamericana de Justicia, la Asamblea General de la OEA y las Cumbres Iberoamericanas a la denominada Ley Helms-Burton, normativa anticubana (firmada por Clinton en 1996) que llevó al paroxismo la pretensión de los grupos dominantes en EE.UU. de extender *ad infinitum* la jurisdicción de las leyes y los tribunales de ese país. Así también, se vio en la oposición de varios gobiernos latinoamericanos y caribeños al militarizado, multimillonario e intervencionista Plan Colombia, aprobado e implementado por la administración de William Clinton a partir del año 2000 (Petras, 2001).

A ello es necesario agregar las dificultades que le creó a la ya deteriorada Alianza Estratégica entre América Latina, el Caribe y la UE la pretensión de los órganos supranacionales de esa organización de desconocer la soberanía de sus contrapartes latinoamericanas y caribeñas; la incapacidad del gobierno liberal canadiense de incorporar sus ambivalentes conceptos sobre “la seguridad humana” en los acuerdos y resoluciones de la OEA, así como de la Tercera Cumbre de las Américas efectuada en Quebec (Canadá) a comienzos de 2001. Y a ello es preciso

unir las cláusulas defensoras de la soberanía y la no intervención que –a iniciativa del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela– se le incorporaron a la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA efectuada en Lima (Perú) en septiembre de 2001. También deben considerarse las crecientes resistencias de diversos gobiernos, así como de otras fuerzas políticas y sociales canadienses, latinoamericanas y caribeñas, a la “guerra preventiva contra el terrorismo” emprendida, desde septiembre de 2001, por la administración de George W. Bush. Al análisis de ese pasado-presente de las relaciones interamericanas estará dedicada la próxima lección.

Lección Nueve

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DURANTE LA PRIMERA ETAPA DE LA “GUERRA TERRORISTA CONTRA EL TERRORISMO”

ESTA PENÚLTIMA LECCIÓN se refiere al estudio de las relaciones interamericanas durante el período que va desde los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono (11 de septiembre de 2001) hasta fines del año 2007. En razón de los criminales métodos que se han empleado contra la población civil de diversos países del mundo (Afganistán, Irak, Colombia, entre otros), y parafraseando una expresión de Ramón Grosfoguel (2002), ese lapso podría identificarse como “la primera etapa de la guerra terrorista de Estado” o simplemente de la “guerra terrorista contra el terrorismo” emprendida por el reaccionario presidente republicano estadounidense George W. Bush y por el *establishment* de la política exterior, defensa y seguridad de esa potencia imperialista desde fines del año 2001.

Como se adelantó en la lección anterior, esa “guerra infinita” fue utilizada por los grupos dominantes y los sectores neoconservadores estadounidenses con vistas a intentar superar (algo que finalmente lograron en las elecciones generales de noviembre de 2004) la ilegitimidad derivada de los tortuosos medios político-jurídicos con los que George W. Bush había obtenido la presidencia a fines del año 2000. También para estructurar el ahora deteriorado consenso político doméstico que necesitaban para llevar a la práctica las principales ideas sobre la política interna, exterior y de seguridad de EE.UU. enunciadas

en el ya referido Proyecto para el Nuevo Siglo Americano presentado públicamente en 1997 (Acosta Matos, 2005). Buena parte de esas ideas se sintetizaron en el Acta Patriótica de 2001 y en la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. (unificada alrededor de la llamada “guerra preventiva contra el terrorismo”) que el 20 de septiembre de 2002 fuera entregada al Congreso por el mencionado mandatario estadounidense (Bermúdez Torres, 2003; Suárez Salazar, 2003b).

Previamente, el 20 de septiembre de 2001, “la diplomacia” estadounidense había obtenido el apoyo de la absoluta mayoría de los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA y de los estados signatarios del obsoleto TIAR a la “cruzada contra el terrorismo” iniciada por los gobiernos de EE.UU. y sus principales aliados euroasiáticos con el bombardeo y la posterior ocupación militar de Afganistán. Como un fruto de ese respaldo, en 2002 la OEA aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, impulsada por el entonces secretario de Estado norteamericano, Collin Powell (García Collada, 2005).

Pese a sus vigentes enunciados, ese respaldo hemisférico a la que se ha llamado “guerra terrorista contra el terrorismo” comenzó a resquebrajarse en los dos meses previos a la unilateral ocupación militar de Irak, iniciada por las fuerzas militares estadounidenses en marzo de 2003. Tal acción encontró el rechazo de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, incluidos los de Chile y México que entonces ocupaban escaños como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Ambos –junto con Francia, la República Popular China y Rusia– habían rechazado las resoluciones anglo-estadounidenses dirigidas a legitimar el inicio de esa ocupación. En razón de su proverbial defensa del multilateralismo y su recurrente “cooperación antagónica” con EE.UU., también se había opuesto a ella el gobierno canadiense, entonces encabezado por el premier liberal Jean Chrétien (1993-2003). Este también había tenido una respuesta adversa a la inconsulta decisión del gobierno estadounidense de estructurar, como parte de su *homeland security*, el Comando Norte de las Fuerzas Armadas norteamericanas (NORTHCOM, por sus siglas en inglés), cuya área de operaciones, además de EE.UU., incluye a Canadá, México, partes del Caribe y las aguas contiguas de los océanos Atlántico y Pacífico (Rosas, 2005: 273).

Según se ha documentado, en razón del impacto interno que tuvo la dura respuesta de la administración de George W. Bush, Chrétien se vio obligado a renunciar a su cargo a fines de 2003. Fue sustituido por su correligionario Paul Martin, quien antes de celebrar las nuevas elecciones federales en mayo de 2004 comenzó a realizar diversas concesiones al gobierno de EE.UU., entre ellas algunas vinculadas al funcionamiento del NORTHCOM (Chossudovsky, 2003). Sin embargo,

como se verá en el Cuadro 9, Martin no logró restablecer la mayoría parlamentaria de que había gozado el Partido Liberal desde 1993. En consecuencia, debió constituir lo que en el sistema político canadiense se denomina “un gobierno de minoría”. Es decir, aliado con otros de los partidos con representación en la Cámara de los Comunes.

Cuadro 9

Resultado de la elección federal canadiense, 28 de junio de 2004*

Partido	Asientos en la Cámara de los Comunes	Porcentaje de la votación
Partido Liberal (PL)	135	36
Partido Conservador (PC)	99	29
Bloque Quebequense (BQ)	54	49 (sólo en Québec)
Nuevo Partido Democrático (NPD)	19	16
Independientes	1	-

Fuente: Denis (2005: 272-274).

* Asientos requeridos para obtener la mayoría en la Cámara de los Comunes: 155.

Para intentar resolver esa precaria situación, en 2005 el gobierno canadiense suscribió con sus homólogos de EE.UU. y México el llamado Pacto para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, propugnado por la administración de George W. Bush, en consuno con los poderes fácticos y diversas empresas transnacionales estadounidenses y sus filiales canadienses y mexicanas. No obstante, algunos escándalos vinculados a la corrupción determinaron que, a fines de ese año, Paul Martin perdiera el apoyo del NPD (de tendencia socialdemócrata), lo que –luego de un “voto de no confianza” en la Cámara de los Comunes– lo obligó a convocar a nuevas elecciones federales en enero de 2006.

Como se verá en el Cuadro 10, en esos comicios obtuvo la mayoría relativa el Nuevo Partido Conservador (NPC), liderado por el actual premier Stephen Harper, cuya agenda política se sitúa más a la derecha que la de los llamados “conservadores tradicionales canadienses”, históricamente agrupados en el Partido Conservador. Tanto así, que algunos comentaristas políticos califican al NPC como “republicanos canadienses”, en una alusión a sus similitudes programáticas con los grupos neoconservadores que en la actualidad gobiernan en EE.UU. (Sánchez Egózcue y Rodríguez Rodríguez, 2006).

Cuadro 10

Resultado de las elecciones parlamentarias en Canadá, enero de 2006

	BQ	NPC	PL	NPD	Otros
Escaños	51	125	102	29	1
Votos (%)	10,5	36,3	30,2	17,5	5,5

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre datos de Sánchez Egózcue y Rodríguez Rodríguez (2006).

Según las tradiciones políticas canadienses, lo dicho preannuncia que en los próximos meses nuevamente se convocará a elecciones parlamentarias en Canadá. Ello continuará dificultando que el gobierno de Harper emprenda su anunciada revisión de la política exterior y de seguridad desplegada entre 1993 y 2006 por los mencionados gobiernos liberales (Sánchez Egózcue y Rodríguez Rodríguez, 2007). Como en otras ocasiones históricas, en ello tendrá una enorme influencia el estado de las relaciones políticas, económicas, militares y de seguridad entre Canadá y EE.UU. Mucho más por las dificultades que seguramente encontrará el NPC para movilizar el apoyo del BQ, del NPD y de sectores del PL a aquellas decisiones que profundicen la ya alta dependencia canadiense hacia su vecino del Sur –en especial, en momentos en que existen importantes señales que indican la pérdida del apoyo interno que lograron movilizar los neoconservadores estadounidenses entre el 11 de septiembre de 2001 y las elecciones parciales realizadas en noviembre de 2006.

La “lógica global” del sistema [capitalista y del dominio imperialista] está atravesada por contradicciones que, en su desenvolvimiento, pueden eventualmente conducir al colapso del sistema y a la preparación de las bases materiales y culturales para construir uno alternativo (Boron, 2002).

Como ha indicado Luis Suárez Salazar (2007a), en la construcción de esas alternativas tendrá un significativo papel el desenlace de la dinámica entre la reforma, la contrarreforma, el reformismo, la revolución y la contrarrevolución que, desde fines del siglo XX, se ha venido desplegando en América Latina y el Caribe –en particular en el área andino-amazónica, estremecida por las sucesivas victorias electorales del actual presidente Hugo Chávez Frías en las elecciones generales de 1998 y en el plebiscito de 1999. En este último, la mayoría del pueblo venezolano aprobó la nueva Constitución de la que desde ese año se denominó República Bolivariana de Venezuela (RBV) y, por consiguiente, ratificó su apoyo al mencionado mandatario, así como a las fuerzas políticas entonces integrantes del llamado Polo Patriótico. Esto último –unido

al paquete de leyes de alcance popular promulgadas por Chávez– provocó una agudización de las multiformes luchas sociales y de clases en ese país. Ello se puso de manifiesto antes, durante y después de los sucesivos fracasos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, del “golpe petrolero” de fines de ese mismo año y del referendo revocatorio de agosto de 2004, en el que el 60% de los votantes rechazó las pretensiones de la mal llamada Coordinadora Democrática de derogar el mandato de Chávez.

La validación de esos resultados por parte del ex presidente de EE.UU. James Carter y –a regañadientes– del entonces secretario general de la OEA, César Gaviria (1994-2004), le propinó un duro golpe a los fragmentados partidos opositores a la Revolución Bolivariana, ostensiblemente apoyados –antes, durante y después de los fallidos golpes de Estado y “golpe petrolero” ya referidos– por el *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU. (Golinger, 2005). Esa victoria política le permitió al gobierno venezolano el despliegue de una fortalecida proyección externa que ha tenido como pilares el antiimperialismo, el tercermundismo y el impulso de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuyas bases cardinales (políticas, económicas, sociales, ideológico-culturales e institucionales) son totalmente antitéticas con la integración neoliberal y dependiente de sus necesidades geopolíticas y geoeconómicas impulsada por sucesivos gobiernos temporales estadounidenses (Benjamín y Tavares Ribeiro, 2004). Dichas bases también son críticas de los ineficaces proyectos de “integración económica de primera y segunda generación” (desarrollistas y neodesarrollistas) que se han venido llevando a cabo en América Latina y el Caribe desde 1960 hasta la actualidad (Suárez Salazar, 2006b; Katz, 2007; Martínez, 2007).

Estas dimensiones teórico-prácticas del ALBA –calificadas por Luis Suárez Salazar como “neosocialistas e independentistas”– quedaron nítidamente expresadas en el Comunicado Conjunto firmado en diciembre de 2004 por los presidentes de Cuba y de la RBV, Fidel Castro y Hugo Chávez, respectivamente (Aguirrechu, 2007: 149-152; Suárez Salazar, 2007b). También en el Acuerdo para la Aplicación del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) firmado por los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro durante su reunión tripartita efectuada en la Ciudad de La Habana (Cuba) el 28 y 29 de abril de 2006 (Aguirrechu, 2007: 187-193) –es decir, cuatro meses después de la histórica elección de Evo Morales como presidente de Bolivia. Como se sabe, esta fue antecedida por las combativas movilizaciones que, desde la llamada “guerra por el agua” (2000), había desplegado el movimiento popular boliviano contra los sucesivos gobiernos neoliberales y proimperialistas encabezados por Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo

Sánchez de Losada y Carlos Mesa. Buscando una salida a la irresoluta crisis política del país, este último se había visto obligado a formar un débil gabinete integrado por “figuras independientes” (Prada, 2006).

En consecuencia, los referidos acuerdos del ALBA-TCP fueron desarrollados en todas las cumbres posteriores y, en particular, en las dos citas presidenciales realizadas en la RBV en 2007. En estas –con la participación del líder del FSLN y actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (fue electo a fines de 2006)– se aprobaron nuevos “proyectos gran nacionales” y se avanzó en la creación de una institucionalidad, en la que junto a los gobiernos que la integran se prevé que participarán los más importantes movimientos sociales de sus estados miembros, organizados a través de sus correspondientes “consejos nacionales”. Según la información disponible, los detalles de la estructuración de esos consejos, al igual que el funcionamiento del denominado Consejo de Movimientos Sociales (CMS) del ALBA-TCP, serán perfilados en las reuniones de su Consejo de Ministros y en las cumbres presidenciales previstas para 2008. En esas reuniones es probable que se incorporen nuestros estados, como pudieran ser los casos de Ecuador y Dominica, cuyo gobierno solicitó oficialmente su ingreso al ALBA a fines de 2007.

Es preciso destacar que todo ese proceso fue antecedido por la victoria electoral del presidente Rafael Correa en Ecuador (a los antecedentes y significado de ese hecho se volverá más adelante) y, previamente, por la suscripción –a instancias del presidente venezolano– del Acuerdo de Cooperación Energética (dio origen a PETROCARIBE) y del Fondo ALBA-Caribe, signados por los mandatarios de once países integrantes de la CARICOM⁹, la RBV, la República de Cuba y la República Dominicana, como fruto de la Segunda Cumbre Energética del Caribe efectuada en Jamaica en septiembre de 2005 (Suárez Salazar, 2006a). También por la fundación, en diciembre de 2004, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, continuadora de las reuniones de presidentes de esa región que venían celebrándose desde el año 2000 y de los trabajosos acuerdos que, desde entonces, venían firmándose entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR (Serbin, 2003).

Posteriormente, y como uno de los frutos de la exitosa Cumbre Energética realizada en la RBV en abril de 2007, los mandatarios sudamericanos o sus representantes acordaron fundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a la que también pretenden incorporarse los gobiernos de la República Cooperativa de Guyana y de

9 Los únicos estados de la CARICOM que no firmaron los mencionados acuerdos fueron Haití, Barbados y Trinidad y Tobago. Estos dos últimos, por las implicaciones que ello podría tener para sus exportaciones de petróleo y derivados a los demás países del Caribe; mientras que, en el caso de Haití, se debió a que seguía bajo la ocupación militar iniciada en 2002 bajo el amparo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Surinam (Laya y Romero, 2007). Aunque todavía es necesario resolver muchos problemas para la exitosa institucionalización de ese novedoso mecanismo de concertación política y cooperación económica, en diciembre de ese mismo año se constituyó el Banco del Sur, inicialmente integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la RBV.

Vale la pena recordar que, un año antes, la RBV había sido aceptada como miembro pleno del MERCOSUR. Aunque esa decisión todavía está pendiente de ratificación por los parlamentos de Brasil y Paraguay, sin dudas fue favorecida por los progresivos cambios políticos que previamente se habían producido en los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y, en menor medida, Paraguay. En el primero de esos países, a partir de junio de 2003, ocupó la presidencia el “neoperonista” Néstor Kirchner, cuya correligionaria y esposa, Cristina Fernández, fue electa para dicho cargo a fines de 2007. En el segundo, en octubre de 2003, obtuvo la presidencia el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio da Silva (Lula), quien fue reelecto en 2007. En el tercero, triunfó en las elecciones presidenciales de noviembre de 2004 el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez (ocupó efectivamente el cargo en marzo de 2005); y en el último ganó los comicios de igual carácter efectuados en abril de 2003 el candidato del Partido Colorado, Nicanor Duarte. Este sustituyó a su correligionario Luis González Macchi, quien por designación del Congreso había llegado a la presidencia y desplegado su gestión en medio de la profunda crisis política que afectó a ese país luego del fallido intento golpista de 1999, encabezado por el general Lino Oviedo. En la misma medida en que la elección de Duarte contribuyó a superar la inestabilidad política interna, su gobierno comenzó a proyectar una activa política exterior dirigida a fortalecer sus “asimétricas” relaciones con el MERCOSUR.

Ese positivo cuadro político sudamericano interactuó con las intensas y reprimidas movilizaciones populares que culminaron con la ya referida victoria electoral de Evo Morales en Bolivia y, previamente, el 20 de abril de 2005, con la renuncia y exilio del entonces presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2003-2005). En razón de la debilidad política de su sustituto, el hasta entonces vicepresidente Alfredo Palacios, así como del poder acumulado por los plurales movimientos sociales y políticos ecuatorianos antineoliberales y antiimperialistas, en 2006 fue electo como presidente de la República Rafael Correa, quien como parte de la que denomina “revolución ciudadana” se encuentra inmerso en una intensa batalla política por realizar una profunda reforma a la Constitución del país y deshacer los acuerdos en materia de seguridad signados por sus antecesores con el gobierno de EE.UU. –incluidos aquellos que propiciaron la instalación de la base militar de Manta. En

consecuencia, tal como ya lo había hecho el gobierno de Evo Morales, rechazó totalmente el TLC que venía siendo negociado por el gobierno estadounidense y la mayor parte de los gobiernos integrantes de la enormemente debilitada Comunidad Andina.

El impulso inicial de esas negociaciones se lo había conferido la reunión efectuada en Lima, en marzo de 2002, por George W. Bush con sus entonces homólogos de Perú (Alejandro Toledo), Bolivia (Jorge Quiroga), Colombia (Miguel Pastrana Arango) y el representante del entonces presidente de Ecuador, Gustavo Noboa (2002-2003). En dicho encuentro –a cambio del inicio de las negociaciones del mencionado TLC– el mandatario estadounidense comprometió a los gobiernos de esos países a respaldar la “guerra contra el narcoterrorismo” y, en particular, las acciones político-militares previstas en la denominada Iniciativa Andina Antidrogas –más conocida como Iniciativa Regional Andina (IRA)–, complementaria, desde abril de 2001, al intervencionista y militarizado Plan Colombia aprobado en 2000 por la administración del demócrata William Clinton (Suárez Salazar, 2005).

Como se ha documentado, los objetivos máximos de la IRA eran crear “un cordón sanitario” y eventualmente estructurar una fuerza militar multinacional capacitada para intervenir en el conflicto interno colombiano (Petras, 2001). Este tuvo nuevos y sangrientos episodios luego de la decisión del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana Arango (1998-2002) de romper las llamadas “negociaciones de paz dentro de la guerra” que –prácticamente desde el comienzo de su mandato y con el apoyo de algunos gobiernos latinoamericanos y europeos– había venido desarrollando con la organización político-militar FARC-EP y, con menos intensidad, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En tal ruptura jugaron un importante papel las exitosas presiones del *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU. sobre el presidente colombiano y la incorporación de las FARC-EP y el ELN en la lista de “organizaciones terroristas” unilateralmente elaborada por el Departamento de Estado. A partir de agosto de 2002, y a pesar de sus diversos diálogos con esta última organización, la clasificación fue aceptada por el actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quien durante su primer mandato (2002-2006), en nombre de la “seguridad democrática” y la “guerra contra el terrorismo”, emprendió diversas acciones para internacionalizar el conflicto interno colombiano –entre ellas, las desplegadas ante la ONU, la UE, la OEA y, de manera bilateral o plurilateral, con diversos gobiernos latinoamericanos (Popa Danel, 2005).

En razón del fracaso de esas gestiones, luego de su reelección en 2006, Álvaro Uribe propugnó la ampliación hasta el Putumayo de todos los componentes geopolíticos y geoeconómicos del Plan Puebla-Panamá (PPP), impulsado desde 2002 por los gobiernos de México y EE.UU.

(Álvarez et al., 2002; Zuluaga, 2007). En 2007, estos suscribieron el Plan México, orientado a ampliar la voluminosa “cooperación” político-militar-policial, y continuaron avanzando en la implementación del referido Pacto para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Por ello, no fue extraño que las gestiones del mandatario colombiano para darle identidad al Plan Puebla Putumayo encontraran cierta acogida en los círculos oficiales estadounidenses y mexicanos. También en la mayoría de los gobiernos centroamericanos comprometidos con la agenda de seguridad y libre comercio impulsada –como parte de la “guerra terrorista contra el terrorismo”– por el presidente estadounidense George W. Bush. Así se evidenció durante la reunión que en 2002 sostuvo ese mandatario con sus homólogos centroamericanos, incluida la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso (1999-2004) y el primer ministro de Belice, Said Musa.

En consecuencia, a lo largo de 2003, se desplegaron intensas negociaciones dirigidas a la firma de un asimétrico TLC entre los representantes de los gobiernos de EE.UU. y del SICA (conocido como DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), al cual posteriormente se incorporaron los gobiernos de Costa Rica y República Dominicana. El primero de ellos, durante el ya concluido mandato de Abel Pacheco (2002-2006) y el segundo, durante el gobierno de su actual presidente Leonel Fernández (2004-...), responsable, además, de la renovada presencia de las fuerzas militares de EE.UU. en esa isla del Caribe. A ello se agregó la suscripción en 2007 de un Tratado de Promoción Comercial entre los gobiernos de EE.UU. y Panamá. Paralelamente, el gobierno de este último país –encabezado desde 2004 por Martín Torrijos– comenzó a dar pasos para reorganizar la dirección de sus fuerzas represivas con el apoyo del BID (Jované, 2007).

Previamente, y violando los acuerdos de paz con los que culminó el llamado “conflicto centroamericano”, se consolidó la presencia militar norteamericana en Honduras y El Salvador. Asimismo, comenzaron a desarrollarse nuevas maniobras militares estadounidenses en consuno con las fuerzas armadas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Movilizados por el entonces presidente español José María Aznar (1996-2004), los gobiernos de estos países enviaron pequeños contingentes a la guerra desatada por EE.UU. contra Irak (Matul, 2004). Colofón de esas estrechas relaciones político-militares fueron las resoluciones adoptadas en la XXVI Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (junio de 2005), dirigidas a la inmediata formación, con respaldo estadounidense, de “una Fuerza de Acción Rápida contra el narcotráfico, las pandillas y el terrorismo”, integrada por destacamentos militares y policiales de sus estados miembros, con la excepción de Costa Rica (CEG, 2005).

Asimismo, recogiendo una propuesta que les formuló la secretaria de Estado Condoleezza Rice, la propia cumbre del SICA decidió crear en El Salvador una sucursal regional de la Academia Internacional de Policía (conocida con el acrónimo de ILEA) que tiene su sede principal en la capital estadounidense. Vale la pena destacar que, con anterioridad a esos acuerdos, todos los gobiernos centroamericanos mencionados habían firmado con el gobierno de EE.UU. los mal llamados Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (BIA, por sus siglas en inglés) orientados a lograr, de manera compulsiva y alegando el Artículo 98 del Tratado de Roma de 1998, que los crímenes (incluidos los de *lesa humanidad*) perpetrados por los funcionarios militares y civiles estadounidenses quedaran fuera del alcance de la Corte Penal Internacional, así como de los tribunales de los estados nacionales donde estos actúen (García Rivera, 2003).

Como han demostrado varios estudiosos de tales temas, todos esos despliegues militares y policiales se vinculan a la estrategia de los grupos dominantes en EE.UU. para controlar los principales recursos geoestratégicos y naturales existentes en los territorios ubicados al norte y al sur de sus fronteras (Ceceña, 2007). También se relacionan con el despliegue de Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) de las fuerzas armadas estadounidenses y con el sistemático funcionamiento de todas las instituciones que, bajo su conducción, articulan las doctrinas de “seguridad y defensa”, así como el equipamiento y entrenamiento de la mayoría de las fuerzas militares del continente americano, incluidas las Conferencias de Jefes de Ejército, Marina y Aviación que siguen realizándose al amparo del anacrónico TIAR, con la cooperación de la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica de la OEA y la Junta Interamericana de Defensa (Chateau Magalhaes, 2007). En 2006, esta quedó formalmente subordinada a los órganos de dirección de la OEA.

Como parte de ese entramado –que algunos autores denominan “el ALCA militar”–, se han venido firmando diferentes acuerdos plurilaterales y bilaterales de defensa y seguridad entre EE.UU. y varios gobiernos latinoamericanos y caribeños. Gracias a ellos, continúan desarrollándose diversas maniobras militares conjuntas (entre ellas, las bautizadas por el Pentágono con el apelativo “Nuevos Horizontes”) en distintos países latinoamericanos (Argentina, Guatemala, Panamá, República Dominicana). Asimismo, se ha producido una creciente presencia de los órganos de seguridad e inteligencia estadounidenses en la llamada Zona de la Triple Frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay (Isacson et al., 2005). También se han instalado nuevas “facilidades” militares (los mencionados FOL) en diferentes países del hemisferio occidental: El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y más recientemente Paraguay (Aliscioni, 2005). A estas se suman las bases militares

“tradicionales” que perduran en Cuba y en el colonizado archipiélago de Puerto Rico, así como los FOL instalados desde el año 2000, con la anuencia de la monarquía constitucional holandesa, en Aruba y Curazao (Ronchen, 2004). Con el pretexto de la lucha contra el “narcotráfico”, contra “el terrorismo” y “el populismo radical”, estos últimos se han venido fortaleciendo como parte del “cordón de seguridad” instalado por EE.UU. contra la Revolución Bolivariana.

A lo dicho se agregan las fuertes presiones que sigue ejerciendo el *establishment* de la política exterior y de seguridad de EE.UU. sobre los gobiernos integrantes de la CARICOM. Así quedó demostrado en las prolongadas maniobras militares mal denominadas “Confraternidad de las Américas” y “Enjoy Caribbean Lion 2006”, desplegadas a partir de mayo de 2006 por poderosas fuerzas navales estadounidenses y de la OTAN en las aguas del Mar Caribe (Isa Conde, 2006). También en la conferencia entre el presidente estadounidense y los jefes de Estado o Gobierno de la CARICOM, efectuada en Washington el 20 de junio de 2007. Allí, estos se comprometieron a cumplir los diferentes acuerdos de ejecución de la ley y de lucha contra las drogas signados con EE.UU. en la década del noventa (ver Cuadro 11). A cambio, George W. Bush prometió “trabajar con el Congreso para extender y actualizar” la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), impulsada desde 1983 por la reaccionaria administración de Ronald Reagan, al igual que el Acuerdo Marco de Inversiones y Comercio (AMIC) firmado en 1991 por su sucesor, George H. Bush (USA/CARICOM, 2007).

Como ha demostrado Tania García Lorenzo (2006), esos acuerdos tienden a fortalecer la dependencia estructural y funcional del Caribe insular y continental (Bélice, Guyana y Surinam) de las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los grupos dominantes en EE.UU. Mucho más porque, en los dos últimos años, han venido ocupando los gobiernos de Bahamas, Jamaica y Santa Lucía diversas fuerzas políticas interesadas en ampliar sus vinculaciones político-económicas con esa potencia imperialista y consolidar el Espacio Común Doméstico que –bajo la égida de los órganos represivos estadounidenses– se ensayó durante la Copa Mundial de Cricket realizada en 2007.

Todo esto ha complicado aún más el funcionamiento de la AEC, atravesada por los contradictorios intereses de sus estados miembros y, en particular, por el diferente compromiso que tienen con dicha asociación los gobiernos de Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Venezuela, así como los integrantes del SICA y la CARICOM –estos últimos ahora empeñados en concluir antes de 2015 la organización de una Economía y Mercado Único (CSME, por sus siglas en inglés) fundada, en las palabras de Norman Girvan (2006), en una “visión única del desarrollo” que permita fortalecer su autosustentación económica, “la

eliminación de la pobreza” y la “provisión de estándares de vida decentes” para todos los ciudadanos de los países miembros de ese acuerdo integracionista. A su vez, con la promoción de la llamada “seguridad multidimensional” (económica, política, social, ambiental, policíaca y militar), sus gobiernos buscan compensar la ya referida “agenda negativa” impulsada por la diplomacia político-militar estadounidense.

Cuadro 11

Acuerdos de ejecución de la ley y lucha contra las drogas firmados entre EE.UU. y diversos gobiernos caribeños (1987-1998)

País	Tratado de Asistencia Legal Mutua	Tratado de Asuntos Marítimos contra las Drogas
Antigua y Barbuda	1998*	1995
Bahamas	1987	1996
Barbados	1998*	1997
Dominica	1998*	1995
República Dominicana	-	1995
Granada	1998*	1995
Jamaica	1989	1997
Saint Kitts y Nevis	1998*	1995
Santa Lucía	1998*	1995
San Vicente y Las Granadinas	1998*	1995
Trinidad y Tobago	1998*	1996

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre datos de García Muñiz y Rodríguez Beruff (1999: 29).

* Estos tratados recibieron el consentimiento del Senado de EE.UU. el 21 de octubre de 1998, pero entraron en vigor en 1999.

No obstante las contradicciones que en la actualidad afectan a los gobiernos integrantes de la CARICOM, no existen dudas acerca de que la eficaz concertación de su política exterior fue uno de los ingredientes que contribuyeron a la *ralentización* de los exitosos pasos que, desde 1990, venían dando los cambiantes gobiernos de EE.UU., Canadá y América Latina y el Caribe con vistas a institucionalizar un “nuevo orden panamericano” (Suárez Salazar, 2007a). Elementos demostrativos de tal ralentización fueron, entre otros, las cláusulas defensoras de la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de sus estados miembros que –gracias a la acción del gobierno de la RBV y los gobiernos del Caribe– finalmente se mantuvieron en la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA efectuada en Lima (Perú) el 9 y 10 de septiembre de 2001 y, más tarde, en la ya

referida Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada por la OEA en 2002 (García Collada, 2005).

Sobre la base de esas cláusulas y de los ya mencionados cambios políticos que comenzaron a producirse en América del Sur, ese organismo hemisférico cuestionó la frustrada intentona golpista que se produjo en la RBV en abril de 2002. En los años sucesivos, la OEA también rechazó las pretensiones del gobierno estadounidense para sentar en “el banquillo de los acusados” a la Revolución Bolivariana (Rodríguez Gelfenstein, 2007). Por otra parte, en 2005, la mayoría de sus estados miembros derrotaron a los diferentes candidatos estadounidenses y eligieron al canciller chileno José Miguel Insulza como secretario general de esa organización.

Todo lo dicho interactuó con la disminución del ritmo de aprobación de nuevos instrumentos político-jurídicos panamericanos que pudo apreciarse entre 1990 y 2002 (ver Anexo 3), con la incapacidad de la diplomacia político-militar estadounidense y de sus principales aliados de imponer sus posiciones en la Conferencia Especial sobre la Seguridad Hemisférica realizada en México en octubre de 2003, así como en las Cumbres de Ministros de Defensa efectuadas en Quito (Ecuador), a comienzos de 2004 y en Managua (Nicaragua) en octubre de 2006. En contraste con las posiciones defendidas por los representantes oficiales estadounidenses, en todos esos eventos, la mayor parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe vindicaron los contenidos de la llamada “seguridad multidimensional”–impulsada por la CARICOM– que habían sido aprobados en la Asamblea General de la OEA efectuada en Bridgetown (Barbados) en junio de 2002 (Ruiz Blanco, 2003).

Paralelamente, se estancaron y finalmente se cancelaron las negociaciones vinculadas a la suscripción del ALCA que, desde 1994, habían impulsado sucesivos gobiernos de EE.UU. y sus principales aliados hemisféricos. Así se evidenció en la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey (México) en enero de 2004, pero especialmente durante la Cuarta Cumbre de las Américas, efectuada en Mar del Plata (Argentina) en noviembre de 2005. En ella los gobiernos de la RBV y del MERCOSUR rechazaron todas las presiones de los gobiernos de EE.UU., Canadá, México y Centroamérica para continuar y concluir lo antes posible las negociaciones del ALCA que venían desarrollándose desde 1998. En consecuencia, el ALCA tuvo que *metamorfosearse* en los ya referidos TLC firmados con Chile, Centroamérica, República Dominicana, Perú y Colombia –este último aún pendiente de ratificación por el Congreso estadounidense.

Todo lo dicho estuvo (y está) íntimamente asociado al auge de las movilizaciones de los plurales movimientos sociales y políticos antiimperialistas, antineoliberales y *altermundistas* que, desde los años ante-

riores, venían actuando en todo el hemisferio (incluyendo Canadá), así como a la emergencia y relativa consolidación de varios gobiernos progresistas –reformistas, reformadores o revolucionarios, según el caso– en diferentes países de América Latina, en particular en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela (Elías, 2006; Dello Bouno y Gandásegui, 2007). Asimismo influyó la progresiva superación por parte de la Revolución Cubana de las más agudas crisis que la venían afectando desde comienzos de la década del noventa. A pesar de todas las contradicciones internas y externas, antagónicas y no antagónicas que siguen afectándola, esta demostró sus capacidades para neutralizar o derrotar los diversos planes urdidos en su contra por la reaccionaria administración de George W. Bush (Castro, 2005; Castro, R., 2007) así como para mantener, consolidar o ampliar, según el caso, sus multifacéticos vínculos con los cambiantes gobiernos de Canadá, América Latina y el Caribe.

Esta positiva tendencia se mantendrá en el futuro previsible. Entre otras razones, porque como se evidenció en las elecciones generales realizadas en Cuba entre fines de 2007 y enero de 2008, nada hace suponer que *la transición generacional* que se está produciendo en su sociedad y su liderazgo político destruirá el carácter popular del Estado, la legitimidad de la institucionalidad creada por la Revolución, ni el mayoritario apoyo popular del que esta ha gozado a lo largo de su ya cincuentenaria historia. Del mismo modo, nada hace suponer tampoco que en el futuro previsible los grupos dominantes, los poderes fácticos y los gobiernos temporales de EE.UU. y otros países del hemisferio occidental contarán con suficientes fuerzas para revertir totalmente los progresivos cambios favorables a los sectores populares que se han venido produciendo en diferentes países de América Latina y el Caribe. Al análisis de los principales elementos históricos y actuales que determinan esa afirmación se dedicará la décima y última lección.

Lección Diez

LAS RELACIONES INTERAMERICANAS: UNA MIRADA DESDE LA PROSPECTIVA CRÍTICA

ESTA ÚLTIMA LECCIÓN tiene como propósito fundamental estimular a los lectores y lectoras de esta obra a que –desde sus correspondientes disciplinas y adscripciones sociales y políticas– emprendan aquello que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha denominado “estudios de alta calidad orientados al futuro”. Tal como se indicó en la primera lección, ello implica la elaboración de aproximaciones político-académicas, científicas, teórico-prácticas, crítico-transformadoras y, por tanto, integrales y enfocadas al porvenir de las disyuntivas que en los próximos años deberán enfrentar las interacciones entre los gobiernos y los pueblos de Nuestra América y de “la otra América” –es decir, Canadá y EE.UU.

Según les expresó el entonces director general de la UNESCO, Francisco Mayor Zaragoza, a los participantes en el Tercer Encuentro de Estudios Prospectivos titulado “Los escenarios y alternativas de América Latina y el Caribe en el horizonte 2020”, celebrado en Río de Janeiro entre el 20 y 22 de septiembre de 1999, la necesidad de asumir ese tipo de estudios está determinada por “la ética del futuro”. Es decir, por “la responsabilidad [que tienen] las generaciones actuales con respecto a las venideras”. Esa responsabilidad se acrecienta por lo que él definió como “los grandes desafíos de nuestro tiempo”: la desigualdad, la exclusión, las guerras, la educación democrática, el desarrollo

sostenible, “la saturación a que estamos sometidos por una información banalizada”, el “imperativo de pasar de la era de la información a la era del conocimiento” y de elaborar proyectos y futuros alternativos “al orden actual” (Mayor Zaragoza, 2000: 29-34).

El futuro es nuestra única herencia aún intacta, nuestro verdadero patrimonio. El pasado y la memoria son esenciales, especialmente en el marco de una perspectiva ética. Sin embargo, el futuro es nuestra única responsabilidad.

“El porvenir es demasiado complejo y demasiado incierto, contentémonos con el presente” se oye decir. A ello respondo que es demasiado simple esperar que las dificultades surjan para intentar darles solución y actuar sólo ante las emergencias. Al contrario, debemos ser vigías constantes para exigir lo exigible, para hacer que muchos imposibles se hagan realidades del mañana.

La lógica a corto plazo no ofrece más opciones que someterse o adaptarse a los acontecimientos. Para no estar a merced de estos, para recuperar el control de nuestro propio porvenir, para escapar a la rutina y la inercia, hemos de rehabilitar la visión a largo plazo dirigiendo nuestra mirada hacia delante, hasta el 2020 [...] con el fin de prever los acontecimientos. Prever para prevenir.

La incertidumbre del porvenir sólo podrá ser contrarrestada con la capacidad de anticipación, que nos permitirá actuar en el presente conforme a nuestro proyecto de futuro. De lo que se trata es de actuar: prever es combatir la apatía y la indiferencia, alertar las conciencias, abrir los ojos a los riesgos del mañana y reorientar, en caso necesario, las decisiones de hoy. Prever es la condición necesaria de una práctica eficaz.

Esta previsión se resume [...] en dos palabras: comprender e imaginar. Comprender porque el futuro no surge de la nada: remite a estados de conocimientos anteriores, a reglas o ausencia de reglas cuyos resortes es preciso captar. Al ligar el presente con el futuro, el esfuerzo prospectivo unifica el mundo y lo transforma en una totalidad, realizando la posibilidad de “englobar”, esa aprehensión general que corresponde muy exactamente a la definición del verbo “comprender”. Por último, este esfuerzo resultaría abstracto si no se profundizara y esclareciera gracias al trabajo de la imaginación. Reflexionar sobre el siglo XXI es también soñar, inventar, montar esce-

narios quizás contradictorios, recomendar alternativas, crear mundos y utopías. Permitirse entender lo real en toda su complejidad e imaginar lo imposible, realizar lo posible e intentar lo imposible (Mayor Zaragoza, 2000: 33).

Para emprender esa aproximación prospectiva y utópica al conocimiento y la transformación de la realidad –entendida “la utopía”, junto con Franz Hinkelammert, como la sistemática crítica del presente a partir de la perenne esperanza en un futuro mejor–, puede resultar de mucha utilidad conocer algunos de los presupuestos teórico-metodológicos de lo que la copiosa literatura existente sobre la planeación estratégica alternativamente ha venido denominando Dirección por Objetivos (DPO), Dirección Participativa por Objetivos (DPPO), Dirección por Valores (DPV) o Dirección por Escenarios (DPE).

Cualquiera que sea el nombre que se les dé, todos esos métodos y técnicas parten de la necesidad teórico-práctica de definir con toda claridad cuál es *la misión* (la “razón de ser” de nuestro trabajo, individual o colectivo), *la visión* (“el estado deseado” de la realidad que estamos estudiando o, lo que es lo mismo, las transformaciones cuantitativas o cualitativas que, según el caso, queremos producir en esa realidad) y *los objetivos estratégicos* (de mediano o largo plazo) que nos proponemos alcanzar en un período de tiempo determinado –ya sea cuando participemos en ese proceso como “sujetos de acción” o como “sujetos del conocimiento”. Según la discutible división del trabajo establecida por Hughes De Jouvenel, estos últimos son los encargados de las tareas de estudios e investigación, mientras que los primeros son los actores sociales y políticos implicados en el diseño de las estrategias y el despliegue de las acciones prácticas dirigidas a influir en el curso de los acontecimientos (De Jouvenel, 2000: 29-31).

En cualquier caso, lo anterior implica realizar un diagnóstico sistemático, lo más completo y multifacético posible, de la realidad que queremos transformar, incluida una clara definición de los intereses y objetivos (por lo general, contrapuestos) de cada uno de los sujetos sociales y políticos (estatales o no estatales) implicados y de los factores determinantes de la contradictoria dinámica de los procesos cuya evolución pretendemos anticipar o modificar. Ese diagnóstico –elaborado a partir de nuestra misión, visión y objetivos estratégicos– resulta imprescindible porque, como bien se ha señalado, “construir el futuro supone tener el suficiente control sobre la situación y saber lo que se quiere lograr” (Mojica, 2000: 114).

Esto último es condición necesaria para elaborar *escenarios* sobre cualquier fenómeno social, económico, político, ideológico-cultural, interno o internacional, entendiendo esos *escenarios* como un juego coherente,

pertinente, verosímil y sintético de hipótesis acerca de la evolución prospectiva de esos fenómenos derivadas de los complejos procesos teórico-prácticos del conocimiento y la transformación de la realidad (Godet, 1885). O, dicho de otra forma, como una definición *ex ante* de los resultados que los “sujetos de conocimiento” o los “sujetos de acción” esperan obtener en el marco de las múltiples, contradictorias y en ocasiones conflictivas y hasta violentas interrelaciones entre las estrategias de los diversos actores, clases o grupos sociales implicados en el movimiento de la realidad.

Según afirma Hughes De Jouvenel, puesto que “el futurólogo” no puede aspirar a decir por adelantado lo que efectivamente ocurrirá, su primera tarea –antes de intentar anticipar lo que puede ocurrir– es mirar “al mundo contemporáneo con el fin de percibir las tendencias principales o emergentes que puedan tener un impacto decisivo en el futuro o en el mediano plazo” (De Jouvenel, 2000: 30). En esa lógica, los futurólogos –además de insistir en “que ellos no hacen predicciones, que sólo estudian escenarios alternativos”– deberían concentrar su esfuerzo en “determinar [los] grados de probabilidad para esos escenarios diferentes”. Además, deberían comunicar “el siguiente mensaje: nada está predeterminado. Realmente podemos escoger el futuro, por lo menos hasta cierto punto. Si nos concentramos más en las soluciones prácticas de los problemas actuales, seremos capaces de construir el futuro” (Valasskakis, 2000: 51-52).

Tales premisas –esenciales para lo que en el lenguaje de estas lecciones se ha denominado “la prospectiva crítica y participativa”– son mucho más válidas cuando se elaboran “escenarios apuestas”, “escenarios deseados” o “escenarios normativos”, ya que estos definen las mejores opciones para el cumplimiento de la visión y los objetivos estratégicos (el “futuro deseado”) de los actores sociales o de los “sujetos de acción” implicados en cualquier proceso sociopolítico o ideológico-cultural. Por consiguiente, *los escenarios deseados* por lo general surgen (y a la vez se diferencian) de la evaluación de los llamados “escenarios exploratorios alternativos”, ya sean estos considerados como *escenarios alternos* o como *los escenarios más probables*.

Estos últimos identifican y proyectan hacia el futuro las tendencias, más o menos espontáneas, de los procesos sociales, económicos, políticos, ideológico-culturales, político-militares internos o internacionales que se estudian, mientras que los *escenarios alternos* refieren *las otras alternativas* (deseadas o no deseadas) que podría deparar el porvenir, con independencia del grado de probabilidad que indiquen las tendencias predominantes en un momento determinado

Las tendencias (sociales, económicas, etc.) existen porque han sido el fruto de estrategias desplegadas por actores so-

ciales. Y si las rupturas a esas tendencias no han logrado hacerlas cambiar su rumbo, ha sido porque el poder de estos actores sociales no ha sido suficientemente fuerte para aniquilarlas (Mojica, 2000).

De ahí que cada uno de los actores implicados en cualquier proceso social se vea obligado a diseñar diversas *estrategias*, con sus consiguientes *planes de acción* orientados a consolidar o subvertir, según el caso, aquellas tendencias de la realidad en correspondencia con su *visión* y sus particulares *objetivos estratégicos*; es decir, con el futuro que desean construir. En tanto –como bien se ha dicho– una visión sin acción es una quimera. A su vez, las acciones que se emprendan sin una clara visión del futuro que se desea construir pueden colocar a los actores sociales en una posición de simples “espectadores” de un futuro ajeno, incierto y distante. Al respecto, el dramaturgo brasileño Augusto Boal ha plasmado las siguientes ideas.

“Esperanza” es una palabra traicionera, como pueden ser todas las palabras. Las palabras son medios de transporte, como un camión, un tren o una carretilla. Su valor depende de la carga que les pongamos dentro: nuestros deseos, sentimientos, ideas y emociones.

La palabra “esperanza” puede tener dos sentidos adversos. Aborrezco el primero: esperanza = esperar. ¿Hasta cuándo? Identificar lo que va a ocurrir y... quedarnos esperando a que ocurra. ¡Ya esperamos demasiado! Esa “esperanza” delega poderes en un futuro incierto y distante –y no al hoy, aquí y ahora–, como si en ese futuro estuviese la solución de nuestro problemas.

La palabra “esperanza” también puede ser entendida de otra forma, que es la que me gusta: “esperanza” es una expectativa dinámica de algo inminente que va a ocurrir y que depende de nosotros. En este caso, no tenemos esperanza en el futuro que todavía no existe, sino en el presente que es donde inventamos ese futuro.

Esperanza en que tendrán éxitos las medidas que adoptamos hoy, en las acciones que emprendemos ahora, en los actos con que conducimos nuestras vidas a cada instante. ¡El futuro se edifica en el presente con pensamientos y, sobre todo, con acciones! Esa esperanza refleja confianza en nosotros mismos –nosotros, que asumimos la responsabilidad por nuestros actos: ¡sabemos lo que queremos, y vamos a conseguirlo!

Esperanza = esperar es nociva porque afirma que “el futuro pertenece a Dios” y no a nosotros; desmoviliza. Como si no fuésemos responsables de nada, cuando, en verdad, somos responsables de casi todo, comenzando por nosotros mismos.

Esperanza = expectativa es mejor porque es consecuencia y parte de nuestras acciones, revela confianza en aquello que hacemos, revela la certeza de que un mundo mejor es posible. ¡Depende de nosotros!

De las palabras “esperanza” y “expectativa” nacen otras dos palabras casi iguales: “expectante”, que es aquel que limita su expectativa a lo que va a ocurrir; y “espectador” que es aquel que observa lo que está ocurriendo.

Tenemos que inventar una tercera palabra: *especta-autor*, que es aquel que observa, analiza y así se prepara para *hacer acontecer*: somos actores en la sociedad y tenemos que ser protagonistas de nuestras vidas. Tenemos que *hacer acontecer*.

Sólo tenemos el derecho a tener esperanza en el futuro si somos capaces de tener confianza en nosotros mismos, en el presente (Boal, 2006).

Por todo lo dicho, las contradictorias tendencias de las relaciones interamericanas referidas en la lección anterior son el fruto de las estrategias y acciones victoriosas o derrotadas que, en los años previos, desplegaron los sujetos sociales y políticos, internos y externos, más o menos hegemónicos en unos u otros estados nacionales del hemisferio occidental. Y, en particular, de las estrategias y las acciones (las más de las veces victoriosas) emprendidas por los grupos y clases dominantes, los poderes fácticos y los gobiernos temporales de EE.UU., Canadá, así como de la mayor parte de los estados de América Latina y el Caribe. Asimismo, de las estrategias y las acciones (las más de las veces derrotadas) que han desplegado los diversos sujetos sociales y políticos que emprendieron programas reformadores o revolucionarios contra el sistema de dominación –hegemonía acorazada con la fuerza– establecido en el hemisferio occidental.

Sin embargo, nada debe llevar a suponer que en el futuro previsible esas tendencias del pasado-presente, predominantemente adversas para los pueblos latinoamericanos y caribeños, serán inmutables. Mucho menos porque –como se indicó en la lección anterior– desde la última década del siglo XX aparecieron o reaparecieron, según el caso, diversos movimientos sociales, políticos o ideológico-culturales de raigambre popular que, desde el Estado, la sociedad política o la

sociedad civil, resisten o pugnan por fracturar el sistema de dominación oligárquico-plutocrático e imperialista y, por ende, el “nuevo orden panamericano” que, al menos desde 1990, venían institucionalizando sucesivos gobiernos estadounidenses, canadienses, latinoamericanos y caribeños.

Por consiguiente, la derrota, la ralentización, la continuidad o el fortalecimiento de ese “orden” plutocrático-imperial estarán directamente asociados al desenlace de la inconclusa dinámica entre la reforma, la contrarreforma, el reformismo, la revolución y la contrarrevolución que continuará viviendo el hemisferio occidental. De ello se desprende que el porvenir de los diferentes componentes del Sistema Interamericano (la OEA, la JID, las Cumbres de las Américas) dependerá del éxito o fracaso de las estrategias y acciones que en los próximos años emprendan los diversos (y contrapuestos) actores sociales y políticos, endógenos y exógenos, implicados en ese contradictorio y estructuralmente violento proceso. Lo mismo puede decirse con relación al futuro de los principales proyectos de concertación política, cooperación e integración económica latinoamericanos y caribeños que, de manera simultánea, están desplegando la CARICOM, la AEC, el SICA, el MERCOSUR (ampliado) y el ALBA.

A las evidencias respecto de los contradictorios procesos de cambios que en la actualidad se están produciendo en el hemisferio occidental aportadas en la lección anterior es preciso agregar el creciente desprestigio interno y externo de la actual administración estadounidense y las oportunidades que se le presentarán al candidato del Partido Demócrata, Barak Obama, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2008. Pese a las consabidas tendencias conservadoras que infectan a esa agrupación política, con mayor o menor consistencia y credibilidad, Obama ha venido propugnando cambios, al menos en los métodos con los que ha conducido su política doméstica, internacional y hemisférica la ya declinante administración “neoconservadora” de George W. Bush. Dadas sus afinidades ideológicas, una eventual (y para algunos analistas, probable) derrota del candidato presidencial republicano John McCain seguramente tendrá repercusiones adversas para la continuidad del gobierno de minoría encabezado por el líder del NPC y actual primer ministro de Canadá, Stephen Harper (Sánchez Egózcue y Rodríguez Rodríguez, 2007).

A lo anterior es necesario añadir la cuestionada legitimidad interna del actual presidente mexicano Felipe Calderón; las grandes movilizaciones populares (predominantemente campesinas) contra algunos de los componentes del NAFTA que se han venido sucediendo en ese país; y las acciones emprendidas por el denominado “Gobierno Legítimo”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con vistas

a organizar las fuerzas sociales y políticas que –a través de la coalición Por el Bien de Todos– apoyaron su candidatura en las elecciones presidenciales de 2006.

También habría que agregar las dificultades que pudiera plantearle a las estrategias hemisféricas del gobierno de EE.UU. el recién instalado “gobierno socialdemócrata” de Guatemala; una eventual (aunque poco probable) victoria electoral del candidato del FMLN de El Salvador en las elecciones presidenciales previstas para fines de 2008; la consolidación del llamado “gobierno libero-sandinista” nicaragüense presidido por Daniel Ortega; y el creciente resquebrajamiento del sistema político bipartidista instaurado en Costa Rica, que se demostró en la amplia movilización popular contra la ratificación por el Parlamento y el gobierno costarricenses del DR-CAFTA.

Esas y otras dinámicas mesoamericanas excluidas en aras de la síntesis, junto al ostensible fracaso de las acciones emprendidas por la administración de Álvaro Uribe con vistas a derrotar al movimiento popular y, dentro de este, a las FARC y el ELN, objetivamente han contribuido al aislamiento internacional de las estrategias contrarrevolucionarias y contrarreformistas encarnadas por la administración de George W. Bush en la región andino-amazónica. Así se evidenció en la XX Cumbre del Grupo de Río y en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, efectuadas en marzo de 2008 en República Dominicana y Washington, respectivamente. Con independencia de las ambivalencias de sus correspondientes declaraciones finales, en estas quedó claramente consignado el rechazo de la absoluta mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños a la presunta extraterritorialidad de la “guerra preventiva contra el terrorismo”, al igual que una clara condena a las acciones emprendidas por el gobierno y las fuerzas colombianas violatorias de la soberanía de Ecuador y, por extensión, de los demás estados centroamericanos, sudamericanos y caribeños que comparten fronteras terrestres y marítimas con Colombia.

Lo antes dicho objetivamente refuerza los mencionados cuestionamientos a la política “global” y hemisférica de la actual administración de EE.UU. Tales cuestionamientos mejoran el contexto externo en que deberán desenvolverse los diversos procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se están desplegando en América Latina y, especialmente, los que se desarrollan en Bolivia, Ecuador y la RBV. No obstante las debilidades internas y las amenazas externas que los afectan, en su imbricación natural con la Revolución Cubana, en el futuro previsible todos ellos seguirán siendo *el epicentro* de la dinámica entre la reforma, la revolución, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución que continuará viviendo el continente americano. También serán los dinamizadores de los procesos

de concertación política, cooperación e integración económica que se están desarrollando en América del Sur y el Caribe. Sobre todo en la medida en que avance la ampliación y profundización del ALBA-TCP, de los acuerdos vinculados a PETROCARIBE y al Fondo ALBA-Caribe (al cual se incorporó en 2007 el gobierno de Haití), así como las diversas iniciativas del gobierno bolivariano venezolano dirigidas a fortalecer e institucionalizar la UNASUR.

Sin desconocer los referidos avances que en los años más recientes han venido obteniendo las diversas estrategias oficiales estadounidenses en América del Norte, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, así como sin hacer ninguna concesión a las visiones triunfalistas que muchas veces han proliferado en los medios de “la izquierda” social, política e intelectual latinoamericana y caribeña, los elementos referidos en los párrafos precedentes confirman la validez del análisis elaborado por Perry Anderson acerca de lo que denominó los “tres rasgos” que diferencian las “resistencias al neoliberalismo y al neoimperialismo” que se han venido desplegando en América Latina y el Caribe en relación con las luchas de igual carácter que se desenvuelven en Medio Oriente y Europa.

En América Latina encontramos una combinación de factores mucho más fuerte y prometedora que en Europa o en el Medio Oriente. Aquí y solamente aquí, la resistencia al neoliberalismo y al neoimperialismo conjuga lo cultural con lo social y nacional. Es decir, comporta una visión emergente de otro tipo de organización de la sociedad, y otro modelo de relaciones entre los estados en base a estas tres dimensiones diferentes. De los tres rasgos decisivos que distinguen a esta región de las anteriores, este es el primero a subrayar.

En segundo lugar, América Latina –y esto es un hecho que a menudo se olvida– es la única región del mundo con una historia continua de trastornos revolucionarios y luchas políticas radicales que se extienden por algo más del último siglo. Ni en Asia, ni en África, ni en Europa encontramos equivalentes a la sucesión de revueltas y revoluciones que han marcado la específica experiencia latinoamericana. El siglo XX ha empezado con la Revolución Mexicana que tuvo lugar antes de la Primera Guerra Mundial. Se trató de una revolución victoriosa, pero que también fue “purificada” en lo que hace a muchas de sus aspiraciones populares.

Entre las dos guerras hay una serie de levantamientos heroicos y experimentos políticos que fueron derrotados pero merecen recordarse: el sandinismo en Nicaragua, la revuelta aprista en

Perú, la insurrección en El Salvador, la revolución del 33 en Cuba, la intentona en Brasil, la breve república socialista y el Frente Popular en Chile.

Con la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, comenzó un nuevo ciclo. El primer peronismo en su fase jacobina en Argentina, el Bogotazo en Colombia y la revolución boliviana del 52. Al final de la década estalla la Revolución Cubana. Sigue una nueva ola de luchas guerrilleras a lo largo y ancho del continente, y finalmente no podemos dejar de mencionar la elección del gobierno de Salvador Allende en Chile.

Todas estas experiencias fueron aplastadas con el ciclo de dictaduras militares que comenzaron en Brasil en el año 1964 y luego allanaron el camino a Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina en los años setenta de plomo. A mediados de la década, la reacción parecía victoriosa casi en todas partes. De nuevo, sin embargo, se encendió el fuego de la resistencia con el triunfo de la Revolución Sandinista, la lucha de los guerrilleros salvadoreños, y la campaña masiva para elecciones directas en Brasil.

También este embate de insurgencia popular fue desmontado sin piedad. A mediados de los años noventa reinaban en casi todos los países latinoamericanos versiones criollas del neoliberalismo norteamericano, instaladas o apoyadas por Washington: los gobiernos de Carlos S. Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Salinas de Gortari en México, Sánchez Losada en Bolivia, etcétera.

Finalmente, con una democracia estable restaurada, y políticas económicas excelentes, el Departamento de Estado creía que América Latina se había convertido en una retaguardia segura y tranquila del Imperio global. Sin embargo, pronto el paisaje político se radicalizaría una vez más. El ciclo popular más reciente, que comenzó con la revuelta zapatista en Chiapas, ya ha visto la llegada al poder de Chávez en Venezuela, las victorias de Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner en Brasil y Argentina respectivamente, el derrumbe de Sánchez Losada en Bolivia, y los estallidos sociales repetidos en Perú y Ecuador (Anderson, 2004).

Estos últimos procesos también fueron valorados desde otra perspectiva político-académica por James Petras. Para este autor, “pese a que existen puntos de semejanza y convergencia” entre sus activistas, por

sus tácticas y estrategias los Movimientos Antiimperialistas (MAI) que se desarrollan en América Latina (y en menor medida en el Caribe) difieren por “su esencia” de los que se desarrollan en EE.UU., Canadá y diversos países de Europa. En estos últimos –siempre según Petras– las principales tácticas de los MAI se presentan del siguiente modo.

Tienen por meta la organización de grandes eventos como los de Seattle, Génova, Davos y Barcelona, en los que convergen innumerables organizaciones no gubernamentales, sindicatos y grupos contra la globalización para protestar contra los encuentros de las potencias imperiales, tales como la Organización Mundial del Comercio y el G-7. [Por su parte] los MAI latinoamericanos tienen un carácter mucho más político que simplemente social, son mucho más anticapitalistas que reformistas, se encaminan más a la conquista del poder que a las protestas simbólicas, y proporcionan más experiencias educativas mediante la práctica de los dirigentes políticos, que las conferencias públicas de los notables llegados del extranjero (Petras et al., 2004).

Probablemente por todo lo dicho continúan creciendo las preocupaciones de los grupos dominantes en EE.UU. y dentro del *establishment* de su política exterior y de seguridad respecto a la “inestabilidad política” de su presunto “patio trasero”. Según Carlos Alzugaray Treto, ello se demuestra en el “Informe Final del Proyecto (bipartidista) sobre la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el siglo XXI”, divulgado por la prestigiosa Universidad de Princeton, Nueva Jersey. Aunque, como es usual en ese tipo de documentos “globales”, las referencias a América Latina y el Caribe son escasas, sus encumbrados coordinadores (Anthony Lake, ex asesor nacional de seguridad de la administración de William Clinton, y George Shultz, ex secretario de Estado del gobierno de George W. Bush) dejaron consignado que la situación existente en Venezuela, junto a lo que llaman “el fomento del populismo” y “el movimiento antiglobalización”, constituyen “amenazas para la seguridad nacional estadounidense” (Alzugaray Treto, 2006).

Lo dicho reitera algunos de los enunciados del informe *Andes 2020* divulgados por el bipartidista e influyente Council on Foreign Relations de EE.UU. (CFR, 2004). Ese informe estuvo dirigido a proponerle al *establishment* de la política exterior y de seguridad diversas estrategias económicas, sociales y político-militares orientadas a garantizar, en la perspectiva de los próximos tres lustros, la dominación estadounidense en América Latina y el Caribe, y en particular en el norte de América del Sur. Aunque, en razón del fundamentalismo neoconservador de la administración de George W. Bush y de los progresivos cambios que se

han venido produciendo en diversos países de América del Sur, la mayor parte de las estrategias y planes de acción sugeridos por los redactores de *Andes 2020* no han podido concretarse, el documento desarrolla los escenarios deseados que respecto a América Latina y el Caribe constantemente elaboran los denominados “tanques pensantes” (*think tanks*) estadounidenses; en particular respecto a aquellas regiones del continente donde ven amenazada su seguridad imperial.

De ahí la imperiosa necesidad de que los “sujetos de pensamiento” comprometidos con las causas populares, con las luchas por la “segunda independencia” y por la genuina integración multinacional de Nuestra América, en su ineludible interrelación con los “sujetos de acción” implicados en esas multiformes luchas populares, democráticas y antiimperialistas, contribuyan a elaborar las visiones de largo plazo que permitan prever las oportunidades y prevenir las amenazas que depara el provenir. También, que permitan superar las debilidades y potenciar las fortalezas de los sujetos sociales y políticos implicados en la edificación del *otro mundo* y del *otro continente*, *imprescindibles y posibles*, que se desea construir. Mucho más porque, en ese y otros campos del quehacer político-intelectual y teórico-práctico, sigue siendo verdad lo planteado por José Martí (1974c) en su célebre ensayo *Nuestra América*: “Resolver el problema después de conocer sus elementos es más fácil que resolver el problema sin conocerlos [...] Conocer es resolver”.

ANEXOS

Anexo 1

Cronología del largo e inconcluso proceso de descolonización del Caribe

Nación o territorio	Metrópoli	Año de independencia
Antigua/Barbuda	Reino Unido	1981
Bahamas	Reino Unido	1973
Barbados	Reino Unido	1966
Bélice	Reino Unido	1981
Dominica	Reino Unido	1978
Granada	Reino Unido	1974
Guyana	Reino Unido	1966
Jamaica	Reino Unido	1962
Saint Kitts y Nevis	Reino Unido	1983
Santa Lucía	Reino Unido	1978
San Vicente y Las Granadinas	Reino Unido	1979
Trinidad y Tobago	Reino Unido	1962
Cuba	España/EE.UU.	1902
República Dominicana	España	1844
Haití	Francia	1804
Surinam	Holanda	1975
Cayena	Francia	DOM*
Martinica	Francia	DOM*
Guadalupe	Francia	DOM*
Aruba	Holanda	Territorio autónomo
Donaire	Holanda	Territorio autónomo
Curazao	Holanda	Territorio autónomo
Saint Marteen	Holanda/Francia	Colonia
Islas Vírgenes	EE.UU.	Colonia
Puerto Rico	EE.UU.	Colonia
Anguila	Reino Unido	Colonia
Bermudas	Reino Unido	Colonia
Islas Vírgenes británicas	Reino Unido	Colonia
Islas Caimán	Reino Unido	Colonia
Montserrat	Reino Unido	Colonia
Islas Turcas	Reino Unido	Colonia

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre información obtenida de diversas fuentes.

* Departamentos de Ultramar, por sus siglas en francés.

Anexo 2

Estimados mínimos de los muertos y desaparecidos por la represión oligárquico-imperialista en algunas etapas y algunos países de América Latina y el Caribe, 1946-1994

País	Muertos y desaparecidos
Argentina	46 mil ¹
Cuba	20 mil ²
Colombia	400 mil ³
Chile	4 mil ⁴
El Salvador	75 mil ⁵
Guatemala	200 mil ⁶
Haití	45 mil ⁷
Nicaragua	100 mil ⁸
Perú	65 mil ⁹
Panamá	3 mil ¹⁰
República Dominicana	6 mil ¹¹
Total	964 mil

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre información obtenida de diversas fuentes (para mayor información sobre dichas fuentes, ver sección bibliografía en Suárez Salazar, 2003b).

1 Sólo se refiere al período 1974-1983.

2 Aunque no se ha hecho una investigación histórica sobre este asunto, es comúnmente aceptado que ese fue el número de mártires durante la última dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). No se incluyen las aproximadamente 3.500 muertes causadas por las diversas agresiones perpetradas por EE.UU. contra la Revolución Cubana entre 1959 y la actualidad.

3 Desde 1946 hasta la actualidad. No se incluyen, por ejemplo, los 100 mil muertos de la llamada Guerra de los Mil Días que, a comienzos del siglo xx, enfrentó a las huestes del Partido Liberal con los reaccionarios y proimperialistas gobiernos del Partido Conservador colombiano.

4 Sólo incluye los datos hasta ahora divulgados de los asesinatos perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

5 Sólo incluye el “terror blanco” desatado entre 1980 y 1992.

6 Únicamente incluye las víctimas de la represión desatada desde 1960 hasta 1994.

7 Incluye la dictadura de los Duvalier (1958-1985) y las represiones desatadas por sus sucesores hasta el retorno al país del presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, en octubre de 1994.

8 Sólo incluye los caídos durante la última etapa de la lucha revolucionaria contra la dinastía somocista (1970-1979) y las estimaciones de las muertes causadas por la guerra sucia llevada a cabo por EE.UU. contra la Revolución Sandinista.

9 Sólo corresponde al período 1980-1995 que aparece en el Informe de la Comisión de la Verdad institucionalizada de ese país.

10 Sólo se refiere a los muertos provocados por la invasión norteamericana de 1989.

11 Sólo incluye las víctimas de la invasión norteamericana de abril de 1965 y de la represión desatada por los tres primeros gobiernos “democrático-representativos” de Joaquín Balaguer (1966-1978). No incluye los incontables asesinatos que se cometieron por la larga satrapía de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), ni las matanzas de haitianos que se produjeron por aquellos años en el territorio de la República Dominicana.

Anexo 3

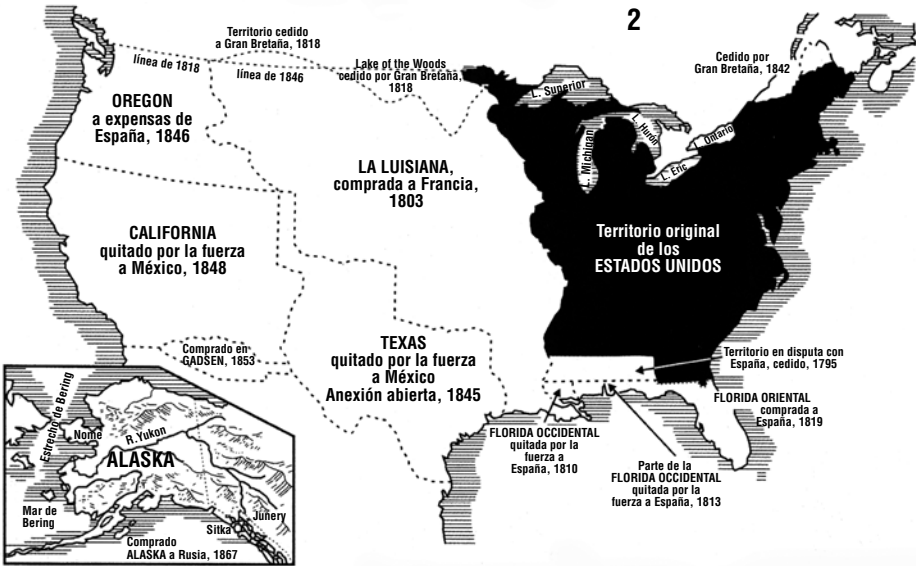
Principales instrumentos político-jurídicos aprobados por los estados miembros de la OEA
1990-2002

Año de promulgación	Título oficial
1990	Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la Abolición de la Pena de Muerte
1992	Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua Penal
1992	Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: Protocolo de Washington
1993	Protocolo Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua Penal
1993	Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: Protocolo de Managua
1993	Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero
1994	Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
1994	Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
1994	Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores
1996	Convención Interamericana contra la Corrupción
1997	Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados
1999	Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales
1999	Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
2001	Carta Democrática Interamericana
2002	Convención Interamericana contra el Terrorismo

Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre datos de García Collada (2005).

Anexo 4

Proceso de expansión territorial de las Trece Colonias Unidas del Norte de América



Fuente: Suárez Salazar (2003b).

BIBLIOGRAFÍA

- Acanda González, Jorge Luis 2007 *Traducir a Gramsci* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Acosta Matos, Eliades 2005 *El Apocalipsis según San George* (La Habana: Abril).
- Aguirrechu, Iraida (comp.) 2007 *ALBA. Integración latinoamericana* (La Habana: Editora Política).
- Alape, Arturo 1983 *El Bogotazo: memorias del olvido* (Bogotá: Fundación Universidad Central).
- Aliscioni, Claudio 2005 “Los marines de EE.UU. ponen un pie en Paraguay” en <www.clarin.com> acceso 11 de septiembre.
- Álvarez, Alejandro; Barreda, Andrés y Bartra, Armando 2002 *Economía política del Plan Puebla Panamá* (México DF: Ítaca).
- Alzugaray Treto, Carlos 2006 *Algunos apuntes acerca de “Forging a world of liberty under law: U.S. national security in the 21st century: final report of the Princeton Project on national security”* (La Habana: Instituto Superior de Relaciones Internacionales).
- Anderson, Perry 2004 “El papel de las ideas en la construcción de alternativas” en Boron, Atilio (comp.) *Nueva hegemonía mundial, alternativas de cambio y movimientos sociales* (Buenos Aires: CLACSO).

- Avdakov, Polianski et al. 1961 *Historia económica de los países capitalistas* (La Habana: Instituto del Libro).
- Ayerbe, Luis Fernando 2001 *Los Estados Unidos y América Latina: la constitución de la hegemonía* (La Habana: Casa de las Américas).
- Bailey, Thomas 1970 *A diplomatic history of the American peoples* (Nueva Jersey: Prentice-Hall).
- Beluche, Olmedo 2004 *La verdadera historia de la separación de 1903: reflexiones en torno al centenario* (Ciudad de Panamá: Imprenta ARTICSA).
- Benjamín, César y Tavares Ribeiro, Rómulo 2004 “El ALCA, el libre comercio y el futuro de América del Sur” en *América Latina en movimiento* (Quito) N° 384.
- Bermúdez Torres, Lilia 2003 “Los retos del hemisferio en el ámbito de la seguridad” en Grabendorff, Wolf (ed.) *La seguridad regional en las Américas* (Bogotá: FESCOL/CEREC).
- Boal, Augusto 2006 *MST-Agenda 2006* (San Pablo).
- Boersner, Demetrio 1996 *Relaciones internacionales de América Latina: breve historia* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Bohórquez Morán, Carmen L. 2003 *Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Bolívar, Simón 1947a “Carta al Señor Coronel Patricio Campbell, Encargado de Negocios de S.M.B. (Guayaquil, 5 de agosto de 1829)” en Bolívar, Simón *Obras completas* (La Habana: LEX) Tomo II.
- Bolívar, Simón 1947b “Carta al Señor General F. de P. Santander (Arequipa, 30 de mayo de 1825)” en Bolívar, Simón *Obras completas* (La Habana: LEX) Tomo I.
- Boron, Atilio 2002 *Imperio e imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri* (Buenos Aires: CLACSO).
- Boron, Atilio 2006 *Diálogos sobre el poder, el Estado y la Revolución* (La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello).
- Bosch, Juan 1981 *De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe, frontera imperial* (La Habana: Casa de las Américas).
- Bush, George 1992 “New challenges after Cold War” en *International relations and strategies* (Washington DC) N° 8.

- Casal Llano, Jorge 2003 “El MERCOSUR: ¿precursor de una verdadera integración latinoamericana?” en *Política internacional* (La Habana) N° 2, julio-diciembre.
- Castro, Fidel 1959a “Discurso pronunciado el 23 de enero de 1959 en la Plaza del Silencio de Caracas, Venezuela” en *Granma*, en <www.granma.cubasi.cu>.
- Castro, Fidel 1959b “Discurso pronunciado el 2 de mayo de 1959 en la reunión del Grupo de los 21 efectuada en Buenos Aires, Argentina” en *Granma*, en <www.granma.cubasi.cu>.
- Castro, Fidel 1959c “Discurso pronunciado el 5 de mayo de 1959 en la explanada de Montevideo, Uruguay” en *Granma*, en <www.granma.cubasi.cu>.
- Castro, Fidel 1991 *Mensaje a la Primera Cumbre Iberoamericana* (La Habana: Empresa Impresora Gráfica del MINED).
- Castro, Fidel 1993 *La Historia me absolverá* (La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado).
- Castro, Fidel 1994 “Discurso pronunciado en la Cuarta Cumbre Iberoamericana realizada en Cartagena de Indias, Colombia” en *Granma*, en <www.granma.cubasi.cu>.
- Castro, Fidel 2005 “Discurso pronunciado en el acto por el 60 aniversario de su ingreso a la universidad, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005” en *Granma*, en <www.granma.cubasi.cu>.
- Castro, Guillermo 2004 *Para una historia ambiental latinoamericana* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Castro, Raúl 2007 “Discurso pronunciado en el 54 Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Camagüey, 26 de julio de 2007” en *Granma*, en <www.granma.cubasi.cu>.
- Ceceña, Ana Esther 2007 “La militarización de la hegemonía”, Seminario Conjunto de los Grupos de Trabajo Hegemonía y Emancipación y de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, Guadalajara, 13 al 15 de agosto, mimeo.
- CEG-Centro de Estudios de Guatemala 2005 *Fuerzas de seguridad en Centroamérica: balance y perspectivas* (Ciudad de Guatemala: CEG).
- CEPAL 1993 *Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado* (Santiago de Chile: CEPAL).

- CEPAL 1994 *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad* (Santiago de Chile: CEPAL).
- CEPAL 2000 *Panorama social de América Latina* (Santiago de Chile: CEPAL).
- CEPAL 2005 *Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina: políticas de articulación y articulación de políticas* (Santiago de Chile: CEPAL).
- Cervo, Amado Luiz y Bueno, Clodoaldo 2002 *História da política exterior do Brasil* (Brasilia: Instituto Brasileiro de Relaciones Internacionales/Editoria UNB).
- CFR 2004 *Andes 2020: una nueva estrategia ante los retos que enfrentan Colombia y la región andina* (Bogotá: FESCOL).
- Chateau Magalhaes, Cristian 2007 "Diplomacia y cooperación militar en el ámbito multilateral. La Conferencia de Jefes de Ejércitos Americanos: historia y perspectiva" en *Military Review* (Kansas: Combined Arms Center/Fort Leavenworth) enero-febrero.
- Chossudovsky, Michel 2003 "Is the annexation of Canada part of Bush's military agenda?" en <www.globalserarch.ca>.
- Christopher, Warren 1994 "Discurso pronunciado ante la Comisión Binacional Estadounidense-Mexicana encargada de dar seguimiento al NAFTA, México DF, 9 de abril de 1994" (La Habana: Sección de Intereses de los Estados Unidos).
- Connell-Smith, Gordon 1977 *Los Estados Unidos y América Latina* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- De Armas, Ramón 1993 "La vanguardia antillana de la segunda mitad del XIX y la Estrategia Revolucionaria Continental de José Martí" en *Anuario del Centro de Estudios Martianos* (La Habana) N° 16.
- De Cárdenas, Raúl 1921 *La política de los Estados Unidos en el continente americano* (La Habana: Sociedad Editorial Cuba Contemporánea).
- De Jouvenel, Hughes 2000 "La naturaleza del futuro" en *Claves del Siglo XXI* (París: UNESCO).
- Dello Bouno, Ricardo y Gandásegui h., Marcos A. (eds.) 2007 *Un continente en la encrucijada. Nuestra América en transformación* (Ciudad de Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena).

- De Oliveira, Francisco 2004 “¿Hay vías abiertas para América Latina?” en Boron, Atilio (comp.) *Nueva hegemonía mundial, alternativas de cambio y movimientos sociales* (Buenos Aires: CLACSO).
- De Ruiter, Robin 2004 *El 11 de septiembre de 2001: mitos y mentiras* (Frankfurt: Zambon Iberoamericana).
- Denis, Claude 2005 “Mirando al futuro” en Hristoulas, Athanasios et al. (coords.) *Canadá. Política y gobierno en el siglo XXI* (México DF: ITAM).
- Díaz Callejas, Apolinar 1997 *Colombia-Estados Unidos: entre la autonomía y la subordinación. De la independencia a Panamá* (Bogotá: Planeta).
- Díaz Callejas, Apolinar y González Arana, Roberto 1998 *Colombia y Cuba: del distanciamiento a la cooperación* (Bogotá: Uninorte).
- Díaz Lacayo, Aldo 2006 *El Congreso Anfictiónico: visión bolivariana de la América anteriormente española* (Caracas: Ediciones Emancipación/ Congreso Bolivariano de los Pueblos).
- Díez Acosta, Tomás 2006 *La guerra encubierta contra Cuba* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Domingos Ouriques, Nildo 1994 “Hacia una teoría marxista de la dependencia” en *La teoría social latinoamericana. Subdesarrollo y dependencia* (México DF: El Caballito) Tomo II.
- DOR-Departamento Orientación Revolucionaria 1976 *Constitución de la República de Cuba* (La Habana: DOR).
- Dos Santos, Theotonio 1998 “La teoría de la dependencia: un balance histórico y teórico” en López Segrera, Francisco (ed.) *Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos* (Caracas: UNESCO).
- Du Bois, W.E.B. 2001 *Las almas del pueblo negro* (La Habana: Fundación Fernando Ortiz).
- Elías, Antonio (comp.) 2006 *Los gobiernos progresistas en debate* (Montevideo: CLACSO/PIT/CNT/Instituto Cuesta Duarte).
- Espinoza García, Manuel 1971 *La política económica de los Estados Unidos hacia América Latina entre 1945 y 1961* (La Habana: Casa de las Américas).
- Estay R., Jaime 1995 “La globalización y sus significados” en Calva, José Luis (coord.) *Globalización y bloques económicos: realidades y mitos* (México DF: Juan Pablos).

- Fernández Retamar, Roberto 2006 *Pensamiento de nuestra América: autorreflexiones y propuestas* (Buenos Aires: CLACSO).
- Flagg Bemis, Samuel 1934 *The Latin American policy of the United States* (Nueva York: Harcourt, Brace and Co.).
- Fonseca, Elizabeth 2001 *Centroamérica: su historia* (San José de Costa Rica: FLACSO/EDUCA).
- Franko, Patrice 2003 "Hacia una nueva arquitectura de seguridad en las Américas" en Grabendorff, Wolf (ed.) *La seguridad regional en las Américas* (Bogotá: FESCOL/CEREC).
- Furtado, Celso 1972 *Breve historia económica de América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Galasso, Norberto 2004 *Seamos libres y lo demás no importa nada: vida de San Martín* (Buenos Aires/La Habana: Colihue/Editorial de Ciencias Sociales).
- Galeano, Eduardo 1979 *Las venas abiertas de América Latina* (México DF: Siglo XXI).
- Galeano, Eduardo 1990 *Memoria del fuego* (La Habana: Casa de las Américas) Tomo II.
- García Collada, Rafael 2005 "Un análisis político-jurídico del nuevo orden panamericano", Tesis de Maestría, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, La Habana, mimeo.
- García Lorenzo, Tania 1996 "La integración en la Cuenca del Caribe: institucionalidad y realidad" en *Temas* (La Habana) abril-junio.
- García Lorenzo, Tania 2002 "La Asociación de Estados del Caribe. Su necesario proceso de introspección" en *Anuario de la integración regional en el Gran Caribe*, N° 3.
- García Lorenzo, Tania 2005 "La economía y la integración de la Comunidad del Caribe: encuentros y desencuentros", Tesis de Doctorado, Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI), Universidad de La Habana.
- García Lorenzo, Tania 2006 "El Caribe y los retos del siglo XXI" en *Anuario CRIES* (Managua: CRIES).
- García Muñiz, Humberto y Rodríguez Beruff, Jorge (coords.) 1999 *Fronteras en conflicto. Guerra contra las drogas, militarización y democracia en el Caribe, Puerto Rico y Vieques* (San Juan:

Red Caribeña de Geopolítica, Seguridad Regional y Relaciones Internacionales).

- García Ponce, Guillermo 2002 *Bolívar y las armas en la guerra de independencia* (Caracas: Fundación Sucre/Pío Tamayo/Carlos Aponte).
- García Rivera, Gisela 2003 "Cuestiones claves del Tribunal Internacional Permanente en materia penal. El tema del tribunal en la agenda de las relaciones EEUU-Caribe", Trabajo de Maestría, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, La Habana, mimeo.
- Girvan, Norman 2006 *Towards a single economy and a single development vision* (Kingston: University of the West Indies/CARICOM/Special Task Force on the Single Economy).
- Godet, Michel 1885 *Prospective et planification stratégique* (París: CPE).
- Golinger, Eva 2005 *El Código Chávez: descifrando la intervención de Estados Unidos en Venezuela* (Caracas: Monte Ávila).
- González, Roberto 1990 *Teoría de las relaciones políticas internacionales* (La Habana: Editorial Pueblo y Educación).
- González, Roberto 2003 *Estados Unidos: doctrinas de la guerra fría (1947-1991)* (La Habana: Centro de Estudios Martianos).
- González Casanova, Pablo 1991 "Crisis del Estado y lucha por la democracia en América Latina" en *Estado, nuevo orden económico y democracia en América Latina* (Caracas: ALAS/CEA/Nueva Sociedad).
- Gorostiaga, Xabier 2000 "Hacia una prospectiva participativa. Esquema metodológico" en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coords.) *América Latina 2020: escenarios, alternativas, estrategias* (Buenos Aires: FLACSO/Temas Grupo Editorial).
- Grimmett, Richard F. 1999 *Instances of use of United State Armed Forces abroad* (Washington DC: Congressional Research Service).
- Grosfoguel, Ramón 2002 "Colonialidad global y terrorismo antiterrorista" en *Nueva Sociedad* (Caracas) enero-febrero.
- Guerra, Ramiro 1975 *La expansión territorial de los Estados Unidos* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Guerra Vilaboy, Sergio 2003 *El dilema de la independencia* (La Habana: Félix Varela).

- Guerra Vilaboy, Sergio 2006 *Breve historia de América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Guerra Vilaboy, Sergio y Maldonado Gallardo, Alejo 2000 “Raíces históricas de la integración latinoamericana” en *Historia y perspectiva de la integración latinoamericana* (Morelia: Asociación para la Unidad de Nuestra América/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).
- Guevara, Ernesto “Che” 1970 (1964) “La planificación socialista, su significado” en *Obras 1957-1967* (La Habana: Casa de las Américas) Tomo II.
- Guevara, Ernesto “Che” 2003 (1961) “Discursos pronunciados el 8 y el 16 de agosto de 1961 en las sesiones del CIES de la OEA” en Guevara, Ernesto “Che” *Punta del Este: proyecto alternativo de desarrollo para América Latina* (La Habana/Melbourne/Nueva York: Centro de Estudios Che Guevara/Ocean Press).
- Guevara, Ernesto “Che” 2004 (1953) *Notas de viaje* (La Habana/Melbourne/Nueva York: Centro de Estudios Che Guevara/Ocean Press).
- Gutiérrez-Haces, Teresa 2005 “La política internacional de comercio de Canadá” en Hristoulas, Athanasios et al. (coords.) *Canadá. Política y gobierno en el siglo XXI* (México DF: ITAM).
- Halperin Donghi, Tulio 1998 *Historia contemporánea de América Latina* (Madrid: Alianza).
- Hernández, Alcides 1994 *La integración de Centroamérica: desde la Federación hasta nuestros días* (San José de Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones).
- Hinkelammert, Franz 1993 “El cautiverio de la utopía” en *Pasos* (San José de Costa Rica) noviembre-diciembre.
- Hobsbawm, Eric 1995 *Historia del siglo XX* (Barcelona: Grijalbo-Mondadori).
- Hristoulas, Athanasios 2005 “Canadá en América Latina” en Hristoulas, Athanasios et al. (coords.) *Canadá. Política y gobierno en el siglo XXI* (México DF: ITAM).
- Hughes, Charles Evans 1929 *Relación de los Estados Unidos con las otras naciones del hemisferio occidental* (Nueva Jersey: Princeton University Press).

- Isa Conde, Narciso 2006 "USARMY: desde el Caribe contra la autodeterminación de las Américas" en <www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=14131>.
- Isaacson, Adam; Olson, Joy y Hangaard, Lisa 2005 "Los programas militares de Estados Unidos en América Latina" en *Temas* (La Habana) N° 41-42, enero-junio.
- Jované, Juan 2007 "El Tratado de Libre Comercio y el fin de la economía panameña" en Dello Bouno, Ricardo y Gandásegui h., Marcos A. (eds.) *Un continente en la encrucijada. Nuestra América en transformación* (Ciudad de Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena).
- Katz, Claudio 2007 "Socialismo o neodesarrollismo" en <www.rebellion.org>.
- Kirk, John M. y McKenna, Peter 2007 *Cuba y Canadá: sesenta años de relaciones bilaterales* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Kossok, Manfred 1989 *La revolución en la historia de América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Laya, Luis y Romero, Carmen 2007 "1° Cumbre Energética Suramericana: impulsando la integración de los pueblos de América" en *Política exterior y soberanía* (Caracas) abril-junio.
- Le Frank, M.Q. 2005 "La Constitución y el federalismo" en Hristoulas, Athanasios et al. (coords.) *Canadá. Política y gobierno en el siglo XXI* (México DF: ITAM).
- Lechuga, Carlos 1991 *Itinerario de una farsa* (La Habana: Pueblo y Educación).
- Lechuga, Carlos 1995 *En el ojo de la tormenta* (La Habana/Melbourne: SIMAR/Ocean Press).
- Lenin, Vladimir Ilich 1976 (1917) "El imperialismo, fase superior del capitalismo" en Lenin, Vladimir Ilich *Obras escogidas en doce tomos* (Moscú: Progreso) Tomo V.
- Lieber, Robert J. 2002 "Comienza una nueva era en el pensamiento estratégico de Estados Unidos" en *Septiembre 11: un año después* (La Habana: Sección de Intereses de los Estados Unidos).
- Magariños, Gustavo 2000 *Integración multinacional: teoría y sistemas* (Montevideo: Universidad ORT/ALADI).

- Marini, Ruy Mauro 1994 "La integración imperialista y América Latina" en *La teoría social latinoamericana: textos escogidos* (México DF: UNAM) Tomo II.
- Martí, José 1974a "Carta a Manuel Mercado" en Martí, José *Nuestra América* (La Habana: Casa de las Américas).
- Martí, José 1974b "La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de las Américas" en Martí, José *Nuestra América* (La Habana: Casa de las Américas).
- Martí, José 1974c *Nuestra América* (La Habana: Casa de las Américas).
- Martínez, Osvaldo 2007 "ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión" en Aguerrichu, Iraida (comp.) *ALBA. Integración latinoamericana* (La Habana: Editora Política).
- Martínez, Osvaldo et al. 1998 *Estados Unidos y la economía internacional* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Masini Barbieri, Eleonora 2000 "La futurología en acción" en *Claves del Siglo XXI* (París: UNESCO).
- Matul, Daniel 2004 "Estados Unidos y Centroamérica: la agenda bilateral (1997-2003)", Seminario Internacional Regionalismo, Seguridad Regional y Sociedad Civil en el Gran Caribe y el Nuevo Entorno Mundial, La Habana, 25 al 27 de febrero, mimeo.
- Mayor Zaragoza, Federico 2000 "Mensaje del director general de la UNESCO a los participantes en el III Encuentro Latinoamericano de Estudios Prospectivos" en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coords.) *América Latina 2020: escenarios, alternativas, estrategias* (Buenos Aires: FLACSO/Temas Grupo Editorial).
- Medina Castro, Manuel 1974 *Estados Unidos y América Latina: siglo XIX* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Mojica, Francisco José 2000 "Determinismo y construcción del futuro" en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coords.) *América Latina 2020: escenarios, alternativas, estrategias* (Buenos Aires: FLACSO/Temas Grupo Editorial).
- Moniz Bandeira, Luiz Alberto 2003 "Brasil, Estados Unidos y los proyectos de integración regional" en *Nueva Sociedad* (Caracas) julio-agosto.
- Moufang, Xue 1995 "¿Cuatro potencias y una superpotencia?" en *Beijing informa* (Beijing) 26 de septiembre.

- Müllerleile, Christoph 1995 "El CARICOM en la integración de los estados caribeños" en <www.fundraising-buero.de/caricomintegracion.pdf>.
- Nevins, Henry; Steele, Commager y Morris, Jeffrey 1996 *Breve historia de los Estados Unidos* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Nixon, Richard M. 1980 *La verdadera guerra: la tercera guerra mundial ha comenzado...* (Barcelona: Planeta).
- Nuccio, Richard 1995 "Discurso ante las organizaciones moderadas de la comunidad cubana radicada en los Estados Unidos del 9 de septiembre de 1995" en *Contrapunto* (Miami).
- Núñez, Orlando 2006 *La oligarquía en Nicaragua* (Managua: CIPRES).
- OIT 2005 *El proceso de integración centroamericana en perspectiva* (Ginebra: OIT).
- Osorio, Jaime 1994 "Fuentes y tendencias de la teoría de la dependencia" en *La teoría social latinoamericana: subdesarrollo y dependencia* (México DF: UNAM) Tomo II.
- Petras, James 2001 "La geopolítica del Plan Colombia" en *KOE'YU Latinoamericano* (Caracas) abril-junio.
- Petras, James et al. 2004 *Imperio con imperialismo: la dinámica globalizadora del capitalismo neoliberal* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Pierre-Charles, Gérard 1981 *El Caribe en la hora de Cuba* (La Habana: Casa de las Américas).
- Popa Danel, Zulán 2005 "Aproximación al futuro del Plan Colombia para la región andino-amazónica", Tesis de Maestría, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, La Habana, mimeo.
- Prada, Raúl 2006 "Impactos y tendencias de los cambios" en Elías, Antonio (comp.) *Los gobiernos progresistas en debate* (Montevideo: CLACSO/PIT/CNT/Instituto Cuesta Duarte).
- Prieto Rozos, Alberto 2005 *Ideología, economía y política en América Latina: siglos XIX y XX* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Regueiro, Lourdes 1994 "Integración latinoamericana: apuntes para un debate" en *Cuadernos de nuestra América* (La Habana) julio-diciembre.
- Ribeiro, Darcy 1992 *Las Américas y la civilización* (La Habana: Casa de las Américas).

- Ríos Blein, Hugo y Sáenz Pedrón, Ricardo 2000 *Caamaño* (La Habana: Tricontinental).
- Rodríguez Beruff, Jorge 1996 "Democracia y política exterior de los Estados Unidos en perspectiva histórica" en Dilla, Haroldo (comp.) *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Rodríguez Gelfenstein, Sergio 2007 "El TIAR alcanzó la madurez... el Pacto Democrático ni siquiera pudo gatear" en *Altercom*, 19 de septiembre.
- Ronchen, Theo 2004 *La lucha contra las drogas y la proyección militar de Estados Unidos: Centros Operativos de Avanzada en América Latina y el Caribe* (Quito: Abya Yala/Transnational Institute).
- Rosas, María Cristina 2005 "Canadá: seguridad y defensa" en Hristoulas, Athanasios et al. (coords.) *Canadá. Política y gobierno en el siglo XXI* (México DF: ITAM).
- Rudmin, Floyd 2006 "Los planes secretos de guerra y el mal del militarismo usamericano. El Plan Carmesí: la guerra contra Canadá" en <www.rebellion.org>.
- Ruiz Blanco, Miguel Camilo 2003 "Visiones de seguridad en las Américas" en Grabendorff, Wolf (ed.) *La seguridad regional en las Américas* (Bogotá: FESCOL/CEREC).
- Ruiz González, Raúl 1964 *Bolivia: el Prometeo de los Andes* (La Habana: Venceremos).
- Sánchez Egózcue, Jorge Mario y Rodríguez Rodríguez, Raúl 2006 *Canadá: algunos escenarios* (La Habana: Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana).
- Sánchez Egózcue, Jorge Mario y Rodríguez Rodríguez, Raúl 2007 "Algunos escenarios de la política exterior canadiense", VIII Taller Científico Escenarios Internacionales para la Política Exterior de Cuba 2008-2010, La Habana, 4 al 11 de septiembre.
- Sandino, Augusto C. 1929 *Plan de realización del supremo sueño de Bolívar* (Managua: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela).
- Saxe-Fernández, John 1996 "Mexamérica: la dialéctica entre la macro y la micro-regionalización" en *Nueva Sociedad* (Caracas) mayo-junio.
- Schlesinger Jr., Arthur 1979 *Los mil días de Kennedy* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).

- Schulman, José Ernesto 2005 *La parte o el todo: un mapa para recorrer la historia de la lucha de clases en Argentina* (Buenos Aires: Manuel Suárez).
- Selser, Gregorio 1960 *El pequeño ejército loco* (La Habana: Imprenta Nacional de Cuba).
- Selser, Gregorio 1992 *Enciclopedia de las intervenciones extranjeras en América Latina* (Bonn: Monimbó e.V/Dietzenbach) Tomo I.
- Serbin, Andrés 2003 “Desafíos y obstáculos políticos del ALCA” en *Nueva Sociedad* (Caracas) julio-agosto.
- Steel, Ronald 1967 *Pax americana* (Nueva York: Viking Press).
- Stevenson, Brian J. 1996 *Política exterior canadiense: debates teóricos* (México DF: ITAM).
- Stevenson, Brian J. 2000 *Canada-Latin America and the new internationalism: a foreign policy analysis 1968-1990* (Quebec: McGill Queen’s University Press).
- Suárez Salazar, Luis 1986 “La política de la Revolución Cubana hacia América Latina y el Caribe: notas para una periodización” en *Cuadernos de Nuestra América* (La Habana) julio-diciembre.
- Suárez Salazar, Luis (comp.) 1999 *Barbarroja: selección de testimonios y discursos del Comandante Manuel Piñeiro Losada* (La Habana: TRIcontinental/SIMAR).
- Suárez Salazar, Luis 2000 *El siglo XXI: posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Suárez Salazar, Luis 2003a “La nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos: implicaciones para la paz, el Derecho Internacional Público contemporáneo y el ‘nuevo orden panamericano’” en *Nueva Democracia* (México DF).
- Suárez Salazar, Luis 2003b *Madre América: un siglo de violencia y dolor (1898-1998)* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Suárez Salazar, Luis 2005 “Geopolítica y drogas en el hemisferio occidental: una reactualización” en *Temas* (La Habana) enero-junio.
- Suárez Salazar, Luis 2006a “Cuba’s foreign policy and the promise of ALBA” en *NACLA Report on the Americas* (Nueva York) enero-febrero.
- Suárez Salazar, Luis 2006b “Hacia un nuevo paradigma para la integración multinacional latinoamericana y caribeña: un enfoque desde la prospectiva crítica y participativa” en *Concurso*

Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales) Tomo II.

Suárez Salazar, Luis 2006c “La globalización: una lectura desde ‘los marxismos’” en Estrada Álvarez, Jairo (comp.) *Teoría y acción política en el capitalismo actual* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).

Suárez Salazar, Luis 2006d “Las agresiones de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe: fuente constante del terrorismo de Estado en el hemisferio occidental” en *Terrorismo made in USA en las Américas*, en <www.terrorfileonline.com>.

Suárez Salazar, Luis 2006e *Un siglo de terror en América Latina. Crónica de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad* (Melbourne/Caracas/La Habana: Ocean Sur).

Suárez Salazar, Luis 2007a “Crisis y recomposición del sistema de dominación ‘global’ de Estados Unidos: el ‘nuevo orden panamericano’” en Gandásegui Jr., Marcos (coord.) *Crisis de hegemonía de Estados Unidos* (México DF: CLACSO/Siglo XXI).

Suárez Salazar, Luis 2007b “La integración multidimensional de Nuestra América: una mirada desde lo mejor del pensamiento social latinoamericano y caribeño”, XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, 13 al 15 de agosto, mimeo.

Sunkel, Osvaldo 1991 *El desarrollo desde dentro* (México DF: Fondo de Cultura Económica).

Tokatlian, Juan Gabriel 1983 “¿Es nueva la ‘nueva’ política exterior latinoamericana?” en Drejonka, Gerhard y Tokatlian, Juan Gabriel (comps.) *Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana* (Bogotá: FESCOL).

Torres Cuevas, Eduardo y Loyola Vega, Oscar 2001 *Historia de Cuba: formación y liberación de la nación (1492-1898)* (La Habana: Pueblo y Educación).

Torres Rivas, Edelberto 1991 “Los mecanismos de la ilusión: las elecciones centroamericanas” en *Sistemas políticos, poder y sociedad (estudios de casos de América Latina)* (Caracas: ALAS/CEA/Nueva Sociedad).

Torriello Garrido, Guillermo 1954 “Discurso pronunciado en la Décima Conferencia Interamericana”, Caracas, 5 de marzo, mimeo.

Touraine, Alain 1984 *Le retour de l'acteur* (París: Fayard).

- Trofimenko, G. 1987 *La doctrina militar de EE.UU.* (Moscú: Progreso).
- USA/CARICOM 2007 "Joint statement: Conference on the Caribbean", Washington, en <www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070620-12.html>.
- Valasskakis, Kimon 2000 "Futurología: una autocrítica" en *Claves del Siglo XXI* (París: UNESCO).
- Van Kleveren, Alberto 1983 "El lugar de Estados Unidos en la política exterior latinoamericana" en Drejonka, Gerhard y Tokatlian, Juan Gabriel (comps.) *Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana* (Bogotá: FESCOL).
- Vázquez García, Humberto 2001 *De Chapultepec a la OEA: apogeo y crisis del panamericanismo* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Vilas, Carlos 1995 "La crisis mexicana: lecciones para los argentinos" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 129.
- Wagner Tizón, Allan 2004 "35 años de integración andina: logros y desafíos en la perspectiva de un nuevo diseño estratégico" en Cárdenas, Miguel Eduardo (coord.) *El futuro de la integración andina* (Bogotá: FESCOL/CEREC).
- Wood, Duncan 2005 "La revisión de la política exterior y las relaciones Canadá-Estados Unidos" en Hristoulas, Athanasios et al. (coords.) *Canadá. Política y gobierno en el siglo XXI* (México DF: ITAM).
- Zinn, Howard 2004 *La otra historia de los Estados Unidos* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Zuluaga, Jaime 2007 "El TLC y el Plan Colombia: un obstáculo para los procesos de integración de América Latina" en Dello Bouno, Ricardo y Gandásegui h., Marcos A. (eds.) *Un continente en la encrucijada. Nuestra América en transformación* (Ciudad de Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena).

COLABORACIONES

Silvana Montaruli*

EL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN EN EL DISCURSO DE SIMÓN BOLÍVAR

PERSPECTIVAS PARA EL PRESENTE

INTRODUCCIÓN

Siguiendo el análisis de Sergio Guerra Vilaboy, el ciclo independentista que se desarrolló durante el siglo XIX en los países ahora llamados “latinoamericanos” puede ser dividido en tres etapas: la primera tuvo lugar entre 1790 y 1804, y en ella se consolidó la Revolución Haitiana; la segunda se desarrolló entre 1808 y 1815, dio lugar a la formación de juntas de gobierno autónomas en las principales ciudades de Hispanoamérica y llegó a su fin con la exitosa contraofensiva realista desatada entre 1814 y 1815; la tercera y última tuvo su inicio en 1816 y significó la emancipación de la América continental antes española, con las campañas libertadoras de Simón Bolívar y José de San Martín, así como la *sui generis* independencia de Brasil (Guerra Vilaboy, 2003).

En líneas generales, podemos afirmar que los procesos de emancipación desarrollados en Hispanoamérica entre 1790 y 1824 no tuvieron en su inicio el objetivo de romper con el orden colonial, sino que comenzaron como un movimiento autonomista y de fidelidad a Fernando VII, en el que se buscaba cierta autonomía respecto de la metrópoli y la posibilidad del libre comercio con otras potencias europeas o Estados Unidos.

* Profesora en grado superior de Filosofía. Maestranda en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo, Mendoza, Argentina.

En ese contexto, la Revolución Haitiana fue fundamental para las relaciones interamericanas de la época, debido a su influencia sobre los acontecimientos hispanoamericanos. Con su imaginario, soliviantó a los esclavos de las plantaciones, aceleró la intranquilidad social y actuó como catalizador del proceso revolucionario. Fue, además, una solitaria revolución social, la única donde efectivamente se unió la independencia con la desaparición de las instituciones esclavistas.

En la causa bolivariana resultó crucial la influencia de esa revolución y, en particular, del presidente Alexander Petión, en tanto él y otros destacados independentistas haitianos le facilitaron a Bolívar los recursos materiales que necesitaba para reemprender la lucha por la independencia de Hispanoamérica, lo que le permitió regresar a Venezuela en 1816. Este hecho fue determinante para que Bolívar quedara unido a la causa popular y que, dominado por el principio de igualdad, ligara la revolución por la independencia con la abolición de la esclavitud. Sin embargo, sus objetivos antiesclavistas no pudieron ser alcanzados, ya que se vio imposibilitado de llevar a la práctica su decreto abolicionista. Este fue sustituido en el Congreso de Cúcuta por una ley de vientres libres.

De lo anterior se desprende que el tema de la esclavitud fue un punto fundamental en la emancipación de los países ahora llamados “latinoamericanos”. El dilema era romper el orden colonial con o sin transformaciones sociales, lo que implicaba –además de eliminar los monopolios comerciales– abolir el diezmo, la servidumbre indígena y la esclavitud. Esto último era lo que definía el sentido revolucionario o conservador de la contienda anticolonialista.

Los criollos ricos querían una independencia política que no trajera aparejados cambios sociales de envergadura. Es decir, una separación de la metrópoli que mantuviera la esclavitud y otras formas de explotación. En ese sentido, la Revolución Haitiana, como precursora, tuvo una doble cara: como vimos, aceleró la Revolución Hispanoamericana, pero a la vez la retrasó a causa de los temores que generó entre los criollos esclavistas.

Por ello, con todos sus matices, podemos decir que las revoluciones independentistas latinoamericanas ocurridas en el período de 1790 a 1825 se organizaron y llevaron adelante en condiciones políticas y económicas muy diversas, ya que respondían a diferentes escenarios socioeconómicos. Así, por ejemplo, mientras en las primeras colonias hispanoamericanas la independencia era dirigida por representantes de los comerciantes, intelectuales y hacendados criollos, la de Haití había sido conducida por los esclavos. A pesar de sus peculiaridades, todas estaban enlazadas, no sólo por la lucha común contra la opresión económica y política de las metrópolis europeas y la aparición de un pro-

gresivo sentimiento nacional en los pueblos sublevados, sino también por objetivos similares, que en general tenían que ver con la destrucción de las trabas al avance capitalista.

Por otra parte, mientras se tejían las tramas emancipatorias, EE.UU. dejaba sentir sus intenciones expansionistas. La actitud neutral del gobierno de Thomas Jefferson, continuada por las sucesivas administraciones de James Madison y James Monroe, favoreció la perduración de los colonialismos europeos en el Nuevo Mundo. Este último fue autor de la doctrina que justificó las múltiples agresiones perpetradas por los grupos dominantes y el *establishment* político-militar de ese país contra nuestras naciones durante los siglos XIX y XX.

En este sentido, podemos recordar que Jefferson había hecho explícito su interés hacia la isla de Cuba como la pieza fundamental de su sistema de dominación. En sus palabras, junto con la Florida, esa isla significaba el control sobre el Golfo de México y los países del istmo contiguo, así como las tierras cuyas aguas desembocan en el Golfo, a las que consideraba necesarias para la “seguridad continental”. Esta idea guió la desidia o la participación oficial estadounidense en los conflictos y guerras civiles que provocaron la “balcanización” de América Latina, en particular en la progresiva desintegración de las Provincias del Río de la Plata, de la ahora llamada Gran Colombia, de la Confederación Peruano-Boliviana y de la Federación Centroamericana.

Recordemos que, a pesar de su enorme extensión y creciente industria, en las primeras décadas del siglo XIX, EE.UU. no podía competir con los comerciantes ingleses, por lo que sus intenciones hegemónicas se limitaban a una ambiciosa declaración de sus aspiraciones por apoderarse de Cuba y a las acciones de fuerza contra las repúblicas latinoamericanas, como México, Nicaragua y Nueva Granada. De allí la decisión de sucesivos gobiernos de EE.UU. de no intervenir en caso de guerra entre naciones americanas, ni en las demostraciones puramente punitivas que hicieran los gobiernos europeos contra las mismas, con tal de que tales actos no derivaran en una ocupación de territorio.

Paralelamente, desde 1810, el desarrollo del comercio había quedado abierto a las mercancías inglesas. En el caso de Brasil, dicha apertura se llevó a cabo por intermedio de un tratado comercial que convirtió al país, tanto antes como después de su independencia, en una colonia económica de Inglaterra. No sólo a las mercancías inglesas se les abrió ampliamente el inmenso territorio nacional sino que, además, los comerciantes británicos obtuvieron la extraterritorialidad judicial.

Por su parte, las colonias hispánicas, insurgentes, se apresuraron a enviar misiones diplomáticas a Londres y a negociar con Inglaterra la asistencia política y militar a cambio del libre comercio para los productos británicos. Sólo unos pocos reductos de nacionalismo

económico latinoamericano resistieron a la invasión de los productos extranjeros, tal fue el caso de Paraguay. Como consecuencia de esa invasión, las manufacturas latinoamericanas quedaron en ruinas en aquellas partes donde no existían barreras proteccionistas. En el caso de países como México, Nueva Granada (posteriormente denominada Colombia), Perú y Brasil, la producción textil autóctona fue sustituida en su mayor parte por productos ingleses.

Junto con su empeño por conquistar los mercados latinoamericanos para sus productos textiles y otros, Gran Bretaña siguió una política encaminada a dominar las desembocaduras de los grandes ríos del continente, en especial el Río de la Plata. Con ese afán, promovió entre 1826-1828 la independencia de Uruguay como Estado débil, a través del cual su influencia podía penetrar en el interior del continente, derribando progresivamente los obstáculos nacionalistas erigidos en Paraguay y en la llamada “Argentina de Rosas”. Por otra parte, la política de Londres procuraba mantener factores de pugna que requerían la continua presencia mediadora de la diplomacia inglesa.

Esta breve descripción histórica permite mostrar el escenario en el que, a lo largo del siglo XIX, se desarrollaron los intentos ahora llamados *integracionistas*. En ese siglo, los conceptos unitarios representaron una categoría fuerte, ya que las relaciones interamericanas de la época estuvieron atravesadas por esta *utopía*, que, si bien comenzó a sentirse con anterioridad al pensamiento bolivariano (ya estaba presente en el proyecto mirandino), se incorporó al imaginario subversivo del *statu quo*.

En las páginas siguientes pretendemos mostrar, por un lado, la riqueza del pensamiento bolivariano y por qué, desde nuestro punto de vista, este se constituye como el referente de la época en tanto “Simón Bolívar formula las coordenadas de una matriz autónoma de pensamiento que habría de recuperar los relatos de resistencias a la expoliación colonial” (Argumedo, 2006: 29). Por otro lado, intentaremos repensar nuestro propio contexto, en el que otra vez la categoría *integración* vuelve a aparecer como una necesidad, no sólo política o económica sino, además, social y cultural. Ese empeño se emprenderá desde una metodología prospectiva que “no pretende ser objetiva ni científica en términos formales. Asume un *ethos* y un *pathos*, es decir una opción ética y un compromiso por crear un futuro de ciudadanía digna para los excluidos y para los ‘otros’ desde la pasión y compasión solidaria” (Gorostiaga, 2000: 35-49).

Las relaciones interamericanas y las tramas que conforman los nuevos tejidos políticos, económicos y sociales a fines del siglo XX y comienzos del XXI exigen, por decirlo así, que los países de Nuestra América finalmente encuentren la consolidación de la que se ha consti-

tuido históricamente como la *utopía americana*: su integración. En ese sentido, procuraremos reflexionar sobre las perspectivas que subyacen en el uso de esa categoría en nuestra época, considerando que los discursos actuales buscan rescatar el sentido que tuvo en el siglo anterior.

Desde nuestra posición, el concepto *integración* ha cumplido y cumple hoy una función *utópica*, en tanto se trata de proyectar el futuro a partir de un análisis crítico del presente, representando el imaginario hacia el cual han tendido y tienden necesariamente las relaciones entre nuestros países. En este sentido, en última instancia, se trata de pensar una integración no sólo económica, sino además cultural, social y política –único modo de hacer de nuestra región aquella Nuestra América libre con la que soñaron nuestros pensadores del siglo XIX. Esa función utópica parte desde una visión crítica del presente en *posición* o en *situación*, e implica el compromiso con el cambio y la acción partiendo del supuesto de que el futuro se construye y no solamente se acepta.

SIMÓN BOLÍVAR Y LOS FUNDAMENTOS DE UNA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XIX

La América, al estremecerse al principio de siglo desde las entrañas hasta las cumbres, se hizo hombre, y fue Bolívar. No es que los hombres hacen los pueblos, sino que los pueblos, con su hora de génesis, suelen ponerse, vibrantes y triunfantes, en un hombre. A veces está el hombre listo y no lo está su pueblo. A veces está listo el pueblo y no aparece el hombre (Martí, 1965: 251).

La obra bolivariana, de enorme grandeza, tuvo su gesta durante el contexto histórico más convulso de los países de la América. El siglo XIX puede ser calificado como *la génesis de nuestra conciencia americana*, no sólo porque en él consiguen carta de libertad sus pueblos –lo que implica la reorganización de los estados y de sus formas de gobierno y la creación de constituciones y alianzas que garanticen la consolidación del proceso independentista–, sino porque el fundamento de todas estas acciones se encuentra en la conciencia concreta de un sujeto que hace explícito en sus múltiples vertientes el reclamo por su derecho a entrar en la historia del único modo legítimo en que puede hacerlo: *desde el reconocimiento de su propia humanidad*. Una conciencia que había comenzado a despertar en el siglo anterior, en las luchas sociales que dieron luz a los derechos del hombre y del ciudadano, y cuyos acontecimientos tienen su inicio con la conspiración de Gual y España. Navegar por las vertientes de nuestro pensamiento implica, en última instancia, comprender la carga semántica de las categorías que muestran el momento social y político de la época: la libertad como conciencia, la identidad como búsqueda de sí mismo y la *integración* como utopía.

En sus categorías básicas de libertad, identidad, dependencia e integración, los textos bolivarianos sintetizan *la denuncia* (traduce la situación real de su contexto histórico enfrentada a su modo de objetivar el mundo: desde la libertad); *el reclamo* (traduce desde una moral de la emergencia, la crítica a su tiempo y la necesidad de cambiar la realidad existente); *la acción* (traduce la propia forma de objetivación de la realidad en la *praxis* independentista); y *la utopía* (traduce la tensión existente entre lo real y el imaginario como proyecto). Debemos añadir que el fundamento que suponen todas estas categorías lo constituye el *a priori* antropológico implícito en ellas y que en general hace referencia a las voces discursivas de la época.

Las palabras de Martí anteriormente citadas parecen anticipar el final de la obra de Bolívar, que se inicia con el juramento que hace en Monte Sacro, en 1805, en compañía de su maestro Simón Rodríguez: “¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi Patria que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!” (Bolívar, 2004b). El ciclo histórico iniciado con ese juramento concluye con el sentimiento de desencanto que provocaron en El Libertador los acontecimientos post-independentistas en nuestras naciones, tal como lo expresó en la carta dirigida a Juan José Flores en 1830: “la América es ingobernable para nosotros” (Bolívar, 2004a).

Entre aquel juramento y este lamento existe un enorme caudal intelectual. Pero, además, si consideramos que desde la historia de nuestras ideas “es necesario plantear un *a priori* antropológico que recubre las formas lógicas sobre las que se organiza el pensamiento en cuanto que la necesaria afirmación del sujeto, su autovaloración, constituye un sistema de códigos de origen social-histórico, que se pone de manifiesto en la estructura axiológica de todo discurso posible” (Roig, 1981: 14), podremos comprender la riqueza que devela su pensamiento. El *a priori* antropológico presente como fundamento en sus textos tiene que ver directamente con el concepto de humanidad, negado a la sociedad americana, ya que el juramento de Bolívar refleja desde una moral emergente el momento de denuncia a la situación sociopolítica, pero fundamentalmente antropológica, que vive la América dependiente de la Corona Española. En su “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla”, datada en Kingston el 6 de septiembre de 1815 (conocida como Carta de Jamaica), encontramos reiteradas veces muestras de su posición al denunciar las “barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana; y jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades” (Bolívar, 1947b: 159).

En primer lugar su denuncia surge, como dijimos, desde *una moral emergente*, categoría propuesta por Arturo Andrés Roig. Esta señala a aquellos universos axiológicos que expresan los modos de objetivación de la vida moral del sujeto (en nuestro análisis, el americano) y que se hallan en conflicto con la lógica de la moral dominante. En este sentido, tiene la virtud de mostrar la articulación existente entre una forma de pensamiento ético y su *praxis*. También se vincula a una dialéctica entre subjetividad y objetividad, los dos niveles de la moral. El primero ha jugado un papel ruptor respecto del segundo. Se trata de una subjetividad que necesita de un criterio para orientar su trabajo y que, en el caso de nuestros pensadores –particularmente en Bolívar– se apoya en una convicción moral centrada en aquel valor supremo: el de la dignidad humana.

En efecto, el criterio utilizado por Simón Bolívar para orientar su acción libertadora es el reconocimiento de la humanidad americana, valor axiológico que se pone de manifiesto en el contenido de su pensamiento y que requiere, para su concreción, del reconocimiento del derecho natural a la libertad. La denuncia a la sociedad europea surge como crítica, en tanto esta se reconoce como único sujeto de la historia, como la única representante de lo que debe entenderse como *civilización*. Desde ese título de nobleza que la Península Ibérica ha creído poseer a lo largo de su historia, no ha conocido sino los dictámenes oscuros de una razón empeñada en considerarse legítima, a costas de la ilegitimidad de sus acciones.

En contraste, en el interior del juramento de Bolívar está presente un sujeto que vuelve sobre sí y se autoafirma como tal, y que al hacerlo exige el reconocimiento de su propia *humanidad* y de su legítimo derecho al desarrollo de su *identidad*, explicitada en una *praxis* axiológica diferente a la europea, pero con igual rango de legitimidad. Aquí reside el fundamento de la acción bolivariana, en esta conversión del sujeto sobre sí mismo; un sujeto que, además, es colectivo y que desde su consiguiente autovaloración provoca un quiebre con la lógica del discurso opresor. En la consideración de sí mismo como valioso y en la afirmación de la propia dignidad consiste lo que Roig ha llamado “*a priori* antropológico”¹.

En el mismo juramento, refiriéndose a Europa, Bolívar dice:

Este pueblo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad [...] para la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada” (Bolívar, 2004b).

1 El tema del *a priori* antropológico fue desarrollado ampliamente en Roig (1981).

Aquí aparece el contenido radical de su denuncia: el buen uso de la razón no puede, a su criterio, faltar a la consideración de lo medular, el respeto hacia aquello que nos hace hombres, la dignidad humana. Europa, culta, civilizada, aquella que cuenta con los máximos exponentes de las más variadas artes, no ha podido sin embargo tomar conciencia de su más extremo límite.

La Europa que a partir de la tiranía de uno, como expresión limitada de la libertad, hasta culminar en la Revolución Francesa, como expresión de la libertad de todos, hace de esta misma libertad instrumento de justificación de la conquista y dominio del resto de los hombres y pueblos del mundo. La América de Bolívar entra en la historia como parte de ese mundo puesto al servicio de la Europa; la cual se sabe libre pero es incapaz de reconocer otra libertad que no sea la suya (Zea, 1980: 177-178).

Desde lo discursivo, la importancia del juramento bolivariano consiste en que nos permite visualizar el momento de quiebre con las totalidades opresivas que bloqueaban la expresión de nuestras formas de *emergencia* y que traduce el encuentro de un *nosotros* con nuestra realidad.

La escala de valores sobre la que se organiza el discurso emergente subraya constantemente el disenso. Este discurso se plantea como una alteridad que reclama distintas condiciones de vida. No acepta la lógica imperante, por lo cual se presenta como un discurso en función utópica y como una praxis de resistencia frente a las injusticias del modelo (Maure, 2000: 127).

En aquella inversión del discurso opresor puede verse la exigencia de reconocimiento, por parte de los otros y de sí mismo, de un tipo de hombre que se ha colocado como el eje de su propia realidad. Como ya hemos dicho, el sujeto que enuncia ese discurso vuelve sobre sí; se *autoafirma* como sujeto, y al hacerlo se valora y exige el reconocimiento de su *propia humanidad* y de su *identidad*.

La conciencia de su ser, la pretendida afirmación del sujeto americano que había comenzado su tarea en la emancipación política, se encuentra ante el conflicto de dar cuentas de su propia identidad. Por tanto, halla en su intemperie la complejidad que significa su peculiar modo de ser. De ahí que podamos afirmar que al instante de la emancipación surge el problema de la identidad del sujeto americano. Los proyectos de *integración* buscaron en parte dar respuesta a ese interrogante, al tiempo que significaban el último peldaño que coronaría a nuestros pueblos, que los haría más fuertes, capaces de enfrentar las tiranías y las futuras invasiones con las que amenazaban los países dominadores.

En este sentido, en la ya mencionada Carta de Jamaica, Bolívar afirmaba que esa *unión* “no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos” (Bolívar, 1947b: 174).

Los ideales unionistas de Bolívar, compartidos por la mayoría de su generación, surgieron de sus contactos en Londres con Francisco de Miranda, quien probablemente fue el primer criollo que concibió todo un ambicioso proyecto para la liberación e *integración* de las colonias españolas, por supuesto guiado por los ideales de la Revolución Francesa de 1789. Pero, sin dudas, fue Bolívar quien más lejos llegó en los planes unionistas de la América Meridional. La primera realización práctica y piedra angular de sus ideas y aspiraciones confederativas fue la fundación, en 1819, de la República de Colombia, que unió a las antiguas colonias españolas de Venezuela y Nueva Granada. Luego de 1821, los territorios de Panamá y Quito solicitaron su inclusión en la Colombia bolivariana. A este proyecto siguieron otros, como el de la Confederación de los Andes.

Sus esfuerzos en dirección a esa unidad tendrían como primer paso las misiones diplomáticas especiales para concertar tratados de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las naciones recién emancipadas de España. Como resultado, la República de Colombia firmó acuerdos con Perú (1822), Chile (1822), Argentina (1823), México (1823) y América Central (1825). En líneas generales, estos pactos estipulaban la ayuda mutua y acciones conjuntas para rechazar la amenaza a la independencia por parte de España o de cualquier otra potencia extranjera, e incluían cláusulas referidas a un futuro congreso hispanoamericano.

El clímax de dicho proceso lo constituyó el Congreso Anfictiónico de Panamá, reunido del 22 de junio al 15 de julio de 1826, al que asistieron delegaciones de Perú, Centroamérica, México y Colombia, así como observadores de Gran Bretaña y Holanda. Luego sus sesiones debieron continuar en Tacubaya (México), donde nunca existió el quórum necesario para sus deliberaciones. No obstante, la estrategia de Bolívar para el mencionado congreso quedó delineada en la carta que, desde Arequipa, le envió a Santander el 30 de mayo de 1825. En esta manifestó su disconformidad con la invitación a EE.UU. para participar en la reunión de las repúblicas de la América Meridional (Bolívar, 1947a: 1108).

Aunque en el Congreso de Panamá se rechazó la propuesta bolivariana de formar un ejército continental hispanoamericano –respuesta natural a los proyectos agresivos de la Santa Alianza favorecidos con la restauración del absolutismo en España–, al final se aceptó una tácita coordinación como parte de los cuatro tratados signados por los representantes de los gobiernos participantes. El

más importante fue el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las naciones de un origen común, que habían combatido simultáneamente por asegurarse los bienes de libertad e independencia. Así, en uno de sus artículos, se especificaba que el objeto de ese pacto era sostener en común –defensiva y ofensivamente en caso de ser necesario– la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera. Sin embargo, el tratado no fue ratificado por los gobiernos hispanoamericanos representados en Panamá, con excepción del de Colombia.

Vale la pena recordar que el Congreso de Panamá también se frustró por la abierta oposición de Inglaterra y EE.UU. al plan de Bolívar para liberar a Cuba y Puerto Rico y luego lograr su integración en la gran confederación hispanoamericana. La independencia de las dos islas antillanas era la clave del proyecto bolivariano de agrupación continental, pues se realizaría con el concurso de varios países, creando sólidos fundamentos para la unidad de acción de los pueblos de la América antes española.

Para comprender el sentido de todas estas acciones, y por tanto del proyecto unionista bolivariano, es fundamental detenerse en la función utópica de su universo discursivo. Siguiendo a Arturo Andrés Roig, recordaremos que la función utópica de un discurso hace referencia al carácter ideológico del lenguaje y expresa una determinada concepción del mundo y de la vida, proyectada por un sujeto, situado en un contexto social e histórico concreto y que, por consiguiente, no debe ser concebido como anterior al discurso mismo sino configurado parcialmente en y por él.

Según Arturo Andrés Roig, esa función utópica se articula bajo tres modalidades²: como función *crítico-reguladora*, como función *liberadora del determinismo legal* y como función *anticipadora del futuro*. En la primera, *lo utópico como plenitud imposible* opera como lugar teórico desde el cual se puede analizar críticamente lo dado y en relación al cual se puede realizar también críticamente lo posible. En ese sentido, el proyecto bolivariano parte desde una crítica dirigida no sólo al sistema imperial que ya se ha roto, sino además a la situación en que se encuentran los pueblos hispanoamericanos luego de la gesta independentista. Las luchas sociales que buscaban imponer sus intereses no permitían fortalecer los vínculos entre las naciones, que eran necesarios para evitar nuevos intentos de conquistas y reactivar el trabajo, así como la actividad mercantil

2 El tema de la “función utópica” de un discurso y sus modalidades ha sido tratado por Estela Fernández (1995) y Yamandú Acosta (2005).

con el exterior. Al respecto, en su referida Carta de Jamaica, Bolívar le indica al “caballero de esa isla”:

Yo le diré a Ud. lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre: es *la unión*, ciertamente; mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. La América está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de todas las naciones; aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir (Bolívar, 1947b: 174; énfasis en el original).

En su discurso, la unión actúa como idea reguladora, y por tanto se constituía en la meta de su proyecto por dos razones. La primera, porque posibilitaba la consolidación de la libertad de nuestros estados y podía construirse una identidad común. Y la segunda, porque representaba para sus pueblos la única garantía de progreso. Alcanzar los bienes propios a los países ahora llamados *desarrollados* implicaba, en última instancia, abandonar el viejo sistema político existente para crear otro.

Además, *lo utópico como plenitud de lo imposible* está presente en ese proyecto, en tanto implicaba asumir el esfuerzo continental de formar una Patria Grande que lograra armonizar las diversidades presentes en los distintos estados. Por su parte, la función *crítico-reguladora de lo utópico* está presente en sus escritos en el anhelo de una América comparable a las grandes naciones. Una América que debía ser construida, y que para ello precisaba del mayor bien al que podían aspirar sus naciones: la “integración” de sus pueblos.

En cuanto a la segunda función (la *liberadora del determinismo legal*) y la tercera (*anticipadora de futuro*), diremos que, frente a los dispositivos ideológicos de naturalización o deshistorización de lo real, la primera reintroduce la historicidad en lo real habilitando un sentido de lo posible que va más allá de lo dado. Es decir, de otro *futuro* que no significa la prolongación del presente y que, por tanto, permite el encuentro con la función anticipadora presente en toda utopía. Bolívar lo expresa de la siguiente manera.

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene su origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse [...]

¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo (Bolívar, 1947b: 173).

El análisis de la función utópica en sus tres determinantes implica, además, tener presente el referente utópico en relación al cual la misma se cumple. Este referente queda expresado en la proyección de una Patria Grande: idea reguladora que requiere de un esfuerzo continental por alcanzar la formación de un continente sólido –tanto económica y cultural como políticamente– mediante la libertad de sus pueblos.

Como se sabe, el proyecto bolivariano no llegó a su realización debido a que las luchas sociales internas a nuestros estados impidieron la instauración de un orden que fuese capaz de imponer los intereses comunes de nuestros países por sobre los particulares de cada uno de ellos. Además, las luchas de las clases sociales que el mismo Bolívar había levantado contra la dominación española eran expresión de una realidad americana totalmente opuesta a los objetivos de El Libertador. En tal sentido, el límite de su acción lo constituye el lugar desde donde instala su discurso: su pensamiento ilustrado le impidió tener una visión totalizadora de la realidad americana. Esa carencia está entre las causas de que su proyecto quedara truncado, al no poder comprender la expresión de otras voces de su tiempo, diferentes pero pertenecientes al mismo universo discursivo desde el que instaura el suyo. El último golpe a su sueño unionista fue el asesinato de Antonio José de Sucre (1830). Entonces, vencido por el peso mismo de una realidad que lo ha trascendido, Bolívar afirma:

De mis veinte años de mando en esta América sólo he sacado los siguientes resultados: 1° la América es ingobernable para nosotros, 2° el que sirve una revolución ara en el mar, 3° la única cosa que puede hacerse en América es emigrar, 4° este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas, 5° devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos, 6° si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último período de la América (Bolívar, 2004a).

Los esfuerzos unionistas de Bolívar y de otras figuras no fueron suficientes y el antiguo Imperio Español se dividió en diferentes repúblicas

desvinculadas entre sí, facilitando con ello un proceso de recolonización que no tardó en convertirlas en simples apéndices de los centros del capitalismo mundial. No obstante, el sentido de la obra de Bolívar trascendió su propio tiempo, haciéndose sentir en nuevas formas de legitimación de nuestro *propio modo de ser*. Por consiguiente, la utopía unionista continuó su marcha durante los decenios posteriores a la desaparición de Bolívar, con todos sus matices, pero con la misma fuerza en cada *re-comienzo* de nuestro pensamiento y en cada expresión de nuestra realidad vinculada a la idea de *integración*.

En esa idea, lo fundamental de la *praxis* bolivariana lo constituye la posibilidad de ver en ella una integración dialéctica de la unidad moral con la voluntad de unidad política sobre la que se juega el modo de ser plenamente histórico de un hombre emergente, que pertenece a una clase social y a un contexto histórico determinados. Así, las ideas que descubrimos en los textos de Bolívar nos permiten mostrar críticamente el paso de una América como *utopía para otros* hacia una América como *utopía para sí*. Esta será la constante histórica de búsqueda en nuestros pueblos en cada proyecto político actual o futuro.

Todo lo dicho nos permite afirmar que, desde lo discursivo, Bolívar determinó un quiebre con los universos ideológicos de la Europa conquistadora. A la vez, desde su *praxis*, marcó la génesis de los pueblos americanos como naciones libres. Desde lo axiológico, fue expresión de la conciencia y de la moral del hombre naciente. Desde lo utópico, dejó abierto el camino para las generaciones futuras: la realización de la unidad y la integración latinoamericanas.

PROSPECTIVAS DEL PRESENTE

Sólo aquellos que ven lo invisible pueden realizar lo imposible.
Al aumentar así la potencia imaginativa y la voluntad de superación, se dota al ser humano de mejores armas para afrontar lo concreto y responder a lo imprevisto (Lown en Ainsa, 1999).

Las palabras del Premio Nóbel Bernard Lown me parecen apropiadas para ilustrar la posición desde la que parte Luis Suárez Salazar para su análisis respecto a las nuevas propuestas vinculadas a la actualidad y futuro de los diferentes proyectos de integración multinacional latinoamericanos y caribeños. Ese autor piensa en un nuevo paradigma que entienda a esa integración “como un proceso multifacético [...] que, poco a poco, aproxime a todas las naciones [...] y a todos los pueblos de esa región a la realización de la utopía bolivariana y martiana” (Suárez Salazar, 2005).

Si bien nuestro contexto es distinto del que se dio en la época de la primera independencia, en la que la emancipación estaba pensada desde

lo político, otra vez nuestro presente parte desde una moral emergente: la situación de exclusión y de desigualdad que sufren las sociedades como consecuencia de la aplicación de políticas económicas altamente excluyentes. Esa moral es reclamada por un sujeto histórico concreto que, en este caso, está representado por las masas populares –incluidos los pueblos originarios– que realizan un análisis crítico del presente: nos referimos a los plurales movimientos contrahegemónicos al *statu quo*. Es decir, a aquellas *otras voces* que a lo largo del siglo XX han ido consolidando sus prácticas hacia un nuevo tipo de sociedad pluriclasista, socialmente inclusiva e igualitaria y que *prospectivamente* buscan producir los cambios necesarios para una integración de los países de la región que garantice su independencia no sólo política y económica sino también cultural y social. Con tal fin, redefinen las interrelaciones que se dan en cada uno de sus países entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.

Recordemos que el siglo XX trajo a nuestros países un desarrollo que, paradójicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, también significó el creciente expansionismo político-económico de EE.UU. en toda Nuestra América. En este sentido, es importante destacar que las relaciones que se fueron entretejiendo entre ese país y los países latinoamericanos consolidaron la dependencia y el empobrecimiento de nuestros estados. Este expansionismo tuvo su mayor expresión a partir de la crisis política y económica del llamado *campo socialista*.

En ese contexto, el mercado mundial comenzó a articularse bajo un proyecto neoliberal con clara hegemonía norteamericana y con un pensamiento único, que llegó incluso a considerarse como un indicio del fin de la historia (Gorostiaga, 2000). Ese proyecto neoliberal fue favorecido por una tercera revolución científico-técnica, en la que la informática-productiva contribuyó a la afirmación de una globalización hegemónica totalizante a nivel económico, político, ideológico y simbólico. De esa forma, los países latinoamericanos fueron perdiendo no sólo su autonomía económica sino además su capital cultural y social. Paradójicamente, ese fue el escenario de diferentes intentos de integración que, en algunos casos, comenzaron a actuar como fuerzas contrahegemónicas frente al poder macroeconómico de los países centrales y que fueron expresión de voces antes silenciadas.

Siguiendo el análisis de Osvaldo Martínez (2007), la fragmentación política de nuestros países –esa constante en nuestra historia– se ha constituido como el principal obstáculo para que la ansiada y necesaria integración pudiera ser efectiva. Así analiza ese autor los intentos integracionistas que se llevaron adelante durante el siglo XX y que no pudieron consolidarse. El primero fue *la integración cepalina* y el segundo, *la integración neoliberal*. Esta se consolidó como única fuerza económica en la década del noventa y, a través de las llamadas *leyes del mercado*, fue

transformándose en el centro del poder de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Por tanto, ha servido para enmascarar la creciente desintegración de nuestros pueblos, asegurando una integración de las transnacionales y la ruptura de los lazos intrarregionales. El avance de esa integración con las transnacionales, con la liberalización financiera y comercial, ha significado para los países de nuestra región una *integración hacia afuera* y una *desintegración hacia adentro*, que en última instancia ha resultado ser una integración con EE.UU. que ha favorecido los procesos de dependencia (Martínez, 2007).

Recordemos que la lógica de mercado del neoliberalismo recuperó la teoría de Adam Smith, quien describía a la sociedad burguesa por medio de un gran mito utópico: “el mito del mercado”.

El mercado es una estructura que exime al ser humano de toda responsabilidad por el resultado concreto de sus actos, porque automáticamente garantiza que el resultado será de manera directa o indirecta de provecho para todos. Sin embargo, este mito supone y oculta una lógica en extremo excluyente, pues todo aquel que no tenga la capacidad o los medios para imponerse, o todo aquel que no tenga un servicio que le permita vivir dentro del sistema, está condenado a su exclusión, por lo que se convierte en un mito “clasista” y “genocida”: la justificación del sacrificio de muchos en beneficio de todos, donde ese “todos” significa “algunos pocos” (Hinkelammert, 1995: 73).

Las consecuencias de esta lógica –cuyos criterios son la competitividad, la eficiencia fragmentaria y la maximización de las ganancias, basados en valores cuantitativos– han sido el fuerte crecimiento de los índices de exclusión de grandes masas del sistema y la creciente destrucción de las fuentes de reproducción. Deficiencias que tienen cada vez mayor repercusión en nuestras sociedades, en tanto aumentan los índices de desigualdad, exclusión y destrucción del medio ambiente.

Lo dicho nos permite afirmar que la lógica del mercado y su reproducción cultural han sido un factor determinante para la *estancación*³ de los países latinoamericanos (Hinkelammert, 1995: 84). Sin embargo, podemos considerar que el problema no fue el mercado en sí, sino la visión de que a partir de su lógica es posible la instauración de una sociedad perfecta, y que por lo tanto el mercado es la única institución legítima. No obstante, como demuestra la realidad, en su nombre se destruye tanto a los movimientos populares como al Estado.

3 Este término se utiliza para designar procesos de estancamiento del crecimiento económico unidos al incremento de la inflación, medida en una constante alza de los precios de los bienes y servicios.

Por consiguiente –como ha planteado Luis Suárez Salazar, siguiendo el pensamiento de Lenin–, en los procesos actuales de *la globalización* es posible identificar los cinco rasgos económicos de la fase más reciente del capitalismo, el imperialismo: la creciente concentración y centralización de la producción, los capitales y los conocimientos, así como el consiguiente surgimiento de diversos monopolios que actúan de forma cada vez más decisiva en la vida política, social y económica de la mayor parte de los países del mundo (Suárez Salazar, 2005).

Por otra parte, según ese autor, el nuevo mapa geopolítico mundial permite afirmar que en la percepción geopolítica y geoeconómica del *establishment* de la política exterior, de defensa y de seguridad de EE.UU., las naciones situadas al sur del Río Bravo y la península de Florida constituyen “el escudo y la espada” para la proyección del poder global de esa potencia imperialista. Muestra de ello son sus comportamientos históricos, así como las estrategias desplegadas desde diciembre de 1989 (fecha de invasión a Panamá e inicio del fin de la Guerra Fría) hasta la actualidad por las tres últimas administraciones demócratas y republicanas que han ocupado la Casa Blanca, con vistas a reformular, junto con las clases dominantes en diferentes países del hemisferio occidental, su sistema de dominación sobre América Latina y el Caribe, así como institucionalizar lo que Suárez Salazar ha denominado “un nuevo orden panamericano”. Tal “orden” es funcional a las interacciones de cooperación, competencia y conflicto entre EE.UU. y las demás potencias integrantes de la “pentarquía del poder mundial: EE.UU., la Unión Europea, Japón, Rusia y la República Popular China” (Suárez Salazar, 2007).

Frente a los continuos avances del dominio de EE.UU. y las principales potencias capitalistas sobre Nuestra América, en las últimas décadas del siglo XX los intentos de integración comenzaron a formar parte de los principales ejes de acción de las agendas políticas de los países de esa región. Esto reitera *la función utópica* de esta categoría en el pensamiento político latinoamericano.

Ante esa realidad, debemos responder la siguiente pregunta: “¿Somos dueños de nuestros actos o estamos sometidos al imperio del destino?” (Mojica, 2000). En este sentido, estamos obligados a tomar posición política frente a la construcción de nuestro futuro y comprender “la idea de una integración diferente a esa que en las últimas cuatro décadas se le ha llamado así: la integración pensada en los términos de Bolívar y Martí, rescatando la sustancia olvidada y silenciada, la integración de los pueblos y no de los capitales; en suma, la verdadera integración convocada tanto por la historia, por la cultura, como por la necesidad de sobrevivir y alcanzar el desarrollo” (Martínez, 2007). Frente a esa disyuntiva, tenemos la posibilidad de “ser dueños de nues-

tros actos”, lo que implica asumir nuestra responsabilidad frente al futuro que deseamos construir.

Las problemáticas similares que debieron enfrentar los países de la región y las cumbres mundiales organizadas por las Naciones Unidas en la década del noventa favorecieron el diálogo de los gobiernos para abordar los temas relacionados con la *globalización* o *mundialización*. También permitieron la participación de representantes de la sociedad civil de todo el mundo en temas vinculados al medio ambiente, población, derechos humanos, género y la problemática social del aumento de la pobreza, la deuda y el desempleo.

Las redes globales que entonces se fueron formando interactúan y se aglutinan en momentos cruciales, conformando efectivos núcleos de lucha contrahegemónica al sistema capitalista mundial. De esta forma se han ido logrando mayor representatividad, legitimidad social y oficial. También se ha ido fortaleciendo el consenso emergente de los actores sociales y la incorporación de sectores anteriormente excluidos en el proceso de globalización: el trabajo, el medio ambiente, el género, la cultura y las nuevas generaciones. Por consiguiente, siguiendo el análisis de Xabier Gorostiaga, podemos afirmar que la actitud de los pueblos y gobiernos de nuestros estados debería estar orientada a la construcción de las bases que permitan pasar “de la protesta sin propuesta”, que caracterizó la fase geopolítica y geoeconómica, a un movimiento de propuestas cuyo objetivo sea la concertación de un pacto, un nuevo “contrato social” con otros actores con vistas a lograr un proceso de mejoría creciente de la viabilidad, gobernabilidad y sostenibilidad de la sociedad y orientarla hacia un futuro con dignidad y derechos para todos (Gorostiaga, 2000).

No obstante, debemos admitir que este proceso de integración está en sus primeras fases y, por tanto, podría fracasar si las acciones políticas encaminadas a la modificación del modelo concentrador, centralizador y excluyente no son lo suficientemente sólidas y efectivas. A pesar de ello, son alentadores los procesos de transformaciones que los diferentes núcleos sociales están llevando adelante. El desarrollo de sus capacidades humanas y técnicas conforma un estratégico y amplio campo de acción para proyectos de equidad y pertenencia. Esto implica que *lo económico* comience a adquirir su carácter instrumental al servicio del bien común, donde la recuperación de lo público-social sea una de las tareas estratégicas de la sociedad civil, junto con el Estado y la gestión privada de los empresarios con responsabilidad social.

Al interior del entramado de reformas y transformaciones sociales sobresalen dos *modelos* de integración que, desde las bases hasta sus objetivos, son antagónicos: el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el proyecto de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de

Nuestra América (ALBA), anunciada en 2001 por el presidente venezolano Hugo Chávez, pero cuyos principios quedaron definidos en la Declaración Conjunta y el Acuerdo para la Aplicación del ALBA, firmados en La Habana en diciembre de 2004. Entre ellos figuran: la complementariedad económica; la defensa colectiva contra imposiciones estadounidenses y condiciones adversas con socios comerciales latinoamericanos; la formación de un bloque negociador para reducir o renegociar la deuda externa; y la creación de un bloque regional para negociar sobre una base de mayor igualdad con otros bloques regionales como la Unión Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

Tal como demuestran los hechos, es posible afirmar que los países que llevan la delantera en los procesos de integración son Cuba y Venezuela, que dieron los primeros pasos en la consolidación intraregional del ALBA y a los que se han sumado los gobiernos de Bolivia y Nicaragua. Desde la óptica de dichos gobiernos, la integración no puede reducirse al comercio, ni medir sus avances por el crecimiento del intercambio comercial. Por consiguiente, los acuerdos entre esos países reflejan la concepción del intercambio comercial como instrumento (no como un fin en sí mismo) al servicio de la integración. Esto sugiere que el proceso de integración intrarregional debe dirigir sus acciones a la cancelación de las *deudas sociales* acumuladas teniendo en cuenta que la solidaridad es una necesidad práctica para que la integración pueda funcionar, desarrollarse y defenderse, pues sólo ella puede hacer de las fronteras nacionales las costuras de nuestra unidad. Todos esos enfoques contradicen la teoría y la práctica de los esquemas integracionistas tradicionales.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el proceso de integración latinoamericana en sus múltiples vertientes no está libre de contradicciones. Tal como lo afirma Julio Godio, existe un “nuevo mapa continental” en el que es posible ubicar dos escenarios. En el primero coexisten en tensión la resistencia al ALCA –con epicentro en Argentina, Brasil y Venezuela– con la irresistible tendencia a la integración comercial y la apertura económica que se desarrolla desde la institucionalización del NAFTA y que ahora abarca a otros países de América Latina que han firmado tratados de libre comercio con EE.UU. (Godio, 2006).

El segundo escenario, localizado en América del Sur, se observa en las contradicciones que existen dentro de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN): la integración acordada en su declaración fundacional, con las dificultades para concretarla debido a las asimetrías y la existencia de intereses opuestos entre algunos estados nacionales. Entre ellos el conflicto entre el gobierno bolivariano venezolano y los intereses de dos países que formaban parte de la Comunidad Andina de Naciones

(CAN): Perú y Colombia; el conflicto en curso entre Argentina y Uruguay por la oposición del primer país a la instalación de dos empresas pape-leras en el segundo; y la tensión creada entre Bolivia y Brasil luego de la nacionalización, en abril de 2006, de las explotaciones de petróleo y gas por el gobierno nacionalista-indigenista encabezado por Evo Morales.

A esas situaciones demostrativas de las contradicciones existentes en la unidad proclamada se suma el hecho de que la voluntad política de la mayor parte de los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, así como los intereses de sus clases dominantes, dificultan el desarrollo de los tratados integracionistas, lo que a la vez explica los déficits institucionales, funcionales, económicos, sociales, ecológicos, democráticos y en sus correspondientes inserciones en la economía-mundo, que de manera pronunciada en la actualidad exhiben todos los proyectos de integración vigentes en diversas regiones de América Latina y el Caribe: el SICA, la CARICOM, la CAN y el MERCOSUR (Suárez Salazar, 2005).

Esto permite afirmar que, a pesar de los avances existentes en la realización de la utopía integracionista, los países de la América nuestra están aún muy lejos de concretarla. Como afirma ese autor, las “fuerzas centrífugas” generadas por la apertura unilateral de América Latina y el Caribe hacia el exterior, bajo los imperativos de “la globalización neoliberal”, aún prevalecen sobre las “fuerzas centrípetas” que deberían impulsar el desarrollo de cualquier proceso de integración multinacional. Esto se debe a que, en los últimos lustros, los proyectos integracionistas que se formularon o reformularon (entre ellos los arriba mencionados) han sacrificado el *desarrollo desde y hacia adentro*; en tanto, en menor o mayor medida, las políticas económicas, industriales, sociales y culturales aplicadas por los distintos gobiernos del continente han estado condicionadas a los intereses de las clases dominantes y las principales potencias imperialistas.

Todos esos elementos sirven para comprender por qué, en opinión de Suárez Salazar, “el nuevo paradigma” de integración multinacional que demanda Nuestra América debe tener como base la crítica teórico-práctica del modelo de acumulación dirigido a institucionalizar el ALCA; la renegociación de la deuda externa en condiciones que aseguren la cancelación de la deuda social acumulada en el continente; el despliegue de proyectos *de desarrollo hacia y para adentro* que garanticen la protección y la satisfacción de todos los derechos humanos; la potenciación y la defensa de los recursos humanos, naturales y económicos del continente; y la construcción de democracias participativas y socialmente representativas capaces de superar las limitaciones características de las democracias restringidas instauradas en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (Suárez Salazar, 2005).

CONCLUSIONES

A partir del análisis precedente, podemos reflexionar sobre aquellos elementos del siglo XIX que se constituyeron como los pilares sobre los que deben ser contruidos los proyectos integracionistas actuales. En este sentido, si bien los tiempos y los contextos históricos son distintos, existen elementos medulares que nos permiten pensar acerca de las constantes en el pensamiento latinoamericano. En ambos períodos históricos, la necesidad unionista surge desde una moral emergente que busca producir aquellos cambios imprescindibles para la construcción de sociedades libres de la opresión política o económica. Esa necesidad se transforma en el referente hacia el cual se dirigen las relaciones intralatinoamericanas. En estas, la *integración* tiene una función utópica dentro del universo discursivo.

En cuanto a los aportes del siglo XIX, hemos considerado de enorme importancia el pensamiento de Simón Bolívar, en tanto se constituye como el primer referente de una matriz autónoma de pensamiento. Como bien ha indicado Alcira Argumedo:

En las cartas, en los análisis políticos, en las propuestas de articulación continental o en la Constitución para Bolivia se diseñan los ejes que resaltan la originalidad de estas regiones, los valores que han de constituirlos, las bases de una visión democrática, los lineamientos más sustantivos de una temática que aún hoy continúa vigente ante la autonomía inconclusa de América Latina (Argumedo, 2006: 29-30).

Su proyecto, tendiente a fortalecer la política y la economía del continente, era la única forma posible de frenar los intentos expansionistas y el monopolio económico de la época. El límite a sus aspiraciones lo constituye el haber interpretado la *integración* desde su pensamiento ilustrado, lo que determinó que las masas no se unieran a sus propuestas, provocando la división de los estados según sus intereses particulares.

Pero sin duda su aporte más significativo lo constituye el haber sido el principal representante del quiebre con el discurso opresor. Debemos reconocer que desde la *praxis* bolivariana es desde donde la categoría de integración se transforma en la utopía de América *para sí misma* y en este sentido adquiere una vigente *función utópica*. Mucho más porque su reclamo de libertad no implicaba solamente una libertad política, sino una libertad cultural que le permitiera la formación de la identidad de nuestros pueblos. A consecuencia, representaba el derecho del hombre latinoamericano a entrar en la historia, desde el reconocimiento de su propia humanidad.

Podemos discutir si las estrategias bolivarianas fueron o no las apropiadas para poner en marcha su proyecto. También podemos

discutir los límites de su pensamiento y la situación en que este se desarrolla. Esas discusiones sirven para comprender las causas del fracaso de su proyecto. Pero es indiscutible que su objetivo era el fortalecimiento y la transformación de los países de la región que *provenían de una misma madre*, buscando superar las particularidades de cada uno de los estados y la creación de una Patria Grande. Esto constituye la piedra angular de su pensamiento, lo que convierte a Bolívar en el representante de una matriz de pensamiento autónomo nuestroamericano, tal como hemos indicado a lo largo de este ensayo.

El siglo XXI encuentra un escenario de cambios y transformaciones producto de la transnacionalización económica y política de los estados a nivel mundial. Sin embargo, en ese ambiente surge la necesidad de dar respuesta a las demandas sociales de los pueblos latinoamericanos y, nuevamente, la categoría *integración* se hace presente, cumpliendo así su *función utópica*. En el trayecto de su historia, la mayor parte de los países de la región han adquirido, poco a poco, la conciencia de que la respuesta al enigma de una América Libre está en su unión. Sólo desde ella es posible hacer frente a los monopolios político-económicos que han impedido el desarrollo de sus pueblos.

Los procesos de globalización que han significado la victoria de un localismo determinado aumentan el grado de dificultad de una América pensada en sentido bolivariano o martiniano. Nuestro tiempo está lejos de la realización de ese proyecto, tal como sucedió en el momento de la *balcanización*. En este sentido, las problemáticas presentes en las relaciones intrarregionales y las prácticas políticas al interior de cada país actúan de barrera para la necesaria superación de las particularidades en aras de la construcción de un continente integrado. Ha indicado Alcira Argumedo:

En esta nueva encrucijada de la historia, reaparecen bajo otros perfiles las antiguas opciones planteadas para América Latina en el período de la independencia: la Doctrina Monroe o las propuestas autonomistas de Simón Bolívar y José de San Martín. Son esos los dos grandes proyectos incompatibles que habrán de disputar el destino de estas tierras en las próximas décadas (Argumedo, 2006: 331).

Otra vez la disyuntiva se hace presente: elegir un modelo político-económico y social que responda a los intereses de los grandes núcleos de poder, pero que indefectiblemente lleve al quiebre de nuestros pueblos, o superar las crisis intrarregionales para dar paso a la autonomía por siglos reclamada. Por tanto, y en coincidencia con la posición de Tania García Lorenzo, sostenemos que la integración como fenómeno es resultado de

los comportamientos que contribuyen a la consolidación de múltiples interrelaciones que van estableciendo un patrón socioeconómico y político donde los resultados estarán determinados por las simetrías o asimetrías de poder entre las partes que participan (García Lorenzo, 2005).

En este sentido, la Patria Grande con la que soñaron nuestros pensadores del siglo XIX sólo es posible desde una posición visionaria que permita imaginar el poder de una América Latina unida, para lo que resulta imprescindible que las políticas actuales logren vencer las barreras de sus particularismos y piensen en una integración *desde y para adentro* y, desde ahí, *hacia afuera*. O sea, desde un proyecto nacional de desarrollo que integre los intereses nacionales y de los distintos componentes de su sociedad, priorizando su autonomía e independencia económica y política frente a los factores externos. Sólo a partir de una estabilidad al interior de cada uno de nuestros estados será posible concretar la integración intrarregional.

Con esa integración en mente, podemos recordar la definición que da Fernando Ainsa (1990: 10) sobre la *utopía*: “Es la obligación de proyectarnos en nuestras acciones y de romper las barreras del orden establecido, con el deseo de mejorar cada día nuestra vida y lograr que otros puedan mejorar la suya”. Desde esta posición, se trata de interpretar la esperanza en el sentido dinámico de algo inminente que está por ocurrir y que depende de nosotros. Como nos dice Augusto Boal, no se trata de tener esperanzas en un futuro que todavía no existe, sino en el presente que es donde inventamos ese futuro. La esperanza como expectativa es consecuencia y parte de nuestras acciones. Revela confianza en aquello que hacemos. Revela la certeza de que es posible un mundo mejor (Boal, 2006).

Pensar en la realización de nuestra utopía, interpretar la esperanza en sentido dinámico, es lo que ha permitido que las luchas contrahegemónicas rompan con el orden imperial establecido, considerando que nuestra región se caracteriza por un tipo de resistencia al neoimperialismo que conjuga lo cultural con lo social y nacional, dando lugar a una visión diferente de organización social y, sobre esa base, a otro modelo de relaciones entre los estados. En última instancia, se trata de tomar posición y de comprender que todos somos actores sociales para el cambio. Que debemos asumir la responsabilidad y el compromiso de decidir hacia dónde queremos proyectar nuestro futuro, dejando atrás esa posición pasiva que caracterizó a un tipo de sociedad para la que *no existían alternativas*, para cambiarla por una sociedad participativa, consciente de que ella debe ser el auriga que dirija el decurso de su historia.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Yamandú 2005 “Ariel de Rodó, un comienzo de la filosofía latinoamericana y la identidad democrática de un sujeto en construcción. Un panfleto civil en la perspectiva de la función utópica del discurso” en Rodó, José E. *Ariel* (Buenos Aires: El Andariego).
- Ainsa, Fernando 1990 *Necesidad de la utopía* (Buenos Aires: Nordam Comunidad).
- Ainsa, Fernando 1999 “La reconstrucción de la utopía” en *El Correo de la UNESCO* (México DF).
- Argumedo, Alcira 2006 *Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular* (Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional).
- Boal, Augusto 2006 *Agenda MST* (San Pablo).
- Bolívar, Simón 1947a (1825) “Carta el señor general Francisco de Paula Santander, Arequipa, 30 de mayo de 1825” en Bolívar, Simón *Obras completas* (La Habana: LEX) Tomo I.
- Bolívar, Simón 1947b (1815) “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla” en Bolívar, Simón *Obras completas* (La Habana: LEX) Tomo I.
- Bolívar, Simón 2004a (1830) “Carta a Flores” en *Diccionario de Historia de Venezuela* (Caracas: Fundación Polar) Tomo II, en <www.catedrabolivariana.org> acceso 20 de junio de 2007.
- Bolívar, Simón 2004b (1805) “Juramento en Roma” en *Diccionario de Historia de Venezuela* (Caracas: Fundación Polar) Tomo II, en <www.catedrabolivariana.org> acceso 20 de junio de 2007.
- Fernández, Estela 1995 “La problemática de la utopía desde una perspectiva latinoamericana” en Roig, Arturo Andrés (comp.) *Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en Nuestra América* (San Juan: EFU).
- García Lorenzo, Tania 2005 “La economía y la integración de la Comunidad del Caribe: encuentros y desencuentros”, Tesis de Doctorado, Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI), Universidad de La Habana.
- Godio, Julio 2006 “Las tensiones en el MERCOSUR y el rediseño del mapa sudamericano”, en <www.other-news.info/noticias/index>.

- Gorostiaga, Xabier 2000 "Hacia una prospectiva participativa. Esquema metodológico" en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coords.) *América Latina 2020: escenarios, alternativas, estrategias* (Buenos Aires: FLACSO/Temas Grupo Editorial).
- Guerra Vilaboy, Sergio 2003 *El dilema de la independencia* (La Habana: Félix Varela).
- Hinkelammert, Franz 1995 *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión* (San José de Costa Rica: DEI).
- Martí, José 1965 (1890) "La fiesta de Bolívar en la sociedad literaria hispanoamericana" en Martí, José *Obras completas* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales) Tomo VIII.
- Martínez, Osvaldo 2007 "ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión" en Aguerrichu, Iraida (comp.) *ALBA. Integración latinoamericana* (La Habana: Editora Política).
- Maure, Mariano 2000 "Categorías para pensar el cambio social" en Arpini, Adriana (comp.) *Razón práctica y discurso social latinoamericano. El pensamiento fuerte de Alberdi, Betances, Hostos, Martí y Ugarte* (Buenos Aires: Biblos).
- Mojica, Francisco José 2000 "Determinismo y construcción del futuro" en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coords.) *América Latina 2020: escenarios, alternativas, estrategias* (Buenos Aires: FLACSO/Temas Grupo Editorial).
- Roig, Arturo Andrés 1981 *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Roig, Arturo Andrés 1989 *Bolivarismo y filosofía latinoamericana* (Quito: FLACSO).
- Roig, Arturo Andrés 1994 *El pensamiento latinoamericano y su aventura* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Suárez Salazar, Luis 2005 "La integración multinacional latinoamericana y caribeña: un enfoque desde la prospectiva crítica y participativa" en *Sociologías* (Porto Alegre) N° 14.
- Suárez Salazar, Luis 2007 "Crisis y recomposición del sistema de dominación 'global' de Estados Unidos: el 'nuevo orden panamericano'" en Gandásegui h., Marcos A. (coord.) *Crisis de hegemonía de Estados Unidos* (México DF: CLACSO/Siglo XXI).
- Zea, Leopoldo 1980 *Simón Bolívar, integración en la libertad* (Caracas: Monte Ávila).

Tiago Coelho Fernandes*

ENTRE BOLÍVAR E MONROE: O BRASIL NAS RELAÇÕES INTERAMERICANAS**

É AINDA UM DESAFIO compreender as barreiras entre os brasileiros e o extenso território tradicionalmente chamado *Nuestra América*. Talvez, justamente porque as revisões comparativas nos colocam diante de espelhos, acabamos sempre enveredando por algum labirinto. Parafraseando ainda Saramago, algumas vezes o Brasil segue como uma gigante nau de pedra, lançada ao Atlântico mais ou menos à deriva, seguindo rumos alheios aos de nossa vizinhança. Em nossa herança colonial, o oceano se torna um rio de fácil navegação, enquanto a bacia do Prata e, especialmente, os Andes e a Amazônia se apresentam como obstáculos naturais intransponíveis. Respostas que apelam às barreiras geográficas, culturais ou linguísticas, embora reais, perdem consistência quando apresentadas por si só, naturalizando as identidades nacionais e culturais construídas principalmente a partir dos movimentos de independência.

* Historiador, mestrando em Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador associado ao Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO), Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense.

** Agradeço a Andreza Prevot, companheira de todas as paixões e colaboradora na formação, assim como aos professores Luis Suárez Salazar, Tania García Lorenzo e Carlos Walter Porto-Gonçalves pelo incentivo, diálogo e compreensão constantes.

Atualmente, o tema da integração continental ganha força, sob diferentes matizes. Encontra-se em aberto tanto a possibilidade de uma integração a partir de baixo, que passe pela construção a nível continental de projetos alternativos ao atual *status quo*, como de uma integração via mercado, subordinada aos centros de comando do capital. A posição atual do Brasil amplia os efeitos dos rumos que o país venha a tomar. Neste trabalho, indagamos as causas históricas, políticas e econômico-estruturais mais profundas que determinaram que ser americano no Brasil tivesse um significado diferente de ser americano na Venezuela, no Peru ou no México. Busco desenvolver uma análise crítica da construção da alteridade (e dos pontos de identidade) entre Brasil e América. Começarei pelo contexto do século XIX, quando se estrutura a relação de dependência e se formam os discursos nacionais; em seguida acompanharemos a virada de séculos, quando ocorrem transições tanto no sistema político brasileiro como na configuração do capitalismo e finalizarei apontando alguns elementos para o debate sobre as atuais perspectivas do Brasil no continente.

UM IMPÉRIO ENTRE REPÚBLICAS (1822-1889)

A crise do sistema colonial, que recebeu o golpe final com a invasão da península Ibérica pelas tropas de Napoleão, teve consequências opostas em domínios espanhóis e portugueses. Enquanto a monarquia espanhola deixava um vácuo de poder que abria caminho para a rebelião da elite crioula colonial, a casa portuguesa dos Bragança se preservava, transferindo a corte e o centro do poder imperial para o Rio de Janeiro. O quadro que se delineia a partir das independências abre uma relação de aproximação e desconfiança recíproca. De um lado, o caso peculiar de um país que se estrutura sem alteração de regime, formando um império quando a Santa Aliança ainda ameaçava os impulsos emancipatórios na América como na Europa. Do outro, um mosaico de repúblicas “jacobinas”, lideradas por aqueles que defendiam princípios dos quais a elite brasileira se afastara no processo de independência.

Em 1826, Simon Bolívar toma a primeira iniciativa para o debate de um projeto de unidade continental. Com nome de inspiração helênica, o Congresso Anfictônico reuniu-se no Panamá com representantes das repúblicas então constituídas. O governo brasileiro recebeu através do representante colombiano em Londres, Manuel José Hurtado, uma nota datada de 07 de junho de 1825 que chamava a participar do encontro, explicando que este era consequência natural da “identidade de origem, interesses e sentimentos dos povos da América antes espanhola” e da necessidade de os novos Estados coordenarem ações comuns. Hurtado já registrava a singularidade do Brasil em relação às repúblicas desgarradas da Espanha e o aproximava dos Estados Unidos, argumentando entretanto que “entre os objetos de deliberação da Assembléia há

alguns de considerável importância que interessam não só aos governos instituídos nas províncias antes espanholas, mas às demais potências americanas e particularmente ao governo de Sua Majestade Imperial Brasileira” (*Cadernos do CHDD*, 2003a: 17-18).

Na documentação que se sucede ao convite, encontram-se instruções do governo imperial no sentido de acompanhar discretamente as movimentações estadunidenses, assim como uma curiosa sugestão do representante em Londres para que o Brasil exercesse sua primazia no congresso, presidindo-o ou deliberando que as assinaturas nos documentos finais seguissem sempre ordem alfabética, de modo a garantir que o nome do país estivesse sempre em primeiro plano (*Cadernos do CHDD*, 2003a: 27). Em decreto de 25 de janeiro de 1826 o imperador nomeou Theodoro José Biancardi ministro plenipotenciário ao congresso, mas este se deteve no caminho entre o Rio de Janeiro e Salvador, não se sabe se por deliberação superior ou por dificuldade de locomoção.

Para além das manifestações protocolares, esse episódio prenunciava uma relação de desconfiança recíproca entre império e repúblicas, expressa tanto nas pautas distintas de política externa, como pelo discurso da elite imperial. Neste, a unidade territorial e a estabilidade eram componentes fundamentais da identidade nacional em formação. Desta forma, articulou-se desde cedo o ideal do vasto território, cuja solidez das instituições aproximava do centro da civilização e era personificada na figura do monarca, em contraste com o mosaico de repúblicas instáveis, sujeitas aos caprichos dos caudilhos e demagogos de turno e aos riscos dos clamores das massas, cujo caso extremo era a revolução negra do Haiti, que como se sabe, tornou-se sinônimo de ameaça às classes proprietárias.

Em contrapartida, as lideranças republicanas expressavam seus receios com o Império, como notou o diplomata Miguel Maria Lisboa, cuja simpatia por uma maior aproximação da América do Sul foi registrada posteriormente no relato em que buscava contribuir para diminuir a “ignorância sobre o estado de civilização” das repúblicas vizinhas (Lisboa, 1866: 1). Em 1838, no Chile, relatava que apesar de notar uma simpatia geral com o Brasil, havia receio em incluí-lo em um projeto de liga americana, em geral referida como de repúblicas hispano-americanas e chamava atenção para uma conversa com o ministro chileno em que este argumentava “que os Estados Unidos deviam entrar na liga, porque *suas instituições naturalmente os separavam da Europa*. Esforcei-me então por fazer ver que nada tinha de comum a forma de Governo com o objeto em questão; e que precisamente no Brasil o espírito de americanismo crescia a par do afínco à Monarquia; que pelo contrário me parecia que os Estados Unidos se uniam mais com as Potências Européias, e posto que se portassem com mais decência do

que a França e a Inglaterra, contudo também algumas vezes nos apoquentavam” (*Cadernos do CHDD*, 2003a: 73-74; ênfase no original).

O reverso do prematuro distanciamento institucional são algumas experiências que ajudam a refletir sobre possibilidades abortadas de aproximações. Celso Furtado se refere a duas correntes nos processos de independência: uma de corte popular, na qual podemos incluir desde as rebeliões indígenas, a revolução haitiana, as “republiquetas” andinas e as tropas montoneras no Prata até setores radicalizados da elite crioula que se expressam nas proclamações e decretos de Hidalgo e Morelos, Artigas, Moreno, Belgrano e Miranda; a outra identificada com o ideal de modernização liberal burguesa, integrada ao comércio internacional, esforçada em manter o compromisso com a aristocracia *mantuana*, cujo projeto se tornou vitorioso ainda na fase de consolidação dos Estados (Furtado, 1972: 19-25; Guerra Vilaboy, 2006: Capítulo 4)¹.

No Brasil, as tendências populares foram prematuramente sufocadas com a “interiorização da metrópole” (Dias, 1982). Ainda assim, em torno de movimentos como Conjuração dos Alfaiates (Bahia, 1798), Revolução de Independência (Recife, 1817), Confederação do Equador (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 1824) e Revolução Praieira (Recife, 1848) circularam personagens como Cipriano Barata, Abreu e Lima, Frei Caneca, Domingos José Martins e Antônio Gonçalves da Cruz “Cabugá”, que expressavam uma corrente liberal com tonalidades radicais: republicana, constitucionalista, antilusitana e conectada com outros revolucionários americanos. Martins chegou a se aproximar de Francisco de Miranda e Cabugá apresentou-se como diplomata do movimento de 1817, buscando sem sucesso o apoio de Monroe.

A Confederação do Equador, ocorrida quando Bolívar completava sua campanha libertadora e os governos de Washington e Rio de Janeiro trocavam o reconhecimento da doutrina Monroe e o da independência, se rebelou em reação ao fechamento da Assembléia Constituinte por D. Pedro I, anunciando em seu manifesto a necessidade de partilhar de um destino comum na América: “Eia, pois, brasileiros, tratemos de constituir-nos de um modo análogo às luzes do século em que vivemos; o sistema americano deve ser idêntico; desprezemos instituições oligárquicas, só cabidas na encanecida Europa” (Bonavides e Amaral, 2002: 787).

Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, revolucionário de 1817 e 1824, executado na repressão a esta última, ecoava em sua tribuna

¹ Celso Furtado considera Simon Bolívar uma expressão autêntica dessa corrente europeizante. A meu ver, o pensamento do Libertador contém os elementos contraditórios de um indivíduo que, sem romper completamente com as concepções de sua classe, se abre em alguns momentos às demandas de setores populares.

–O *Typhis pernambucano*– a onda emancipatória do continente, discutindo a constituição mexicana e celebrando os avanços das tropas libertadoras por Peru e Bolívia, saudando sua proximidade com as fronteiras brasileiras. Ainda como fruto das derrotas republicanas, o caminho encontrado por alguns de seus protagonistas foi a bolivariana Grã-Colômbia. Emiliano Mundurucu, alferes rebelde em 1817 e oficial do governo republicano de 1824, refugiou-se em Puerto Cabello, onde redigiu um manifesto oferecendo seus serviços castrenses, “conservando as mesmas idéias e os mesmos sentimentos”. O poeta José da Natividade Saldanha foi secretário do governo da Confederação do Equador e após se refugiar entre a América do Norte, Europa, Bogotá e Caracas, publicou nesta capital um panfleto em que defendia o divórcio, desatando uma polêmica com o cura Francisco Margallo (Chacon, 1983b: 15-41).

Mais longe chegou José Inácio de Abreu e Lima, que vira o pai ser fuzilado na repressão à revolução de 1817. Exilado, integrou-se à luta contra o domínio espanhol, chegou ao posto de general do Exército Libertador e foi incumbido pelo próprio Bolívar a escrever sua defesa. Não conseguiu fugir das inúmeras intrigas que rondavam a formação do novo país e retornou a sua terra natal, onde tomou parte na insurreição de 1848, ajudou a difundir os primeiros conceitos do socialismo e, respondendo a provocações de seus inimigos, aceitou de bom grado o epíteto de “General das Massas”². Pouco antes de morrer, em carta ao venezuelano general José Antônio Paez, lembra de sua adesão às lutas de independência: “Então eu não tinha pátria, e fiz de Colômbia a minha pátria” (Chacon, 1983a: 231).

De volta às relações diplomáticas, vimos que as iniciativas de encontros que já eram recebidas friamente quando havia a preocupação com o reconhecimento da independência, foram submetidas à agenda política do II Reinado. Ademais, malgrado o projeto bolivariano com o fracasso do congresso do Panamá, a morte de seu inspirador e a separação da Grã-Colômbia, a ação no âmbito dos Estados latino-americanos recuou dos planos unitários, que possibilitariam avançar no sentido de uma confederação. Os congressos a partir de então se resumiram a esforços pontuais de traçar estratégias defensivas diante de ameaças externas iminentes. Em 1847 reuniu-se em Lima novo Congresso Americano, alarmado pelas agressões dos Estados Unidos contra o México e pelos rumores do apoio espanhol aos planos do general equatoriano Juan José Flores de constituir uma nova monarquia no continente.

2 Fiel a Bolívar no processo de dissolução da Grã-Colômbia, Abreu e Lima tomou inimizade pelo general Francisco de Paula Santander e outros chefes político-militares criollos. Ao jornalista Antônio Leocádio Guzmán respondeu os ataques impressos com golpes de sabre.

Convidado, o imperador consultou o Conselho de Estado dois anos antes da realização do encontro, onde se considerou conveniente a participação brasileira, elaborando minuciosas instruções. Considerando a necessidade das ex-colônias se esforçarem por “conciliar suas pretensões opostas” e prevenir os conflitos internacionais, os conselheiros registram a necessária preeminência do Brasil. Os principais interesses defendidos pelo plenipotenciário brasileiro deveriam ser a defesa dos rios navegáveis ante o assédio das grandes potências, para a qual se julgava as repúblicas incapazes; o ajuste de questões de limites; o rechaço ao canal do Panamá, que reduziria drasticamente a circulação de navios com escala na costa brasileira; o acerto de acordos de extradição, de interesse especial para um país escravocrata cercado de territórios onde a abolição já ocorrera ou se avistava no horizonte. Recomendava-se ainda que a reunião fosse apenas preparatória, e não deliberativa, com a certeza de que os convocantes consideravam inimigos os governos regulares, especialmente os monárquicos:

Esses nossos conterrâneos vivem na mais dura opressão entre a guerra civil e o aventureiro que, à custa dos maiores crimes e atentados, consegue por alguns meses a posse da autoridade soberana para tyrannizar seus compatriotas e, entretanto, receiam até o contato com as monarquias representativas afigurando-se-lhes que soem elas esbulhar os povos de seus foros e liberdades (Rezek, 1978: 389-390).

Nos anos seguintes, se sucederam novas e maiores ameaças à integridade dos Estados americanos. O Tratado Guadalupe-Hidalgo, as agressões filibusteiras à América Central, a imposição pela França do imperador Maximiliano no México (1862), a ameaça espanhola ao Peru, o aumento das tensões na região do Prata reativaram os esforços de ação comum. O chileno Francisco Bilbao deixou um belo panfleto de defesa do projeto bolivariano. Escrevendo trinta anos depois do Congresso do Panamá, o autor lamenta que o continente se mantivesse na condição de “Estados Des-Unidos de la América del Sur”. Demonstrando o avanço de uma consciência antiimperialista, convoca a uma unificação do pensamento, da alma, avaliando que “é chegado o momento histórico da unidade da América do Sul; abre-se a segunda campanha, que à independência conquistada agregue a associação de nossos povos”. No entanto, em aparente referência ao Brasil, lembra que não se deve confundir unidade com centralização monárquica e avisa: “Se tal é a unidade, não a queremos” (Zea, 1995: 55).

A essa altura, os representantes brasileiros já consideravam utópicos e distantes dos interesses nacionais os congressos continentais, notando a

exclusão sistemática do Império, junto aos Estados Unidos. Antônio Pedro de Carvalho Borges, encarregado de negócios no Chile, relatava:

Houveram aqui desconfianças de que o Império não era estranho aos projetos de monarquizar a América [...] Hoje porém estão muito desvanecidas essas prevenções; ao mesmo tempo que não se conta mais com o Brasil para a propaganda da “União Americana”, pois esta só parece agora referir-se aos países Republicanos, entre eles os Estados Unidos, invocando-se a “Doutrina Monroe”; a mesma que era antes aplicada por meio de Walker e mais flibusteiros (*Cadernos do CHDD*, 2003b: 44-45).

O governo imperial se esforçava entretanto em manter relações amistosas com as repúblicas, evitando tensões desnecessárias. Instruindo o representante para o Peru, Chile e Equador em 1864, Francisco de Varnhagen³, o ministro brasileiro explicava que até então não havia postura oficial quanto ao reconhecimento do imperador Maximiliano, recomendando que se antecipasse esse movimento, pois o Brasil não lançara nenhum protesto ao ato “que demais foi precedido de todas as circunstâncias e fórmulas modernas que legitimam as nacionalidades com o voto universal, etcetera”. Buscava ainda legitimidade no procedimento idêntico seguido pelo governo de Washington (*Cadernos do CHDD*, 2003b: 168-169).

O que vimos até agora nos permite esboçar alguns elementos básicos da posição do império na América:

- Com o sufocamento prematuro das correntes populares que apontavam para a construção de uma identidade americana, se impôs o componente autoritário na formação do Estado brasileiro.
- A visão da classe dominante se direcionava para a Europa como centro político, cultural e econômico da “civilização moderna”, da qual a elite brasileira se considerava parte.
- A política americana dava o contraponto, sendo o diálogo (ou sua ausência) entre Brasil e América profundamente marcado pelo antagonismo dos regimes. A idéia de uma nação unificada, grandiosa, estável; obra que alguns consideram tanto ou mais de D. João VI do que de D. Pedro II, era tema central de historiadores e articuladores do incipiente discurso nacional como Varnhagen e Von Martius e se articula desde cedo com a alteridade em relação aos Estados vizinhos, desenhados como um

3 Francisco Adolfo de Varnhagen, visconde de Porto-Seguro (1816-1878), historiador e diplomata. Entre os países americanos, cumpriu missão no Paraguai, Nova Granada, Equador, Venezuela, Chile e Peru, posto que abandonou pelo apoio desse país ao Paraguai na guerra iniciada em 1864.

quebra-cabeça institucional anárquico, atrasado e débil diante das pressões externas⁴.

- O sentimento de superioridade justificava uma identidade maior com a potência do norte, fundamentando a idéia de duas Américas, com uma liderança natural do Brasil sobre o sul.
- O que bloqueava a perspectiva unitária era a semelhança entre estruturas dependentes dos centros de expansão imperialistas, agroexportadoras de *commodities* similares, incapazes de originar uma classe social que articulasse projetos de desenvolvimento autônomo ou acolhesse as demandas das maiorias populares. Tal dilema se colocou de forma mais explícita para o Brasil, mas permeou também as iniciativas defensivas, políticas e econômicas de inspiração bolivariana surgidas no século XIX. O próprio Bolívar notaria os entraves ao seu plano mais ambicioso⁵.
- O referido desinteresse brasileiro se expressava numa política que podemos considerar como a de um império não imperialista. Com exceção da região do Prata, a tendência da orientação imperial era de restringir seu envolvimento nos negócios continentais ao fundamental⁶. Mesmo nos casos de tentativas de imposições de monarquias, a reação não foi tão entusiástica quanto se poderia esperar.

A ADESAO AO MONROÍSMO (1889-1912)

No final do século XIX, o quadro das relações interamericanas começa a se redesenhar, com o recrudescimento da ação imperialista norte-americana no continente. Os Estados Unidos, dispostos a consolidarem sua hegemonia, deram nova roupagem à doutrina Monroe, sob o signo do pan-ameri-

4 O alemão Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) venceu, em 1843 o concurso do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre como escrever a história do Brasil. Como Varnhagen, associava o regime monárquico à grandeza do país e repudiava os princípios republicanos no continente. Ambos são considerados fundadores do ofício de historiador no Brasil.

5 Como se pode verificar em sua célebre Carta de Jamaica.

6 O interesse estratégico e as disputas pelo controle da bacia platina remontam à época colonial. D. João VI, hoje celebrado como estadista da estatura de um Napoleão, inaugura a política intervencionista com a invasão da Banda Oriental em 1811, onde se desenvolviam os movimentos de independência liderados por Artigas. As tropas luso-brasileiras se retiraram em 1828, quando se reconhece a independência do Uruguai, mas as disputas e as alianças com as diferentes facções de Uruguai, Argentina e Paraguai desbordaram ainda nos conflitos de 1825, 1851, 1854 e a nova invasão do Uruguai em 1864 que culminou com a guerra total entre a Tríplice Aliança e o Paraguai (1864-1870).

canismo. Seriam marcas dessa nova fase a I Conferência Pan-americana (1889), a guerra Hispano-americana (1898) e o corolário Roosevelt à doutrina Monroe (1904), com uma retórica baseada na ideologia da existência de valores, origem e destino comuns ao “hemisfério ocidental”, em alguns momentos invocando de forma difusa os precedentes de Bolívar.

Se os encontros continentais realizados até então não haviam gerado qualquer comprometimento formal do governo brasileiro, a receptividade ao monroísmo e ao pan-americanismo *made in USA* se expressara desde os tempos de D. Pedro I. Com o novo regime, buscou-se formular uma visão americana própria. Já o Manifesto Republicano de 1870 afirmava a necessidade de romper o isolamento e adaptar o regime brasileiro ao sistema americano: “Somos da América e queremos ser americanos. A nossa forma de governo é, em sua essência e em sua prática, antinômica e hostil ao direito e aos interesses dos Estados americanos” (Bueno, 1995: 24).

Com a Conferência Pan-americana ainda em andamento, foi proclamada a república no Brasil. O encontro teve lugar em Washington, prolongando-se por cerca de um ano a partir de outubro de 1889 (Bueno, 2004: 68). Seus resultados imediatos foram aquém dos projetados pelo governo de Washington, porém a presença massiva de representantes dos governos do continente, a continuidade dos encontros por um longo tempo com a hegemonia inquestionável dos Estados Unidos, a criação da União Internacional das Repúblicas Americanas, sucedida pela Organização dos Estados Americanos em 1948, indicam um considerável sucesso político em lançar as bases do pan-americanismo, sedimentando a via para sua expansão econômica⁷.

A alteração de regime político no Brasil determinou uma reorientação imediata da sua política externa. A delegação imperial enviada a Washington levava instruções que alertavam para os passos hegemônistas do anfitrião e recusavam propostas como o arbitramento obrigatório, além de expressar reservas a um evento de contornos americanos muito exclusivistas aos olhos monarquistas. Após o 15 de novembro, o delegado brasileiro foi substituído por Salvador de Mendonça e o ministro de relações exteriores por Quintino Bocaiúva, ambos signatários do Manifesto Republicano. A nova diretriz aceitava o princípio do arbitramento obrigatório e requeria a tradução das instruções originais para o “espírito americano” (Bueno, 1995: 27-29).

Porém, com uma mudança de regime que trazia poucas transformações estruturais, a americanização da política externa republicana

7 Da mesma forma que a doutrina Monroe, o pan-americanismo foi atualizado e complementado diversas vezes, recebeu outras denominações, mas seus princípios básicos jamais foram negados, abandonados ou superados, ecoando em iniciativas como o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN) e das Américas (ALCA), os Tratados de Livre Comércio (TLC), o Plano Puebla-Panamá.

manteve em boa medida as premissas do Império. Em alguns momentos, se buscava a legitimidade da nova política na continuidade em relação ao antigo regime. O historiador Moniz Bandeira menciona a divisão geopolítica entre América do Norte e do Sul que desde a fase imperial orienta a atuação da diplomacia brasileira e pauta a relação com os Estados Unidos. Elegendo a América do Sul como sua zona de influência, o Brasil manteve postura semelhante em situações distintas durante os dois períodos: protestou contra o bombardeio espanhol a Valparaíso em 1866, reagiu à tentativa estadunidense de interferir nas negociações de fronteira com o Peru (1908) e ao ultimato dado ao Chile pelo pagamento da dívida (1909); por outro lado, tratou com indiferença a monarquia de Maximiliano no México, apoiou as intervenções estadunidenses na Guerra de 1898, realizou gestões com Argentina e Chile pelo reconhecimento do Panamá (1903), além de silenciar-se diante da agressão estadunidense à Nicarágua em 1910 (Moniz Bandeira, 2005; Bueno, 1995: 150-152).

Portanto, é necessário tratar a posição brasileira para além da mera submissão ao imperialismo. Florestan Fernandes analisa o desenvolvimento capitalista na América Latina em quatro etapas: a colônia; o neo-colonialismo (primeira metade do século XIX), caracterizado pela dominação externa indireta; a fase imperialista, ou do imperialismo restrito, quando se estrutura o capitalismo dependente e o imperialismo total, cujo traço específico “consiste no fato de que ele organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social” (Fernandes, 1981: 25). Essas etapas se sucedem historicamente, mas não de forma linear, sendo que apenas alguns países passaram por todos os tipos de dominação externa, a saber, Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguai. A partir desses aportes podemos falar, ao menos no caso brasileiro, de uma dependência complexa, na qual o “projeto nacional” da burguesia converge com a dominação externa.

Gurgel do Amaral, secretário da Embaixada brasileira em Washington sintetizou essa visão, considerando que “O princípio fundamental da política internacional dos Estados Unidos constitui também um dos princípios vitais da política internacional do Brasil” (Burns, 2003: 187). Concepção que se tornaria mais famosa na versão posterior do “que é bom para os Estados Unidos é bom o Brasil” (Almeida, 2003). Essas hipóteses podem auxiliar a compreender não apenas essa adesão oficial brasileira ao pan-americanismo, como a aparição tardia, só na década de 1950, de um consistente movimento antiimperialista⁸.

8 Note-se que os países de maior radicalização antiimperialista são justamente os que Florestan Fernandes menciona como economias de enclave, que não passaram por todas as etapas da dominação externa: Bolívia, Cuba, Nicarágua, Peru. No caso argentino, vê-se um esforço de barganhar posições entre os diferentes centros imperialistas (britânico, alemão).

O alinhamento ao pan-americanismo concretizou-se logo nos primeiros momentos da república, quando se destacam dois episódios. Quatro anos depois da proclamação, a Revolta da Armada desafiou o governo central, contrapondo diferentes facções do novo regime, representadas nas disputas entre exército e marinha pela composição do frágil poder. O marechal Floriano Peixoto⁹, responsável por impor a ferro e fogo a nova ordem, aceitou auxílio estrangeiro e o apoio da frota estadunidense foi fundamental para dissuadir a ação dos revoltosos (Bueno, 1995: 155-184). O outro marco, de caráter mais simbólico, foi a postura brasileira diante da guerra de 1898. A condenação ao seqüestro da autonomia dos movimentos de independência foi unânime no continente. José Martí a traduziu em um projeto liberal radical, popular e antiimperialista, que fundou uma larga tradição percebendo, como antecipara Bilbao, que os destinos de “nuestra América mestiza” e da América ianque do norte se confrontavam, ou pelo menos divergiam.

Embora oficialmente o Brasil se mantivesse neutro, representantes do governo e da intelectualidade registraram sua simpatia pela intervenção do aliado do norte. Salvador de Mendonça, que assumira a legação em Washington declarou com apenas um mês de conflito que “meu coração e simpatia estarão com o vosso nobre povo e com o Porta-Estandarte da América Republicana que está estendendo os postos avançados da liberdade humana até dentro das últimas trincheiras do passado”¹⁰. Seu sucessor recordava alguns anos depois que “foi o Brasil o único país latino que teve real simpatia pelo êxito favorável aos Estados Unidos, como a única nação do mundo que lhes vendeu navios de guerra nas vésperas do conflito” (Bueno, 1995: 151-152).

Para o intelectual amazonense José Veríssimo, a solidariedade com a libertação das Antilhas incluía a necessidade de superar as tradições hispânicas. Apesar de informado sobre os eventos, reconhece seu equívoco quanto à receptividade nos demais países do que considerava uma ação justa:

Quem escreve estas linhas [...] com seu sincero amor de ver livre o pequeno povo que há vinte e cinco anos estava lutando pela sua independência uma luta atroz e desigual, cometeu o grave erro de supor que [...] as nações hispano-americanas veriam, ao menos com indiferença, senão com satisfação, os Estados Unidos tomarem a parte daquela heróica população (Prado, 2003).

9 Sucessor do Marechal Deodoro da Fonseca que, tendo liderado o movimento de deposição do imperador D. Pedro II, sem base política, renunciou poucos dias depois de ordenar o fechamento do congresso e assumir poderes ditatoriais.

10 O autor do discurso foi advertido por seu superior.

Esses elementos formam o pano de fundo para a aliança “não escrita” que se consolidou durante a longa gestão do barão do Rio Branco¹¹. Subscrevendo a doutrina Monroe e o pan-americanismo, traduziu-os conforme uma leitura própria da inserção do Brasil no contexto internacional, mais ameno em relação à Europa e com um caráter multilateral, no qual o Brasil desempenhasse um papel de destaque, mesmo aceitando a precedência dos Estados Unidos (Burns, 2003: 185-200). Diante do corolário Roosevelt, novamente a postura brasileira foi inversa à de seus vizinhos, aceitando positivamente seus termos, por entender que a mensagem se dirigia às pequenas e instáveis repúblicas da América Central e Caribe e que o Brasil estaria em situação análoga em relação a seus vizinhos.

A nova fase das relações interamericanas foi objeto de intensa polêmica. Em minoria estavam as vozes que denunciaram os riscos do alinhamento. Num momento ainda marcado pelo embate entre republicanos e monarquistas, um foco de crítica ao pan-americanismo eram os panfletários simpáticos ao antigo regime, geralmente em nome da defesa de vínculos com a Europa. Era o caso de Eduardo Prado (1893), que resistia à idéia de um destino comum com os Estados Unidos, denunciando o caráter instrumental da doutrina Monroe, considerando ainda uma quimera qualquer espécie de americanismo. Célebre pelo espírito irrequieto e alheio ao movimento monarquista, o historiador e diplomata Manoel de Oliveira Lima publicou um volume no qual criticava com sua ironia característica as bases do pan-americanismo, em plena gestão Rio Branco e às vésperas da Terceira Conferência Pan-americana, no Rio de Janeiro. O intelectual, que estivera pouco antes em missão diplomática em Caracas¹², avalia com ceticismo a doutrina Monroe “que, com suas rugas de quase um século, continua a exercer a maior sedução” e lembra que seu caráter unilateral a tornara inútil aos demais países do continente desde a sua proclamação. No enunciado de Roosevelt notou uma expressão prática da tutela jurídica e o darwinismo aplicado às relações internacionais, embora concordasse que este não ameaçava o Brasil, que poderia já “aspirar a dividir com os Estados Unidos a ‘hegemonia hemisférica’” (Lima, 1980: 37 e 42).

11 José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912) era filho de um importante político do Império e esteve à frente do ministério de 1902 até o fim da vida, por quatro governos sucessivos.

12 Em dezembro de 1902, à revelia da Doutrina Monroe, navios da Inglaterra, Alemanha e Itália bombardearam portos venezuelanos em represália à moratória da dívida externa. Em resposta, o chanceler argentino fixa a “Doutrina Drago”, ignorada por Brasil e Estados Unidos. Oliveira Lima foi chefe da missão brasileira em Caracas entre 1904 e 1906.

Vale ainda destacar o pensamento de Manoel Bomfim, precursor da sociologia brasileira por muito tempo olvidado, com uma inovadora interpretação do Brasil inserido no contexto latino-americano, que se desenvolve em uma perspectiva anti-elitista e contrária às explicações baseadas no racismo cientificista então em voga. O intelectual sergipano analisa as dificuldades do continente a partir de suas raízes históricas, apontando para o parasitismo colonial herdado pelas sociedades pós-independência. Partindo da defesa da educação como base de um projeto nacional, avança na crítica de soluções que venham de fora ou de cima e se inspira na revolução mexicana para defender o caminho popular para as transformações (Bomfim, 1997; 2005).

As tribunas pró-monroístas eram muito mais amplas. Criada em 1909, a *Revista Americana* foi um espaço pioneiro no Brasil de intercâmbio entre intelectuais do continente. De caráter oficioso¹³, ajudava a fomentar o clima de adesão à doutrina estadunidense com a participação de colaboradores de diversos países que se dedicaram a analisar o monroísmo, seja do ponto de vista histórico, seja para intervir no debate político. O historiador Heitor Lyra desenvolve sua reflexão em ambos os sentidos e chama atenção por sua tese de que D. João VI, antecipando-se a Monroe, inaugurara uma política americanista, consolidada com os primeiros atos após a independência. Na sua leitura, a situação no período das independências se resumia à “demagogia com todas as suas conseqüências” da qual apenas Estados Unidos e o Brasil se livravam. Logo, a superioridade da organização política brasileira se deveria a que “ao redor do trono, pelas ante-salas, não estavam estadistas de faca e pistola, cortesãos ávidos de ouro, mas homens esclarecidos e sensatos, homens ilustrados, viajados e habituados à civilização européia” (Lyra, 2001: 190-192).

Intelectuais como Euclides da Cunha reafirmaram as idéias do distanciamento em relação aos vizinhos e a admiração pelos Estados Unidos¹⁴, mas o grande advogado do monroísmo no Brasil foi Joaquim Nabuco. Liberal moderado, célebre abolicionista, assumiu com entusiasmo, na última fase de sua vida, a causa da aproximação com os Estados Unidos, no que polarizava com Oliveira Lima. O ápice de seu projeto foi alcançado entre 1905 e 1906, quando recebeu a tarefa de elevar o status da legação em Washington a embaixada, a primeira de um país sul-americano e se dedicou aos preparativos da III Conferência Pan-americana,

13 A revista era coordenada por Arthur Guimarães de Araújo Jorge, auxiliar de gabinete do Barão do Rio Branco e tinha entre seus colaboradores grande número de diplomatas e intelectuais próximos ao Itamaraty. Foi publicada até 1919.

14 Positivista e republicano desiludido com o regime, publicou o clássico *Os Sertões* (1902), uma denúncia veemente do massacre pelo governo central do povoado rebelde de Canudos, na Bahia. Ver “Solidariedade sul-americana” e “O ideal americano” in Cunha (1975).

no Palácio Monroe do Rio de Janeiro, que coroava as relações Brasil-Estados Unidos, com a vinda do Secretário de Estado Elihu Root.

Divididos pela postura diante dos Estados Unidos, assim como pelos antigos preconceitos mútuos, o Brasil republicano não se encontrou de imediato com a vizinhança. Os desafios da aproximação ressurgiriam, sob novas bases, na segunda metade do século XX.

ENTRE INTEGRAÇÃO E HEGEMONISMO (1958-2008)

Já pudemos ver que a política externa brasileira manteve ao longo da história fortes traços de continuidade. Vargas Garcia identifica um longo ciclo de pan-americanismo iniciado em 1889 que se prolonga até 1961, no qual predomina uma concepção “essencialmente monroísta” do pan-americanismo, caracterizada pela idéia de identidade natural com os Estados Unidos e por uma participação ativa na formação e desenvolvimento no sistema interamericano, culminando com o alinhamento nos marcos da Guerra Fria¹⁵. A década de sessenta marca uma ruptura, que perdurou mesmo apesar do realinhamento operado pelo governo do general Castello Branco¹⁶. No entanto, a aspiração a uma projeção autônoma e fora do continente não surgiram pela repentina tomada de consciência do novo papel do Brasil no mundo (Garcia, 2004).

UMA NOVA ETAPA

A partir da década anterior estavam dadas as condições para uma nova inserção do Brasil no cenário internacional. O processo de industrialização iniciado vinte anos antes gerara uma recomposição da estrutura de classes no país, enquanto no nível internacional se acirravam processos que colocavam o pan-americanismo em questão, como as revoluções boliviana e guatemalteca, os diversos regimes populares de corte nacionalista e os movimentos revolucionários que se alastraram por todo o continente, tendo seu ápice na revolução cubana. No plano teórico, o desenvolvimentismo da Comissão Econômica da ONU para a América Latina (CEPAL) contribuiu para colocar de uma perspectiva própria a temática do subdesenvolvimento e o debate sobre os caminhos para sua superação, tendo posteriormente na teoria da dependência uma tentativa de aprofundar esse debate, segundo

15 O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), que assentou as bases de uma definição de segurança continental, foi assinado em 1947 durante conferência no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Harry Truman.

16 Após o golpe de 1964, o governo militar anunciou a chamada “correção de rumos”, caracterizada pelo “alinhamento automático” com o Ocidente (Estados Unidos). Porém, nos anos seguintes, a política externa da ditadura retoma uma dimensão autônoma, chegando em alguns episódios a divergir dos EUA.

as formulações de alguns de seus representantes, numa perspectiva marxista e revolucionária.

Nesse contexto, o governo Juscelino Kubitschek lançou em 1958 a Operação Pan-Americana (OPA), que representa ao mesmo tempo uma iniciativa continental pioneira do Brasil e uma das últimas tentativas de reativação de um pan-americanismo, com um caráter multilateral, antecipando uma nova fase de inserção do país nos quadros das relações interamericanas¹⁷. Esse projeto foi aprofundado a partir de 1961, em consonância com a intensificação da luta de classes no país, que teve como desenlace o golpe militar-empresarial de 1964. O novo regime representou uma derrota para as forças populares e a imposição de uma nova conformação das classes dominantes brasileiras, na qual a burguesia industrial toma a direção do projeto nacional, atualizando sob novas bases seus compromissos com os setores agrários e com os centros de poder do imperialismo.

Não é objetivo deste trabalho traçar uma história detalhada da política externa brasileira no século XX, por isso aponto alguns elementos gerais que nos ajudam a compreender os termos, agentes e questões colocadas no contexto atual. Nesse sentido, creio que é fundamental retomar as contribuições da mencionada teoria da dependência. Ruy Mauro Marini, que atuou em organizações revolucionárias no Brasil e no Chile, estabelecendo-se por algum tempo na academia mexicana, avançou nas pesquisas sobre o estágio do capitalismo na América Latina, engajando-se em intensa polêmica com as interpretações desenvolvimentistas que preconizavam a necessidade de um fortalecimento das burguesias nacionais como agentes de modernização. Por coincidência ou não, esse debate estagnou-se em algum momento entre os anos 70 e 80 e, enquanto a obra de Marini, reconhecida em todo o continente, tem um tratamento marginal no Brasil, seus antigos opositores (ou os que aderiram às teses por ele combatidas) passaram a ocupar postos importantes na academia, governos, ministérios, e mesmo a presidência da República.

DEPENDÊNCIA E SUBIMPERIALISMO

Em um dos trabalhos que sintetiza suas análises, pouco após o golpe de 1964, Marini combate a idéia de que este tenha se dado exclusivamente em nome dos interesses imperialistas. Sua análise reflete dialeticamente sobre o desenvolvimento particular do capitalismo dependente e suas articulações com os centros de poder imperialistas:

17 A OPA teve uma fria receptividade dos governos estadunidense e americanos em geral, que desconfiavam da projeção brasileira. Suas discussões se encaminharam para a formação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Posteriormente, com a radicalização da revolução cubana, a Aliança para o Progresso empregou conceitos e propostas similares.

A história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial. Seu estudo é indispensável para quem deseja compreender a situação à que se enfrenta atualmente este sistema e as perspectivas que se abrem. Inversamente, só a compreensão segura da evolução e dos mecanismos que caracterizam a economia capitalista mundial proporciona o marco adequado para situar e analisar a problemática da América Latina. (Marini, 1974).

O fundamento da expansão do capitalismo nos países dependentes é a superexploração do trabalho, que garante a manutenção de níveis satisfatórios de mais-valia para uma burguesia que aceita desempenhar um papel secundário no jogo do capitalismo. As condições da industrialização dependente compõem uma nova divisão internacional do trabalho, que possibilita a ampliação e intensificação do capital a escala mundial, diversificando sua acumulação.

No entanto, seguem atuando as tendências à concentração e centralização, próprias da acumulação capitalista, ainda que agora em benefício de nações de composição orgânica intermediária. A isto corresponde, *desde o ponto de vista estritamente econômico*, o subimperialismo (Marini, 1974; ênfase no original).

Logo, o subimperialismo, se define a partir dessa reestruturação do capitalismo a nível mundial e de leis próprias da economia dependente, sendo caracterizado fundamentalmente por:

- crescimento da exportação de manufaturas;
- direcionamento da produção para a indústria suntuária;
- “a integração [vertical e hierarquizada] do capital nacional ao capital estrangeiro” (Marini, 1974);
- agudização da competição internacional por mercados;
- política expansionista que vai além da competição, com o “propósito de obter, *dentro da atual partilha do mundo*, zonas de influência” e na qual já se notava na década de 60 a pretensão de garantir o controle de matérias-primas hoje consideradas estratégicas, como o gás boliviano, o petróleo equatoriano e o potencial hidroelétrico paraguaio (Marini, 1974; ênfase no original);
- exportação de capitais impulsionada pelo Estado, além da associação com grupos financeiros estrangeiros que sustentavam a exploração de matérias-primas na América do Sul e na África;

- aceleração do processo de monopolização e desenvolvimento do capital financeiro.

Assim, o autor descarta o argumento de que a expansão externa brasileira fosse motivada pela necessidade de atender às demandas do capital estrangeiro investido no país e reforça sua tese de que na atual fase do imperialismo se observa o surgimento de pólos regionais que, sem romper com a condição de dependência, alcançam uma relativa ascendência sobre seus vizinhos. Avançando na sua análise, Marini conclui:

A concreção histórica do subimperialismo não é uma questão meramente econômica. A existência de condições propícias ao seu desenvolvimento não assegura por si só a conversão de um país em um centro subimperialista. No entanto, pode-se afirmar que o subimperialismo corresponde ao surgimento de pontos intermediários na composição orgânica do capital a nível mundial, à medida que este progride na integração dos sistemas de produção, bem como à chegada de uma economia dependente à fase do monopólio e do capital financeiro. Igualmente, pode-se identificar o Brasil como a mais pura expressão do subimperialismo em nossos dias (Marini, 1974).

Nesse sentido, deve-se reconhecer a dimensão prática desse processo, traduzida por Marini do ponto de vista do avanço do movimento revolucionário no continente, de maneira que o subimperialismo passa a desempenhar um papel determinante na luta de classes a nível continental. Durante o regime militar-empresarial, o Estado brasileiro direcionou-se não apenas ao trabalho de contra-insurgência interna, mas a nível continental, intervindo particularmente na Bolívia, Chile, Guiana, República Dominicana e Uruguai. A expansão econômica e a atuação política brasileira nesses países e nas colônias portuguesas na África possibilitam a reapropriação do conceito de subimperialismo como uma importante categoria heurística, sem negar sua radical dimensão política¹⁸. Este é um exercício fundamental para romper discursos mistificados de um Brasil potência, líder natural da integração continental, assim como para evitar o antiimperialismo simplista que se resume à dicotomia entre Estados Unidos e América Latina.

No início da década de 1990, o intelectual brasileiro observava como a questão da integração se colocava como uma nova alternativa às condições do processo de industrialização latino-americano. Assim, notava já

18 O Brasil, então sob a ditadura do general Ernesto Geisel foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975, liderada pela força político-militar marxista Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), enquanto os Estados Unidos mantiveram seu apoio oficial à UNITA até 1993.

na sua origem que “o MERCOSUL assume crescente importância no plano latino-americano, contrapondo-se à política de entendimento direto com os grandes centros, desenvolvida por Chile e México, e que levou esse último país a um processo que deve terminar com a assinatura de um acordo de livre comércio com Estado Unidos e Canadá” (Marini, 1993).

Detemos-nos nas análises de Ruy Mauro Marini por sintetizarem grande parte dos debates de sua época e adquirirem impressionante vigor se revistas e confrontadas com a realidade atual. A parte final deste trabalho é um esforço nesse sentido.

O DEBATE ATUAL

Superada a euforia fatalista do neoliberalismo dos anos 90 e com o avanço de processos de organização popular, o debate sobre os rumos do continente retoma vigor. Em artigos recentes, o argentino Claudio Katz situa bem a discussão, apontando os riscos representados pela alternativa neo-desenvolvimentista (Katz, 2006)¹⁹.

No que se refere ao tema central deste trabalho, cabe destacar que, se por um lado o auge neoliberal apontava em um sentido recolonizador, com propostas de fundamentos explicitamente neo-panamefricanistas e intervencionistas como a ALCA, o Plano Puebla-Panamá, o Plano Colômbia e a instalação de bases militares por todo o continente; por outro lado o programa neo-desenvolvimentista que começa a tomar força não rompe com a condição de dependência e superexploração, sendo compatível com a expansão do mercado, cooperação militar, projetos modernizadores que arrasam a natureza e os povos originários, manutenção e reforço da hierarquização internacional, confirmação da divisão internacional do trabalho, etcetera.

Partindo dessas reflexões, entendo que o atual modelo de acumulação capitalista no Brasil se caracteriza por um programa neo-desenvolvimentista, em boa medida tributário do padrão implementado pós-1964. A transição pós-ditadura manteve intactas as estruturas do processo que Florestan Fernandes batizou de “imperialismo total”, o que permite analisar a condição atual a partir das tendências consolidadas nas décadas de 1960 e 1970. Por sua vez, a chamada experiência neoliberal (e o próprio regime ditatorial) no Brasil teve características muito particulares, em que o processo de internacionalização do mercado não realizou o esvaziamento do parque industrial, o enfraquecimento da burguesia local, a privatização completa e tampouco anulou a capacidade de intervenção do Estado no

19 Na verdade, seu mérito está em retomar com propriedade a tradicional polêmica do pensamento social latino-americano. Francisco de Oliveira, p. ex., sugere uma volta às teorias da CEPAL, superadas há quarenta anos pelas formulações mais consistentes da teoria da dependência (Oliveira, 2004).

processo de acumulação de capital nos níveis vistos em outros países americanos²⁰. Com isso, a despeito do discurso progressista, das declarações de compromisso com uma “integração solidária”, verificamos atualmente uma projeção do Brasil sobre o continente, tomando a América do Sul como área prioritária dentro da tradicional formulação estratégica, com um sentido de expansão capitalista e um subimperialismo revigorado.

Alguns dados recentes nos ajudam no esforço de recuperar essa discussão. Se em 1972 chamava atenção que as exportações brasileiras tenham pulado de um total de US\$ 1,65 bilhões para US\$ 4 bilhões em apenas cinco anos, esse valor chegou a US\$ 118,5 bilhões em 2006 (Marini, 1977; MRE, 2007: 249). Destes, as manufaturas representavam 7% do total em 1964, saltando três anos depois para 17,8% e chegando a 26% em 1972. Atualmente, os bens industrializados representam quase a metade das exportações brasileiras, um nível consideravelmente superior ao de seus vizinhos (ver Quadro 1).

Quadro 1

Produto Interno Bruto (PIB), total de exportações (US\$ milhões)* e percentual por tipo de produto** dos países sul-americanos

	PIB	Exportações	Manufaturas (%)	Primários (%)	Serviços (%)
Argentina	219.652	41.313,5	35	50	15
Bolívia	10.355	2.145,5	14	73	13
Brasil	966.827	118.469,0	45	42	13
Chile	140.389	39.544,0	12	65	23
Colômbia	129.384	21.190,3	27	52	21
Equador	41.292	11.155,8	11	82	7
Guiana	831	640,4	-	-	-
Paraguai	8.633	1.687,8	9	55	36
Peru	89.316	17.269,1	14	66	20
Suriname	1.545	944,0	-	-	-
Uruguai	18.591	3.402,6	25	51	24
Venezuela	164.416	62.987,0	12	82	6

Fonte: MRE (2007: 249 e 254); CEPAL (2003).

* Dados de 2006 de MRE.

** Dados de CEPAL.

Ao mesmo tempo, os anos recentes viram um inédito processo de transnacionalização das empresas brasileiras, que se tornaram agentes de ex-

²⁰ Tampouco foi derrotado por insurreições populares, como na Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela.

portação de capital. Em 2006, os investimentos brasileiros no exterior pela primeira vez superaram o volume de capital estrangeiro que ingressou no país (BBC, 2006; *O Estado de São Paulo*, 2007). Com os dados de 2007, os valores nesses dois anos chegam a US\$ 36,5 bilhões, superando em 6 bilhões de dólares a exportação de capitais por empresas brasileiras na década anterior (*Folha de São Paulo*, 2008). A nova etapa do subimperialismo apresenta um elemento a ser considerado, que é a ação das multinacionais, entre as quais podemos enumerar: as privatizadas Embraer, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a mineradora Vale do Rio Doce (CVRD), atual Vale; os grupos privados Odebrecht, Votorantim e Gerdau; a cervejaria Ambev que após a fusão com a belga Interbrew se tornou uma das maiores do mundo no setor; complexos agroindustriais como Sadia e Perdigão; o Banco Itaú, que investiu US\$ 2,2 bilhões pelo controle das operações do BankBoston no Brasil (G1, 2006; *O Globo*, 2006). De todas, a maior é a Petrobrás cuja estrutura híbrida permite a apropriação privada dos lucros mesmo com a manutenção do controle estatal, atualmente está presente em vinte e três países na Europa, África, Ásia e América. Na Bolívia, chegou a representar 18% do PIB e 20% do investimento estrangeiro direto. Até os decretos de nacionalização, controlava a totalidade do refino de petróleo e ¼ da distribuição de seus derivados, tendo investido US\$ 1,5 bilhões em dez anos (*UOL Economia*, 2006). Esses fatores alavancam o reordenamento dos fluxos de capitais, como se percebe no Quadro 2, que indica a duplicação da participação dos países latinoamericanos nas exportações brasileiras em quinze anos, ultrapassando as vendas para Estados Unidos e União Européia, separadamente.

Quadro 2

Mercados de destino das exportações brasileiras (em %)

País ou Bloco	1990	1996	2002	2006
Países desenvolvidos	64,2	52,5	53,9	42,0
União Européia	32,5	26,9	25,0	21,4
EUA	24,2	19,2	25,4	17,8
Japão	7,5	6,4	3,5	2,8
América Latina (Aladi)	10,4	23,0	16,3	22,8
MERCOSUL	4,2	15,3	5,5	10,1
México	1,6	1,4	3,9	3,2
Restante da Aladi	4,6	6,3	7,0	9,5
China	1,2	2,3	4,2	6,1
Outros	24,2	22,2	25,5	29,1

Fonte: Secex/MDIC em BNDES (2007: 4).

Nesse quadro, complementando o Mercosul, cujo caráter estratégico já vimos assinalado por Marini, surge com menos alarde a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sulamericana (IIRSA), que traça o objetivo de “realizar ações conjuntas para impulsionar o processo de integração política, social e econômica sul americana, incluindo a modernização da infra-estrutura regional e ações específicas para estimular a integração e o desenvolvimento de sub-regiões isoladas”, concebendo a América do Sul como “um espaço econômico plenamente integrado, para o qual é preciso reduzir ao mínimo as barreiras internas ao comércio e os gargalos na infra-estrutura e nos sistemas de regulação e operação que sustentam as atividades produtivas em escala regional”. Atualmente está composto de 335 projetos de financiamento de infra-estrutura, com investimentos da ordem de US\$ 37,5 bilhões financiados via Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Corporação Andina de Fomento (CAF) e Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) distribuídos em dez Eixos de Integração e Desenvolvimento, em grande parte executados pelas empreiteiras brasileiras²¹. O projeto chama atenção por ser planejado e gerido pelos governos sul-americanos, financiado por capitais locais e sem intervenção direta dos Estados Unidos, desempenhando na América do Sul um papel complementar ao projetado para o Plano Puebla-Panamá no norte, de pavimentação da infra-estrutura para circulação de mercadorias.

Como projeção política desse subimperialismo não podemos deixar de observar que o avanço do discurso integracionista oficial tem andado *pari passu* com o aumento do intervencionismo do Estado brasileiro sobre questões internas de seus vizinhos, como se pode verificar com as movimentações relativas a Equador, Venezuela, Paraguai e Bolívia, onde as intervenções em favor da “estabilidade” no vizinho convulsionado por insurreições populares se sucederam durante o governo Lula, especialmente a partir da crise de 2003²². As relações se tornaram mais complexas após maio de 2006, com a renegociação dos contratos de exploração de hidrocarbonetos e o esforço de contenção

21 Lançada em 2000 na capital brasileira, a iniciativa tem no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social um de seus principais financiadores. Informações e citações retiradas de <www.iirsa.org> acesso em 13 de fevereiro de 2007.

22 O governo brasileiro desempenhou um papel decisivo ao resgatar o presidente deposto Lucio Gutierrez em 2005, enquanto a Petrobras está entre as grandes petroleiras a atuar na Amazônia equatoriana. Com a Venezuela, uma política aparentemente ambígua para uns e ingênua para outros se deslindou progressivamente dos aspectos políticos das propostas de integração bolivariana, buscando enquadrar as relações no plano fundamentalmente comercial. Em relação ao Paraguai, os “interesses nacionais” se estendem da Usina Hidrelétrica de Itaipu aos plantadores de soja e a presença na vida política do país vizinho já se expressou nos asilos concedidos ao ditador Alfredo Stroessner e ao general Lino Oviedo.

de outras medidas que possam prejudicar os “interesses brasileiros” no país, como na anunciada reforma agrária, em que buscando manter garantias aos plantadores de soja brasileiros, o governo criou condicionantes para os novos programas de cooperação agrícola. O chanceler Celso Amorim avisa que: “Os tratores (que o Brasil financiará) estão vinculados à maneira como se execute a reforma agrária em zonas onde há brasileiros”, o que considera “uma indução positiva e não um condicionamento negativo” (*La Razón*, 2007).

Finalmente, não se pode pensar o subimperialismo sem sua dimensão militar, um triste capítulo que tem sido escrito no Haiti (*Época*, 2007)²³. A ocupação iniciada quando a revolução haitiana completava duzentos anos foi ainda a primeira intervenção em país estrangeiro no auxílio do exército estadunidense desde o deslocamento em 1965 de tropas para a mesma ilha, na invasão da República Dominicana. Com o aval da ONU, não foi difícil predispor os países americanos a assumir as operações, liberando as tropas dos países centrais para atuarem nos focos mais conflitivos e estrategicamente prioritários e traduzindo para a realidade regional a agenda militar imperialista²⁴. A temática do terrorismo é substituída pelo combate às drogas e às organizações criminosas internacionais, sempre enfatizando a “defesa das instituições democráticas”.

UM ESBOÇO DE CONCLUSÃO: SEGUIR PARA ONDE APONTA A BÚSSULA?

Vimos nesse trabalho alguns elementos históricos que influenciaram na relação entre brasileiros e americanos em geral, sendo essa relação marcada por uma alteridade que por muito tempo foi parte da constituição da identidade nacional do país. Também pudemos analisar algumas particularidades de sua integração aos centros do imperialismo, que foram determinantes para consolidar o distanciamento em relação aos vizinhos. Por outro lado, apontamos algumas manifestações de um incipiente sentimento de solidariedade continental, numa tradição prematuramente silenciada, mas que reaparece em distintos momentos históricos e que merece ser recuperada para um pensamento continental a partir do Brasil. Seria impossível e nem poderia eu querer aqui dar conta de todas as questões levantadas em torno do tema proposto, de modo que espero ter instigado uma reflexão crítica

23 Destaco aqui apenas esse episódio, chamando atenção para as movimentações, no segundo semestre de 2007, no sentido de ampliação dos investimentos na indústria bélica.

24 Os países americanos que apoiaram a intervenção com contingentes policiais e militares foram: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, El Salvador, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai.

sobre alguns desses aspectos e ensaio aqui apenas alguns comentários que, mais do que conclusivos, pretendem abrir a possibilidade de futuras abordagens.

O desenvolvimento recente dos processos sociais em Nossa América, coloca portanto um dilema para além da dicotomia imperialismo ianque ou libertação nacional. À permanente ameaça assimilacionista da potência do norte, soma-se o a ação subimperialista do Brasil que, até o momento, teve um efeito complementar em relação a Washington²⁵. Uma volta aos parâmetros panamericanistas não está totalmente descartada, com a possibilidade de uma contraofensiva nos moldes dos anos sessenta aos oitenta. Porém, com o foco de confrontação a nível mundial voltado para o Oriente Médio e a Ásia e com o recuo recente de propostas assimiladoras como a ALCA e o Plano Colômbia, o modelo de intervenção imperialista parece buscar uma ação coordenada entre os países que negociam a tutela e o alinhamento automático em troca da garantia de fluxo de capitais e da assistência militar ou como moeda de barganha regional (Colômbia, Chile, El Salvador, Uruguai, Paraguai, México) e aqueles que trilham em maior ou menor medida o que chamamos aqui genericamente de neo-desenvolvimentismo (Brasil, Argentina e, a depender do desenrolar dos processos, Equador e Bolívia). A ocupação do Haiti e a IIRSA seriam exemplos desse modelo de intervenção²⁶. Nesse sentido, resulta inócuo e perigoso ou, na melhor das hipóteses, contraditório, um projeto que se pretenda de esquerda e reivindique o fortalecimento do Estado, a aliança com setores da burguesia nacional ou a formação dessa burguesia, o velho projeto desenvolvimentista colocado de forma abstrata e sob novas roupagens.

A posição que o Brasil ocupa hoje no quadro das relações interamericanas é inédita, tendo suas origens tanto no contexto mais imediato como no conjunto de transformações estruturais por que todo o continente passou ao longo do século XX. Essa posição torna urgente um debate sério sobre as possibilidades de integração colocadas no horizonte. Do ponto de vista das classes dominantes, o debate começa a ser refeito em função da agudização da luta de classes a nível continental e do surgimento, ainda tímido, de um debate mais consistente sobre

25 Eis um ponto que os críticos da política “antiamericana” do governo Lula não conseguem ou não querem explicar. Dentre os recorrentes ataques da mídia brasileira à política externa “ideologizada” do atual governo, deu-se bastante repercussão às declarações do ex-embaixador em Washington que, apesar de lançar críticas duras à “doutrinação obrigatória” dentro do Itamaraty a seu “antiamericanismo atrasado”, reconhece a melhora das relações entre os dois países nos últimos anos (*Veja*, 2007).

26 Um modelo similar de intervenção foi ensaiado para o Plano Colômbia e suas variações (Plano Patriota, Iniciativa Regional Andina), mas a resistência brasileira e da maioria dos vizinhos a inviabilizou.

as alternativas de superação do capitalismo. Para delimitar o campo de atuação do integracionismo oficial, empreende-se uma campanha contra a “ideologização” da política externa, ora em nome dos laços históricos com os Estados Unidos, ora em nome de um “pragmatismo” que alega não se poder abrir mão do maior mercado consumidor do mundo. Ao mesmo tempo, exige-se uma postura mais dura com os vizinhos, recuperando antigas imagens de um Brasil estável cercado de republiquetas imprevisíveis, ao gosto de seus caudilhos. Pela primeira vez ameaçados pelas nacionalizações, apela-se à defesa de “nossos interesses” e para o uso da cláusula democrática do Mercosul, que lhe daria o caráter intervencionista outrora atribuído à OEA.

Não por acaso, o processo bolivariano é demonizado como o grande vilão da integração do continente. A despeito das diversas críticas a que possa ser submetido, é preciso reconhecer que o avanço do processo venezuelano possibilita levar o debate sobre a integração para um outro patamar por três motivos principais: a) recupera uma tradição autenticamente integradora, inaugurada por Bolívar e continuada por Martí, Sandino, Mariátegui, Che Guevara; b) busca recolocar o debate sobre o socialismo como uma alternativa real para os movimentos de massas americanos; c) coerentemente com os pontos anteriores, associa-se à revolução cubana, síntese das experiências de construção do socialismo e do esforços de integração do continente.

A incompatibilidade desse projeto, que busca efetivar-se através da Aliança Bolivariana das Américas, com os esforços neo-monroistas/desenvolvimentistas tem sido expressa recorrentemente pelo presidente venezuelano, com mais veemência na IV Cúpula das Américas (Mar del Plata, novembro de 2005), quando se celebrou o congelamento da ALCA. Em seguida, nas reuniões da Comunidade Sulamericana de Nações (Cochabamba, dezembro de 2006) e do Mercosul (Rio de Janeiro, janeiro de 2007) os dois projetos estiveram indiretamente contrapostos, com o presidente brasileiro buscando projetar a liderança do país na conformação de um mercado regional e Hugo Chávez mostrando as contradições desse modelo e defendendo uma integração em novas bases.

Para o Brasil, coloca-se portanto a possibilidade de enveredar por trilhas hegemônicas assumindo, de maneira mais ou menos original o rol de pivô da integração imperialista da América do Sul. A esta coloca-se a alternativa de um diálogo desde baixo, que possibilite retomar pontes de construção de uma identidade indo-negro-latino-mestiça-americanista, superando os termos com os quais nos é permitido pensar atualmente, exclusivamente nos marcos da atual institucionalidade dos Estados-nações. Para isso, é fundamental recuperar algumas

experiências que mencionamos neste trabalho, além de inúmeros intelectuais, artistas, revolucionários, movimentos sociais que ajudaram a pensar o Brasil como parte de Nuestra América. E como Ruy Mauro Marini me pareceu um eixo adequado neste esforço inicial, creio que seja válido concluir com algumas de suas observações que apontam nessa perspectiva:

É evidente que esse resultado não pode ser alcançado sem que a integração econômica signifique também avançar em direção à integração política, que aponte para um Estado supranacional na América Latina. As atuais discussões sobre a reforma do Estado, que se desenvolvem em todos os países da região, não chegarão a bom termo se não partem da noção de que o antigo ideal bolivariano se encontra re-atualizado pela própria vida e que, para além de dados geográficos, históricos e econômicos, nenhum país latino-americano é hoje viável isoladamente. Chegamos àquele ponto em que nossa sobrevivência como brasileiros, mexicanos, chilenos, venezuelanos depende de nossa aptidão para construir novas superestruturas políticas e jurídicas, dotadas da capacidade de negociação, resistência e pressão indispensável para ter efetiva presença ante os super-Estados que já existem ou estão emergindo na Europa, Ásia e mesmo na América (Marini, 1993).

BIBLIOGRAFIA

- Almeida, Paulo Roberto de 2003 “Uma frase (in)feliz?: o que é bom para os EUA, é bom para o Brasil?” em <www.pralmeida.org/05DocsPRA/992BomEUAbomBrasil.pdf> acesso 15 de fevereiro de 2008.
- BBC 2006 “Emergentes nunca investiram tanto no exterior, diz relatório” em <www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/10/061016_investimentos_unctad_pu.shtml> acesso 25 de fevereiro de 2008.
- BNDES 2007 *Visão do desenvolvimento*, N° 23, 25 de julho.
- Bomfim, Manoel 1997 (1929) *O Brasil na América. Caracterização da formação brasileira* (Rio de Janeiro: Topbooks).
- Bomfim, Manoel 2005 (1905) *América Latina. Males de origem* (Rio de Janeiro: Topbooks).
- Bonavides, Paulo e Amaral, Roberto (orgs.) 2002 *Textos políticos da história do Brasil* (Brasília: Senado Federal) Vol. 1.

- Bueno, Clodoaldo 1995 *A república e sua política exterior (1889 a 1902)* (São Paulo: UNESP/Fundação Alexandre de Gusmão).
- Bueno, Clodoaldo 2004 “Pan-Americanismo e projetos de integração: temas recorrentes na história das relações hemisféricas (1826-2003)” em *Política Externa* (Rio de Janeiro) Vol. 13, Nº 1.
- Burns, Bradford E. 2003 *A Aliança não escrita: o Barão do Rio Branco e as relações do Brasil com os Estados Unidos* (Rio de Janeiro: EMC).
- Cadernos do CHDD* 2003a (Brasília) Nº 2.
- Cadernos do CHDD* 2003b (Brasília) Nº 3.
- CEPAL 2003 *América Latina y el Caribe. Información general y estadísticas* em <www.alternativabolivariana.org> acesso 18 de agosto de 2008.
- Chacon, Vamireh 1983a *Abreu e Lima, general de Bolívar* (São Paulo: Paz e Terra).
- Chacon, Vamireh (org.) 1983b *Da Confederação do Equador à Grã-Colômbia* (Brasília: Senado Federal).
- Cunha, Euclides da 1975 (1907) *Contrastes e confrontos* (Rio de Janeiro: Record). Em <www.euclidesdacunha.org.br/> acesso 13 de janeiro de 2007.
- Dias, Maria Odila Leite da Silva 1982 “A interiorização da metrópole (1808-1853)” em Mota, Carlos Guilherme (org.) *1822: dimensões* (São Paulo: Perspectiva).
- Época* 2007 (São Paulo) Nº 493, 29 de outubro.
- Fernandes, Florestan 1981 *Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina* (Rio de Janeiro: Zahar).
- Folha de São Paulo* 2008 “Múltis brasileiras investem mais no exterior” em <www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u373383.shtml> acesso 18 de fevereiro.
- Furtado, Celso 1972 *Breve historia económica de América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- G1* 2006 “Empresas brasileiras vão às compras no exterior” em <www.g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,AA1393470-9356,00.html> acesso 25 de fevereiro de 2008.
- Garcia, Eugênio 2004 *El significado del pan-americanismo en la política exterior (1889-1961)* em <www2.mre.gov.br/irbr/irbr2/livros/PonenciaPanamericanismo2a.pdf> acesso 25 de fevereiro de 2008.

- Garcia, Eugênio 2005 *Cronologia das relações internacionais do Brasil* (Rio de Janeiro/Brasília: Contraponto/Funag).
- Guerra Vilaboy, Sergio 2006 *Breve historia de América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Katz, Claudio 2006 “América Latina: socialismo ou neo-desenvolvimentismo” em <resistir.info/varios/socialismo_neodesarrollismo_p.htm> acesso 15 de fevereiro de 2007.
- La Razón* 2007 “Brasil ayudará si el país respeta a sus agricultores” em <www.la-razon.com/versiones/20070201_005804/nota_262_385713.htm> acesso 25 de fevereiro de 2008.
- Lima, Manuel de Oliveira 1980 (1907) *Pan-americanismo (Monroe, Bolívar, Roosevelt)* (Brasília/Rio de Janeiro: Senado Federal/Fundação Casa de Rui Barbosa).
- Lisboa, Miguel Maria 1866 *Relação de uma viagem a Venezuela, Nova Granada e Equador* (Bruxelas: A. Lacroix, Verboeckhoven e Cia.).
- Lyra, Heitor 2001 (1919) “O panamericanismo no Brasil antes da declaração de Monroe” em *Revista Americana: uma iniciativa pioneira de cooperação intelectual: 1909-1919* (Brasília: Senado Federal).
- Marini, Ruy Mauro 1974 *Subdesarrollo y revolución* (México DF: Siglo XXI). Em <www.marini-escritos.unam.mx> acesso 15 de fevereiro de 2007.
- Marini, Ruy Mauro 1977 “La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo” em *Cuadernos Políticos* (México DF) Nº 12, abril-junho. Em <www.marini-escritos.unam.mx/006_acumulacion_es.htm> acesso 15 de fevereiro de 2007.
- Marini, Ruy Mauro 1993 *Dos momentos en la integración latinoamericana* em <www.marini-escritos.unam.mx/021_integracion_es.htm> acesso 15 de fevereiro de 2007.
- Moniz Bandeira, Luiz Alberto 2005 “Brasil y las Dos Américas” em <www.amersur.org.ar/PolInt/Bandeira0510.htm> acesso 25 de fevereiro de 2008.
- MRE-Ministério das Relações Exteriores-Núcleo de Apoio à Presidência *Pro Tempore* Brasileira do MERCOSUL (comp.) 2007 *América do Sul: segundo semestre de 2006* (Brasília: Funag).

O Estado de São Paulo 2007 “Brasileiros investem mais no exterior que no país” em <www.estadao.com.br/arquivo/economia/2007/not20070125p19332.htm> acesso 25 de fevereiro de 2008.

O Globo 2006 (Rio de Janeiro) 29 de janeiro.

Oliveira, Francisco de 2004 “¿Hay vías abiertas para América Latina?” em Boron, Atilio (comp.) *Nueva hegemonía mundial, alternativas de cambio y movimientos sociales* (Buenos Aires: CLACSO).

Prado, Eduardo 2003 (1893) *A ilusão americana* (Brasília: Senado Federal).

Rezek, José Francisco (org.) 1978 *Conselho de estado, 1842-1889: consultas da seção dos negócios estrangeiros. Volume 1: 1842-1845* (Brasília: Câmara dos Deputados).

UOL Economia 2006 “Saiba o tamanho da Petrobras na economia da Bolívia, e a importância da Bolívia para a Petrobras” em <www.noticias.uol.com.br/economia/ultnot/efe/2006/05/02/ult1767u66304.jhtm> acesso 25 de fevereiro de 2008.

Veja 2007 (São Paulo) em <www.veja.abril.com.br/070207/entrevista.shtml> acesso 25 de fevereiro de 2008.

Zea, Leopoldo (comp.) 1995 *Fuentes de la cultura latinoamericana* (México DF: Fondo de Cultura Económica).

Daniela Kunz*

CONCEPCIONES DEMOCRÁTICAS EN PUGNA EN EL ÁMBITO DE LA OEA

INTRODUCCIÓN

Una de las características definitorias de las relaciones internacionales y del Derecho Internacional Público a fines del siglo XX ha sido la afirmación del principio de la universalidad de la democracia como pilar de la organización política del Estado. Con el fin de la Guerra Fría y del mundo bipolar, ese principio se plasmó en diversas reformas normativas en todas las regiones de Occidente (Méndez y Chillier, 2004: 1). Previamente, los sectores hegemónicos de las clases dominantes en América Latina habían optado por la reinstalación de regímenes democráticos representativos, ya que entendieron que estos y el desarrollo económico propuesto por el neoliberalismo eran condiciones interdependientes.

En ese contexto, y acorde con los enfoques del Consenso de Washington, en la década del noventa se emprendieron diversas reformas políticas e institucionales que privilegiaron la eficiencia del Estado en los términos de la economía capitalista de mercado sin considerar, como sostiene Lechner, las diferentes funciones que este cumple en la producción y reproducción del orden social y al margen de las consideraciones acerca del orden democrático. A causa de que la mayor parte

* Licenciada en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria del CONICET.

de la población del continente se vio excluida del disfrute de sus derechos, numerosos intelectuales y políticos afirmaron que lo que estaba en cuestión era el carácter democrático del Estado, y que el principal desafío de los países latinoamericanos y caribeños consistía en resolver la tensión existente entre eficiencia económica capitalista y legitimidad política-democrática (Lechner, 1995).

Actualmente el debate en torno a la democracia asume una extraordinaria complejidad teórica y política. Con el propósito expreso de *refundar la democracia*, su sentido y contenidos, surgen importantes movimientos sociales y políticos en América Latina que –frente al “orden” que proclama la democracia liberal representativa como condición para el desarrollo económico y social– proyectan un discurso que postula la *soberanía popular como poder no confiscable*; cuestionan el concepto liberal de representación política y subrayan la importancia de la autodeterminación nacional –a la par de la no intervención de la potencia hemisférica–, la participación social protagónica y la justicia como criterio de distribución del producto económico, así como de legitimación del sistema político.

Ese discurso ocupó un lugar central en los debates que se produjeron en 2001, en el seno de las Cumbres de las Américas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), a propósito de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI). En ese marco se proyectó la propuesta del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (RBV) sobre la *democracia participativa*, en oposición a la mera alusión a la democracia representativa que, desde mediados del siglo XX, caracteriza los arreglos institucionales hemisféricos en torno al régimen político. Ese discurso sobre la democracia participativa cuestiona las relaciones establecidas entre democracia, gobernabilidad o buen gobierno y el desarrollo económico enmarcadas en el paradigma discursivo neoliberal, y se postula como una alternativa al sistema político actualmente existente en la mayoría de los estados latinoamericanos y caribeños (Roitman Rosenmann, 2005: 27-48; Douglas Lummis, 2002: 66-71; Romero y Cardozo, 2002).

El presente trabajo constituye una primera aproximación a esas posturas contrapuestas. Particularmente a los debates que se dieron en la OEA, institución que, a partir de la disputa acerca de los sentidos y contenidos de la democracia impulsada por el gobierno de la RBV, se ha constituido en un foro político cuyo estudio resulta relevante. Por consiguiente, en las páginas que siguen se pretende resaltar la relación existente entre lo que Luis Suárez Salazar denomina “el nuevo orden panamericano” y el ahora decadente paradigma de la democracia liberal representativa postulado por la OEA desde su fundación. Veamos.

LA DEMOCRACIA EN LA OEA

En América Latina, la llamada “cláusula democrática” tiene al menos seis décadas de vigencia, aunque no haya adquirido un carácter vinculante hasta 2001 –año en que la aprobó la Tercera Cumbre de las Américas realizada en Québec (Canadá) y posteriormente la ratificó la CDI. De modo que dicha cláusula antecedió al fin de la bipolaridad Este-Oeste (Méndez y Chillier, 2004: 1-2). En efecto, el ideal democrático integró el “orden” panamericano surgido de la Conferencia de Chapultepec de 1945 y, por tanto, se reflejó en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 y en la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos que –acompañando los intereses estratégicos de los grupos dominantes en Estados Unidos durante la entonces recién iniciada Guerra Fría– fundó la OEA en 1948.

Según el preámbulo de la Carta de esa organización (también conocida como Carta de Bogotá), “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región” (ver “Carta de la Organización de los Estados Americanos” de 1948 en Montenegro, 1999: 505). Por otra parte, entre sus tareas originarias se destacó “la promoción de la democracia representativa” dentro del respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de sus estados miembros. Adicionalmente, tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en 1948, en Bogotá, por la Novena Conferencia Internacional Americana antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscripta por la Organización de Naciones Unidas en diciembre de ese mismo año) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, contienen principios de organización democrática del Estado. Por ejemplo, el artículo 20 de esa Declaración y el 23 de esa Convención establecen el derecho de toda persona legalmente capaz de participar de las decisiones de la comunidad y en el gobierno de su país, y consagran el derecho a votar, a ser elegido en elecciones auténticas, honestas, libres, universales, periódicas y por voto secreto. Incluso, la consagración de la democracia en el Sistema Interamericano es diferente –y anterior– a los sistemas de la ONU y del derecho europeo (Méndez y Chillier, 2004: 1-2).

De hecho, esos principios fueron invocados en la Décima Conferencia Internacional de Estados Americanos (efectuada en Caracas, en 1954), cuando el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles procuraba deslegitimar al gobierno nacionalista y reformador guatemalteco encabezado por Jacobo Arbenz, que había expropiado tierras sin cultivar de la célebre United Fruit Company. Esa limitación de los derechos de propiedad privada fue utilizada por la administración de Dwight Eisenhower para justificar el golpe de Estado y la

invasión mercenaria que derrocó al gobierno de Arbenz –hechos que fueron seguidos por una brutal represión y una cruenta guerra interna en Guatemala. Más tarde, en 1962, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, efectuada en Punta del Este (Uruguay), “suspendió” al gobierno cubano encabezado por Fidel Castro en sus derechos como Estado miembro. La decisión de ese gobierno de establecer alianzas fuertes con el campo socialista, su rechazo a ciertas *formas democráticas* y su apoyo a movimientos insurgentes de otros países fueron las razones que justificaron tal decisión (Méndez y Chillier, 2004: 2 y ss.).

Aunque la referencia a esas y otras experiencias ilegítimas que han sido justificadas sobre la base de los principios democráticos incluidos en las normativas hemisféricas no integra el propósito principal de este trabajo, siempre habrá que recordar que “la contención del comunismo” fue utilizada por las administraciones de Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter y Reagan con vistas a dismantlar los movimientos insurgentes y derrotar a los gobiernos nacionalistas, populares, revolucionarios o reformistas, civiles o militares, de América Latina y el Caribe (Suárez Salazar, 2007). En ese sentido, es importante destacar que la incorporación de la democracia a las normativas de la OEA significó “el establecimiento de rígidas fronteras ideológicas para excluir a los países que establecieran regímenes antagónicos con la esfera de poder del mundo capitalista [y que] las afinidades ideológicas de los alineados a Occidente se basaban en un profundo anticomunismo y no en ideales democráticos comunes” (Méndez y Chillier, 2004: 2). De hecho, varios de los países que votaron contra el gobierno nacionalista de Guatemala y a favor del aislamiento de Cuba poseían regímenes antidemocráticos: dinásticos (Somoza en Nicaragua); despóticos (Pérez Jiménez en Venezuela); autocráticos (Trujillo en República Dominicana); o tiránicos (Stroessner en Paraguay). En consecuencia, predominó una interpretación *macartista* de los principios democráticos de la OEA –organización que acogió a numerosos regímenes instaurados a partir de la violencia contra gobiernos que contaban con legitimidad popular en países como Brasil (1964), Argentina (1969; 1976) o Chile (1973) (Méndez y Chillier, 2004: 3-4).

Sin embargo, el sistema de dominación instaurado por los grupos de poder de EE.UU. luego de la Segunda Guerra Mundial entró en una profunda crisis a partir de la segunda mitad de la década del setenta. Para Luis Suárez Salazar, entre otros factores hemisféricos e internacionales, esa descomposición puede explicarse por la ruptura de algunos eslabones débiles de la cadena de la dominación imperialista sobre el Tercer Mundo y, principalmente, por la derrota estadounidense en la guerra contra Vietnam. Paralelamente, en América Latina y el

Caribe, la Revolución Cubana inauguró el ciclo reformador y revolucionario que temporalmente concluyó en febrero de 1990, con la derrota político-electoral del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua. Previamente, “los sectores más reaccionarios de las clases dominantes y de la sociedad estadounidense –aglutinados en la ‘nueva derecha’ y liderados por el presidente Ronald Reagan (1981-1989)– emprendieron una multifacética contraofensiva dirigida a recomponer su sistema de dominación ‘global’ y hemisférico” (Suárez Salazar, 2007: 213).

En ese contexto se llevaron a cabo las primeras “reformas” neoliberales orientadas a la resolución de los problemas estructurales que afectaban a la economía estadounidense. En general, esas “reformas” implicaron la creación de las condiciones institucionales que facilitaron la expansión en América Latina y el Caribe de las empresas transnacionales y multinacionales estadounidenses, que competían con capitales japoneses y europeos por el control de los mercados y fuentes de materias primas en los países periféricos y semiperiféricos. De modo que la batalla del capital en el plano extracontinental supuso, al interior del hemisferio, el desmantelamiento de la mayoría de los gobiernos revolucionarios y reformistas del Caribe insular y continental; de los gobiernos militares nacionalistas de Ecuador, Panamá y Perú; el control de las transiciones democráticas que se produjeron en América del Sur entre 1984 y 1990; la instauración de democracias contrainsurgentes en Centroamérica; y, finalmente, la derrota de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Todas esas acciones fueron realizadas al margen de la OEA y acompañadas por la imposición progresiva de Programas de Ajuste Estructural (PAE) dirigidos al cobro de la deuda externa, a la apertura unilateral de las economías latinoamericanas y caribeñas, así como a la desnacionalización de sus recursos.

Suárez Salazar sostiene que las diversas estrategias emprendidas contra América Latina y el Caribe por el *establishment* bipartidista de la política exterior y de seguridad norteamericano durante el período 1989-2004 pueden entenderse como componentes del *nuevo orden panamericano* impulsado por las administraciones de George H. Bush, William Clinton y George W. Bush, en consuno con los sectores conservadores del hemisferio occidental, “como parte de sus complejas interacciones de dominación, cooperación, competencia y conflicto con los gobiernos de Canadá, de América Latina y el Caribe, así como de las demás potencias integrantes de la ‘tríada’ o la ‘pentarquía’ del poder mundial” (Suárez Salazar, 2007: 214). Entre los componentes ideológicos de esa política, este autor señala la supuesta excepcionalidad norteamericana, los enunciados de la Doctrina Monroe y sus corolarios, del Destino Manifiesto, de los *paramount interests* y de la seguridad

continental de EE.UU. Sobre esas bases, el gobierno de George H. Bush intervino militarmente Panamá en diciembre de 1989 y logró la derrota del FSLN en febrero de 1990. Ese mismo año impulsó el Consenso de Washington y anunció la Iniciativa para las Américas que proponía la conformación de una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego (Suárez Salazar, 2007: 216).

Por consiguiente, la institucionalización del nuevo orden panamericano incluía, ante todo, una propuesta de libre comercio de alcance hemisférico e implicaba, a la vez, un conjunto de concepciones particulares acerca de la vinculación entre el desarrollo, la seguridad y la democracia. La OEA y las Cumbres de las Américas resultaron funcionales a esa empresa, puesto que allí se legitimaron las reglas del juego político y económico exigidas por los grupos dominantes en EE.UU. La importancia de esos cónclaves se acentúa porque, con anterioridad a la Cumbre de Miami de 1994, sólo se habían realizado dos reuniones presidenciales interamericanas (1956, Panamá; 1967, Punta del Este), pero en ninguna de ellas habían participado los jefes de Estado y de gobierno de 34 de los 35 países formalmente independientes del hemisferio occidental (Suárez Salazar, 2007: 217). Paralelamente, a la luz del derecho de los tratados, la OEA adquirió y fue incrementando progresivamente sus facultades de intervención en los ordenamientos jurídicos internos de los estados miembros en áreas tradicionalmente reservadas a la esfera soberana de los estados (Méndez y Chillier, 2004), como el régimen político, cuestión que interesa particularmente en el presente trabajo.

PERÍODO 1991-2001

En efecto, desde el Compromiso de Santiago con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano, aprobado por la Asamblea General de la OEA efectuada en Santiago de Chile en junio de 1991, se planteó la preocupación por revitalizar la cláusula democrática. En ese marco, los ministros y jefes de delegación de los estados miembros declararon “un compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la *democracia representativa* y de los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención”. También proclamaron la “voluntad de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa” (OEA, 1991a; énfasis propio). Además, se propusieron impulsar el proceso de renovación de la organización para hacerla más eficaz y útil; iniciar una reflexión conjunta sobre la seguridad hemisférica desde una perspectiva actualizada e *integral*; y promover la progresiva apertura del comercio, la expansión de las inversiones y la reducción de la deuda externa de los

países de la región. Asimismo apoyaron la referida Iniciativa para las Américas y las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT.

En ese contexto, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución 1080 sobre la Promoción de la Democracia Representativa. Esta estableció algunos criterios significativos en línea con los compromisos asumidos: la discrecionalidad del secretario general para convocar al Consejo Permanente en relación con interrupciones del orden político constitucional; la competencia del Consejo Permanente para considerar la situación y convocar, a su discreción, a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dentro de un plazo de diez días; y la posibilidad de que la OEA adoptara acciones dentro del principio de no intervención. Además, facultó al Consejo Permanente para elaborar propuestas que sirvieran de incentivo para preservar y fortalecer los sistemas democráticos sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacionales (OEA, 1991b).

En la misma tesitura, el 14 de diciembre de 1992, la XVI Asamblea Extraordinaria aprobó el Protocolo de Washington de Reforma de la Carta de la OEA. Este consagró el espíritu central de la Resolución 1080 ya que, entre otras cosas, facultó a la organización para emprender iniciativas diplomáticas contra regímenes que hubieran asumido el poder político en forma ilegal y dispuso la suspensión total o parcial de su carácter de miembros de la organización, toda vez que esas iniciativas diplomáticas no lograran restablecer la democracia. Dicha facultad puede ser ejercida por una mayoría de dos tercios de los estados miembros. Así quedó expresado en el nuevo artículo 9 de la Carta de la OEA. Se trata de un mecanismo similar a los propuestos nueve años más tarde por la cláusula democrática, que permiten expulsar o suspender a aquellos estados miembros cuyos gobiernos sean derrocados por la fuerza. A su vez, el artículo 2 agregado a la Carta reafirma como propósito de la organización “la promoción de la democracia representativa” (OEA, 1992a).

Por consiguiente, el Protocolo de Washington puso de relieve, una vez más, la conflictiva relación existente entre el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados miembros y el compromiso asumido con respecto al fomento de la democracia en América Latina y el Caribe. Así fue señalado por el gobierno mexicano, que solicitó la incorporación de una declaración que afirmaba lo siguiente.

El Gobierno de México reitera su vocación y compromiso con la democracia dentro del más estricto respeto y apego a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos [...] Sin embargo, está convencido de que la democracia es

un proceso que emana de la voluntad soberana de los pueblos, y que no puede imponerse desde afuera [...] No es aceptable que se den al organismo regional poderes supranacionales e instrumentos de intervención en los asuntos internos de nuestros Estados [...] no es por la vía del aislamiento, suspensión o exclusión, que se puede coadyuvar a la preservación y fortalecimiento de la democracia en nuestro continente [...] los textos sobre suspensión de Estados Miembros, aprobados aquí el día de hoy, modifican el propósito original de nuestra Organización [...] el Gobierno de México deja constancia de su desacuerdo con estas reformas a la Carta, aprobadas en la XVI Asamblea General Extraordinaria (OEA, 1992b).

No obstante, la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1993, ratificó los mecanismos creados para la defensa de los principios democráticos y enfatizó la importancia de la contribución de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) y del Consejo Permanente en la elaboración de propuestas de incentivos a la preservación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos en el hemisferio occidental. Según se desprende de esa declaración, se trataría de mejorar las capacidades propias de los estados que así lo soliciten para “perfeccionar sus modelos de organización política” (OEA, 1993).

Continuando con esa secuencia de reuniones hemisféricas, en el Plan de Acción de la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994, los 34 mandatarios asistentes acordaron emprender mayores esfuerzos para “la promoción de los valores democráticos” y se comprometieron a respaldar a la OEA en la asistencia técnica a los organismos electorales nacionales, a través del intercambio de tecnologías en materia electoral. A lo anterior se agregó el fortalecimiento de la UPD como asesora en procedimientos legislativos y judiciales, así como promotora de la participación de las organizaciones comunitarias en la democracia local y del intercambio de experiencias entre las instituciones democráticas de los estados miembros, particularmente entre sus órganos legislativos y judiciales (OEA, 1994). Acorde con ese mandato, entre enero de 1995 y marzo de 1998, la UPD envió misiones electorales a diez países e implementó *programas de reconciliación* en cuatro, además de coordinar la Misión Civil Internacional en Haití, orientada a fortalecer su sistema judicial, la policía y las cárceles, al igual que otros asuntos vinculados con los derechos humanos.

Por su parte, en 1998, la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile, reafirmó el fortalecimiento de la democracia como una prioridad hemisférica. Su Plan de Acción dio

cuenta de nuevas iniciativas destinadas a “promover reformas democráticas a nivel nacional y local [...] estimular una sociedad civil sólida y activa [...] y defender la democracia de las graves amenazas de la corrupción, el terrorismo y las drogas ilegales, así como fomentar la paz y seguridad de las naciones” (OEA, 1998). Con esa línea, durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Guatemala, en junio de 1999, se aprobaron cuatro resoluciones en relación con la democracia: “Apoyo al sistema democrático paraguayo” (AG/DEC.20); “Promoción y defensa de la democracia representativa” (AG/RES.1648); “Fortalecimiento de la democracia representativa” (AG/RES.1696); y “Democracia participativa y perfeccionamiento de las instituciones democráticas” (AG/RES.1684). Esta última –como veremos después– fue propuesta por el gobierno de la RBV.

Un año más tarde, en junio de 2000, durante la XXX Asamblea General de la OEA, celebrada en Windsor (Canadá), fueron aprobadas las siguientes resoluciones: “Promoción de la democracia” (AG/RES.1721); “Red de Parlamentarios de las Américas” (AG/RES.1722); y “Fortalecimiento de la democracia: fondo especial” (AG/RES.1724). Esa Asamblea ratificó la continuidad de la UPD, como institución de apoyo a los estados que lo requieran en el diseño y la ejecución de programas y proyectos derivados del referido Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile. A menudo, el requerimiento previo por parte de los estados miembros ha sido interpretado como señal de respeto al principio de no intervención.

Previamente, esos y otros mecanismos establecidos a partir de la Resolución 1080 habían sido invocados y puestos a prueba en Haití (1991), Guatemala (1993), Perú (1992 y 2000) y Paraguay (1996). En esas situaciones, críticas desde el punto de vista político-institucional, la OEA intervino proponiéndose como *salvaguarda de la estabilidad democrática* y reguladora de las relaciones hemisféricas. Aunque en general se ha reconocido su efectividad y legitimidad durante esas intervenciones, su misión se vio fuertemente cuestionada desde fines de la década del noventa, cuando sendos estudios de opinión en toda la región reflejaron el profundo malestar existente en las ciudadanías latinoamericanas respecto al funcionamiento real de las democracias representativas.

En tal estado de opinión influyó objetivamente la vigencia de una democracia estrictamente *procedimental* y la paralela incapacidad de los gobiernos latinoamericanos y caribeños para resolver los problemas más acuciantes del continente. Efectivamente el hambre, el desempleo, la marginalidad y la pobreza, la distribución cada vez más regresiva de la riqueza, el deterioro de la seguridad social, el resurgimiento de la violencia y la delincuencia mostraban los límites de un sistema que

había sido presentado como la panacea de la libertad. A la par, “quedaba demostrada la incapacidad de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema representativo para canalizar las *preferencias* de los electores” (Parker, 2002: 89-99; énfasis propio).

En ese contexto, en 1998 fue electo como presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías y, un año después, sobre la base de su programa electoral dirigido a *refundar la república*, un plebiscito aprobó la Constitución de la ahora llamada República Bolivariana de Venezuela. Esta se planteó el propósito de edificar una *democracia participativa* y “promover en el plano internacional esa concepción de democracia bolivariana, unida a los principios de no intervención y autodeterminación” (Romero y Cardozo, 2002: 153-173). Por consiguiente, durante la mencionada Asamblea General de la OEA efectuada en Guatemala, el gobierno venezolano presentó por primera vez esta concepción de democracia. Allí, el entonces vicepresidente José Vicente Rangel propuso un proyecto de declaración sobre la democracia participativa que contrastó con la iniciativa estadounidense de fortalecer la democracia representativa y crear un grupo de países de la OEA para prestar asistencia institucional a los estados con problemas políticos. Adicionalmente, Rangel vindicó la democracia social y participativa y cuestionó los magros resultados de las democracias representativas de la región. Al año siguiente, a propósito de la realización de una jornada de análisis a instancias de la OEA, el gobierno venezolano retomó su propuesta y durante 2001 continuó proponiendo la aceptación de la democracia participativa en el Sistema Interamericano, orientación que –como se verá a continuación– se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la política del presidente Hugo Chávez hacia América Latina y el Caribe.

LA TERCERA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Québec (Canadá) en abril de 2001, resulta particularmente relevante para los objetivos de este ensayo. Se trató del cónclave del que surgieron las instrucciones presidenciales a sus correspondientes cancilleres para la redacción de la CDI; pero también porque fue el momento a partir del cual se fue perfilando, en el ámbito multilateral, una concepción crítica del discurso dominante acerca de la democracia liberal representativa que desde 1991 venía caracterizando la retórica y las prácticas de la OEA.

En ese sentido, la posición defendida por el gobierno bolivariano en el marco de esa organización abrió paso a un nuevo debate acerca de la democracia en América Latina y el Caribe, que anticipó las marcadas diferencias ideológicas que dominarían el escenario hemisférico en los años inmediatamente posteriores. Por otra parte, el hecho de que la OEA haya sido uno de los escenarios privilegiados para plantear una al-

ternativa a la democracia representativa reforzó la importancia estratégica del ámbito multilateral como espacio de carácter *político*, máxime si se considera el conformismo resultante del pensamiento acrítico que había dominado las dos décadas precedentes. Por ello, a continuación se resaltarán los conceptos más sobresalientes de la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas en materia de democracia y, particularmente, las reservas formuladas por el gobierno bolivariano respecto a los términos de esa declaración.

LA DECLARACIÓN DE QUEBEC

Según el primer párrafo de la Declaración de Québec, el Plan de Acción adoptado en esa cumbre se orientó hacia las siguientes cuestiones:

Fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno, proteger los derechos humanos y libertades fundamentales [...] crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades económicas y, *al mismo tiempo*, fomentar la justicia social y desarrollar el potencial humano (OEA, 2001; énfasis propio).

Más adelante, en el párrafo quinto, se resaltó la importancia del Estado de Derecho y del respeto estricto al sistema democrático como condición esencial para la presencia (o participación) de los estados en el proceso de las Cumbres de las Américas.

En ese sentido, los jefes de Estado y de gobierno sostuvieron que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de las Cumbres de las Américas”. Para asegurar la vigencia práctica de ese principio, acordaron “llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de las Cumbres”. Inmediatamente, en el sexto párrafo, instruyeron a sus ministros para que en el marco de la próxima Asamblea General (correspondiente al XXXI período ordinario de sesiones) prepararan una Carta Democrática Interamericana “que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la *democracia representativa* y permita mejorar la capacidad de respuesta de los estados miembros frente a las nuevas y variadas amenazas existentes contra la democracia” (OEA, 2001; énfasis propio).

Además, esa declaración reafirmó la importancia de la independencia del Poder Judicial, el acceso equitativo a la justicia y su administración imparcial, y la transparencia de la gestión pública. Asimismo sostuvo:

Economías abiertas y libres, acceso a los mercados, flujo sostenido de las inversiones, formación de capitales, estabilidad financiera, políticas públicas adecuadas, acceso a la tecnología y [...] capacitación de los recursos humanos, son claves para reducir la pobreza y la inequidad, elevar los niveles de vida y promover un desarrollo sostenible (OEA, 2001).

En esa lógica, los jefes de Estado y gobierno destacaron:

El progreso significativo logrado hasta la fecha para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) [...] el libre comercio, sin subsidios ni prácticas desleales, acompañado por flujos crecientes de inversión productiva y de una mayor integración económica, favorecerá la prosperidad regional (OEA, 2001).

En el párrafo quince, los mandatarios instruyeron a sus ministros para que aseguraran que las negociaciones del ALCA concluirían, a más tardar, en enero de 2005, y más adelante establecieron que *“la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes* y se refuerzan mutuamente como condiciones fundamentales para combatir la pobreza y la desigualdad” (OEA, 2001; énfasis propio).

Por todo lo dicho, la Declaración de Québec precisa algunos de los principales objetivos y medios propuestos por el nuevo orden panamericano: promoción de la democracia, desarrollo, buen gobierno y seguridad; componentes mutuamente relacionados entre sí y con la *libertad* que –tal como señala François De Bernard (2002)– aparece como el principio que posibilita su justificación. Siguiendo al mismo autor, se advierte que la promoción de la democracia es sólo un objetivo entre otros.

La democracia aparece como un subproducto de la libertad en general y [como] un subproducto de la libertad de comercio en particular. Se formula así una concepción *pre* política de la democracia, como el contenido secundario del comercio. El libre comercio y la democracia aparecen como los dos pilares de un mismo edificio en construcción, el ALCA por encima de la OEA, lo económico por encima de lo político (De Bernard, 2002; énfasis en el original).

El imperativo democrático consagrado por la Tercera Cumbre de las Américas implica que un tipo particular de democracia se convierte en condición ineludible para entrar al “paraíso” del libre comercio de bienes y servicios constituido por el enorme espacio geográfico que se extiende desde Tierra del Fuego al Ártico, con más de 800 millones

de habitantes: el conjunto económico y comercial más importante del planeta. De modo que el nuevo orden panamericano comprendía esa promesa: los países integrados serían más ricos, prósperos y estables, gracias a ese mercado excepcionalmente amplio y eficiente que les abriría sus puertas. Ese aumento global de la riqueza traería una ola de efectos positivos para las sociedades (supuestamente en detrimento de las minorías) (De Bernard, 2002).

Según ese discurso, uno de los efectos más importantes de dicha integración sería el fortalecimiento de las democracias, presuntamente favorecidas por el aumento de la riqueza, así como por la generalización de valores y prácticas democráticas en todo el hemisferio.

Con un mínimo democrático se podría conquistar el libre comercio y este sería el mejor modo de enriquecer cuantitativa y cualitativamente la democracia. Democracia y libre comercio están tan estrechamente vinculados que no se podría distinguir cuál de los dos determina más la prosperidad (De Bernard, 2002).

En esa línea, los acuerdos del ALCA, en su capítulo 11, preveían medidas fuertemente coercitivas hacia los estados que realizaran, por ejemplo, modificaciones constitucionales capaces de afectar las inversiones privadas.

Con todo, no llamaron la atención las afirmaciones del ex ministro de Justicia de Colombia y asesor principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en temas de gobernabilidad, Fernando Carrillo Flores, quien en su artículo “Una vacuna contra el autoritarismo” asegura que el vínculo indisoluble entre democracia y desarrollo acordado en la Tercera Cumbre de las Américas respondió a una iniciativa del BID.

Fue posible introducir esa concepción de interdependencia entre democracia y desarrollo como condición para combatir la pobreza y luchar contra la desigualdad [porque] los principios autoritarios no constituyen el mejor estímulo para el desarrollo [...] La trascendencia de la cláusula democrática consiste en que se presenta no como una simple declaración retórica sino como un mecanismo efectivo de exclusión futura de los beneficios de la integración política, económica y social del hemisferio. En efecto, los alcances del funcionamiento de dicha cláusula, por ejemplo, llegarían a cubrir aún las oportunidades de financiamiento a través de instituciones multilaterales (Carrillo Flores, 2001).

LA INDEFINICIÓN DE LA DEMOCRACIA

Como ya se ha visto, desde su Resolución 1080 y a pesar de las resistencias que rodearon la aprobación del Protocolo de Washington (en

particular su artículo 9), la OEA procuró institucionalizar mecanismos para garantizar la vigencia práctica de la democracia o prevenir situaciones antidemocráticas en el hemisferio occidental. Por ello, se entendió que la cláusula democrática aprobada en la Tercera Cumbre de las Américas completaba el artículo 9 del mencionado Protocolo y, por tanto, estaba destinada a convertirse en un instrumento independiente: la Carta Democrática Interamericana.

Aunque las discusiones y negociaciones de esa Carta se extendieron durante varias semanas en razón de las reservas presentadas por la delegación de la RBV, los especialistas sostienen que no se produjo una redacción jurídica que desarrollara la regla de interpretación de la cláusula democrática. Por el contrario, esa cláusula fue presentada como *evidente*, precisa en su letra e interpretación. Así, en su artículo “Comercio de la democracia o democracia del comercio”, François De Bernard comenta lo siguiente.

G.W. Bush y [el primer ministro de Canadá] Jean Chrétien¹ se turnaron en dueto durante la Cumbre para explicar a sus homólogos y a la prensa internacional la evidente necesidad de tal regla y la exención correlativa para justificarse o para argumentarla (De Bernard, 2002).

En apoyo a sus afirmaciones, reproduce un fragmento del diario canadiense *Quebequense Cyberpresse*, que en agosto de 2001 indicó:

Según esta cláusula, cualquier país que no respete las reglas de la democracia se verá excluido del proceso de las Cumbres de las Américas y se verá por consiguiente excluido de cualquier acuerdo comercial, notablemente el ALCA. Los americanos [entiéndase estadounidenses] y los canadienses consideran esta formulación como absolutamente clara, pero varios grupos de defensa de los derechos de las personas exigen una formulación menos vaga (De Bernard, 2002).

Además, De Bernard sostiene:

La ausencia de una redacción detallada de la cláusula no debería ser interpretada como signo de las dificultades norte-

¹ En ocasión de la Tercera Cumbre, Jean Chrétien sostuvo que, para formar parte del proceso de las Cumbres de las Américas y de los frutos de cualquier acuerdo al que se llegue, inclusive el ALCA, “un país debe estar dirigido por un gobierno democrático” (Chrétien en De Bernard, 2002). En ese momento el primer ministro canadiense no podía imaginarse que, cuatro años más tarde, la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata (Argentina), le propinaría un revés contundente al ALCA, y mucho menos que los gobiernos de varios países sudamericanos respaldarían las reservas a la Declaración de Québec presentadas por el presidente de la RBV.

americanas para hacerla avalar en las negociaciones [como se verá después, salvo Venezuela, ninguno de los 34 países opuso reserva formal alguna] La indefinición de la democracia así asumida por los promotores de la cláusula corresponde a una voluntad resuelta, premeditada y reiterada en diversas ocasiones. No corresponde a un problema de conceptualización o de transcripción legal, sino a la reivindicación de ser capaz, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier caso, de decir, de designar y distinguir a la democracia como uno la entiende, según sus intereses del momento, sin limitación o restricción interna o externa [Tal indefinición dejaba abierto el camino a la posibilidad de] hacer jurisprudencia a placer sobre la cuestión democrática, de manera exclusiva en el seno del conjunto americano planeado y por fuera de los criterios y las reglas del resto de la comunidad internacional, por ejemplo (De Bernard, 2002).

LA PROPUESTA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Entre otras posibles derivaciones, hasta aquí se ha procurado reforzar la idea según la cual la OEA ha operado como un instrumento útil a las estrategias estadounidenses orientadas a sustraerse del ámbito universal de la ONU. En cualquier caso, frente a esos desatinos, el gobierno de la RBV planteó lo siguiente.

La delegación de Venezuela desea reservar su posición acerca de los párrafos 1 y 6 de la Declaración de Québec, por cuanto a juicio de nuestro gobierno la democracia debe ser entendida en su sentido más amplio y no únicamente en su carácter representativo. Entendemos que *el ejercicio democrático abarca además la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de gobierno, con miras a la construcción diaria de un proceso dirigido al desarrollo integral de la sociedad*. Por ello, el Gobierno de Venezuela hubiese preferido, y así se solicitó a esta Cumbre, que en el texto de la declaración quedase reflejado expresamente el carácter participativo de la democracia (OEA, 2001; énfasis propio).

Por otra parte, respecto al mencionado párrafo de esa declaración que fija el plazo para la entrada en vigor del ALCA, Venezuela expresó:

La delegación de Venezuela reserva su posición sobre el párrafo 15 [...] en virtud de las consultas que se llevan a cabo entre los diversos sectores del Gobierno Nacional en función de nuestra legislación interna, para dar cumplimiento a los com-

promisos que se derivarían de la entrada en vigor del ALCA en el año 2005 (OEA, 2001).

De manera que, aunque el presidente Hugo Chávez suscribió la Declaración de Quebec, se abstuvo expresamente de firmar la cláusula democrática, al igual que los plazos acordados para la culminación de las negociaciones del ALCA. En consecuencia, su participación en la Tercera Cumbre de las Américas anticipó la dirección cada vez más crítica que seguiría el gobierno bolivariano. Así, el análisis y la aprobación de la CDI fueron postergados hasta la Asamblea General de la OEA, que se realizó en Costa Rica en junio de 2001. En esta ocasión, la delegación de la RBV –junto a un grupo de países del Caribe– logró aplazar nuevamente la decisión hasta el 10 de septiembre de 2001, fecha en que finalmente se aprobó la mencionada Carta en el marco de una Asamblea Extraordinaria de la OEA realizada en Lima (Perú).

Durante los cinco meses que mediaron entre la Tercera Cumbre de las Américas y la aprobación de la CDI, el gobierno venezolano desarrolló un interesante conjunto de argumentos políticos en respaldo de la nueva concepción democrática incluida en la Constitución de la RBV, aprobada en el plebiscito realizado en 1999. En efecto, de manera paralela a las negociaciones que se desarrollaban en el seno de la OEA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela creó una Mesa de Diálogo con el propósito de profundizar el debate democrático al interior de la sociedad venezolana. De ese debate surgió la “Propuesta de Venezuela para la Carta Democrática Interamericana” (en adelante, la Propuesta).

Esta sintetiza la posición venezolana acerca de la relación que existe entre la democracia y los derechos humanos, la participación popular, el medio ambiente, el desarrollo sustentable, los derechos de la mujer y la lucha contra la pobreza. También sustenta los cuestionamientos de la Revolución Bolivariana a la concepción democrática liberal dominante. Por ello, puede decirse que la doctrina venezolana constituye un excelente alegato en contra del concepto de *democracia legal* propio de la ideología de la nueva derecha, absolutamente favorable al predominio de la economía de mercado sobre la política; concepto plasmado en la relación de interdependencia entre libre comercio y democracia liberal representativa establecida por la OEA y por la Tercera Cumbre de las Américas.

En contraposición, la Propuesta venezolana reconoce en el ideal democrático una fuerza renovada en el hemisferio, como expresión de un valor y un proyecto históricamente compartidos. Al respecto, indica:

La democracia, como ideario, ha fraguado los mejores destinos e inspirado las luchas de pueblos que buscan la paz, la igualdad y la libertad. La democracia como utopía ha iluminado esperanzas redentoras. La lucha por defenderla y perfeccionarla, la

voluntad por ejercerla plenamente, es un fascinante reto para quienes se proponen convertirla en realidad (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

No obstante, advierte sobre dos aspectos fundamentales que implican una concepción determinada acerca de *la política*. En primer lugar, “el sistema democrático posibilita la búsqueda permanente de su perfeccionamiento dentro de la dinámica social, así es capaz de dar respuestas creativas a las necesidades fundamentales de los pueblos”. En segundo lugar, no puede asegurarse la vigencia de un régimen político determinado:

En el actual período de la historia hemisférica, el triunfo de la democracia no está definitivamente asegurado. Las elecciones otorgaban a ciertos gobiernos fachadas democráticas, pero no pocas veces, su principal propósito consistía en legitimar los intereses de elites políticas y económicas. Elecciones sí. Alternabilidad sí. Pluralismo sí. Pero ello no es suficiente. La democracia debe ir más allá del acto comicial y crear mecanismos para que la participación de todos los actores sociales y políticos –sin exclusión alguna– sea una realidad cotidiana [...] La democracia debe tener un profundo contenido social (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

De manera que la Propuesta no pone en discusión el ideal democrático históricamente reconocido en nuestro continente y universalmente vigente desde un punto de vista normativo, sino que confronta con el particular contenido asignado a la democracia en el marco del nuevo orden panamericano. Por otra parte, la Propuesta establece una relación de interdependencia entre la democracia y los derechos humanos. Al respecto reconoce que “la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, entre los que sobresalen el derecho a la vida y a la justicia social, son propósitos irrenunciables y componentes intrínsecos de un Estado de Derecho consustanciado con las aspiraciones de los pueblos del Continente”. Y agrega que la práctica de los derechos humanos constituye la base de todo sistema político que promueve la concordia, el pluralismo, la justicia y la tolerancia. Los derechos humanos “son el bálsamo regenerador del tejido de los estados, de las sociedades y de sus respectivos órdenes jurídicos y políticos” (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

Sobre este tema, Méndez y Chillier se preguntan si la cláusula democrática consagrada por la OEA integra el plexo normativo del derecho internacional de los derechos humanos y sostienen que la respuesta depende del contenido que se le asigne a la cláusula.

Si [...] enuncia un valor referido a la elección periódica de autoridades, es difícil concluir que se trata de una norma universal, especialmente por su contradicción directa con normas básicas del derecho internacional que refieren a facultades reservadas a la decisión soberana de los estados. En cambio, vista desde la perspectiva del derecho de las personas y las colectividades a participar en las decisiones, a ser respetados en su esfera privada aun en su diversidad como minorías, a ser protegidos por las instituciones en caso de abuso de sus derechos, y a obtener acceso a una justicia imparcial e independiente, la cláusula indudablemente integra los derechos humanos universalmente reconocidos [...] La reducción de los contenidos de la democracia a aspectos puramente procedimentales impide que la cláusula democrática sea entendida y ejercitada como eje fundamental sobre el cual debe girar la acción de los gobernantes para proteger y garantizar los demás derechos plasmados en el Sistema Interamericano y podría llevar a legitimar internacionalmente a gobiernos autoritarios que cumplen con los requisitos básicos de la democracia formal (Méndez y Chillier, 2004: 3).

En el mismo sentido podría interpretarse la Propuesta del gobierno de la RBV, ya que considera que el Estado liberal de derecho no es condición suficiente para asegurar la vigencia de los derechos humanos, como lo demuestra la historia de nuestros pueblos. Al respecto, el gobierno venezolano propuso agregar en el preámbulo de la CDI un párrafo que reafirmara que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática. También planteó agregar en el capítulo “Democracia y derechos humanos” dos artículos sucesivos que establecieran lo siguiente.

La democracia como sistema político representativo y participativo es condición insustituible para el goce pleno y efectivo, por parte de las personas y las sociedades, de los derechos humanos, la justicia social y las libertades esenciales para el desarrollo de la personalidad y el progreso de los pueblos [...] El ejercicio de la democracia debe asegurar plenamente a todas las personas el disfrute y ejercicio de sus libertades fundamentales y derechos humanos, consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los demás documentos interamericanos en materia de Derechos Humanos (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

Por otra parte, en el apartado de la Propuesta referido a la relación entre democracia y participación, el gobierno de la RBV dejó constancia de los numerosos estudios realizados por organismos internacionales a partir del año 2000 acerca del grado de insatisfacción de la ciudadanía con la democracia en América Latina. Allí se citan las consideraciones de Guillermo O'Donnell acerca del carácter *delegativo* de la democracia latinoamericana, en cuyo marco los ciudadanos eligen a los dirigentes, pero renuncian a controlarlos políticamente, por no sentirse genuinamente expresados y representados por sus líderes. El documento también recordó que para el BID era imperativo emprender reformas para incrementar la participación política y, respondiendo al párrafo de la Declaración de Québec que advierte la existencia de serias amenazas a la democracia que obligan a instrumentar mecanismos para su defensa, la Propuesta agregó:

Para que sea cierta, la democracia tiene que basarse en la representación, la participación y el protagonismo de todos los sectores, y no sólo en reducidas elites que concentran –no pocas veces en forma tan grosera como perversa– el poder político y económico (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

Adicionalmente, acerca de la relación entre representación y participación, la Propuesta sostiene la vigencia del sistema de partidos consagrada en la Constitución de la RBV. No obstante, señala que la participación de los ciudadanos es muy importante “porque tiene por fuente a la *soberanía popular* [y que se trata de] consolidar estructuras de intermediación sin confiscar la titularidad de esa soberanía” (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001; énfasis propio). Por consiguiente, la democracia participativa y la democracia representativa no se presentan como alternativas excluyentes. En ese orden, la Propuesta señala que ha sido superado el enfrentamiento existente durante la Guerra Fría entre los conceptos de democracia representativa y democracia *popular*: ambas coexisten.

Democracia representativa no es otra cosa que el ejercicio del poder por el pueblo a través de representantes libremente elegidos. La democrática escogencia de esos representantes es una forma esencial de participación. Los procesos de participación también fortalecen la protección de los derechos humanos, ya que ellos constituyen la mejor garantía para que los intereses y aspiraciones genuinas del pueblo puedan expresarse plenamente. *La participación refuerza, por tanto, la lucha por los derechos humanos y su vigencia*, dando a la democracia su

verdadero sentido. *Los ciudadanos deben, en la práctica, tener injerencia en las decisiones* a través de organizaciones civiles conectadas con el Municipio, hasta votar en referendo, y otras formas de consulta que pauten las constituciones de los estados. También deben disfrutar beneficios sociales como servicios públicos, oportunidades de trabajo, régimen de seguridad social, acceso a los bienes primarios y a todos los niveles de la educación y capacitación, mediante la *participación distributiva* (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001; énfasis propio).

De allí surge que democracia participativa es algo más que la injerencia ciudadana en decisiones sobre asuntos públicos, puesto que supone, además, justicia distributiva. En la Propuesta se afirma que no existe un peligro mayor para la democracia que las de inequidades sociales y que, en ese sentido, *democracia sin justicia social no es democracia*. Así, el reconocimiento de los derechos políticos debe ser acompañado por el de los derechos sociales, económicos y culturales. En esa lógica, la participación social y política contribuiría a los contenidos de igualdad y justicia social propios de toda concepción democrática. Sólo así se justificaría la democracia como sistema escogido por la OEA, porque desde esa perspectiva la democracia sería “compatible con la dignidad y respeto hacia y por la persona tanto en su individualidad como en su ser colectivo” (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

Acerca de la inminente aprobación de la CDI, la Propuesta sostiene que se trataría del documento más importante aprobado por los países del hemisferio desde el momento en que, en 1948, entró en vigencia la Carta de la OEA: la CDI sería “un *documento-doctrina sobre la democracia*, que contribuiría a su defensa y fortalecimiento” (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001; énfasis propio). No obstante, advierte que la Carta debería ser clara y categórica, sin ambigüedades terminológicas, porque un texto con tales limitaciones podría ser el caldo de cultivo de futuras interpretaciones arbitrarias. Con tal reclamo, el gobierno de la RBV intentó prevenir nuevas imprecisiones terminológicas y conceptuales. Como señalamos anteriormente, las mismas no respondían a un vacío teórico, sino al sentido mismo de “la democracia de libre mercado”. Contra ese sentido incurrió el gobierno venezolano, disputando en el terreno del derecho público la indiscutida hegemonía que –hasta ese momento– tenían el neoliberalismo y el conservadurismo en el ámbito interamericano.

Tal pugna ideológico-política también se expresó en la forma en que la Propuesta abordó la cláusula democrática consagrada en la

Tercera Cumbre de las Américas. Al respecto, el gobierno venezolano propuso la siguiente redacción:

Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización, de las Conferencias especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo, y demás cuerpos que se hayan creado. Se entenderá que se ha producido una situación equivalente al derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido, cuando ocurra una alteración o ruptura constitucional que elimine, disuelva, modifique o sustituya cualquiera de los Poderes debidamente constituidos del Estado, a través de procedimientos de hecho contrarios a la Constitución Nacional del Estado Miembro (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2001).

De manera que, a diferencia del antes mencionado protocolo, la Propuesta refiere a “suspensión”, no a exclusión; y asimila el quebrantamiento de la democracia a la violación de hecho de los mecanismos constitucionales del país en acciones dirigidas contra alguno de los poderes constituidos del Estado.

LA CDI, LA OEAY EL FRUSTRADO GOLPE DE ESTADO EN LA RBV

Como ya se ha dicho, a pesar de las resistencias del gobierno bolivariano, en septiembre de 2001, la Asamblea General de la OEA realizada en Lima (Perú) aprobó finalmente la CDI, en la que no fueron incorporadas ninguna de las principales propuestas del gobierno de la RBV². Por consiguiente, dicho instrumento fortaleció y complementó la cláusula democrática previamente aprobada en la Tercera Cumbre de las Américas, en tanto condicionó la participación de todos los estados del hemisferio occidental en el llamado proceso de las Cumbres de las Américas, lo que anuló el principio del pluralismo político-ideológico aceptado en la segunda mitad de la década del setenta y consagrado por la ONU (Suárez Salazar, 2007: 9; Méndez y Chillier, 2004). Además, la CDI amplió las capacidades de la OEA para realizar intervenciones colectivas en los asuntos internos de los estados miembros, aun cuando en el futuro alguno de ellos sea separado de la organización.

Esos conceptos fueron puestos a prueba durante los vertiginosos acontecimientos que se desarrollaron en la RBV entre el 11 y 13 de abril

² Aunque el artículo 6 de la Carta Democrática fue incorporado a instancias de Venezuela, en el texto no se sustituye *democracia representativa* por *democracia participativa*.

de 2002. Como se conoce, ese último día, gracias a la intensa movilización popular y el respaldo de los sectores constitucionalistas de las fuerzas armadas, fue derrotado el intento de golpe de Estado emprendido por los sectores reaccionarios de la sociedad venezolana. A pesar de que la intentona significó una clara amenaza al ordenamiento constitucional de ese país, la OEA sólo intervino en “el tratamiento de los problemas críticos que dividían a la sociedad” venezolana (OEA, 2002). En opinión de los representantes de esa organización, tales problemas eran tanto anteriores como posteriores al intento golpista.

En consecuencia, en esa oportunidad la OEA emitió un documento titulado “Principios para la paz y la democracia en Venezuela”, cuyos puntos centrales eran el fortalecimiento del sistema electoral; la investigación de los hechos del 11 de abril de 2002; el desarme de la población civil; la libre expresión; la participación de autoridades militares en el debate público; y la separación de poderes, con los contrapesos institucionales idóneos. Con esos criterios, representantes de la OEA –junto a los de la ONU y los del Centro Carter, radicado en EE.UU. – “facilitaron” el proceso de diálogo interno convocado por el presidente Hugo Chávez. Es necesario señalar que, en general, se han destacado los aspectos positivos de la “intervención democrática” del organismo hemisférico en esa coyuntura; incluso el mismo gobierno venezolano reconoció en innumerables oportunidades el aporte de la OEA.

Sin embargo, esto no significó la claudicación del gobierno de la RBV en su defensa de la democracia participativa. Al contrario, los acontecimientos de abril de 2002 fueron seguidos por fuertes manifestaciones de respaldo a la continuidad de la democracia representativa y participativa en la RBV. Así lo confirman algunos documentos hemisféricos. En particular, la Resolución del Consejo Permanente en su Sesión Extraordinaria del 13 de abril de 2002; la Resolución de la Asamblea General Extraordinaria efectuada en el marco de la CDI del 18 de abril del mismo año; y la Declaración sobre la Democracia en Venezuela propuesta por el representante permanente del gobierno venezolano ante la OEA, Jorge Valero. Esta fue aprobada en la Asamblea General, celebrada en Bridgetown (Barbados) y en la Resolución del Consejo Permanente en Apoyo al Proceso de Diálogo en Venezuela del 14 de agosto de 2002. Cinco días después, el entonces canciller venezolano, Roy Chaderton Matos, realizó una presentación durante la sesión protocolar del Consejo Permanente en Washington. En esa ocasión indicó:

El Estado constitucional venezolano contiene en sí mismo formas y medios de autotutela y autoprotección, justamente para evitar que actuaciones desmedidas e irresponsables de titulares del poder público atenten contra la estabilidad democrática.

ca. En realidad, *lo extraordinario que vive hoy nuestro país es la refundación de la República, pero, estamos también refundando la democracia, sus formas y su contenido* [...] [Con respecto a la facilitación del diálogo por la OEA, la ONU y el Centro Carter] confío en que la OEA lo hará a través de personalidades con imaginación y sensibilidad social, que no lleven cartillas burocráticas preconcebidas [...] [La democracia participativa es] una forma superior de la democracia representativa donde el representado, es decir, el soberano, acompaña, apoya y controla al representante y ejerce un rol protagónico en la determinación de su propio destino (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2002; énfasis propio).

En otra oportunidad, la cancillería venezolana había sostenido que, en la democracia liberal, la representación política no era tal, dado que siempre había significado la sustitución de los ciudadanos, su reemplazo con sentido elitista. Sobre estos conceptos volveremos en el apartado final del trabajo. Por ahora cabe destacar que el gobierno venezolano, no sólo no ocultó su verdadera dirección política, sino que desde abril de 2002 resultó fortalecido, tanto en el ámbito interno como en su proyección internacional. Por su parte, la OEA actuó limitándose a los términos indicados en el Documento “Principios para la Paz...” antes mencionado. Tal vez lo hizo así porque, desde 1999, Venezuela había procurado que su estado constitucional, parafraseando a Chaderton Matos, contuviera en sí mismo capacidad para autotutelarse, autoprotgerse y autogobernarse. En ese sentido, las referidas expresiones del canciller, más que una legitimación de la intervención de la OEA, significaron una clara señal de autodeterminación por parte de un país que, en lugar de desvincularse de la organización, había decidido librar una batalla político-ideológica en su seno.

CONCLUSIONES

El Consenso de Washington y la Iniciativa para las Américas suponen una teoría de la democracia que reniega de la tradición democrática y popular, reformista y revolucionaria, de los movimientos políticos y sociales latinoamericanos y caribeños. En ese sentido, cuando el gobierno de la RBV dice (en su Propuesta) que *el sistema democrático posibilita la búsqueda permanente de su perfeccionamiento dentro de la dinámica social*, que sólo así es capaz de dar respuestas creativas a las necesidades fundamentales de los pueblos y que *no debería considerarse definitivamente asegurada la vigencia del sistema democrático en la región*, actualiza buena parte del sentido de la democracia en el marco de aquella tradición, al tiempo que subraya su carácter contingente.

La *concepción venezolano-bolivariana de la democracia* está re-significando la democracia liberal representativa sostenida en el marco de las Cumbres de las Américas y demás foros interamericanos mencionados en las páginas anteriores. Aunque el gobierno venezolano haya destacado el carácter complementario de las democracias participativa y representativa, la teoría que subyace en sus planteamientos concibe a la democracia como un *contenido inencontrable*, en tanto enfatiza en las *prácticas democráticas*, lo que contrasta fuertemente con las democracias del libre mercado concebidas en los términos económicos y estratégicos del nuevo orden panamericano.

En ese sentido, y en el marco del orden posneoliberal actualmente en construcción, la política exterior venezolana se orienta a expandir las fronteras de los conceptos sobre “la democracia representativa” que caracterizaron el “orden panamericano” surgido de la Conferencia de Chapultepec en 1945 y de la fundación de la OEA. Como se indicó al inicio de este trabajo, tales conceptos habían sido utilizados como una rigurosa frontera ideológica excluyente de los regímenes políticos independientes del capitalismo occidental y, sobre todo, de los dictados de los grupos dominantes y diversos gobiernos estadounidenses.

Junto a la idea del perfeccionamiento de la democracia dentro de la dinámica social, se destaca la concepción de una ciudadanía activa y protagónica, titular de un poder no confiscable e inagotable, sin perjuicio de la vigencia –constitucionalmente consagrada– de un sistema de partidos. Así, la Propuesta de Venezuela para la CDI refiere a la tensión entre representación y participación, entre liberalismo y democracia. Y aunque esas consideraciones deberían dar lugar a un análisis teórico mucho más profundo que el previsto en este artículo, puede decirse que la pretensión de resolver aquella tensión de manera *definitiva* no parece ser la vía más adecuada para consolidar sociedades más democráticas; y que las teorías que han abordado tal relación desde un punto de vista racional liberal atentan contra la naturaleza específicamente política y controversial de la construcción del orden social (Mouffe, 2003; Lechner, 1984).

Aunque la CDI no exprese semejante concepción y, por el contrario, contribuya a afianzar un concepto restringido de la democracia, la Propuesta venezolana ha sido (está siendo) reactualizada por múltiples sujetos políticos y sociales de la región cuyo accionar se reveló como realmente influyente en los acontecimientos políticos hemisféricos.

Una aproximación, como la realizada en este trabajo, acerca de la relación política/economía presente en el discurso del nuevo orden panamericano, contribuye a comprender que *la democracia operó como un argumento central en la construcción del proyecto ALCA*. Pero ese argumento ha sido confrontado en el seno mismo de la organización

hemisférica. Los alcances y efectos de esa confrontación fueron hemisféricos. Así lo indica, por ejemplo, el proyecto Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). A ello se suma la derrota que sufrió el ALCA en la Cuarta Cumbre de las Américas, llevada a cabo en Argentina a fines de 2005.

Finalmente, aunque la CDI no dé cuenta de los cambios realmente existentes en la política latinoamericana ni de la fortaleza de ciertas prácticas críticas y alternativas frente al paradigma dominante, dado que la política significa, entre otras cosas, la disposición por la sociedad de sus condiciones materiales de existencia –y que esto implica la construcción social de un orden que nunca acaba de concretarse (Lechner, 1984)– es necesario destacar la novedosa presencia en el ámbito institucional de las relaciones interamericanas de discursos que enfatizan las posibilidades emancipadoras de la democracia concebida como un proyecto siempre inacabado.

BIBLIOGRAFÍA

- Carrillo Flores, Fernando 2001 “Una vacuna contra el autoritarismo” en <www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=69> acceso febrero de 2007.
- De Bernard, François 2002 “Comercio de la democracia o democracia del comercio”, I Congreso Iberoamericano de Filosofía Moral y Política, Alcalá de Henares, 19 de septiembre, en <[www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=13148&lan=ES",%20780,%20500%20](http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=13148&lan=ES)> acceso diciembre de 2007.
- Douglas Lummis, C. 2002 *Democracia radical* (México DF: Siglo XXI).
- Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 2001 “Propuesta del gobierno venezolano a la Carta Democrática Interamericana” en <www.venezuela-oas.org/Doc%20Propuestas.htm> acceso diciembre de 2007.
- Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 2002 “Presentación del canciller venezolano Roy Chaderton Matos en la Sesión Protocolar del Consejo Permanente de la OEA en Washington” en <www.analitica.com/va/politica/9296842.asp>.
- Guerra Vilaboy, Sergio 2006 *Breve historia de América Latina* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).
- Lechner, Norbert 1984 *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado* (México DF: Siglo XXI).

- Lechner, Norbert 1995 "La reforma del Estado y el problema de la conducción política" en *Perfiles Latinoamericanos* (México DF: FLACSO) Año 4, N° 7, diciembre.
- Méndez, Juan y Chillier, Gastón 2004 "La cláusula democrática y el derecho interamericano" en <www.cejil.org/main.cfm> acceso diciembre de 2007.
- Montenegro, María Cristina (comp.) 1999 *Los desafíos de la OEA para el siglo XXI* (Córdoba: Francisco Ferreira).
- Mouffe, Chantal 2003 *La paradoja de la democracia* (Barcelona: Gedisa).
- OEA 1991a "Compromiso de Santiago" en <www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000cb65.htm> acceso febrero de 2007.
- OEA 1991b "Resolución 1080" en <www.oas.org/juridico/spanish/Res-1080.htm> acceso febrero de 2007.
- OEA 1992a "Protocolo de Washington" en <www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-56.html> acceso febrero de 2007.
- OEA 1992b "Reserva del Gobierno de México al Protocolo de Washington" en <www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/Swashingtonratifications.html> acceso diciembre de 2006.
- OEA 1993 "Declaración de Managua" en <www.cajpe.org.pe/mat_bol/Docs/9_Declaraci%C3%B3n_de_%20Managua%20_1993.doc> acceso diciembre de 2006.
- OEA 1994 "Declaración de Miami" en <www.summitamericas.org/Miami%20Summit/Democracy-sp.htm> acceso diciembre de 2006.
- OEA 1998 "Declaración de Santiago" en <www.summitamericas.org/chileplanspanish.htm#Democracia%20y%20Derechos%20Humanos> acceso diciembre de 2006.
- OEA 2001 "Declaración de Québec" en <www.summitamericas.org/Documents%20for%20Quebec%20City%20Summit/Quebec/Declaration%20of%20Quebec%20City%20-%20Span.htm> acceso diciembre de 2006.
- OEA 2002 "Declaración del Secretario General de la OEA" en <www.uru.org/MesaNegociacion/DocTripartito/DocTripartito_20021023_GaviriaPlazaOEA.htm> acceso diciembre de 2006.

- Parker, Dick 2002 “¿De qué democracia estamos hablando?” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Universidad Central de Venezuela) Vol. 12, N° 001, enero-abril.
- Roitman Rosenmann, Marcos 2005 *Las razones de la democracia en América Latina* (México DF: Siglo XXI).
- Romero, María Teresa y Cardozo, Elsa 2002 “Aproximaciones a la propuesta internacional de Hugo Chávez: las concepciones de democracia e integración” en *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* (Caracas: Universidad Central de Venezuela) Vol. VIII, N° 001.
- Suárez Salazar, Luis 2007 “Crisis y recomposición del sistema de dominación ‘global’ de Estados Unidos: el ‘nuevo orden panamericano’” en Gandásegui h, Marcos (coord.) *Crisis de hegemonía de Estados Unidos* (México DF: CLACSO/Siglo XXI).

Santiago Kosiner*

EL MERCOSUR EN PROSPECTIVA**

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo intentaré la intelectualmente arriesgada tarea de iniciarme en el campo de la teoría prospectiva planteada por Mojica (2000). Esta comprende la elaboración de un estudio que, partiendo de la realidad presente, plantee los escenarios probables y alternos resultantes del accionar de los actores sociales implicados, en busca del considerado más conveniente: aquel denominado *escenario apuesta*. Enfrentaré el desafío partiendo de la convicción de la esterilidad del ascetismo intelectual y la neutralidad valorativa tan extendidos en el campo de las ciencias sociales.

En los términos antedichos, confiando en que es el hombre colectivo quien construye el futuro a partir de su actuación como actor social, analizaré la situación actual de la integración latinoamericana centrándome en el MERCOSUR. Intentaré abarcar las alternativas, estrategias y posicionamientos cambiantes de los estados parte –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– a partir de las diversas realidades que atraviesan, los conflictos surgidos en el proceso de integración, las falencias y ca-

* Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

** El autor agradece especialmente a Mercedes Donato Biocca, quien colaboró con sus comentarios y sugerencias para enriquecer sustancialmente este trabajo.

rencias propias del mismo y las acciones de otros estados dirigidas a incidir sobre los gobiernos de esos países.

Para alcanzar dichos objetivos estructuraremos el trabajo de la siguiente forma. En el primer apartado, analizaremos los alcances, limitaciones y nuestra postura respecto del concepto *globalización*. En el segundo, se enunciarán en forma general los postulados de los principales enfoques teóricos que se han encargado de analizar los procesos de integración regional y estableceremos cuál es –según nuestra visión– el más adecuado para comprender estos procesos de naturaleza compleja. Y el tercer apartado se centrará, en primer lugar, en un rápido recorrido histórico del MERCOSUR, para luego comprender los principales conflictos que se han generado dentro de este bloque regional y las diferentes alternativas para su desarrollo. Desde ellas, de presentarán algunos posibles escenarios futuros.

GLOBALIZACIÓN

Desde hace años a esta parte, ha proliferado dentro de las ciencias sociales la utilización del término *globalización* para dar cuenta del final de la confrontación Este-Oeste a partir de la caída del Muro de Berlín. Como sostiene Boron (2002), la mitología neoliberal, entre otras cosas, ha hecho un uso particular de las palabras para describir determinados procesos. En algunos casos, creando nuevos conceptos; en otros, redefiniendo originalmente significados, llegando incluso a veces a tergiversarlos.

La “globalización” no es ajena a esta lógica. Este concepto que se ha extendido en las más diversas disciplinas no parece tener un significado claramente definido. Se ha convertido en una suerte de “concepto-comodín” que serviría para explicar –y absolver– las consecuencias sociales de la realidad histórica, política, económica y social actual.

La idealización de la “globalización” intenta negar la existencia del centro y la periferia con sus particularidades, así como sus necesariamente conflictivas relaciones, tal como lo sostenía la teoría de la dependencia. En términos generales, dicha teoría postulaba que el subdesarrollo de la periferia se encontraba necesariamente vinculado al desarrollo de los países centrales y que la inclusión de algunos actores se explicaba por la exclusión de la mayoría. Actualmente, se intenta imponer la idea de que todos estamos incluidos. Lo “global” remite a la totalidad, no deja espacio para “desglobalizados” o “semi-globalizados”. A lo sumo se acepta la existencia de “globalifóbicos”, que serían los autoexcluidos peyorativamente definidos en términos patológicos.

Más allá del protagonismo y la popularidad que ha adquirido el concepto de *globalización* en los últimos años, debemos mencionar que autores clásicos como Marx y Engels ya hacían mención a ese fe-

nómeno. En el contexto del desarrollo capitalista, estos autores se refieren a dicho proceso, al describir el accionar de una clase social –la burguesía– que necesitada de mercados “recorre el mundo entero” para “anidar en todas partes”, otorgándoles¹ “un carácter cosmopolita a la producción y el consumo” mediante la explotación del mercado mundial (Marx y Engels, 1997: 39).

En la actualidad, algunos autores se remontan a la conquista de América en busca de lo que serían los orígenes de la globalización, entendida en un sentido amplio (Ferrer, 1997). Asimismo, en lo referente a los flujos financieros, existe cierto consenso en que el origen de su internacionalización –característica central del proceso de globalización en un sentido más restringido– debe ubicarse a fines del siglo XIX (Vanoli, 2003).

La novedad de las últimas décadas, entonces, sería la combinación de la globalización con las políticas neoliberales, lo que podríamos definir –para alcanzar una mayor precisión– como “globalización neoliberal”. En este sentido, no se trataría de ese proceso inédito y homogeneizador del que intentan convencernos las visiones parciales e interesadas, que se presentan como realistas escondiéndose detrás de la neutralidad valorativa² (Ferrer, 1997). Por el contrario, compartimos con Estay (1995) que la globalización no sólo no diluye las contradicciones inherentes y características del capitalismo, sino que las profundiza. Si en tanto proceso objetivo es inevitable –o, a decir de Alejandro Vanoli, “una aventura obligada” –, no significa que deje de ser un ropaje nuevo para viejos cuerpos, si se quiere teórico-ideológicos.

Diferentes índices dan cuenta de que la concentración de la riqueza es lo que predomina, que los beneficios económicos no se distribuyen –en todo caso, lo que se estaría derramando es la teoría– y que la pobreza crece.

Aquella manera “pulcra” de presentar a la fase actual del capitalismo, asemejada por distintos autores a la teoría del “superimperialismo” kautskiana, es contrapuesta por la caracterización del mismo como “una fase superior del desarrollo contradictorio, desigual, combinado, estratificado y deformado del capitalismo monopolista de Estado o del imperialismo” (Suárez Salazar, 2006). Reconociendo alguna de

1 Al referirse a dicho proceso, los autores se expresaban en tiempo pasado: “Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía *dio* un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países” (Marx y Engels, 1997; énfasis propio).

2 Ferrer se refiere a la existencia de una “visión fundamentalista”. Desde la postura adoptada, tal como ha sido planteada desde el inicio de este ensayo, lógicamente no podrá criticar dicha parcialidad. Lo que condenamos es la pretensión de neutralidad que oculta la conformidad con el orden establecido.

las particularidades de esta fase podríamos acordar con la denominación de Cervantes, Gil, Regalado y Zardoya de “capitalismo monopolista transnacional” (citados en Suárez Salazar, 2006).

De acuerdo a Ferrer, la supuesta soberanía de los mercados no es otra cosa que una profecía autocumplida, en tanto es una consecuencia de la desregulación que se impuso desde los centros de poder mundial antes que el corolario inevitable del desarrollo histórico. Lo mismo ocurre con la globalización neoliberal, sin regulaciones e indiscriminada, que tiene al capital transnacional a la vanguardia.

Por tal motivo, las consecuencias de ese proceso en los países subdesarrollados deben ser enfrentadas y revertidas antes que forzosamente aceptadas. De lo que se trata es de “gobernar a la globalización” (Ferrer, 1997: 49). Si la misma avasalla la debilitada soberanía estatal de los países periféricos, la integración debería entenderse y constituirse en una barrera, en un medio de protección que posibilite el desarrollo sustentable. Por tal motivo, los procesos de integración no deben ser pasivos a las condiciones impuestas por el contexto, los agentes económico-financieros y los organismos multilaterales.

Nos encontramos ante varios dilemas. Si, como afirma Joseph Stiglitz (2003: 342), “la globalización, tal como ha sido defendida, a menudo parece sustituir las dictaduras de las elites nacionales por las nuevas dictaduras de las finanzas internacionales”, entonces deberíamos preguntarnos y reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Quiénes decidirán el modelo de integración a seguir? ¿Favorecerá este al desarrollo de los pueblos? ¿Resulta viable un modelo de integración que no sea el impuesto por las elites nacionales o por los agentes de las finanzas internacionales? Intentaremos abordar estos temas en el siguiente apartado.

INTEGRACIÓN

Históricamente, nuestros países se han caracterizado por la dependencia estructural a la que hemos hecho referencia con anterioridad. Nacimos dependientes. Ni siquiera nuestros procesos de independencia política estuvieron ajenos a las influencias externas, y nuestros modelos de desarrollo –salvando algunas excepciones– fueron impulsados desde u orientados hacia afuera. En tal sentido, nos preguntamos: ¿Hasta qué punto hemos interiorizado esa dependencia? Los actuales procesos de integración latinoamericanos ¿escapan a esta lógica o incluso ellos son impuestos?

Si en el apartado anterior rastreábamos los orígenes de “la globalización”, o nos referíamos a los pretéritos usos de los conceptos, ¿qué decir que no se haya dicho ya de la integración en esta región del mundo? La idea de una integración latinoamericana se remonta a la época

de las guerras de la independencia, lo que queda demostrado a través de las palabras de Simón Bolívar en su famosa Carta de Jamaica.

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse (Bolívar, 1947).

Aunque resulta innegable que, en lo referente al origen, tres de los cuatro estados parte del proceso de integración que abarcamos en este trabajo (MERCOSUR) integraron el Virreinato del Río de la Plata, hay quienes sostienen –contrariamente a esta forma de pensamiento– que dicha integración es virtualmente imposible en vista de los conflictos que históricamente han separado y separan a estos pueblos. Sostenemos aquí que, si bien no podemos eludir los conflictos y las guerras que los enfrentaron, tampoco debemos ignorar que en gran medida aquellos fueron consecuencia de intereses foráneos.

Paradójicamente, quienes niegan la posibilidad de una integración latinoamericana son lo mismos que sostienen y defienden como deseable y viable para estos países una integración aún mayor en cuanto a extensión territorial. Esta comenzaría con la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la que países subdesarrollados deberían competir de igual a igual con la principal potencia económica.

En gran medida debido a que esta última visión es la que impulsan los centros de poder internacionales, generalmente cuando se habla de integración se piensa en una serie de acuerdos comerciales y no en un proceso que pueda tener un carácter social y objetivos que superen a las meras ganancias económicas. De esta forma, el concepto de integración regional también se desvirtúa y se reduce a cuestiones comerciales, financieras, etcétera.

Sin embargo, como lo expresan quienes han estudiado en profundidad y teorizado sobre dichos procesos, estos constituyen un objeto de estudio complejo toda vez que no tienen un único centro motor, sino una pluralidad de centros que actúan con arreglo a lógicas distintas e incluso contradictorias (Morata, 1998). De allí surgen las variadas formas de concebir dichos procesos que se han constituido en un tema de debate permanente en la ciencia política y las relaciones internacionales, al escapar a la lógica del modelo tradicional de Estado –aunque es preciso aclarar que el mismo continúa siendo un actor de relevancia.

Por esas razones afirmamos que la integración regional no es un concepto unívoco. Como todo proceso social, político, económico e histórico, tiene múltiples causas, consecuencias, condicionantes, mo-

tivaciones y matices. Tal como plantean Laredo y Cignacco (2005), deberíamos preguntarnos: ¿Por qué, para qué, cómo y con quién se integran los países?

En una primera instancia, la causa principal de los procesos de integración actuales pareciera ser la creciente interdependencia de la que hablábamos en el apartado anterior. El desarrollo tecnológico y científico que ha multiplicado el movimiento de bienes, personas, ideas y fundamentalmente capitales se convierte en el factor explicativo más extendido. Este rasgo los diferencia de las motivaciones políticas que primaban en los procesos de integración de la segunda posguerra, cuando la aspiración era contener el avance de la Unión Soviética a partir de la reconstrucción del mercado europeo.

El segundo de los interrogantes aquí planteados –¿Para qué se integran los países?– puede contestarse sosteniendo que “la integración puede constituir un proceso eficaz para insertar a estados periféricos en una mejor situación para el desarrollo de sus relaciones internacionales” (Biocca, 2001: 16). En este sentido, en el contexto actual, las estrategias de integración debieran servir para que los actores nacionales asociados recuperen la capacidad de incidir sobre los efectos sociales negativos generados por el proceso de globalización antes descrito. Sin embargo, a partir de dicho objetivo, sería necesario definir el tipo de integración adecuado, ya que en ciertos casos podría reproducir los efectos mencionados.

El tipo de integración es lo que nos cuestionamos al preguntarnos cómo se integran los países. Siguiendo el análisis de Laredo y Cignacco se observan los distintos niveles y diseños que puede adoptar el proceso. Las autoras mencionan que el concepto de integración puede comprender desde una zona de libre comercio hasta la integración económica total, pasando por la unión aduanera y el mercado común, entre otros (Laredo y Cignacco, 2005). Debe tomarse en consideración que siempre estamos hablando de procesos sociales, políticos y económicos que tienen un impacto real en la vida de los pueblos y que, por tanto, la elección del tipo de integración no es ni puede ser una respuesta superflua, cortoplacista o que se presente como neutral a los intereses en juego.

Finalmente, la decisión de con quién integrarse se refiere al peso relativo, los recursos, simetrías, asimetrías y potencialidades de los integrantes del bloque –lo que determinará la verticalidad u horizontalidad de la integración.

Sin duda, si bien podemos identificar como socioeconómicas –en tanto vinculadas a la globalización neoliberal– a las principales causas que empujan a nuestra región a buscar la integración como recurso para evitar seguir siendo internamente desintegrados, debemos tener

en cuenta que la elección del modelo, de los socios y los fines de la integración es eminentemente política.

Los intentos integracionistas latinoamericanos han tenido diversos orígenes e impulsores, desde las primeras Conferencias Panamericanas promovidas por Estados Unidos hasta las políticas de integración neoliberales, pasando por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) de la década del sesenta. Estos últimos, de fuerte raíz desarrollista, posiblemente no prosperaron por su poca afinidad con los intereses estadounidenses.

El MERCOSUR es uno de los procesos de integración que se desarrolló entre la última década del siglo que acaba de terminar y los primeros años del actual. Ha tenido sus particularidades y ha pasado por diferentes etapas. En el siguiente apartado nos proponemos analizar sus orígenes, para luego examinar sus potencialidades en el nuevo contexto latinoamericano.

MERCOSUR

PASADO Y PRESENTE

El fin de las dictaduras militares en América del Sur supuso también el abandono de la visión de rivalidad entre estos países. En gran medida, el retorno de los gobiernos democráticos permitió en un primer momento un acercamiento, que con el correr de los años se plasmaría en diversos acuerdos a partir de los gobiernos de Raúl Alfonsín y José Sarney (en Argentina y Brasil, respectivamente).

El Programa de Integración y Cooperación Argentino-Brasileño (PICAB), firmado en 1986, constituyó el antecedente del MERCOSUR. Dicho acuerdo, que constaba de 24 protocolos de variadas temáticas, se proponía la integración y cooperación para el desarrollo y la modernización desde un enfoque multidimensional. El PICAB incluyó la firma de un nuevo tratado, en 1988, que preveía la conformación de un mercado común entre ambos países en un plazo de diez años. Sin embargo, en gran medida debido a los diversos problemas económicos que atravesaban Argentina y Brasil, el proceso de integración pareció estancarse (Laredo y Cignacco, 2005; Biocca, 2001).

La asunción de los nuevos presidentes, Carlos S. Menem y Fernando Collor de Mello, implicó una redefinición de los modelos económicos nacionales y también del proceso de integración.

Hacia marzo de 1991 nace el MERCOSUR, con la firma del Tratado de Asunción, incorporando formalmente a Uruguay y Paraguay. En dicho documento, los estados parte se proponían conformar un mercado común a corto plazo –antes del 1 de enero de 1995– que posibilitaría la libre circulación de bienes, servicios y factores producti-

vos; el establecimiento de un arancel externo y una política comercial comunes; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales; y el compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes (Lucángeli, 1998).

Puede decirse que el Tratado de Asunción era muy pretencioso, en tanto aspiraba a alcanzar objetivos que implicaban grandes cambios en los países en tan sólo cuatro años. Quizás por tal motivo, tal como coinciden en afirmar distintos especialistas, el MERCOSUR no ha pasado de ser una “unión aduanera incompleta” (Laredo y Cignacco, 2005). Esta calificación se debe a la existencia de excepciones al arancel externo común y a ciertas restricciones en el comercio intrarregional.

En la reunión fundacional de Asunción también se crearon los dos órganos con capacidad decisoria del MERCOSUR: el Consejo del Mercado Común (encargado de la conducción política y la toma de decisiones, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de cada país) y el Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo coordinado por los ministerios de Relaciones Exteriores, en el que se venían realizando las negociaciones previas. Meses después, mediante el Protocolo de Brasilia, se instauró un Sistema de Solución de Controversias que recién comenzó a regir en 1993 (MERCOSUR, 1991a; 1991b).

La instauración del mercado común no estuvo exenta de complicaciones. Ello se debió a varios factores. En primer lugar, no se llevó a cabo la coordinación de la política macroeconómica, lo que produjo inicialmente una mayor competitividad de la economía brasileña. Tampoco se logró fácilmente la fijación de un arancel externo común, ya que Argentina proponía un arancel cercano a cero, mientras que Brasil pretendía proteger algunos rubros como telecomunicaciones, informática, bienes de capital y el sector automotor. Además, existieron diferencias en algunos productos manufacturados en los que Argentina recurrió al mecanismo de las Cláusulas de Salvaguardia para el comercio intrazona. Uno de los grandes debates entre los dos socios principales fue que este mecanismo estaba autorizado en el Tratado de Asunción, pero sólo para ciertos casos y mientras durara el período de transición.

Pese a las dificultades antes enunciadas, existe consenso en que el MERCOSUR tuvo beneficios cuantitativos como el crecimiento del comercio intrarregional y también, aunque en forma más moderada, de las exportaciones hacia otros destinos. Asimismo, se resalta como un logro de este proceso la brevedad del período de implementación –aunque imperfecta– de la unión aduanera. Sin embargo, esto es relativizado por algunos autores que consideran que esa es la “etapa fácil” de los procesos de integración, por ser el plazo de eliminación de barreras (Lucángeli, 1998).

También es necesario considerar que el aumento en la Inversión Extranjera Directa puede explicarse, en mayor medida, por la apertura unilateral e irrestricta y el proceso de privatizaciones que llevó a cabo Argentina en la década del noventa, antes de que el MERCOSUR se hubiera constituido en un destino y un proyecto que resultara atractivo a los capitales foráneos.

Antes de cumplirse la fecha estipulada para la entrada en vigencia de la unión aduanera, se completó la estructura institucional del MERCOSUR con el Protocolo de Ouro Preto de fines de 1994. En el mismo, se agregaba la Comisión de Comercio del MERCOSUR (encargada de la asistencia del GMC y de todo lo referente a las políticas comerciales) como tercer órgano con capacidad decisoria de naturaleza intergubernamental. Además, se formaron una Comisión Parlamentaria Conjunta (integrada por representantes de los parlamentos de cada país), el Foro Consultivo Económico y Social (integrado por representantes de los sectores económicos y sociales) y la Secretaría Administrativa con sede permanente en Montevideo.

Luego de Ouro Preto, el MERCOSUR avanzó fundamentalmente en los acuerdos externos. Se establecieron tratados con la Unión Europea, acuerdos con Chile y Bolivia, y comenzaron negociaciones con el Pacto Andino y EE.UU.

Pese a los progresos en sus relaciones externas, las controversias internas continuaron, tanto a causa de posiciones claramente disímiles en los objetivos y el modo en que los gobiernos de Argentina y Brasil concebían el proceso, como por las diversas disputas sectoriales, que para defender sus intereses retomaban una retórica “nacionalista” y contraria a la integración regional. Las excepciones al arancel externo común y los pedidos de protección de los sectores privados a sus respectivos gobiernos fueron una constante durante el período, e inevitablemente el acuerdo entró en una fase de estancamiento. Podría pensarse que, si los estados parte hubieran definido y coordinado claramente qué sectores nacionales impulsaría cada uno y cómo se reorientarían productivamente los demás –evitando la competencia innecesaria dentro de la región–, las voces contrarias a la integración no habrían tenido tanta repercusión.

Hacia el año 2000 se llevó adelante un relanzamiento formal del MERCOSUR. Y dos años después, a través del Protocolo de Olivos, se intentó agilizar el Sistema de Solución de Controversias. Recién hacia 2003, con la asunción a la presidencia argentina de Néstor Kirchner, la integración adquirió un nuevo impulso sobre la base de ciertas coincidencias estratégicas entre los gobiernos argentino y brasileño que se expresaron, entre otras cosas, en la posición respecto a EE.UU. y el ALCA.

En 2004, en el marco de la III Cumbre Sudamericana, se firmó la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). Si bien no se fijó un modelo concreto de integración y se encuentran en ella países de variadas posturas y posicionamientos en su política internacional, constituye un hecho de relevancia, por tratarse de un proyecto integracionista autónomo de la región que se conforma a un año del plazo fijado en Miami en 1994 para la ratificación del ALCA.

El carácter eminentemente económico del modelo de integración que caracterizó a la década del noventa produjo el estancamiento del propio proceso de integración debido a las diferentes posturas gubernamentales de los socios mayoritarios –especialmente respecto a aranceles, cuestiones macroeconómicas y el posicionamiento frente a EE.UU. Por el contrario, en la actualidad parecería abrirse una etapa de optimismo respecto de la posibilidad de profundizar la integración y dotarla de un contenido que supere las razones meramente mercantiles. Incluso se plantea la atención de algunos reclamos históricos como la elección de un Parlamento regional mediante el voto popular, y la incorporación concreta de cuestiones relativas a la postergada agenda social y la coordinación macroeconómica, entre otros temas (Laredo et al., 1998; Botto et al., 2003; Serbin, 2003).

Por otra parte, la estrategia de “liberalización competitiva” –con la que EE.UU. intenta seducir a los países latinoamericanos mediante acuerdos comerciales bilaterales ante el revés sufrido en la negociación del ALCA en Mar del Plata en 2005– pone en duda la posición a adoptar por los socios menores: Uruguay y Paraguay (Botto et al., 2003).

El rediseño del mapa regional se completa con la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela (RBV) al MERCOSUR, que estaría poniendo en peligro la conflictiva Comunidad Andina de Naciones (CAN), debido a la posición de los gobiernos de Perú y Colombia respecto a EE.UU. (Godio, 2006).

EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA

En un interesante análisis acerca del MERCOSUR, Fernando Porta expone las tres posiciones en pugna respecto al modelo que dicho proceso de integración debería adoptar. En primer lugar, lo que el autor denomina “la agenda oficial”, a la que identifica con la visión de quienes pretenden restablecer el esquema institucional acordado en Ouro Preto y que no ha sido respetado. La segunda postura sería “la agenda neoliberal”, que propone mantener la integración como área de libre comercio y que últimamente habría perdido espacio. Finalmente, se refiere a la que denomina “la agenda neodesarrollista”, que confía en la integración como medio para la reestructuración productiva que per-

mitirá revertir la tendencia de los indicadores sociales y económicos, por la que se inclina el autor (Porta, 2005).

La segunda de estas posiciones es la que ha primado desde los comienzos del MERCOSUR. Concebido en medio del apogeo del pensamiento y las políticas neoliberales, que prescindían del Estado en tanto regulador político y económico, el MERCOSUR adoptó la propuesta de un “regionalismo abierto”, definiéndose claramente por un modelo de tipo comercialista, que entendió la integración como forma de inserción en el sistema económico internacional a partir de la liberalización económica y la apertura comercial, más que como motor o medio para el desarrollo. Este tipo de inserción pasiva no ha hecho otra cosa que aumentar la dependencia respecto a los centros de poder internacional y el capital transnacional (Laredo et al., 1998; 1999).

Desde esta postura, principalmente afín a la posición y política exterior argentinas durante aquel período, se concebía al proceso como positivo en tanto produjera crecimiento. Sin embargo, se contradecían los primeros párrafos del Tratado de Asunción, en los cuales se postulaba que entre sus objetivos debía estar el “desarrollo económico con justicia social”. Lejos de ello, nunca se dotó al MERCOSUR de instituciones fuertes que condujeran a dicha meta. No fue involuntaria la ausencia de respuestas a las necesidades sociales ni la carencia de los controles que todo proceso de integración requiere. Por eso, nunca se cuestionó la marcada naturaleza intergubernamental que dificultó el progreso de la integración al hacer oscilar vertiginosamente su rumbo conforme a los intereses de los gobiernos de turno de cada socio. Al no entrar automáticamente en vigencia la normativa MERCOSUR, muchas veces lo que hubiesen sido grandes avances no constituyeron más que meras declaraciones de deseos.

A causa de la escasa participación de la sociedad civil, el MERCOSUR es caracterizado como un acuerdo de cúpulas, que reproduce las relaciones de dominación vigentes al interior de los estados parte (Laredo et al., 1998). Esto explica por qué la resolución de conflictos en algunos sectores productivos, como el sector automotor, fueron fruto del acuerdo entre las filiales argentinas y brasileñas de las empresas transnacionales con apoyo gubernamental, antes que producto de resoluciones institucionales a nivel MERCOSUR.

Debido a esa visión de lo que debía ser la integración, el principal problema de los cuatro países miembros del MERCOSUR –que son sus alarmantes indicadores sociales (la pobreza, la exclusión, la desproporción en la distribución del producto, el desempleo y la desigualdad social)– no formaba parte de la agenda política. En resumen, lo que denominamos “deuda social” –en gran parte consecuencia de las políticas de ajuste estructural impulsadas por los organismos de

crédito multilaterales– no era entendida como una problemática a la cual la integración regional debiera dar respuesta. Sin embargo, tal como destaca Osvaldo Martínez, este es el punto ausente en todos los procesos de integración impulsados hasta el momento en la región y la característica que podría explicar la falta de legitimidad y arraigo popular (Martínez, 2005).

Para evitar esa falta de consenso y alcanzar una integración verdaderamente popular, algunos sectores han venido promoviendo, desde los años de la hegemonía del pensamiento neoliberal, la “integración integral” o “solidaria” que excediera las perspectivas puramente económico-comerciales de los procesos de integración en Latinoamérica, dándole el espacio adecuado a los sectores excluidos o perjudicados por estos (Laredo y Angelone, 1996; Laredo et al., 1998; 1999; Biocca, 2001). En este sentido, se subraya que la integración debe definirse a partir de objetivos políticos para resolver, *mediante* la cooperación económica, científico-tecnológica, cultural, educativa, etc., el principal problema de la región: lograr un desarrollo sustentable –lo que significa, en otros términos, cortar los lazos de dependencia que nos sujetan históricamente.

Creemos que ese es el camino y que, con el actual rediseño del mapa latinoamericano, el campo está fértil para recorrerlo. Sin embargo, faltan algunas definiciones por parte de los gobiernos de Argentina y Brasil, algo más que los indicios y gestos ensayados hasta el momento.

El ALCA y sus peligrosas consecuencias han despertado a amplios sectores, generando importantes movimientos de oposición a nivel de las organizaciones sociales en diferentes países latinoamericanos que lograron instalar el tema en la opinión pública (Serbin, 2003). Si los mismos actores lograran identificarse con proyectos de integración renovados –como el ejemplo de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), impulsada desde la RBV–, planteados con objetivos diferentes de los desintegradores de estados que han primado hasta el momento, “la segunda independencia” reclamada por José Martí dejaría de ser una utópica expresión de deseos.

No obstante, para ello es necesaria la intervención concreta, el abandono de la pasividad o del accionar meramente reactivo, que debe ser reemplazado por posturas preactivas y proactivas –definidas en términos de Mojica³. En palabras de Simón Bolívar: “Seguramente la

3 El autor las define de la siguiente manera: “a) *La actitud preactiva*. Consiste en prepararse para los cambios del futuro. El mejor ejemplo es el del futbolista que conociendo el juego de los adversarios se sitúa en los mejores sitios para realizar desde allí las jugadas oportunas. b) *La actitud proactiva*. Está fundamentada en la construcción del futuro. La podemos ilustrar con la conducta del futbolista imaginativo que diseña cambios creativos en el juego y desconcierta al adversario. Ser *preactivo* supone conocer las tendencias y los hechos portadores de futuro y anticiparse a ellos. Es la actitud de la prudencia. Ser *proac-*

unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración [...] mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos” (Bolívar, 1947).

El escenario que consideramos probable es la conformación del bloque a partir de lo que se ha denominado el eje Caracas-Buenos Aires-Brasilia al cual podría sumarse Bolivia –y, por supuesto, Cuba, si escapamos al territorio estrictamente sudamericano. Sería deseable que el proyecto se extendiera a nivel de la CSN, lo que dependerá de la posición que adopten el resto de los países de la región. Es de esperar que el éxito del proceso inicial redunde en repercusiones positivas en la opinión pública y las organizaciones sociales de los países no integrados al bloque, en pos de la incorporación al mismo.

CONCLUSIONES

Hemos explicitado nuestra postura con respecto a “la globalización”, proceso que no constituye otra cosa que una nueva fase de la constante internacionalización del sistema capitalista. Sin embargo, no debemos caer en el determinismo de pensar que las consecuencias y la dirección de este proceso se encuentran determinadas de antemano. Aún podemos revertir los efectos negativos, que están vinculados a la desregulación indiscriminada. Todo depende de la capacidad, la voluntad política y el consenso que logren generar los gobiernos de la región para hacer frente a los nuevos desafíos.

En este sentido, concebimos a la integración regional como una fórmula para evitar la extensión de los efectos indeseables de las medidas neoliberales a partir de la cooperación entre los países políticamente afines. Asimismo, dichos países deben generar una cosmovisión del proceso de integración que desean llevar adelante, fijando primeramente los objetivos de carácter ineludible, para luego establecer las metas de menor jerarquía que servirán como herramientas para la consecución de los primeros. También es necesario alcanzar un consenso respecto a cuestiones de índole práctica, tales como la manera en que se implementarán las decisiones adoptadas a interior del bloque y un calendario no demasiado rígido que estipule las distintas etapas del proceso.

Nos pronunciamos, entonces, por el desarrollo de un proceso de integración de nuevo cuño entre nuestros países. Por una propuesta original, como lo es el ALBA, que fije sus objetivos en los problemas más acuciantes (pobreza, desempleo, exclusión social, deuda externa, desarrollo productivo sustentable, etc.) y que responda a las reales nece-

tivo significa analizar las posibles opciones de futuro, no esperar a que las cosas ocurran, sino escoger la iniciativa más conveniente y comenzar a elaborarla” (Mojica, 2000).

sidades de nuestros pueblos, impulsada por la acción humana colectiva a partir de las organizaciones y movimientos sociales cuando no fuera posible confiar en el accionar estatal.

Con esto no queremos subestimar los obstáculos y grandes intereses contrarios que sabemos existirán en la construcción de la alternativa. Pero eso no debe llevarnos a la inacción, como pretenden quienes durante décadas han postulado la complacencia con los intereses de los países centrales. El saber que el camino será arduo no es una excusa válida para abandonar la tarea antes de emprenderla.

BIBLIOGRAFÍA

- Biocca, Stella Maris 2001 *Claves político-jurídicas para la integración latinoamericana* (Buenos Aires: Zavalía).
- Bolívar, Simón 1947 (1815) "Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla" en Bolívar, Simón *Obras completas* (La Habana: LEX) Tomo I.
- Boron, Atilio A. 2002 *Imperio e imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri* (Buenos Aires: CLACSO).
- Botto, Mercedes; Delich, Valentina y Tussie, Diana 2003 "El nuevo escenario político regional y su impacto en la integración. El caso MERCOSUR" en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 186, en <www.nuso.org/upload/articulos/3138_1.pdf>.
- Estay, Jaime 1995 "La globalización y sus significados" en Calva, José Luis (coord.) *Globalización y bloques económicos: realidades y mitos* (México DF: Juan Pablos).
- Ferrer, Aldo 1997 *Hechos y ficciones de la globalización. Argentina y el MERCOSUR en el sistema internacional* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Godio, Julio 2006 "Las tensiones en el MERCOSUR y el rediseño del mapa sudamericano" en <www.bolivar.c.topica.com/maaeMXQabqs3Yb36Gx2b>.
- Laredo, Iris M. y Angelone, Juan P. 1996 "El neoliberalismo como sustento teórico del proceso de integración en el MERCOSUR" en *Estado, mercado y sociedad en el MERCOSUR. Pautas para su viabilización* (Rosario: UNR) Vol. III.

- Laredo, Iris M. y Cignacco, Gloria A. 2005 “El MERCOSUR frente al ALCA: perspectivas de su implementación para nuestra región” en *Aportes para la integración latinoamericana* (La Plata) N° 12.
- Laredo, Iris M. et al. 1998 “Alternativas al modelo MERCOSUR de integración: ampliación del mercado versus desarrollo humano sustentable” en *Estado, mercado y sociedad en el MERCOSUR. Pautas para su viabilización* (Rosario: UNR) Vol. V.
- Laredo, Iris M. et al. 1999 “Alternativas al modelo MERCOSUR de integración: ampliación del mercado versus desarrollo humano sustentable (2° parte)” en *Estado, mercado y sociedad en el MERCOSUR. Pautas para su viabilización* (Rosario: UNR) Vol. VI.
- Lucángeli, Jorge 1998 “La inserción de la Argentina en el MERCOSUR: antecedentes, logros y perspectivas del acuerdo de integración regional” en *Centro de Estudios para el Cambio Estructural* (Buenos Aires) N° 26.
- Martínez, Osvaldo 2005 “ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión” en <www.cubarte.cult.cu>.
- Marx, Carlos y Engels, Federico 1997 (1848) *Manifiesto del Partido Comunista* (Buenos Aires: Anteo).
- MERCOSUR 1991a “Protocolo de Brasilia para la solución de controversias” en <www.mercosur.int/msweb/principal/contenido.asp>.
- MERCOSUR 1991b “Tratado para la constitución de un mercado común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay” en <www.mercosur.int/msweb/principal/contenido.asp>.
- Mojica, Francisco José 2000 “Determinismo y construcción del futuro” en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coords.) *América Latina 2020: escenarios, alternativas, estrategias* (Buenos Aires: FLACSO/Temas Grupo Editorial).
- Morata, Francesc 1998 *La Unión Europea. Procesos, actores y políticas* (Barcelona: Ariel).
- Petras, James 2006 “Propuestas para el Nuevo Orden Social, Económico y Cultural” en <www.rebellion.org>.
- Porta, Fernando 2005 “Cumplir con Ouro Preto es insuficiente: el problema distributivo en el MERCOSUR” en *Aportes para la integración latinoamericana* (La Plata) N° 12.

- Serbin, Andrés 2003 “Desafíos y obstáculos políticos del ALCA” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 186.
- Stiglitz, Joseph E. 2003 *El malestar en la globalización* (Buenos Aires: Taurus).
- Suárez Salazar, Luis 2006 “‘La globalización’: Una lectura desde ‘los marxismos’” en Estrada, Jairo (comp.) *Teoría y acción política en el capitalismo actual* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).
- Vanoli, Alejandro 2003 “El poder del dinero” en *Encrucijadas* (Buenos Aires) N° 22.
- Vargas Velásquez, Alejo 2005 “Comunidad suramericana: potencialidades y retos” en *El Universal* (Cartagena de Indias) 29 de mayo.